

Sociedad y Economía

ISSN 1657-6357

N° 13 – Diciembre de 2007

Publicada por la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas

Teléfonos: 339 2399 – 330 8960

Cali – Colombia

Fax: 339 3221

Apartado Aéreo 25360

E-MAIL: sye@univalle.edu.co

Periodicidad: semestral

Tiraje: 300 ejemplares

Director

JAIME HUMBERTO ESCOBAR M.

Editor

RENÁN SILVA.

Comité Editorial

JAIME HUMBERTO ESCOBAR. M.

LUIS CARLOS CASTILLO.

CARLOS HUMBERTO ORTIZ Q.

RENÁN SILVA.

JOSÉ IGNACIO URIBE G.

Comité Asesor

DANIEL PÉCAUT (Paris)

MALCOLM DEAS (Oxford)

ALFREDO CANAVESSE (Buenos Aires)

MARCO PALACIOS (Bogotá)

ÁLVARO CAMACHO (Bogotá)

GONZALO SÁNCHEZ (Bogotá)

FERNANDO BOTERO (Medellín)

ADOLFO MEISEL (Cartagena)

CLEMENTE FORERO (Bogotá)

MUNIR JALIL (Bogotá)

Diseño editorial

MAX E. NIETO

Impreso en los talleres de

IMPRESOS DISYTEX

Santiago de Cali, junio 2007

Sociedad y Economía

Revista de la facultad de ciencias sociales y económicas

Revista N° 13

Diciembre de 2007

Tema central:

Conflicto Social y Violencia

ISSN: 1657-6357

<http://socioeconomia.univalle.edu.co/revista>

Indexada en:

Colciencias en el Índice Nacional de Publicaciones Seriadas Científicas y Tecnológicas. www.latindex.unam.mx. CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanas).

SOCIEDAD Y ECONOMÍA

Editor

Renán Silva

Director

Jaime Humberto Escobar Martínez

Comité Editorial

Carlos Humberto Ortiz Quevedo, Ph.D.
Universidad del Valle

Jaime Humberto Escobar M., Magister
Universidad del Valle

José Ignacio Uribe García, Ph.D.
Universidad del Valle

Luis Carlos Castillo Gómez, Ph.D.
Universidad del Valle

Renán Silva, Ph.D.
Universidad del Valle

Comité Científico

Adolfo Meisel, Ph.D.
Banco de la República, Colombia

Alfredo Canavesse, Magister
Universidad Torcuato D'Tella, Argentina

Álvaro Camacho, Ph.D.
Universidad de los Andes, Colombia

Clemente Forero, Ph.D.
Universidad de Los Andes, Colombia

Daniel Pecaut, Ph.D.
Escuela de Altos Estudios en Ciencias
Sociales, Francia

Fernando Botero, Ph.D.
Universidad Nacional de Colombia, Colombia

Gonzalo Sánchez, Ph.D.
Universidad Nacional de Colombia, Colombia

Malcolm Deas, Ph.D.
Universidad de Oxford, Inglaterra

Marco Palacios, Ph.D.
El Colegio de México, México

Munir Jalil, Ph.D.
Banco de la República, Colombia

Información

Universidad del Valle, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
Edificio 387, oficina 4023, 4° piso, Ciudad Universitaria Meléndez.
Teléfonos: 3212347, 3308960, 3392399
sye@univalle.edu.co

Cali, N° 13, julio – diciembre de 2007

Contenido

Tema Central: Conflicto Social y Violencia

| | |
|--|------------|
| ACCIÓN COLECTIVA Y REGIÓN: VALLE Y CAUCA (1995-1997) | 7 |
| Álvaro Guzmán Barney | |
| LA PRÁCTICA DE LA NO VIOLENCIA Y SU COSTO EN DOS EPISODIOS: UNA MASACRE PARAMILITAR EN SAN JOSÉ DE APARTADÓ Y UNA TOMA GUERRILLERA EN TORIBÍO | 27 |
| Jorge Hernández Lara | |
| EL RECONOCIMIENTO DE SÍ MISMO EN LOS MILITANTES DEL M-19 | |
| Mario Luna Benítez | 43 |
| ACCIONES COLECTIVAS DE LAS MUJERES EN CONTRA DE LA GUERRA Y POR LA PAZ EN COLOMBIA | 65 |
| María Eugenia Ibarra Melo | |
| Otros temas | |
| GUERRA E IDENTIDAD POLÍTICA EL CAMPO DE MARTE ESTADOUNIDENSE POSTMODERNO | 87 |
| Heriberto Cairo Carou | |
| INFORMALIDAD Y SUBEMPLEO: UN MODELO <i>PROBIT</i> BIVARIADO APLICADO AL VALLE DEL CAUCA | 103 |
| Carlos Humberto Ortiz Quevedo José Ignacio Uribe García Gustavo Adolfo García | |
| CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA: UN ANÁLISIS MULTINIVEL CON BASE EN EL <i>ECAES</i> DE ECONOMÍA 2004 | 131 |
| Milena Patricia Valens Upegui | |
| CANALES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y DURACIÓN DEL DESEMPLEO EN EL MERCADO LABORAL COLOMBIANO | 153 |
| Yanira Marcela Oviedo Gil | |

ACCIÓN COLECTIVA Y REGIÓN: VALLE Y CAUCA (1995-1997)*

Álvaro Guzmán Barney**

Resumen

A partir de una base de datos sobre *hechos de Acción colectiva conflictiva regional* para el período 1995-1997, se proponen algunas características de la sociedad que se sustentan en un primer análisis cuantitativo de los datos. Entre estas: el carácter fuertemente focalizado y violento del conflicto, en torno a pocos temas. El predominio del conflicto urbano, marcado por una criminalidad diversa, pero especialmente organizada, y la debilidad de las acciones colectivas no institucionales articuladas a movimientos sociales.

Abstract

Considering a data base on *Regional Collective Action Facts* for the period 1995-1997, a set of characteristics for the local society is proposed and supported on quantitative information. Among them, the reduced networks of conflict and violence, the prevalence of a urban and differentiated criminality, above all organized crime, and the weakness of non institutional collective action linked to possible social movements.

Palabras clave: Acción Colectiva, Cambio Social y Región, Conflicto y Violencia, Criminalidad.

Key words: Collective Action, Social Change and Region, Social Conflict and Violence, Criminality

* El presente artículo se apoya en información recogida en el marco del Proyecto de Coyuntura Socio-económica II, CIDSE-COLCIENCIAS, 1998.

Artículo recibido el 3 de septiembre de 2007

Aprobado el 13 de noviembre de 2007

** Sociólogo. Profesor titular, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad del Valle. El autor agradece la colaboración de Elizabeth Escobar, monitora de investigación. Igualmente agradece las observaciones de Jorge Hernández y Mario Luna, miembros del Grupo de Investigación *Acción Colectiva y Cambio Social*, en cuyo marco se ha desarrollado la presente reflexión.

Introducción

En trabajos anteriores (Guzmán, 2003), se ha investigado sobre la violencia y la delincuencia en los departamentos del Valle y del Cauca, subrayando la idea de que estos dos fenómenos no se pueden atribuir a situaciones de marginalidad o exclusión, referidas a un sector específico de la población en situación de pobreza. Por el contrario, los datos analizados en estos trabajos sugieren relaciones con una geografía que se corresponde con una modernización regional significativa que jalona los procesos de violencia y de delincuencia y con sectores sociales, ciertamente diferenciados desde el punto de vista socio-económico, pero entre los que se destacan sectores con poder económico y político, ante todo vinculados con la ilegalidad.

Este punto de vista contrasta, en buena medida, con el que se sostiene en trabajos recientes sobre el tema del conflicto y su papel en la conformación de la nación, trabajos que centran su atención especialmente en el conflicto armado y en su relación con la situación de zonas marginales, atrasadas o de colonización y con sectores sociales que, de una manera u otra, se los caracteriza como excluidos o pobres. En el Informe de Desarrollo Humano 2003, por ejemplo, se privilegia el conflicto armado periférico para entender y caracterizar la situación nacional (IDH, 2003). El diagnóstico propuesto por el Informe no articula explícitamente lo periférico con lo que sucede en el país central y urbano, para colocar este último territorio como determinante de la estructuración general de la sociedad. Explícitamente, no se maneja una concepción amplia del conflicto social, vinculada con su papel en una sociedad urbana y moderna, en la que la criminalidad en general juega un rol importante y en la que el conflicto armado interactúa y depende también de ésta.

El presente trabajo pretende recuperar la conexión entre lo periférico y lo urbano moderno. Intenta avanzar sobre esta línea de análisis, pero a partir de un énfasis conceptual y metodológico distinto. Se propone un análisis centrado en la *acción colectiva conflictiva regional*, en el que interesa destacar cómo unas pocas formas de acción colectiva, estrechamente vinculadas con la delincuencia organizada y el conflicto político, dominan el panorama regional, conformado por los departamentos del Cauca y del Valle del Cauca. Se pretende mostrar cómo estas formas de acción colectiva y de conflicto están articuladas con contextos modernos y urbanos de la región, cómo vinculan unos pocos actores que recurren a la violencia con un carácter rutinario, afectando enormemente una sociedad que se estructura y se manifiesta en medio de este conflicto. Ahora bien, el análisis de la acción colectiva conflictiva regional no se agota en el tema de la delincuencia organizada y el conflicto político. De manera tímida, en los datos, se insinúan “otros” escenarios de conflicto en los que los retos al Estado y la perspectiva para la sociedad son distintos. En general, estos escenarios tienen que ver con su recomposición y modernización, involucran a los propios funcionarios estatales, o bien permiten entrever voces y demandas de otros sectores sociales que, por beligerantes que puedan ser sus demandas, no se pueden identificar con la acción emprendida por los grupos armados organizados.

El Estado aparece entonces como sitiado y penetrado por la acción colectiva de grupos ilegales, fuertemente organizados y armados, pero también por actores sociales portadores de un conflicto social de carácter muy distinto. En este trabajo, con otros conceptos, métodos y fuentes, se quiere ilustrar un proceso de formación de Estado. Se hace énfasis en una criminalidad que no es marginal ni atribuible a las “clases peligrosas”. Por el contrario, ésta irradia el conjunto de la sociedad que denota bajos niveles de regulación y un precario legado de valores públicos y cívicos. Frente al peso de la criminalidad en la estructuración de la sociedad, se subraya la precariedad de la acción colectiva “societal”, típica de las

movilizaciones sociales, o de los movimientos sociales, con impactos en la formación de la sociedad y del estado.

Acerca de la acción colectiva y el método para estudiarla.

Se ha asumido, a grandes rasgos, una perspectiva “tulleana” de la acción colectiva en la que se busca una referencia clara de ésta, en el tiempo y en el espacio, en el tema de conflicto, en la forma que asume, en el carácter de los contendores, en la manera como se despliega con referencia a la violencia y en las consecuencias que conlleva sobre otros hechos (Tilly, 1978). Usualmente, en esta perspectiva se ha enfatizado exclusivamente en la acción colectiva *contenciosa*, pero poco se ha avanzado sobre la relación de conflicto con “otro” y el carácter de quien recibe la acción contenciosa. Así, se ha analizado el movimiento obrero, como si se desarrollara independientemente de los patronos y del Estado (ver Tilly 1985). En la ficha que se utilizó en este trabajo para sistematizar la información, la acción colectiva se denominó intencionalmente “conflictiva” y se trataron de captar y describir los pares de actores que entran en la relación. Esto no deja de tener problemas, cuando la acción del Estado, por ejemplo, es rutinaria e institucional, o bien cuando la acción colectiva no rutinaria, es emprendida “desde arriba” (Guzmán, 2007).

Es bueno mencionar que en el presente artículo se ofrece solamente un primer análisis de la información sistematizada. Este es un paso inicial, indispensable en la perspectiva de reconstruir los “escenarios de conflicto regional”, partiendo de las acciones colectivas más significativas, anudadas alrededor de estudios de caso que posibiliten un análisis socio-histórico menos provisional. Con el desarrollo conceptual de los escenarios, se reconstruyen los juegos de actores participantes, su organización, sus estrategias de movilización y las consecuencias de las acciones para las partes. Estos escenarios permiten hacer, a su vez, inferencias sobre rasgos más generales, sobre procesos que tienen que ver con la formación del Estado y de la sociedad regional y el lugar que allí juegan el crimen y la violencia, parte de lo cual queda para trabajos posteriores.

Lo que aquí se presenta corresponde al examen realizado a partir de 1301 observaciones de acciones colectivas conflictivas de espectro regional durante tres años (1995-1997). A pesar de las limitaciones de la base de datos y de su fuente (la prensa local), creemos que es posible, aplicando una metodología de “encuesta” a la información de prensa, mostrar rasgos relevantes para el análisis de la acción colectiva y la conformación de escenarios de conflicto¹.

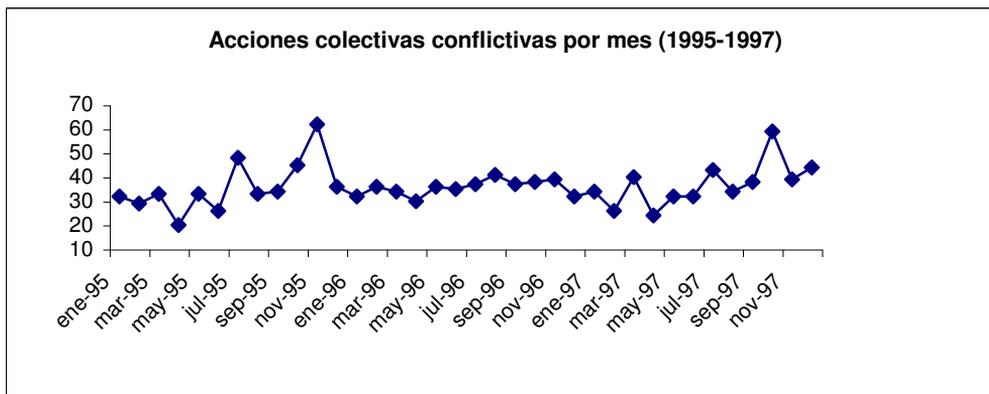
Período estudiado y contexto

La gráfica No 1 presenta la desagregación del total de las acciones colectivas en los dos Departamentos, por mes y para los tres años. Entre mayo/95 y noviembre/95, durante siete meses, hay una eferescencia pronunciada del número de acciones colectivas, seguida por un período de quince meses de relativa estabilidad, entre diciembre/95 y febrero/97, cuando

¹ Se hizo una revisión exhaustiva de las acciones colectivas conflictivas en los departamentos del Cauca y del Valle, entre 1995 y 1997, reseñadas en el diario *El País*. Por acción colectiva conflictiva se entendió el resultado observable de una acción emprendida por cuatro o más individuos o por el representante o los representantes de un colectivo que persiguen un objetivo no rutinario, en una relación de conflicto de carácter público, es decir de interés para terceros. Es importante precisar que se tuvieron en cuenta las acciones contenciosas, “desde abajo”, pero también aquellas que pudieron desencadenarse “desde arriba”, de manera no rutinaria, con el objetivo de controlar o reprimir otros sectores sociales. La información se recogió en fichas, según variables debidamente definidas en un manual por el investigador. (Guzmán, 2007). La información se procesó con un programa SPSS.

vuelve a presentarse un aumento de las frecuencias, durante nueve meses, hasta noviembre/97. Qué relación hay entre los flujos de acción colectiva que muestra la gráfica y situaciones de conflicto contextuales?

Gráfica 1



El rasgo dominante, para los tres años, es la reacción del Estado contra el crimen organizado del narcotráfico. Sin embargo, esta reacción tiene un momento particular, paradigmático desde el punto de vista de las acciones contra el narcotráfico, que se puede distinguir de otros en los que se hacen evidentes otros temas de conflicto que agobian la sociedad regional. En efecto, justo antes de la posesión del Presidente Ernesto Samper, comienzan una serie de operativos de los diferentes cuerpos armados y de seguridad del Estado contra el “cartel” de Cali o del Valle. Los operativos tienen su clímax entre mayo/95 y noviembre/95. Este sub-período se caracteriza por un despliegue inusual y no rutinario de los organismos de seguridad del Estado contra el crimen organizado. Nunca antes en la región se había desplegado una acción contra los carteles de la droga con tanta fuerza de parte del Estado y nunca antes el desencadenamiento de las acciones y sus impactos en diferentes esferas de la sociedad habían mostrado, de manera tan clara, la profunda inserción del narcotráfico en la sociedad regional.

El segundo sub-período, entre diciembre/95-febrero/97, se caracteriza por una menor intensidad en las manifestaciones globales de la acción colectiva y de manera más notable de aquellas que tienen que ver con el narcotráfico, aunque se asiste a un recrudecimiento de la dinámica particular del escenario de conflicto guerrilla-Fuerzas Armadas. En este escenario de conflicto, aparecen fenómenos contradictorios como procesos puntuales de paz con el grupo Jaime Bateman Cayón y el desarrollo de acciones locales vinculadas con eventos coyunturales nacionales como el paro armado de septiembre/96. Se asiste también a un cambio notable en la geografía de la guerra que se localiza crecientemente alrededor de las grandes ciudades.

El tercer sub-período, entre marzo/97 y noviembre/97, está dominado por un nuevo auge, con notables oscilaciones, en el número de las acciones colectivas. Este sub-período se caracteriza por el reacomodo del narcotráfico, por un aumento relativo de las actividades del crimen organizado distintas al narcotráfico, y por acciones desplegadas por la guerrilla con ocasión de las elecciones de septiembre/97. En conjunto, para los tres años, se puede observar que, posterior al desmantelamiento de las cúpulas de los carteles, se produce un reacomodo de los

conflictos centrales que dominan la sociedad regional y que se expresan en formas concretas de desarrollo de la acción colectiva. Así, se asiste a una recomposición de la actividad del narcotráfico, a un auge del crimen organizado distinto al narcotráfico y un aumento del conflicto político armado. El período estudiado refleja bien la interacción entre escenarios, los vasos comunicantes entre ellos y, por esta vía, rasgos centrales de la sociedad regional.

Características relevantes y acción colectiva

En este trabajo se argumenta que el análisis cuantitativo de la acción colectiva conflictiva propuesto, permite inferir algunos rasgos relevantes para entender la estructuración y dinámica de la sociedad regional. Esencialmente, se hace referencia al peso que tienen acciones caracterizadas por el recurso a la violencia, al predominio del conflicto urbano, al predominio de acciones más criminales que políticas o no institucionales, al carácter que asume la violencia, a los actores enfrentados y a la complejidad e impacto de las acciones. A continuación se presenta información sobre cada uno de estos aspectos, todos relacionados con el problema de la estructuración de la sociedad regional, su carácter, así como el del Estado. Son la base de las conclusiones que se presentan en la parte final.

Una sociedad sitiada por núcleos de conflicto y violencia

El punto de partida es la descripción de los principales “*temas*” del conflicto colectivo, alrededor de los cuales se articulan los actores, se desarrollan modalidades distintas de acción, se desencadenan otros hechos y se pueden establecer consecuencias para la estructuración de la sociedad. Llama la atención que el 64.1% de todos los hechos conflictivos analizados tenga que ver, ya sea con el conflicto político armado, con el narcotráfico, o bien con el orden público y la delincuencia. Estamos entonces frente a una sociedad y a un Estado, sitiados por organizaciones poderosas, articuladas con la delincuencia y la violencia.

Sin embargo, es necesario diferenciar estos temas de conflicto, que son los más relevantes desde un punto de vista cuantitativo, de otros con características diferentes. En efecto, el 11.2% de los hechos se refiere a conflictos en torno a servicios que presta el Estado, o bien se relacionan con la administración pública y de justicia; un 6.3% de los conflictos se refiere a salarios y son hechos en los que también está involucrado el Estado; un 5.8% tiene que ver con distintos conflictos de carácter económico, como demandas por vivienda, reclamos por precios, reivindicaciones de trabajadores informales, en los que también tiene que ver el Estado. En suma, en 23,3% de las acciones se presentan conflictos en los que tiene que ver el Estado, pero de manera muy particular, ya sea por su reestructuración, por las demandas de sus empleados, por los servicios que presta o bien por la intervención que debe hacer sobre intereses colectivos. De manera muy significativa, un 6.4% de los hechos se refiere a conflictos entre jóvenes, esencialmente conflictos entre pandillas, en los que también interviene el Estado, pero de manera también muy distinta, a través de la Policía. Finalmente, un 4% de las acciones colectivas conflictivas tienen que ver con el tema de Convivencia y Derechos Humanos. La tabla 1 presenta la información de la distribución de los distintos temas de conflicto.

Tabla 1
Temas de conflicto y acciones colectivas

| Temas de conflicto | % |
|---|----------------|
| (1) – Control delincuencia y orden publ. | 25.1 |
| (2) - Conflicto político armado y política de paz | 20.8 |
| (3) - narcotráfico | 18.2 |
| (4) - Servicios del Estado | 6.2 |
| (5) - Derechos Humanos y Convivencia | 4.0 |
| (6) - Conflicto de jóvenes | 6.4 |
| (7) - Conflicto por salarios | 6.3 |
| (8) - Conflictos sobre Adm. Pública y de Justicia | 5.0 |
| (9) – Otros Econ. (tierras, viv, precios, informal) | 5.8 |
| (10) – Otros Polit y sin inf. | 2.2 |
| Total | 100.0 |
| | N= 1301 |

La diferenciación de la acción colectiva conflictiva según temas muestra que la sociedad está dominada, “encerrada y sitiada”, por un número muy reducido de “*núcleos de conflicto y violencia*” que se pueden identificar claramente y que están altamente organizados. Estos núcleos se estructuran alrededor del tema del narcotráfico, de la criminalidad organizada y del conflicto político armado. El hecho sociológico intrigante resulta ser el que estos núcleos de conflicto y violencia se reproducen en medio de la sociedad, la permean en su conjunto, e influyen en ella hasta llegar a caracterizarla. Hacen parte de ella, pero no son identificables con el conjunto de la sociedad. En medio de ellos, se estructura una sociedad que ha aprendido a convivir con el conflicto, pero también se distancia y diferencia del mismo². El concepto sociológico de *red*, parece apropiado, para describir situaciones de conflicto y violencia en las cuales, o bien se participa de la red, en algún punto y con alguna responsabilidad, o bien los individuos son concientes de la proximidad de ésta y se sirven de ella de alguna manera, entre expectativas y miedos, o bien no hay relación alguna, pero se conocen indicadores de su presencia o proximidad, se les teme y se los evita.

Diferenciación espacial y predominio urbano

El conflicto se diferencia espacialmente, entre departamentos y en el interior de éstos en sub-regiones. La información muestra una especificidad en el Departamento del Cauca en donde predominan acciones colectivas propias del conflicto político armado. Durante el período estudiado, es relativamente menor el porcentaje del conflicto político para el Sur y Bota caucana y mayor para el centro del Departamento y el Norte del Cauca, presentándose un desplazamiento geográfico del conflicto sobre períodos anteriores. El conflicto político armado también tiene un despliegue, aunque relativamente menor, en el Departamento del Valle. En este Departamento el impacto mayor está en el Pacífico y se presenta un porcentaje significativo en el Área Metropolitana de Cali y el Centro del Valle.

Ahora bien, las acciones colectivas predominantes en el período se relacionan con el narcotráfico y con la delincuencia organizada y tienen su mayor expresión en el Departamento del Valle, no sólo en el área metropolitana, sino de manera notable en la red de ciudades intermedias del Departamento. En otras palabras, en medio de la diferenciación, la acción colectiva conflictiva analizada, especialmente la que depende del narcotráfico y de la

² Jorge Orlando Melo presenta un argumento similar para el caso de Medellín (Melo, 1995).

delincuencia organizada, muestra una relación estrecha con la malla urbana, especialmente la metropolitana, con los sectores más desarrollados y modernos de la región y con aquellos en que la presencia del Estado es mayor (ver tabla 2). Así, *la diferenciación espacial de las formas de acción colectiva tiene sentido socio-económico.*

Tabla 2
Sub-regiones del Cauca y Valle según temas principales de conflicto.

| Sub-regiones | Confl.polit armado | Tema de Conflicto. | | | % | N |
|----------------------|-----------------------|--------------------|---------|-------|-------|------|
| | | Narcotraf. | Delinc. | Otros | | |
| Área Metro- | | | | | | |
| Cali. | 13.2 | 16.2 | 34.7 | 35.9 | 100.0 | 597 |
| Sur Valle | 13.3 | 15.8 | 25.8 | 45.1 | 100.0 | 120 |
| Centro Valle | 14.3 | 30.5 | 12.7 | 42.5 | 100.0 | 105 |
| Norte Valle | 5.6 | 19.4 | 19.4 | 55.6 | 100.0 | 36 |
| PacificoValle | 17.5 | 15.9 | 12.7 | 53.9 | 100.0 | 63 |
| Varios Valle | --- | 36.4 | 13.6 | 50,0 | 100.0 | 22 |
| Centro. Cauc. | 41,0 | 7.2 | 13.7 | 38.1 | 100.0 | 139 |
| Norte Cauca | 48.4 | 28.2 | 5.7 | 17.7 | 100.0 | 124 |
| Sur y Bota | | | | | 100.0 | |
| Cauc. | 34.9 | 19.1 | 17.5 | 28.5 | | 63 |
| Varios Cauca | 12.5 | 12.5 | 6.3 | 68.7 | 100.0 | 16 |
| Otros | 43.8 | 31.3 | 12.5 | 12.4 | 100.0 | 16 |
| Total | 20.8 | 18.2 | 25.1 | 35.9 | 100.0 | 1301 |

Al indagar por el “*sector*” rural o urbano de las acciones colectivas conflictivas, diferenciando según el número de habitantes de la cabecera municipal, se encuentra un indicador más preciso del carácter pronunciadamente urbano de las acciones colectivas. La tabla 3 indica que 69.4 % de los hechos fueron urbanos por el lugar de ocurrencia; 57.6%, cifra apreciable, tuvieron lugar en ciudades con más de 50.001 habitantes, es decir ciudades grandes. La identificación de 30.6% de los hechos como rurales no es menos apreciable, pero debe observarse que 6.2% de los hechos fueron “rurales” por el lugar de proveniencia, aunque acontecieron en municipios con cabeceras con más de 50.001 habitantes. En otras palabras, 63.8% de los hechos sucedieron en municipios con más de 50.001 habitantes y 75.6% son urbanos o se relacionan estrechamente con la ciudad (Ver Tabla 3). En síntesis, el conflicto colectivo tiene una presencia significativa en una geografía vinculada con procesos de modernización y urbanización de la sociedad.

Tabla 3
Sector rural / urbano y Acción Colectiva.

| Sector | % |
|--|-------------|
| Urbano con cabecera municipal hasta 20000 hab | 6.3 |
| Urbano con cabecera entre 20001 y 50000 hab | 3.2 |
| Urbano con cabecera municipal con mas de 50001 hab | 57.6 |

| | |
|--|---------------|
| Esencialmente urbano | 2.3 |
| Sub-total urbano | 69.4 |
| Rural con cabecera municipal hasta 20000 hab | 18.8 |
| Rural con cabecera municipal entre 20001 y 50000 hab | 3.7 |
| Rural con cabecera municipal con mas de 50001 hab | 6.2 |
| Esencialmente rural | 1,4 |
| Sub- total rural | 30.6 |
| Total | 100.0 |
| | N=1301 |

Modalidades de conflicto colectivo más cercanas a la criminalidad que a la violencia política o a la política no institucional

Este trabajo, influido por la idea de un “conflicto entre dos”, ha tenido en cuenta que la acción colectiva conflictiva “no rutinaria” puede también ser desplegada “desde arriba” y no solamente se refiere a la contenciosa. La modalidad que asume la acción colectiva, es decir su forma de presentarse públicamente, se ha distinguido según los despliegues de coacción, fuerza y violencia, ya sea desde el Estado o bien desde la población civil o los grupos armados.

La tabla 4 muestra las frecuencias de las distintas modalidades analizadas, destacándose con 29.4% la confiscación de bienes y captura de personas, modalidad que se relaciona, aunque no de manera exclusiva, con escenarios de narcotráfico. Generalmente, esta modalidad se combinó, de hecho, con la militarización o el allanamiento y con una parte de los casos de atentado y terrorismo.

Tabla 4
Modalidad y Acción Colectiva

| Modalidad | % |
|--------------------------|----------|
| (a)Captura/ confiscación | 29.4 |
| (b)Emboscada | 10.8 |
| (c)Militar/allanam. | 8.6 |
| (d)Desapar/muerte | 6.8 |
| (e)Robo | 6.7 |
| (f)Declara. Denunc. | 6.1 |
| (g)Terror/atentado | 5.8 |
| (h)Ocupac. Espac. | 5.7 |
| (i)Huelgas paros | 5.1 |
| (j)Manifestaciones | 3.6 |
| (k)Asamble reunión | 1.9 |
| (l)Secuestro/ rehenes | 1.9 |

| Modalidad | % |
|----------------------------|----------------|
| (m) Amenazas | 1.5 |
| (n) Desalojo | 1.4 |
| (o) Boicot, asonada pedrea | 1.1 |
| (p) Toma población | 1.0 |
| (q) Otros | 2.6 |
| Total | 100.0 |
| | N= 1301 |

Sumando otras frecuencias, como los robos altamente organizados, 36.1% de las modalidades estarían asociadas con el campo de conflicto de la criminalidad, ya sea desde dentro, o bien como reacción estatal. Estas modalidades se deben distinguir claramente de la pedrea, el boicot y la amenaza, así como de la toma de espacios, el desalojo, las declaraciones y denuncias, las manifestaciones, las huelgas y los paros o las asambleas que son modalidades de acción que se pueden articular más bien con la *política no institucional* (Offe, 1985). Estas últimas modalidades suman alrededor del 25% de las frecuencias. Por su parte, las modalidades típicas del conflicto político armado, como las emboscadas y las tomas de poblaciones, suman alrededor de 10.8% de los casos. Se combinan con los secuestros y toma de rehenes y, en parte, con atentados vinculados con acciones terroristas. Porcentajes restantes se asocian con mayor dificultad a un campo de conflicto específico. Sin embargo, la información presentada sobre 71.9% de los casos permite argumentar el predominio de modalidades criminales sobre aquellas pertenecientes al campo de lo político no institucional y sobre las propias del conflicto político.

Se indagó también por el “*espacio*” en el que se desarrolla la acción colectiva, buscando alguna indicación sobre su carácter abierto y público o bien crecientemente cerrado, a pesar de su carácter público. La mayoría de los hechos, 39.1%, ocurrió en un “recinto cerrado”; 23.3% de los hechos sucedió en espacios tradicionales de la acción colectiva, abiertos y públicos, como las calles y las plazas; 21.5% en las carreteras o en campo abierto, espacio privilegiado de la confrontación política, violenta y no violenta, pero también de la política no institucional. Hay que destacar el peso creciente que asumen los medios de comunicación como el “espacio” a través del cual se manifiesta el conflicto con 5.4% de los hechos³. De manera general, los lugares clásicos como el campo abierto, la calle o la plaza parece que ceden ante el espacio cerrado y la confrontación a través de los medios de comunicación. La tabla # 5 presenta la información.

Tabla 5
Espacio y Acciones Colectivas.

| Espacio | % |
|-----------------|----------|
| Calle | 19.1 |
| campo abierto | 12.4 |
| Carretera | 9.1 |
| Recinto cerrado | 39.1 |

³ Los distintos medios de información no solamente “comunican” una noticia, sino que también son espacios a partir de los cuales bajo una forma muy específica se presenta, y a veces se discute, alguna acción colectiva particular.

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Recinto abierto (plaza, parque) | 4.2 |
| Medio de comunicación | 5.4 |
| Otro | 3.9 |
| No informa | 6.8 |
| Total | 100.0 |
| | N= 1301 |

Amenazas, presencia desmesurada de fuerza, violencia rutinaria

Se precisó y delimitó el *recurso a la violencia* en las acciones de conflicto (Tabla 6). De manera clara aparecen acciones violentas, entendidas como lesiones, muertes o atentados contra cosas y bienes que afectan personas, en 35.3% de los casos analizados. En 48% de éstos, cifra considerable, aparece un despliegue claro de fuerza, generalmente armada, sin consecuencias de violencia, tal y como la hemos entendido, y en 16.2% de los casos no aparece violencia y tampoco hay un despliegue inusitado de fuerza, aunque se presentan distintas formas de coacción.

Tabla 6
Recurso a la Violencia

| Recurso a la violencia | % |
|--|----------------|
| Si aparece violencia | 35.3 |
| No aparece violencia | 16.2 |
| No aparece violencia pero si un claro despliegue de fuerza | 48.0 |
| Sin información | 0.6 |
| Total | 100.0 |
| | N= 1301 |

La distinción que se hizo entre conflicto no violento, fuerza y violencia, así como su relación con distintos temas y distintos actores, permite circunscribir y caracterizar aún más las distintas dinámicas de conflicto. Por un lado, y como se detallará más adelante, hay campos en donde se insinúa el conflicto no violento, especialmente aquellos en que se expresan sectores sociales, vinculados en buena medida con el Estado. Por otro lado, aparece el escenario que produjo más violencia regional en años anteriores, el del narcotráfico, y una reacción del Estado sobre éste, fundada más en el ejercicio de la fuerza que de la violencia. En este caso, se detuvo a los capos de los carteles con despliegues de fuerza notables, con personal armado de manera sofisticada que prácticamente no disparó un tiro.... Finalmente, se encuentran los escenarios en los que aparece la violencia con más claridad, especialmente el conflicto político armado. En este caso, como se verá más adelante, aparece un carácter repetitivo de la violencia, rutinario, sin rasgos de solución, “intemporal”, un fenómeno contrario al definido por H. Arendt, que se caracteriza por su “instrumentalidad”, por la supeditación de los medios a los fines, en un tiempo ante todo coyuntural (Arendt, 1999).

El recurso a la violencia tiene variaciones muy grandes entonces, según el tema principal del conflicto (tabla 7). La violencia aparece de manera acentuada en el conflicto entre jóvenes (100%), en el conflicto político armado (71.2%) y en el escenario de Derechos Humanos y

Convivencia (59.6%). Por otro lado, no aparece violencia en el conflicto económico, por ejemplo salarial (54.9%), en otros conflictos económicos por ejemplo informal (56%) y en conflictos con la Administración Pública y de Justicia (47.7%). El despliegue de fuerza es contundente en el tema del narcotráfico (89.5%), en el de la criminalidad y el orden público (62.9%) y en servicios del Estado (59.3%). Hay que destacar el tratamiento “de fuerza” en un tema íntimamente relacionado con la violencia (el narcotráfico), el tratamiento de “violencia” en el tema de jóvenes (“pandillas”) y conflicto político armado, y el no recurso a la violencia en temas como el conflicto salarial y con la Administración Pública.

Tabla 7
Violencia y tema de conflicto

| Recurso a la violencia | Tema principal del conflicto | | | | | Otros | | | | | Total |
|---------------------------------------|------------------------------|------------|----------|-----------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------|----------------|-------|
| | Delin. (1) | Polit. (2) | Narc (3) | Serv. DD.H. Esta. (4) | H. Jov. (5) | Salar. (6) | Publ. (7) | Admi. (8) | Otros econ. (9) | pol. S.I. (10) | |
| Si violencia | 28.2 | 71.2 | 4.6 | 4.9 | 59.6 | 0 | 7.3 | 21.5 | 13.3 | 57.7 | 35.3 |
| No violencia | 7.7 | 3.3 | 5.1 | 35.8 | 15.4 | --- | 54.9 | 47.7 | 56.0 | 34.6 | 16.2 |
| Despl. De fuerza | 62.9 | 25.5 | 89.4 | 59.3 | 25.0 | --- | 37.8 | 29.2 | 30.7 | 7.7 | 47.9 |
| No es clara la inf. / Sin inf. | 1.2 | --- | 0.8 | --- | --- | --- | --- | 1.5 | --- | --- | 0.54 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| N= | 326 | 271 | 237 | 81 | 52 | 83 | 82 | 65 | 75 | 26 | 1301 |

Caracterizando de manera general el conflicto como violento o no violento, se estimó su *negociabilidad* (ver Tabla 8). El total del conflicto caracterizado como violento (69%), se diferenció entonces entre persistentemente violento (67%) y violento aunque negociable (2%). Contrastan las dos magnitudes, una de ellas, la primera y más abultada, a favor de una idea de rutinización de la violencia. En el caso del conflicto no violento (30.8%), la mayoría (25.3%) condujo a negociación, pero un porcentaje importante y significativo del 5.5% se caracterizó como no violento y no negociable, tema que se profundizará más adelante, por su importancia en la movilización social.

Tabla 8
Grado de negociabilidad y conflicto

| Grado de negociabilidad implicado | % |
|---|---------------|
| Conflicto no violento y conduce a negociación | 25.3 |
| Conflicto violento y persiste en violencia | 67.0 |
| Conflicto violento y conduce a negociación | 2.0 |
| Conflicto no violento no negociable | 5.5 |
| Sin información | 0.2 |
| Total | 100.0 |
| | N=1301 |

Actores armados, legales e ilegales, enfrentados entre ellos, y civiles contra el Estado

Sólo se obtuvo información sobre el *número de participantes* para 25.5 % de los casos analizados (332). Esta información indica que 31.3% fueron hechos colectivos con menos de 6 personas. Se debe recordar, que por definición, la acción colectiva puede implicar uno o más individuos que actúan en nombre de un grupo; 27.4% de los casos involucró entre 6 y 50 personas y la no despreciable suma de 41.3% de los hechos (137 casos), implicó 51 o más participantes (ver Tabla 9).

Tabla 9
Número de participantes

| Número de participantes | % |
|--------------------------------|--------------|
| Entre 1 y 5 | 31.3 |
| Entre 6 y 15 | 18.1 |
| Entre 16 y 50 | 9.3 |
| Entre 51 y 200 | 13.6 |
| 201 o más | 27.7 |
| Total | 100.0 |
| | N=332 |

Al distinguir según tema, se precisa que el número reducido de participantes se concentra, relativamente, en el tema de *criminalidad organizada*. La participación entre 6 y 50 personas predomina también en la criminalidad organizada, el conflicto político armado, el narcotráfico, el conflicto de jóvenes y el de Derechos Humanos y Convivencia. Por el contrario, los grandes números de participantes tienen que ver, relativa y prioritariamente, con el conflicto económico por salarios, el conflicto con la Administración Pública y de Justicia, otros conflictos económicos y, en menor medida, el conflicto político. Los grandes números de participantes, se relacionan más (relativamente) con formas de acción abiertas y públicas.

Tabla 10
Número de participantes según tema de conflicto

| NºPart | Tema conflicto | | | | | | | | | | Total |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| | Delin (1) - | Polit (2) - | Narco (3) - | Serv. Esta. (4) - | DD.H H.(5) - | Jov. (6) - | Salar. (7) - | Admi. publ (8) - 24,0 | Otros econ. (9) - | Otr pol y S.I. (10) - | |
| 1 - 5 part. | 58.3 | 26.8 | 25.0 | 2.8 | 27.3 | 27.3 | 7.0 | | 3.8 | 50.0 | 31.3 |
| 6 - 15 part | 34.4 | 19.6 | 6.3 | 5.6 | 36.4 | 36.4 | 7.0 | 20,0 | --- | --- | 18.1 |
| 16 - 50 part | 1.0 | 28.6 | 31.3 | --- | 9.1 | 9.1 | 2.3 | 12,0 | --- | 25.0 | 9.3 |
| 51 - 200 part | 4.2 | 21.4 | 12.5 | 8.3 | 18.2 | 18.2 | 25.6 | 16,0 | 19.2 | 16.7 | 13.6 |
| 201 – o más part | 2.0 | 3.6 | 25.1 | 83.3 | 9.1 | 9.1 | 58.1 | 28.0 | 76.9 | 8.3 | 27.7 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100,0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| N= | 96 | 56 | 16 | 36 | 11 | 11 | 43 | 25 | 26 | 12 | 332 |

La Tabla 11 presenta la información, comparada, según el rol de los actores colectivos en el hecho, ya sea como “*desencadenantes*” del conflicto, o bien en tanto que “*contendores*” del mismo. Así, las organizaciones criminales ilegales tienen la iniciativa en 15.9% de los casos, pero reciben acciones desencadenadas por otros, especialmente por las autoridades estatales en 36.3% de los hechos. Se refleja así, la característica del período en la que el Estado toma la iniciativa en la lucha contra el crimen organizado. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad, desencadenan el conflicto en 44.6% de los casos y son contendores en el 7.0%, lo que es consistente con la información anterior y reafirma la iniciativa del Estado, de sus Fuerzas Armadas, sobre la criminalidad organizada. Vale la pena subrayar que hemos puesto la atención en acciones no rutinarias de las autoridades. De manera interesante, la guerrilla desencadena el conflicto en 11.9% de los casos y es contendora en 10.3%, mostrándose también un rasgo del período en el que hay relativo equilibrio, pero también readecuación y acciones con iniciativa de la guerrilla sobre coyunturas electorales. El dato más sugestivo se refiere a la Administración Pública que desencadena 1.8% del conflicto, pero asume el papel de contendora en 25.4% de los casos. Son los obreros y empleados, los ciudadanos y las organizaciones de base quienes asumen los porcentajes mayores de iniciativa en el desencadenamiento del conflicto. Y son los empleados y los patronos (sobre todo éstos) quienes asumen relativamente un mayor rol de contención, explicado en el caso de los

empleados por las reformas en la Administración pública. En síntesis, el grueso del conflicto se lleva a cabo entre actores armados y, en segundo lugar, entre actores civiles en su relación con el Estado.

Tabla 11
Actores: Desencadenantes y Contendores

| | <u>Actor desencadenante</u> | <u>Actor Contendor</u> |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Org ilegales | 15.9 | 36.3 |
| Fuerzas armadas y seguridad | | |
| Guerrilla | 44.6 | 7.0 |
| admin. pública | 11.9 | 10.3 |
| ciudadanos | 1.8 | 25.4 |
| Obrero y empleado | 3.9 | 6.8 |
| Org de base | 6.5 | 1.6 |
| Gremios | 3.6 | 0.6 |
| Patrono | 2.3 | 0.1 |
| Indígenas | 0.3 | 6.7 |
| Reclusos | 1.5 | 0.7 |
| Estudiantes | 1.7 | 0.7 |
| Camp. | 1.6 | 0.2 |
| T.ind/ T. inf. | 1.6 | 0.6 |
| Otros | 0.8 | 0.7 |
| Total | 2.0 | 2.3 |
| N= | 100.0 | 100.0 |
| | 1301 | 1301 |

Complejidad e impacto reducidos de la movilización social

Finalmente, además de “diseccionar” cada uno de los hechos detectados, se estimó su conexión con otros hechos y su posible relación con un evento, con un “caso” o con un “movimiento social” de mayor alcance⁴. Así, 42.7% de los hechos se clasificaron como aparentemente “aislados”, mientras que 30.9% tuvieron una significación mayor, muchas veces en relación con otros hechos, sin que llegaran a constituir un “evento”. Finalmente, 26.4% de los hechos, la cuarta parte, se consideraron pertenecientes a “eventos” por su significación. En algunas situaciones particulares, se puede hablar de “casos” como interrelación de eventos que tienen una significación estructural mayor, que, en ciertas

⁴ Hay que subrayar el carácter del trabajo realizado, centrado en la recolección de hechos del conflicto social identificados como acciones colectivas conflictivas, discretas una y otra, y su diferencia con estudios de acción colectiva que son realmente estudios sobre agregados de acciones colectivas, particularmente significativas (eventos o estudios de caso). La discusión sobre los movimientos sociales es mucho más compleja, pero en la investigación social se pasa muy rápidamente a suponer su existencia, cuando sólo hay síntomas de los mismos: acciones colectivas dispersas que difícilmente dan para reconstruir un movimiento social.

condiciones pueden remitir a pensar en la existencia de formas de “movimiento social” de mayor alcance (Tabla 12).

Tabla 12
Complejidad y Acción Colectiva

| Grado de Complejidad | % |
|---|----------------|
| Hecho aislado | 42.7 |
| Hecho vinculado con otros sin constituir evento | 30.9 |
| Hechos que hacen parte de un evento, un caso o un movimiento social | 26.4 |
| Total | 100.0 |
| | N= 1301 |

Se estimó, por otro lado, el impacto local, regional o nacional de los hechos, encontrando una abrumadora mayoría de hechos, 76.6%, con un impacto puramente local. En 20.0% de los casos se presenta un impacto regional, lo que aumentaría la significación del hecho, y en 3.2% (42 casos), un impacto nacional o internacional (ver Tabla 13). En síntesis, por complejidad o por impacto, sólo una parte de las acciones colectivas analizadas, aproximadamente una tercera parte, ameritan un análisis (preferentemente cualitativo) más detallado que no es el objeto del presente artículo.

Tabla 13
Conflicto e Impacto

| Impacto | % |
|-------------------------|---------------|
| Impacto puramente local | 76.6 |
| Impacto regional | 20.0 |
| Impacto nacional | 2.7 |
| Impacto internacional | 0.5 |
| Sin información | 0.2 |
| Total | 100.0 |
| | N=1301 |

Conclusiones

La información cuantitativa que se ha presentado es puramente indicativa. El análisis puede mejorarse, para reiterar y precisar las afirmaciones, así como para sustentar otras. Se trata, por el momento, solamente de un paso inicial para la posterior reconstrucción más compleja de los escenarios del conflicto regional y de su relación con el conjunto de la sociedad. El problema que se debe resolver tiene que ver con preguntas de la siguiente naturaleza: cuáles fueron los escenarios determinantes del período, cómo se pueden describir, cómo se relacionan entre ellos y qué efectos tienen sobre el conjunto de la sociedad, preguntas todas que remiten a nuevos esfuerzos de investigación empírica, en la perspectiva de caracterizar dinámicas de cambio social. Sin embargo, a partir de la información presentada es posible realizar algunas inferencias, a manera de conclusiones.

Acciones colectivas conflictivas violentas de tipo criminal y movimiento social precario.

Si se hace una distinción estricta entre acciones colectivas, movilización social y movimientos sociales, llama la atención cómo los académicos, en Colombia, hacen referencia con facilidad a la existencia de “movimientos sociales”, sin que los trabajos empíricos puedan reconstruir estrictamente el fenómeno en todo su alcance y significación. Se encuentran desde luego acciones colectivas con alguna forma de encadenamiento y estructuración, pero los movimientos sociales son muy precarios. Por esta razón, un autor como Mauricio Archila, quien ha dedicado buena parte de su reflexión al estudio de los movimientos sociales, particularmente los obreros, se preguntan si éstos existen aún, con la idea de que existieron efectivamente en el pasado, pero que en el presente se manifiestan de manera tan precaria que se podría pensar en decretar su desaparición (Archila, 2001). Seguramente esta constatación lo condujo al estudio más reciente de formas de protesta popular, en lugar de hablar estrictamente de movimientos sociales (Archila, 2003).

En el Valle y el Cauca hay ejemplos de este análisis sobredimensionado de los movimientos sociales, en particular en el caso del movimiento feminista un “movimiento” tan complejo de estudiar-, al que no se le puede decretar la muerte, pero que no se puede identificar, por ejemplo, con la inserción de mujeres intelectuales en política pública y oficinas estatales (Castellanos y Accorsi, 2002), aunque en la región se presentan situaciones extremas: por un lado, es cierto que los indígenas desarrollan movilizaciones con claros rasgos de movimiento social y que se puede hablar por lo tanto de un “movimiento indígena”, como en pocos casos en Colombia. Pero, por otro lado, nos encontramos en presencia de demandas poco articuladas y discontinuas, de movilizaciones puntuales de actores muy organizados alrededor de exigencias instrumentales y particularistas sobre el Estado, de “oportunidades” de movilización, a partir de recursos que encuentran eco en organizaciones y en líderes que hablan en nombre de “movimientos sociales”. Los analistas muchas veces no se detienen en las implicaciones del concepto, una totalidad analítica, a partir de acciones colectivas, que muestra impacto en el cambio social estructural. El caso regional de los movimientos étnicos-negros puede ser un ejemplo de esta conceptualización incipiente que, por lo tanto, incita a investigaciones más detenidas.

Lo que la información muestra son voces, intereses y manifestaciones que se mueven y se expresan tímidamente en medio de un conflicto violento y organizado que es de otro orden. Por esta misma razón, esas voces y manifestaciones son cruciales aunque sean tenues. Se acogen a procedimientos de desarrollo del conflicto propios de la política no-institucional, pueden ser ambivalentes con el crimen en un medio tan difícil en el que los procedimientos violentos pagan, pero tienden a manifestar sus intereses públicamente y de manera importante

no se acogen a la violencia por principio. Impacta sobremanera la medida en que sus demandas están en la perspectiva de la modernización de la sociedad, buscan una relación y posición con el Estado y son susceptibles de institucionalización. La respuesta estatal, sin embargo, es generalmente autoritaria y apoyada no pocas veces en mecanismos de fuerza y violencia estatal. Hay entonces claras acciones colectivas que expresan intereses de sectores de la sociedad, que asumen formas de expresión no institucionales, que se plantean en el espacio público y con modalidades distintas a la violencia, pero su movilización es precaria, esporádica, subsumida y coartada por los grupos armados violentos. *El conflicto violento ha sido un obstáculo muy fuerte para la apertura del espacio público de confrontación entre sectores sociales y políticos y para el fortalecimiento de los movimientos sociales.*

Estado atacado desde todos los flancos y proclive a la delincuencia

El Estado aparece prácticamente en todos los casos de conflicto, desafiado por grupos armados de diverso origen, pero también por sectores sociales distintos y de manera muy ostensible por sus propios servidores o funcionarios. Su reacción combina, según el contradictor, la aplicación de la fuerza, de la violencia y también la negociación. Sorprende el tratamiento de fuerza sin violencia a los narcotraficantes, mientras el Estado se transa en luchas violentas con la guerrilla y privilegia el tratamiento militar de las demandas civiles para llegar a negociaciones. Aunque no se desprende de los datos presentados, información más detallada de otra naturaleza, muestra un problema grave con la conducta delincinencial en que incurren miembros del Estado y las dificultades de las autoridades para esgrimir la ley y la transacción legal como mecanismo al que se pueden acoger las partes. El Valle del Cauca es un departamento relativamente moderno y con alta presencia del Estado en el concierto nacional, pero es un Estado permanentemente retado por grupos armados, que descansa por lo tanto él mismo en la amenaza y el uso de la fuerza, que incurre muchas veces en acciones ilegales, que ejerce con muchas dificultades el arbitraje legal y que difícilmente se rige por el eje y faro de la democracia y la seguridad de los ciudadanas. *El Estado es extremadamente poroso al crimen y, a pesar de todo ello, se sostiene con tejidos institucionales mínimos, con cierta burocracia técnica; de hecho, está lejos de colapsar.*

Funcionamiento de la sociedad en medio de un contexto de violencia y conflicto

La sociedad regional es impensable sólo sobre la base del conflicto y de la violencia. Parece importante estudiar cómo se reproduce la sociedad, a pesar de la violencia, en medio de ella, aprendiéndola a conocer y manteniéndose parcialmente por fuera de ella. La característica observada de violencia nucleada y de redes de violencia es importante. Los ciudadanos comunes y corrientes terminan conociendo los focos y las redes, pero no adhieren necesariamente a estos. En algunos casos, se aprovechan de las oportunidades que brindan, pero de manera general saben distanciarse y adherir a una cara distinta de la sociedad regional, regida por el trabajo cotidiano o por la expectativa de tenerlo, sobreviviendo con honestidad. La ciudad es un campo privilegiado para hacer este tipo de análisis y para entender como su territorio está fragmentado, lo precario del espacio público y de la civilidad, y a pesar de ello, cómo sus habitantes aprenden a moverse y reproducirse en su interior, en medio de la adversidad (Guzmán, 2006). *Se le debe poner especial atención a las acciones colectivas cargadas de intereses subalternos que buscan plantear sus intereses públicamente y sin apelar a la violencia. Si bien sus exigencias no siempre son negociables, si tienen un alto contenido, como demandas, que implican reconfiguraciones del orden social dominante. Mucho se habla hoy de sectores sociales “excluidos” y de la necesidad de su inclusión. Pero desde luego, no puede tratarse de la inclusión en lo existente, bajo su forma dominante.*

Sociología y criminalidad: una reconceptualización necesaria

Puede argumentarse que, en la base del análisis propuesto, hay una “inconsistencia” que tiene que ver con la definición inicial de acción colectiva conflictiva. Ciertamente, no se ha reducido en este trabajo el análisis a la acción “contenciosa”, sino que se incluye la “dominante no rutinaria”. En otras palabras, se apunta al carácter de acción “conflictiva” y, de paso, se incursiona en un modelo relacional de dos actores. Pero, independientemente de los problemas subyacentes a las decisiones que se toman cuando se recoge la información, problemas que se manifiestan en el análisis, el hecho que se debe destacar es que aparecen entre los datos acciones colectivas muy poco usuales: aquellas típicamente criminales. Si se hace una revisión de estudios sobre acción colectiva, se observará que muchos de ellos se orientan al análisis de los movimientos sociales, excluyendo el tema de la criminalidad (ver especialmente Offe, 1985, Touraine, 1997, Archila, 2001).

Sin embargo, las acciones colectivas también se pueden relacionar con movilización social, oportunidades y con procesos de formación de Estado, en los que la criminalidad juega un importante papel (ver especialmente Tilly, 1992, Johnson, 1995). Según esta visión, la criminalidad y la formación de Estado van de la mano, de tal manera que el Estado no solamente surge de la criminalidad, sino que en su trayectoria se recrea, parcialmente, en relaciones con ésta. Es cierto que el Estado organizado como Estado de Derecho se erige contra el crimen, pero este es un resultado histórico parcial y una meta de civilización. En el caso estudiado (y de manera general en el colombiano), impacta la medida en que la criminalidad aparece con cierta especificidad, pero, además, impregna todos los escenarios, en unos casos con más fuerza que en otros. Por ejemplo, en el caso del conflicto político armado, que de todas maneras se insiste en caracterizar de manera independiente en este estudio, habría que preguntarse por su convivencia territorial con la criminalidad estricta, por el significado del uso reiterativo y rutinario de la violencia, por la pérdida de la consideración de la violencia como “medio” coyuntural evaluable, por los rasgos de barbarie que tiene la violencia puesta en práctica con la población civil. Pero, esencialmente, se habla de “criminalidad” en el caso de narcotráfico y de otras formas de crimen organizado, con una característica fundamental: su rasgo de “dominante”, de lógica de imposición desde arriba sobre sectores subalternos. Criminalidad “subalterna” existe y cuantitativamente es muy significativa.

Pero la lógica del narcotráfico local y del crimen organizado es una lógica de acumulación, de apoyo en el Estado, de intolerancia. Entonces, es fundamental, a partir de la experiencia regional, hacer una teoría del crimen alternativa que definitivamente muestre su anclaje en los sectores con poder social. *La criminalidad atraviesa la sociedad desde arriba, en buena medida define la estructuración de la sociedad y es un reto para la sociedad colombiana, o la regional, que pueda construir un polo de civilización, de normatividad, que haga contrapeso e irradie los procesos de cambio social, de manera que lo que resulte no sea una sociedad criminal a secas.*⁵ Este polo existe, pero como el Estado es precario, y tiene adhesiones

⁵ En la introducción al libro *Nuestra Guerra sin nombre*, Francisco Gutiérrez y Gonzalo Sánchez critican la idea de académicos y responsables de decisiones, según la cual “la guerra se habría despolitizado” y postulan, que, por el contrario, “el conflicto colombiano es actualmente más económico, más criminal y más político” (Gutiérrez y Sánchez, 2006:17). Observan que entre 1975 y 2004 se pueden contabilizar 53.431 homicidios por violencia política letal. Esta cifra indudablemente muestra la magnitud incuestionable de la violencia política y su repercusión en toda la sociedad. Pero, para el mismo período, la revista *Criminalidad* de la Policía Nacional, reporta 560.929 homicidios – cálculos totales propios-. Vale la pena entonces escudriñar qué hay en ese 90.5 % de homicidios no políticos letales y preguntarse si allí hay rasgos estructurantes para la sociedad colombiana. Aquello que

ambiguas en los diferentes sectores sociales, arriba y abajo. Parece urgente desarrollar una sociología del crimen que se salga de los patrones usuales, que muestre su relación con el poder, con la estructuración de la sociedad y del Estado y parece urgente contribuir a fortalecer la delgada corteza de nuestra civilidad. Norbert Elías ha planteado un proceso de civilización para las sociedades occidentales. Pero no es un proceso lineal y en algunos casos históricos o bien es muy difícil y conflictivo, o tiene altibajos notables como en Alemania en la década de los treinta y cuarenta del siglo pasado, caso magistralmente analizado por este autor (Elías, 1999). Inversamente, nada implica que los procesos de acción colectiva descritos en este trabajo para el Valle y el Cauca como organizados, violentos y criminales tengan que ser permanentes. Por el momento, sólo se puede decir que el panorama es confuso y que solo hay esperanza en los sectores sociales, diversos desde un punto de vista clasista, que ponen el acento en los valores fundamentales asociados con el trabajo, la democracia y la civilidad.

Bibliografía

- AGUDELO, Carlos Efrén (2004). “Guapi: Sociedad Local, Influencias Globales”, en Barbary, O. y Urrea, F. *Gente Negra en Colombia*. Medellín, CIDSE-IRD-COLCIENCIAS. 2004, pp. 283-321.
- ARENDT, Hannah (1999). “Sobre la Violencia”, en *Crisis de la República*. Madrid, Ed. Taurus.
- ARCHILA, Mauricio:
- 2001 “Vida, Pasión yde los movimientos sociales en Colombia”, en Archila, M y Pardo, M. (eds). *Movimientos Sociales, Estado y Democracia en Colombia*. Bogotá, CES, ICANH, Universidad Nacional.
- 2003 *Idas y Venidas, Vueltas y Revueltas. Protestas Sociales en Colombia: 1958-1990*. Bogotá, ICANH-CINEP.
- CASTELLANOS, G. y ACCORSI, S. (2002). (Comps). *Género y Sexualidad en Colombia y en Brasil*. Cali, Ed. La manzana de la discordia.
- ELIAS, Norbert (1999). *Los alemanes*. México, Instituto de Investigaciones Luis Mora.
- GUTIÉRREZ, F. y SÁNCHEZ, G. (2006). “Prólogo”, en *Nuestra Guerra sin Nombre*. Bogotá, IEPRI- UN, Grupo Editorial Norma.
- GUZMÁN, Álvaro:
- 1999 “Conflicto colectivo, espacio público y región”, en *I Congreso Internacional sobre Violencia Social y familiar: una cuestión de Derechos Humanos*. Manizales, Universidad de Caldas-ICBF.
- 2003 “Delincuencia y Violencia: Nación, Región y Ciudad”, en Álvaro Guzmán y otros. *Cuatro Ensayos de Coyuntura: Valle y Cauca a finales del siglo XX*. Bogotá, CIDSE-CEREC.
- 2006 “Cali: entre violencia organizada y desregulación”, en *Sociedad y Economía* 10.
- 2007 “Reflexiones teóricas y metodológicas sobre acción colectiva conflictiva”. Ponencia presentada en reunión de CLACSO. Bogotá, octubre/2007. Documento de Investigación no publicado. CIDSE-Universidad del Valle.
- JOHNSON, Eric (1995). *Urbanization and Crime: Germany: 1871-1914*. Cambridge University Press.
- OFFE, Claus (1985). “New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics”, en *Social Research*. New York, New School for Social Research. Vol. 52, 4.

se considera “despolitizado” en sus fines y medios puede ser también ser central para la formación del Estado y para el sostenimiento de una sociedad.

- MELO, Jorge Orlando (1995). "Ciudadanía y violencia: algunas notas sobre la experiencia en Medellín", en *Boletín socio-económico* 29. Cali, CIDSE, Universidad del Valle.
- TILLY, Charles:
- 1978 *From Mobilization to Revolution*. Addison-Wesley Publishing Co., Reading, Mass.
- 1985 "Models and Realities of Popular Collective Action", en *Social Researc*. New York, Vol 52, 4. New School for Social Research.
- 1992 *Coerción, Capital y Estados Europeos 990-1990*. Madrid, Alianza Editorial.
- TOURAINÉ, Alain (1997). *¿Podremos vivir juntos?* México, Fondo de Cultura Económica.
- GOMEZ BUENDÍA, Hernando (2003). *El conflicto: callejón con salida*. Bogotá, Informe Nacional de Desarrollo Humano. Colombia-2003. UN-DNP.

LA PRÁCTICA DE LA NO VIOLENCIA Y SU COSTO EN DOS EPISODIOS: UNA MASACRE PARAMILITAR EN SAN JOSÉ DE APARTADÓ Y UNA TOMA GUERRILLERA EN TORIBÍO*

Jorge Hernández Lara**

Resumen

El presente artículo analiza un aspecto específico de la acción colectiva no violenta contra la guerra en Colombia: el elevado costo que han debido pagar quienes la practican, a partir del examen de dos casos: el ataque paramilitar a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en Antioquia y la toma guerrillera de Toribío en el Cauca, -los dos hechos producidos en el 2005-, utilizando para ello nociones provenientes de los campos de estudio sobre la Acción Colectiva y la No Violencia, con base en el examen detenido de información primaria extraída de la prensa escrita y algunas fuentes complementarias.

Abstract

This papers aims at shedding light on a specific issue of non-violent collective action against war in Colombia, the high cost that has been paid by those who are involved in it. The analysis focuses on two cases that occurred at the beginning of 2005: the paramilitary attack against the Peace Community of San José de Apartadó (Antioquia), and the guerrilla take over of Toribío (Cauca). In order to carry out this analysis, concepts from the study fields of Collective Action and Non Violence are used. The analysis will be based on primary information from newspapers and some complementary sources.

Palabras Clave: No violencia, Acción Colectiva, Comunidades de Paz, San José de Apartadó, Toribío.

Key words: Non Violence, Collective Action, Peace Communities, San José de Apartadó, Toribío.

* Este artículo es un producto derivado del proyecto de investigación que el autor tiene en marcha sobre Formas de Acción Colectiva No Violenta contra la guerra en Colombia, proyecto que cuenta con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle.

Artículo recibido el 3 de septiembre de 2007

Aprobado el 13 de noviembre de 2007

** Sociólogo. Profesor del Departamento de Ciencias Sociales y miembro del Grupo de Investigación *Acción Colectiva y Cambio Social* del CIDSE, en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, Cali, Colombia. El autor agradece los comentarios que Álvaro Guzmán y Mario Luna hicieron a una versión preliminar de este artículo.

Existe en Colombia una rica experiencia de acción colectiva y movilización social contra la guerra y quienes la protagonizan, se dice que específicamente durante los años noventa del siglo pasado se produjo en el país una de las oleadas de activismo por la paz más vigorosas del mundo en un solo país. De hecho, según las cifras de una de las bases de datos más completa que existe sobre esto, las acciones por la paz registradas en la prensa escrita superaron por primera vez las cincuenta en 1990, ascendieron en 1997 al tope de 255 y, aunque descendieron luego, se mantuvieron por encima de cincuenta al menos hasta 2003 (García, 2005 y 2006, p.117)

La mayor parte de estas acciones han sido del tipo de las que en cierta literatura especializada sobre el tema (Sharp, 2003), se denominan *métodos de persuasión y protesta*; pero, otras son ejemplo de *métodos de no colaboración o no cooperación* y no pocas han adoptado directamente la forma de *métodos de intervención no violenta*.

Hay varias formas de clasificar las acciones colectivas del activismo por la paz. En el mejor análisis global que se ha realizado hasta ahora en Colombia sobre este fenómeno, por ejemplo, se distinguen cinco tipos de acción, en función de “la estrategia” seguida por los activistas (García, 2006, pp.121-122): educar, organizar, actuar políticamente, protestar y resistir. Toda clasificación tiene sus virtudes y sus limitaciones. Esta toma como base el ámbito de los fines –propósitos, metas, objetivos o “estrategias”–, de quienes orientan la acción, más que las modalidades prácticas que adopta en su propio desarrollo. Otra manera de clasificarlas consiste en prestar más atención a los medios, los métodos o las modalidades de acción, para hacer primero un inventario de sus formas específicas y luego contrastarlas con el *repertorio de acción colectiva* que ha sido identificado en múltiples estudios previos, por parte de investigadores que se han ocupado del mismo tema.

Para el caso de la acción no violenta, realizada con cualquier propósito: por la liberación nacional, por los derechos civiles, contra el *apartheid*, contra la guerra, por la paz, etcétera, el inventario más completo del repertorio de acción colectiva es el que ha establecido G. Sharp. Este sociólogo norteamericano ha identificado 198 métodos de acción colectiva no violenta y los ha agrupado en tres grandes clases: 1) 54 métodos de persuasión y protesta, que son los menos directos y más convencionales, entre los cuales están las declaraciones formales, las formas de comunicación para amplias audiencias, las representaciones en grupo, las acciones simbólicas, la presión sobre individuos concretos, los espectáculos con música o sin ella, las procesiones, el homenaje a los muertos, las asambleas públicas, las retiradas y renunciaciones; 2) 103 métodos de no colaboración o no cooperación, tanto social como económica y política, entre los cuales están el ostracismo de personas, la no colaboración con instituciones, la retirada del sistema social, los boicots económicos, las huelgas, la no colaboración de los ciudadanos con el gobierno, las alternativas ciudadanas a la obediencia, entre otros; y 3) 41 métodos de intervención, como las sentadas, las ocupaciones, hacerse arrestar o crear instituciones alternativas, entre los principales.

Como puede verse en el inventario de Sharp, la acción colectiva no violenta utiliza algunos métodos de la acción colectiva en general, pero ha creado otros propios y en esa medida ha innovado el repertorio global de la acción colectiva. En todo caso excluye, con toda claridad, métodos que apelan a la violencia física. Por otro lado, el criterio de clasificación con base en el cual Sharp distingue las tres clases de acción no violenta tiene que ver con el grado de

confrontación que supone cada una de las modalidades, entre quienes desencadenan la acción y aquellos hacia quienes está dirigida.

Aquí nos interesa resaltar dos experiencias muy especiales de acción colectiva contra la guerra y los guerreros en Colombia, porque han durado ya varios años y tienen rasgos paradigmáticos, una que se caracteriza por su radicalidad en la aplicación del principio de no colaboración con los contrincantes: la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, establecida a comienzos de 1997, y otra que se ha destacado por la utilización de métodos de intervención no violenta desde 1991, cuando se desmovilizó el Movimiento Quintín Lame y se promulgó la nueva Constitución Política: la de las comunidades indígenas del norte del Cauca. Ambas sufrieron cruentos ataques, casi simultáneamente, durante el primer semestre de 2005, la primera a manos de los paramilitares, la segunda a manos de la guerrilla, viendo de esta manera incrementados los costos que han debido pagar por practicar la no violencia en medio de la guerra.

El costo de practicar la no violencia se incrementa al máximo cuando se está frente a contrincantes inescrupulosos –literalmente: sin escrúpulos para atentar contra la vida humana, es decir: que no conceden valor a la integridad de las personas–. Se admite, por ejemplo, que Gandhi habría tenido mucho menos éxito frente a Hitler que enfrentado, como lo hizo, al Imperio Británico. Pero hay otros factores que también incrementan el costo: el grado de polarización inducido por los partidarios de apelar a la violencia, la duda o el escepticismo de los independientes o neutrales con respecto a la autenticidad de quienes invocan la no violencia y la propia incapacidad de estos para explicar su acción y dotarla de legitimidad.

En el campo de los *estudios sobre paz*, denominados así para distinguirlos y oponerlos a los estudios sobre violencia, hay actualmente un esfuerzo por precisar el significado de nociones y conceptos que hasta ahora han sido utilizados sin mucha reflexión previa por parte de activistas y simpatizantes del pacifismo en distintas partes del mundo. Entre las denominaciones sometidas a examen están “No Violencia”, “No-Violencia” y “Noviolencia”, todas las cuales es necesario precisar para los propósitos de nuestro análisis.

Se usa la expresión *no violencia* (las dos palabras separadas), para hacer referencia en general y en abstracto a las formas de acción que eluden el uso de la violencia física, como en este artículo, trazando así un primer límite para acotar un terreno en el cual sin embargo cabe aún discusión acerca de cuáles otras modalidades de violencia son contrarrestadas por la no violencia (¿la violencia psicológica?, ¿la violencia estructural?, ¿la violencia simbólica?), y por lo tanto hay diversas opciones específicas de practicar la no violencia.

Se utiliza la expresión *no-violencia* (las dos palabras unidas por un guión), para hacer referencia al uso de modalidades de lucha social que excluyen explícitamente la posibilidad de apelar a la violencia física, porque se considera ineficaz hacerlo, independientemente del alcance de los fines que se persigan y los marcos normativos en que se inspiren los activistas.

Se emplea la expresión *noviolencia* (las dos palabras unidas sin guión entre ellas), para señalar el uso de modalidades de lucha social que excluyen explícitamente la posibilidad de apelar a la violencia física, otras formas de violencia y todo aquello que provoque sufrimiento a los demás, porque se considera inmoral, dado que se busca una transformación radical de la sociedad para establecerla sobre nuevas bases, una de las cuales es el trámite pacífico de los conflictos (López, 2004 y 2006, pp.15-43).

En Colombia hay tradición de no-violencia tanto como de noviolencia, habría que determinar qué tanto de una y otra se encuentra en cada caso específico, sobre todo cuando se trata de procesos complejos en los cuales intervienen activistas con diferente grado de claridad y compromiso sobre lo que hacen.

En esta oportunidad se examinarán los hechos que rodearon la masacre de San José de Apartadó en febrero de 2005 y la toma de Toribío en abril del mismo año, el costo que implicaron para las comunidades víctimas, el tipo de contrincante que las atacó, las reacciones que se produjeron entre distintos sectores de la sociedad colombiana y las explicaciones que dieron las víctimas, todo con el fin de establecer las condiciones de posibilidad que existen en nuestro país para la práctica de la no violencia.

Antes de detenerse en cada uno de los dos casos, conviene recordar algunos elementos del contexto en medio de cual se produjeron, especialmente aquellos que tienen que ver con las actividades del gobierno y los grupos irregulares en torno al conflicto armado.

Durante el primer semestre de 2005 continuó la desmovilización de grupos pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia, mientras sus principales líderes se encontraban concentrados en Santa Fe de Ralito y persistía el pulso entre ellos y el Gobierno por la definición de su nuevo estatus. En abril se presentó una crisis en este proceso cuando “Don Berna”, uno de los comandantes paramilitares con mayor influencia en Antioquia, se rebeló y huyó de la zona de concentración, aunque luego se dejó conducir nuevamente a ella. Fue un momento en el cual, además, comenzaron a conocerse denuncias sobre el hecho de que no todos los miembros de los bloques desmovilizados habían entregado sus armas e interrumpido sus actividades delictivas.

Las Farc protagonizaron varios ataques a pequeñas poblaciones en diferentes partes de país, similares al que hicieron en Toribío, como parte de un intento por salir del repliegue a que las había obligado la nueva política contrainsurgente implantada en 2002. Entre esos ataques se destacan los realizados a Iscuandé (Nariño) y Mutatá (Antioquia), en febrero, Teteyé (Putumayo) y Puerto Rico (Cauquetá), en junio. En este último caso el ataque se dirigió directamente contra miembros del concejo municipal, es decir: contra población civil. Por esta época, las Farc ya habían descartado cualquier posibilidad de entablar diálogos de paz con el Gobierno presidido por A. Uribe, pero insistían en la necesidad de un acuerdo humanitario para el intercambio de secuestrados por prisioneros, previo despeje de un área de seguridad en los municipios de Florida y Pradera, en el Valle del Cauca.

El Gobierno Nacional, por su parte, negó durante el primer semestre de 2005 toda posibilidad de conceder un despeje para el intercambio humanitario y mantuvo su persecución contra las Farc, al mismo tiempo que facilitaba acercamientos con el ELN. Solo meses después, a finales de año, aceptó una propuesta de tres gobiernos amigos: Suiza, Francia y España, para despejar 180 kilómetros en una zona de frontera entre los Departamentos del Valle del Cauca y el Tolima, con el fin de facilitar el acuerdo humanitario.

Durante este primer semestre de 2005 la denominada Política de Seguridad Democrática, diseñada en 2002 por parte del Gobierno Nacional para buscar la derrota o al menos un debilitamiento de la guerrilla, suficiente para obligarla a negociar, mostró sus límites, a pesar del optimismo que mantenían aún sus principales impulsores. A mediados de año la situación volvió a ser muy parecida a la de épocas anteriores: ni victoria militar a la vista ni negociación política para superar el conflicto. Surgió entonces una especie de “batalla

ideológica”, impulsada especialmente por algunos asesores gubernamentales, tendiente a cambiar los términos con que se acostumbraba a definir la situación: lo que existe no es conflicto o guerra, apenas el ataque de una variedad de delincuencia organizada contra las instituciones legítimas; la vieja distinción entre izquierda y derecha para referirse a la filiación de las ideas políticas dejó de tener vigencia, ahora la que vale es la que diferencia democracia y totalitarismo; el calificativo de humanitario debe ser reservado exclusivamente para aquello que esté autorizado a ser denominado así por el derecho nacional e internacional, etcétera.

Durante los seis primeros meses de 2005 se mantuvo viva la discusión sobre la reelección presidencial, especialmente sobre si era constitucional o no. En octubre, cuando la Corte Constitucional dio su aval, el contexto que hemos descrito se transformó significativamente

La masacre paramilitar de San José de Apartadó en febrero de 2005

Si se toman como base los testimonios de pobladores de la zona, nunca desmentidos por versiones contrarias que tengan el mismo grado de detalle, a partir del sábado 19 de febrero de 2005 miembros de la Brigada XVII del Ejército y algunos reconocidos paramilitares de la región, presumiblemente pertenecientes al Bloque Cacique Nutibara de las AUC, estuvieron en varias veredas del Municipio de Apartadó, en dos de las cuales: Mulatos y La Resbalosa, distantes una hora entre sí, asesinaron el lunes 21 a ocho personas, entre quienes se encontraba Luís Eduardo Guerra, líder histórico de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, su esposa y su hijo de 11 años, así como Alfonso Tuberquia y su familia (CINEP, 2005, pp. 93-96).

El crimen múltiple se cometió con sevicia: las víctimas fueron atacadas a garrote y machete, luego descuartizadas y enterradas superficialmente o abandonadas a orillas de un río, expuestas a las aves de carroña y los cerdos de monte. Otros habitantes de las veredas fueron confinados en sus casas, amenazados de muerte, aterrorizados y sindicados de pertenecer a la guerrilla. Los victimarios acusaban a sus víctimas de ser guerrilleros o auxiliares de las guerrillas, aún sabiendo que eran miembros de la Comunidad de Paz, porque no reconocen que haya diferencia entre una y otra.

Tanto los militares como los paramilitares andaban en persecución de guerrilleros que merodeaban en el área, de hecho el domingo 20 dieron de baja a un miliciano que se encontraba de visita en casa de su madrastra, en la vereda Las Nieves. Se trata de una zona que se disputaban guerrillas y paramilitares desde comienzos de los años noventa, cuando estos últimos, viniendo del Departamento de Córdoba, iniciaron una ofensiva para desalojar a las FARC de un área en la cual habían permanecido por muchos años ejerciendo dominio sobre la población y el territorio. Era entonces una zona en donde sucedía algo que ocurre de manera recurrente en territorios afectados por conflictos armados internos o guerras civiles: algunos habitantes son hijos, hermanos o familiares, con algún grado de parentesco, de uno que otro miembro de alguno de los grupos armados enfrentados, en este caso de la guerrilla. Algo que no convierte automáticamente a los familiares en cómplices de quienes se mantienen alzados en armas, pero contamina la situación y genera más sospechas de las que son habituales entre los guerreros con respecto a la población civil, que termina poniendo la mayor cantidad de víctimas.

Vista en conjunto y con suficiente perspectiva histórica, esta zona, igual que la región más amplia a la que pertenece, ha experimentado situaciones límite prácticamente desde la colonia

y, como era de esperarse, esa trayectoria ha condicionado su evolución más reciente. A comienzos de los años noventa del siglo veinte adquirió los rasgos propios de un teatro regional de guerra, en el cual actuaban fuerzas proto-estatales, como las FARC, para-estatales, como las AUC y estatales, como el ejército, dejando muy poco espacio o ninguno a la población civil. Pero es justamente en medio de esa nueva situación límite que algunos habitantes de las veredas del municipio de Apartadó, después de una masacre paramilitar continuada y del desplazamiento de la mayor parte de la población del casco urbano, deciden constituirse como Comunidad de Paz en el sitio denominado San José.

El mismo día de su fundación el 23 de marzo de 1997, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó emite una declaración en la cual adopta el *principio de no colaboración* con sus contrincantes al señalar:

Artículo 3. Las personas que hacen parte de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó no realizarán actividad alguna que tenga relación directa o indirecta con las operaciones militares de ninguno de los actores en conflicto, o con el apoyo táctico o estratégico de los mismos.

Parágrafo 1. Las personas que hacen parte de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se comprometen a no participar directa ni indirectamente en las hostilidades y a cumplir con las siguientes condiciones:

- a. Se abstienen de portar y/o tener armas, municiones o materiales explosivos*
- b. Se abstienen de brindar apoyo logístico a las partes en conflicto*
- c. Se abstienen de acudir a alguna de las partes en conflicto para solucionar problemas internos, personales o familiares*
- d. Se comprometen a participar en los trabajos comunitarios*
- e. Se comprometen a la no injusticia e impunidad de los hechos*

Con esta declaración queda claro que no buscan ser neutrales sino autónomos, no se alinean con ninguno de los actores armados, incluido el ejército, pero toman partido por la acción no violenta. Adoptan, como se dijo, el principio de no colaboración con sus contrincantes y se organizan para la autogestión, dotándose de una instancia propia de coordinación, el Consejo Interno conformado por ocho de sus miembros elegidos para periodos fijos renovables.

Durante los años siguientes crearán grupos de trabajo colectivo y desarrollarán proyectos comunitarios en diferentes frentes: vivienda, educación, salud, economía, etcétera, generando poco a poco un plan de vida alternativo que alguna analista ha caracterizado como “estrategia emancipatoria” (Uribe, 2004), contando cada vez más con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales que protegen los derechos humanos, pero a un costo enorme, realmente descomunal para una comunidad de apenas dos mil habitantes.

La masacre de febrero de 2005 acercó a 500 el número de agresiones sufridas por la Comunidad de Paz y representó uno de los más grandes golpes que ha recibido, debido a que una de las víctimas fue su líder histórico, el mismo que había redactado el reglamento interno y los representaba en conversaciones con entidades nacionales e internacionales. Pero un

La práctica de la no violencia y su costo en dos episodios: una masacre paramilitar en san José de Apartado y una toma guerrillera en Toribio

balance completo de los costos debe incluir un inventario más detallado, como el que aparece en la tabla siguiente, transcrita íntegramente de una fuente confiable (CINEP, 2005, 133):

Agresiones contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 1996-2005 (octubre)

| Categoría general | Categoría específica | Número |
|--------------------------|---|---------------|
| Derecho a la vida | Ejecución extrajudicial | 123 |
| | Homicidio intencional de persona protegida | 20 |
| | Asesinato por persecución política | 05 |
| | Muertos por métodos y medios ilícitos | 02 |
| Derecho a la libertad | Desaparición forzada | 14 |
| | Detención arbitraria | 91 |
| Derecho a la integridad | Heridos | 18 |
| | Tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes | 55 |
| | Amenazas | 92 |
| | Desplazamiento forzado colectivo | 17 |
| Otras Agresiones | Pillaje | 48 |
| | Ataque a bienes civiles, bombardeo indiscriminado | 20 |
| TOTAL | | 505 |

Fuente: Estadísticas consolidadas con fundamento en los derechos de petición presentados al Presidente de la República y denuncias presentadas en la Fiscalía General de la Nación.

La información no contempla datos sobre los agresores, pero declaraciones de prensa posteriores a la masacre de febrero de 2005 daban cuenta de que sesenta (60), casi todas contra el derecho a la vida, eran atribuibles a la guerrilla, las demás a los paramilitares y los militares.

Es, a todas luces, un costo muy alto para una comunidad compuesta por unos pocos centenares de miembros, durante apenas nueve años.

Las reacciones producidas por la masacre pueden ser agrupadas de acuerdo con quienes las expresaron, así: 1) del Ejército, 2) del Gobierno Nacional, 3) de los aliados y defensores de la Comunidad de Paz, 4) de sectores pertenecientes a la opinión pública independiente, y 5) de los propios agraviados.

El general Reynaldo Castellanos, comandante del ejército, ofreció la versión de las Fuerzas Militares. Según ellos la masacre había sido cometida por las FARC, debido a que tanto Luís Eduardo Guerra como otro de los miembros de la Comunidad asesinados estaban realizando gestiones “para acogerse a programas de reinserción” y Alfonso Tuberquia había sido acusado por la guerrilla de brindar información al ejército para dar con el paradero del miliciano que fue dado de baja en la víspera de la masacre, según lo que había dicho un insurgente recientemente reinsertado (*El Tiempo*, 3 de marzo de 2005, 1-8). Aseguró además que, según el reporte de sus unidades de campo, ningún miembro del ejército se encontraba a menos de dos días de camino del lugar de la masacre. Posteriormente, cuando el miércoles 2 de marzo una comisión de fiscales que indagaba los hechos, acompañada por delegados de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, fue atacada con armas de fuego, las Fuerzas Militares dijeron que había sido nuevamente la guerrilla y sugirieron que una de las religiosas que acompaña la Comunidad de Paz podría ser cómplice de estas.

El Gobierno Nacional no puso en duda la versión de las Fuerzas Militares y más bien reclamó “prudencia a quienes se han apresurado a señalar responsabilidad de las Fuerzas del Estado”, a través del Vicepresidente Francisco Santos (*El Tiempo*, 5 de marzo de 2005, 1-4). Días después, al final de un Consejo de Seguridad realizado en la sede de la Brigada XVII del

Ejército, el 20 de marzo, el presidente Alvaro Uribe ordenó a la Policía Nacional que estableciera un puesto en San José de Apartadó y leyó una declaración en la cual expresaba:

En esta Comunidad hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores, están seriamente señalados por personas que han residido allí de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la Comunidad para proteger a esta organización terrorista [...] Las Comunidades de Paz tienen derecho a instalarse en Colombia gracias a nuestro régimen de libertades. Pero no pueden, como lo practica la de San José de Apartadó, obstruir la justicia, rechazar la fuerza pública, prohibir el comercio de artículos lícitos ni coartar la libertad de los ciudadanos que allí residen (El Tiempo, 21 de marzo de 2005,1-4)

La exalcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, así como el Padre Javier Giraldo, acompañante del proceso, señalaron desde el primer momento la responsabilidad del Ejército, con base en los testimonios que les dieron los propios campesinos de la zona. Organismos defensores de derechos humanos, 32 congresistas norteamericanos, 60 eurodiputados, varias ONG's y algunas personalidades amigas de la Comunidad de Paz, pusieron en duda la versión del Ejército, exigieron que las autoridades competentes esclarecieran los hechos y solicitaron al Gobierno Nacional que evitara asociar la Comunidad con la guerrilla (*El Tiempo*, 21 de marzo de 2005,1-4). Algunas ONG's justificaron la negativa de los miembros de la Comunidad de Paz a colaborar con las autoridades colombianas, debido a la completa impunidad en que siempre habían quedado los 152 asesinatos cometidos contra ellos anteriormente (*El Tiempo*, 12 de marzo de 2005,1-6).

En los medios de comunicación se expresaron diversas opiniones: algunas, como la del exministro Fernando Londoño Hoyos repitieron la versión de las Fuerzas Militares (*El Tiempo*, 14 de marzo de 2005, 1-17); otras, como la del expresidente Alfonso López asumieron una posición formalmente neutral frente a la autoría de la masacre y pidieron que se investigaran los hechos para poder tener claridad sobre ellos, al mismo tiempo que se mostraban completamente escépticos con la actitud de los miembros de la Comunidad de Paz (*El Tiempo*, 20 de marzo de 2005,1-19); mientras otras más, como la de María Teresa Bernal, coordinadora de Redepaz (*El Tiempo*, 22 de marzo de 2005, 1-11), los propios editoriales de *El Tiempo* (3 y 9 de marzo de 2005), o la Unidad de Paz de *El Espectador* (27 de marzo de 2005, 8A), trataban de hacer ver la coherencia que existía entre los principios que guiaban la Comunidad de Paz y su experiencia práctica, incluida su negativa a colaborar con las autoridades colombianas encargadas de esclarecer los hechos, la imperiosa necesidad de aclarar la autoría de la masacre, la responsabilidad que le cabía al Gobierno Nacional por no haber sido capaz de dar protección a personas para las cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos la había solicitado de forma especial y el peso que podrían estar teniendo en la actitud del Gobierno Nacional viejas rencillas entre el exgobernador Uribe Vélez y sus contrincantes en Antioquia.

Los propios agraviados guardaron silencio mientras se mantuvo la presencia de las tropas en sus territorios, pero luego dieron sus versiones a periodistas (*El Tiempo*, 27 de marzo de 2005,1-7) y conocidos, expresando dolor por las pérdidas sufridas y decisión de seguir adelante con el proceso. Viajaron a distintos sitios para denunciar los hechos y tomaron nuevas medidas de protección en sus territorios: delimitaron siete “zonas humanitarias” en diferentes veredas para ser utilizadas como refugio de civiles en caso de futuros ataques, una manera de evitar por anticipado el desplazamiento forzado. Para explicar lo ocurrido uno de ellos dijo:

No es que maten aquí la gente por haberse declarado Comunidad de Paz. Es porque nadie cree que los civiles puedan estar al margen de esta guerra. Los matan porque sí o porque no (El País, 9 de marzo de 2005, A-4).

Palabras que expresan la desazón que produce en estos practicantes de la no violencia la incredulidad y el escepticismo con que su acción es percibida por otros. Cuando, atendiendo la orden presidencial, llegó la policía a establecer un puesto permanente en predios de la Comunidad de Paz, sus miembros se trasladaron a otro predio –privado–, que habían dispuesto para esa eventualidad, San Josecito de Apartadó, con el fin de continuar siendo fieles al principio de no colaboración con sus contrincantes. Allí están.

La toma guerrillera de Toribío en abril de 2005

A las 5:30 a.m. del jueves 14 de abril unos 150 guerrilleros de las FARC entraron al casco urbano de Toribío advirtiéndoles a sus habitantes que debían retirarse e iniciaron un ataque contra el puesto de policía y sus alrededores, que duró diez horas continuas, coparon una escuela y usaron como parapeto instalaciones civiles, utilizaron armas no convencionales que causaron enormes destrozos: 22 casas de civiles fueron alcanzadas por los proyectiles, minaron puentes y vías de acceso, cortaron las comunicaciones telefónicas, dieron muerte a dos policías y un niño de 10 años, dejaron heridos cinco policías y once civiles. Al mismo tiempo realizaron hostigamientos contra Jambaló, población situada a 43 Km. Los 2.500 habitantes buscaron protección, la mayoría de ellos actuó como estaba previsto en el Plan de Emergencia y Resistencia que la comunidad había diseñado previamente para saber qué hacer en esos casos: se dirigieron a alguno de los cinco “Sitios de Asamblea Permanente” situados en las afueras del casco urbano. No pocos se resistieron a salir de sus casas por temor a saqueos. En los días siguientes, después de la reacción de las tropas oficiales, los guerrilleros se retiraron del casco urbano pero mantuvieron una especie de cerco mediante hostigamientos en el área rural, pequeños combates sobre la vía que conecta el Municipio con la zona plana del valle geográfico del río Cauca y la acción de francotiradores en el área urbana. Los civiles reunidos en los albergues fueron permanentemente hostigados por la guerrilla durante esos días, acusados de connivencia con la policía por no exigir el retiro del puesto que esa institución había vuelto a establecer en la localidad, razón por la cual se dieron amagos de desplazamiento masivo, aunque al final la mayor parte de los civiles terminó concentrada en el principal Sitio de Asamblea Permanente, el más protegido y mejor comunicado con el casco urbano.

Esta fue la toma guerrillera número once en la accidentada historia de Toribío, localidad situada en una región con presencia recurrente de grupos alzados en armas desde los años sesenta del siglo veinte. Una historia de la cual, sin embargo, también hacen parte el surgimiento de los primeros núcleos de organización indígena que a comienzos de los años setenta darían origen al CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca; la gestación del Proyecto Nasa, un plan de vida comunitario que hoy cuenta con amplio reconocimiento nacional e internacional; el experimento de gobierno local en manos de alcaldes indígenas con más continuidad que existe en Colombia y, más recientemente, después de culminado el ciclo insurgente del Movimiento Armado Quintín Lame, desarrollado entre 1985 y 1991, la emergencia de uno de las más significativas experiencias de acción colectiva no violenta contra la guerra y quienes la protagonizan (Hernández, 2002, 2003 y 2004).

Esta, la práctica de la no violencia, se basa en el caso de las comunidades indígenas del Cauca en decisiones tomadas inmediatamente después de la desmovilización de varios grupos armados y la promulgación de una nueva Constitución Política en 1991, cuando iniciaron un nuevo ciclo de movilización en procura de afianzar su autonomía y modificaron el marco normativo de su acción, estableciendo nuevas prioridades e involucrando más decididamente principios pacifistas. Una de las declaraciones más orgánicas respecto de cómo garantizar su autonomía y en relación con quienes, es la “Declaración de Jambaló” emitida en marzo de 1999, en la cual manifiestan que defenderán esa autonomía frente a guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, movimientos religiosos, partidos tradicionales y gobierno nacional. Con respecto a los grupos armados hacen saber que han decidido:

*No permitir que los jóvenes indígenas ingresen a los grupos armados, so pena de perder sus derechos como indígenas
Exigir respeto hacia nuestros caciques y mártires indígenas y reclamar que ningún grupo armado use sus nombres
Ejercer el control territorial a través de nuestras autoridades indígenas, de acuerdo con las leyes de la naturaleza y las normas constitucionales y de la comunidad
Ningún grupo armado podrá solucionar problemas dentro de la comunidad indígena, cuando se sepa que un comunero solicita intervención de estos grupos, será juzgado e invalidado cualquier tipo de acuerdo o arreglo que se hiciera*

Para afianzar su autonomía estas comunidades han diseñado planes de vida alternativos y han creado o reactivado instituciones propias, entre las cuales se encuentran la guardia indígena y la justicia comunitaria; pero, además, han desarrollado estrategias de supervivencia en medio del conflicto, para evitar el desplazamiento y defender lo que poseen.

Han pagado costos: once tomas guerrilleras y las respectivas reacciones militares dejaron varias veces destrozado el pueblo, se presentan constantemente asesinatos selectivos de líderes y comuneros igual que desapariciones, se producen también efectos colaterales derivados de la presencia guerrillera o militar en zonas aledañas y, por oleadas, hay detenciones arbitrarias. No se conoce un inventario detallado de los ataques sufridos, pero está documentado que son continuos desde hace muchos años y que los principales victimarios son las guerrillas y los militares, pues la presencia paramilitar ha sido esporádica.

En este caso, las reacciones producidas por la toma pueden ser agrupadas de acuerdo con quienes las expresaron, así: 1) de la guerrilla, 2) del Gobierno Nacional, 3) de los aliados y defensores de las comunidades indígenas, 4) de sectores pertenecientes a la opinión pública independiente, y 5) de los propios agraviados.

La guerrilla dio a entender que realizaba la toma para poner en evidencia el fracaso del Plan Patriota que las Fuerzas Armadas adelantaban contra su retaguardia en el sur del país, la política global de seguridad del Gobierno Nacional y la reinstalación de un cuartel de policía en el casco urbano del municipio, su vocero Raúl Reyes dijo que era “una bofetada a la política de seguridad democrática”. Habían protagonizado la anterior toma en julio de 2002, poco antes de iniciarse el gobierno de Álvaro Uribe, destruyendo entonces el puesto de policía, pero este había sido nuevamente habilitado en desarrollo de una estrategia del nuevo gobierno, la de lograr el retorno de la Policía Nacional a todos los sitios de los cuales la guerrilla la había obligado a retirarse. Durante los días siguientes, retados por el propio Presidente, intentaron hacer una nueva incursión, establecieron una especie de sitio en torno a Toribío, hostigaron poblaciones vecinas y albergues, activaron comandos de francotiradores.

El presidente Uribe se hizo presente en la plaza central de la población al día siguiente de la toma, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, y retó a los guerrilleros, diciéndoles que eran unos cobardes, guapos solo en ausencia de la fuerza pública. Días después adoptó como propia la versión que dieron algunos mandos militares, según la cual la toma había contado con la complicidad de indígenas residentes en la localidad. El sábado 30 presidió un consejo comunitario en Santander de Quilichao, en el cual quedaron en evidencia sus desacuerdos con las autoridades indígenas, pues estas solicitaban una “desmilitarización integral” garantizada por la guardia indígena, mientras el Presidente insistía en que no retiraría la Fuerza Pública porque esta no podía tener restricciones para el ingreso a ninguna parte del territorio nacional. En ese mismo consejo comunitario dio la orden de reforzar la presencia policial y militar en la zona e iniciar programación radial en lenguas nasa y guambiana para atraer miembros de esas etnias a la red de cooperantes del Ejército y el programa de informantes del Gobierno Nacional.

El gobierno departamental del Cauca hizo eco de la versión militar sobre complicidad de indígenas en la toma y respaldó operativos de la dirección regional del DAS para realizar allanamientos y detenciones masivas en los días siguientes: 21 indígenas fueron detenidos en Jambaló, seis allanamientos se hicieron en Caldono, 200 nombres aparecieron en una lista de indígenas con ordenes de captura dictadas en los dos últimos años, entre ellos se encontraban algunos de los principales líderes de la resistencia indígena contra la guerra y todos los grupos armados en el Norte del Cauca.

Una delegación de las Naciones Unidas se hizo presente en la localidad tres días después de la toma para poner de presente las violaciones al Derecho Internacional Humanitario que se había producido con el ataque. Después el Comisionado de Derechos Humanos cuestionaría también el emplazamiento de puestos de combate y trincheras de los militares junto a las viviendas de la población civil. El viernes 22 varias ONG's realizaron un foro en Santander de Quilichao para exigir que las comunidades indígenas fueran excluidas de la guerra y se atendiera a quienes estaban atrapados en medio de dos fuegos. El martes 6 de junio se lanzó en Toribío la nueva convocatoria para otorgar el Premio Nacional de Paz y se dio a conocer una declaración firmada por personalidades internacionales partidarias de crear una misión diplomática para ayudar a establecer un diálogo entre las comunidades indígenas, los actores armados y el gobierno. El sacerdote Antonio Bonanomi lanzó una convocatoria para lo que denominó un “Alzamiento por la paz, sin odios, para reclamar un país más justo”, a realizarse en octubre de ese año.

En los medios de comunicación se expresaron diferentes puntos de vista sobre el significado de la acción guerrillera y se generó una polémica acerca de si esto significaba el fin del repliegue estratégico que las FARC habían observado desde el comienzo del Gobierno Uribe (*El Tiempo*, 20 de abril de 2005,1-6). Muchos condenaron la toma, caracterizándola como un crimen de guerra (*El Tiempo*, 19 de abril de 2005,1-16) y no pocos comentaron negativamente la forma en que reaccionaron las Fuerzas Armadas, especialmente el señalamiento generalizado que hicieron sobre la complicidad que algunos indígenas habrían tenido con la guerrilla y las detenciones masivas que siguieron a ese señalamiento (*El Tiempo*, 21 de mayo de 2005,1-14).

Los propios agraviados se expresaron reafirmando su autonomía. El alcalde indígena, Arquímedes Vitonás, el mismo que había sido secuestrado por las FARC y rescatado por la

guardia indígena meses antes, condenó la toma y la calificó como una acción de guerra contra la población civil. Por su parte, el coordinador de la guardia indígena manifestó que:

Ha fracasado la estrategia revolucionaria de las Farc y la política de seguridad democrática del presidente Uribe, pero no la resistencia indígena [...] Deberían buscar un desierto y darse todo el plomo que quieran, y que después se den cuenta que todos perdieron (El Tiempo, 27 de abril de 2005,1-4).

El Gobernador del resguardo de Jambaló, por su parte, valoró el Plan de Emergencia y Resistencia por haber permitido a todos actuar coordinadamente, evitando más víctimas y mayores pérdidas. Advirtió que en los dieciséis resguardos de los siete municipios del Norte del Cauca hay sesenta centros de asamblea permanente, señalados por banderas blancas, para albergar la población civil en caso de situaciones como la que se presentó. Son zonas de refugio para evitar la huida desordenada y el desplazamiento masivo, porque los indígenas no están dispuestos a abandonar sus territorios. Allá están.

Contrastes entre una Comunidad de Paz y un municipio indígena

Tanto los campesinos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó como los indígenas de Toribío siguen en sus territorios y continúan resistiendo los embates de la guerra mediante la práctica de la no violencia en distintas modalidades, pero han debido pagar costos diferentes: mayores en el caso de San José de Apartadó, tanto en términos relativos como absolutos.

Los contrincantes principales que han tenido son diferentes. Los paramilitares que atacaron San José de Apartadó eran en ese momento un ejército victorioso en medio de un proceso parcial de desmovilización, con la aspiración de convertirse en protagonista de la vida política regional y nacional, actuando en un territorio ya conquistado, en el cual no estaban dispuestos a tolerar simpatizantes de la guerrilla y mucho menos la presencia camuflada de guerrilleros. A sus ojos, acostumbrados a encasillar las personas en la dicotomía amigo-enemigo, los miembros de la Comunidad de Paz, con sus pretensiones de autonomía y sus reticencias respecto a las instituciones estatales, solo encajaban en el polo enemigo. A eso hay que agregar que los paramilitares son por definición un contrincante inescrupuloso, pues surgieron para realizar las tareas más sucias de la guerra contrainsurgente, tareas que un ejército regular necesitado de legitimidad no puede hacer en nombre propio. La guerrilla por su parte era, en el momento de su ataque a Toribío, un ejército replegado buscando demostrar que mantenía intacta su capacidad de seguir en la guerra, actuando en un territorio que no era propio y pendiente de no echarse en contra la población, ya que no puede tenerla de su lado. Guiada por ciertos escrúpulos pero atrapada en su propia lógica guerrera: conminó a la población a través de megáfonos para que abandonara el casco urbano al comenzar el ataque, aunque luego la hostigó en los albergues; concentró el fuego sobre el puesto de policía, aunque usó armas no convencionales y averió al menos 22 instalaciones civiles; no trató a la población indígena como enemiga, pero la acusó de pasiva frente a la presencia de la policía y la ve como un estorbo, por su pretensión de autonomía y su apego a la no violencia.

Los guerreros atizaron la polarización en ambos casos, con resultados desiguales: el Gobierno Nacional, apoyado en los militares y otros factores de poder regional trató a parte de la población víctima como sospechosa de alianzas con la guerrilla, más en el caso de San José de Apartadó que en el de Toribío, pero en ambos casos. Y conminó e indujo de diversas maneras al resto de esa población a alinearse con la política gubernamental, es decir a

abandonar la autonomía que han ganado y la práctica de la no violencia que las caracteriza. Los paramilitares y las guerrillas, cada cual por su lado, también presionaron a las comunidades para que abandonaran la que ellos consideran falsa neutralidad o vana ilusión de autonomía.

Los aliados nacionales e internacionales de los dos procesos y buena parte de la opinión pública independiente contrarrestó los efectos de la polarización inducida por los guerreros, puso de presente la normatividad que protege a los civiles en medio de los conflictos armados, la necesidad de que el Estado responda por la integridad de comunidades vulnerables como las dos atacadas y subrayó la naturaleza pacifista de las dos poblaciones.

No obstante, importantes círculos de la opinión pública demostraron su profundo escepticismo y, a veces, su incompreensión de los experimentos de acción no violenta que llevan a cabo estas comunidades. Como en ambos casos se trata de poblaciones asentadas en territorios que estuvieron en el pasado dominados por la presencia guerrillera, hasta cuando surgieron casi simultáneamente los paramilitares y los proyectos inspirados en la no violencia, sin que la insurgencia haya dejado de merodear en los alrededores, pero además se trata de proyectos alternativos a los que han agenciado los últimos Gobiernos Nacionales, es fácil ceder a la tentación de pensar que no son lo que dicen ser, sino otra cosa, camuflada.

Los propios voceros de las comunidades tienen limitaciones para explicar lo que hacen más allá del círculo de sus amigos y aliados, por escasez de recursos para divulgar sus mejores logros y contrarrestar las versiones que divulgan sus contrincantes, por falta de experiencia en el manejo de los códigos de la comunicación contemporánea, más urbana y cosmopolita que local y campesina, por falta de claridad acerca de los fundamentos de su práctica de la no violencia y, a veces, por la radicalidad de sus decisiones, pero también por la escasez de lo que algunos analistas llaman los “poderes del movimiento” (Tarrow, 1994), es decir la variedad de sus repertorios de acción, la flexibilidad de sus marcos normativos y la fortaleza de sus tramas organizativas.

Con respecto a los repertorios de acción es notable la diferencia que existe entre el amplio abanico de modalidades que ha experimentado la población indígena de Toribío, algunas de ellas verdaderas innovaciones a partir de tradiciones propias como la minga, y la más estrecha gama de opciones que ha ensayado la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Los primeros utilizan modalidades de las tres clases que señala G. Sharp y son de los pocos que han puesto en práctica, con relativo éxito, formas de intervención directa no violenta tan radicales y arriesgadas como la de ir tras los secuestradores para rescatar líderes propios cuando han sido retenidos a la fuerza. No obstante, nunca han practicado de manera rígida modalidades del segundo tipo mencionado en la clasificación de Sharp: las de no colaboración con los contrincantes, aunque en efecto ponen en práctica dicho principio de forma selectiva. Los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en cambio, parecen haber puesto los énfasis en las prácticas de este segundo tipo, mucho más exigentes que las del tercer tipo en las condiciones colombianas creadas a partir de 2002, especialmente cuando se incluye entre los contrincantes a las instituciones estatales.

A propósito del marco normativo que guía la acción, es evidente que en ninguno de los dos casos la perspectiva de la no violencia inspira conscientemente a quienes orientan los procesos, mucho menos a otras capas de participantes o adherentes. La información disponible permite asegurar que en ambos casos se consolidaron a mediados de los años noventa del siglo anterior, ciclos de acción no violenta que habían comenzado a gestarse poco

antes, inspirados principalmente en las posibilidades abiertas por los nuevos preceptos constitucionales, en el caso de Toribío, y la mayor vigencia del Derecho Internacional Humanitario, en el caso de San José de Apartadó. Por otra parte, aunque en ambos casos se diseñaron proyectos de vida alternativos con respecto a los que predominan en la sociedad mayor y esto puede interpretarse como un esfuerzo por transformar la realidad para reconstruirla sobre nuevas bases, no hay suficiente evidencia acerca de que el uso de la violencia esté proscrito para siempre y en toda circunstancia, por considerarse inmoral e incompatible con dichos proyectos, aún en situaciones de legítima defensa.

En cuanto a la trama organizativa hay también apreciables diferencias entre los dos casos. Tienen rasgos en común: el papel preponderante de las redes familiares y vecinales en la organización interna, de una parte, y la existencia de aliados influyentes, de otra parte, sobre todo en el ámbito internacional. Pero tienen diferencias organizativas determinantes: la pertenencia a una sólida red de comunidades pares, la mayor experiencia de acción colectiva y el arraigo de los procedimientos necesarios para procesar la toma de decisiones, con que cuentan los indígenas de Toribío, contrastan con el relativo aislamiento, la escasa experiencia de acción colectiva y la dificultad de encontrar procedimientos adecuados para el manejo interno de la comunidad, que se observan en San José de Apartadó.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó es pequeña, tiene menos de 2.000 habitantes, no está ensamblada en una red organizativa tan densa como lo está el Proyecto Nasa de Toribío –un municipio también pequeño, de unos 2.500 habitantes en su casco urbano–, ni tiene la sombrilla protectora de un movimiento social como el indígena, ni cuenta con alcalde propio en la localidad a la cual pertenece, difícilmente puede apelar a formas de intervención no violenta de los tipos segundo y tercero en la clasificación de Sharp y, sin embargo, es mucho más radical en su fidelidad al principio de no colaboración con los contrincantes, entre los cuales incluye a las autoridades estatales. Con estas cosas tiene que ver el mayor costo que han pagado los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó por su práctica de la no violencia.

En rigor, ambos son casos de no-violencia, pues en ninguno de ellos hay una condena explícita al uso de violencia física en el futuro y en toda circunstancia, ni intención declarada de evitar el sufrimiento de los demás, aunque ciertamente consideran ineficaz el uso de la violencia en las circunstancias actuales de la sociedad colombiana y son consecuentes con ese postulado, pagando grandes costos por mantenerse fieles a él. Ambos ejemplos demuestran que la acción no violenta tiene en Colombia pocas condiciones de posibilidad, debido a la existencia de un conflicto polarizado y alimentado permanentemente por poderosos intereses.

Si los costos son tan altos, cabe preguntarse ¿cuáles son los beneficios que obtienen estas comunidades con su actitud?, aunque el análisis de costo-beneficio no puede llevarse muy lejos, no al menos con base en el supuesto de que todo agente es racional con arreglo a fines y egoísta, porque en el comportamiento de estos indígenas y campesinos hay altas dosis de racionalidad no utilitaria, altruismo, desinterés y ética de la convicción, ya que orientan su acción principalmente con arreglo a valores. De tal manera que una de las compensaciones que reciben por mantener su actitud es la de experimentar cierta coherencia entre lo que piensan y lo que hacen, sentirse portadores de proyectos alternativos de sociedad y partidarios consecuentes de la paz en medio de un país en guerra. Pero hay más: sobrevivir como comunidades, mantener sus territorios y obtener reconocimiento, sobre todo internacional, son también compensaciones obtenidas en los dos casos.

Hay que tener en cuenta que se trata de indígenas y campesinos para comprender la importancia que tienen el comunitarismo y el territorio en sus vidas. Se trata en ambos casos de grupos humanos compuestos por familias que han vivido cerca unas de otras durante mucho tiempo, se conocen, han compartido experiencias y creado estilos de vida en los cuales la solidaridad basada en lazos de parentesco y vecindad es fuerte. Además, viven de lo que da la tierra y han establecido con ella una relación que implica asumirla más bien como territorio, es decir como su lugar en el mundo, tal vez más entre indígenas que entre campesinos. Así que haber logrado sobrevivir como comunidades en sus propios territorios, evitando el desplazamiento forzoso y la disolución de los lazos que los unen, en medio de una situación en la cual esto ha sido tan común, es sin duda un resultado exitoso.

A lo anterior se suma el reconocimiento nacional e internacional, sobre todo este último, obtenido por comunidades que saben cuales son sus dimensiones materiales: pequeñas y locales. Los premios, especialmente los premios de paz, que han recibido tanto el Proyecto Nasa de Toribío como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, son un buen indicador de ese reconocimiento. El más reciente lo recibió esta última el 1° de septiembre de 2007, “día contra la guerra”, fue el premio Aquisgrán de Paz, otorgado por una plataforma de partidos, sindicatos y movimientos civiles de la localidad alemana que lleva el mismo nombre del premio, para exaltar experiencias de paz en el mundo. Estos reconocimientos contrastan con la descalificación que reciben las dos experiencias examinadas aquí, de parte de algunos sectores de la sociedad colombiana (Vargas, 2006).

Bibliografía

- CINEP (2005). *San Josesito de Apartadó: la otra versión*. Bogotá, CINEP - Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política (Serie: Noche y Niebla, casos tipo, 6)
- GARCIA DURAN, Mauricio:
2005 “Repertorio de acciones colectivas en la movilización por la paz en Colombia (1978-2003)”, en *Controversia* 184. Bogotá, junio, CINEP, pp. 149-173.
2006 *Movimiento por la paz en Colombia, 1978-2003*, Bogotá, CINEP, 2006.
- HERNANDEZ LARA, Jorge:
2002 “La resistencia civil en caliente: una contribución a la pacificación del conflicto en Colombia”, en *Sociedad y Economía* 2. Cali, Universidad del Valle, abril, pp. 25-46
2003 “Formas de acción colectiva contra la guerra en el movimiento indígena del suroccidente colombiano”, en *Sociedad y Economía* 5. Cali, Universidad del Valle, octubre, pp. 109-124 [publicado luego en: F. Cante y L. Ortiz (comps). *Acción política no-violenta, una opción para Colombia*. Bogotá, Universidad del Rosario, 2005, pp. 391-410]
2004 “Repertorios, marcos y entramados de resistencia civil en Colombia: los premios nacionales de paz, 1999-2002”, en Luís Carlos Castillo (ed). *Colombia a comienzos del nuevo milenio*. Cali, Universidad del Valle, pp. 209-229.
- LOPEZ, Mario:
2004 “Métodos de acción noviolenta” y “Noviolencia”, en *Enciclopedia de paz y conflictos*. Granada, Instituto de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada, pp. 685-697 y 783-795.
2006 *Política sin violencia: la noviolencia como humanización de la política*. Bogotá, Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2006.
- SHARP, Gene (2003). “Desarrollo de una alternativa realista contra la guerra y otras expresiones de violencia”, en F. Cante y L. Ortiz (comp). *Acción política no-*

La práctica de la no violencia y su costo en dos episodios: una masacre paramilitar en san José de Apartado y una toma guerrillera en Toribio

violenta, una opción para Colombia. Bogotá, Universidad del Rosario, 2005, pp. 183-210.

TARROW, Sydney (1994). *El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid, Editorial Alianza, 1997.

URIBE, María Teresa (2004). "Emancipación social en un contexto de guerra prolongada: el caso de la comunidad de paz de San José de Apartadó", en Boaventura de Sousa y Mauricio García (editores). *Emancipación social y violencia en Colombia*. Bogotá, Editorial Norma, pp. 75-117

VARGAS, Fernando (2006). *Comunidades de paz: estrategia de guerra*. Bogotá, Ed. Litotécnica, 2006.

Publicaciones periódicas:

El Tiempo, Bogotá, 1 de enero a 30 de junio de 2005

El Espectador, Bogotá, 1 de enero a 30 de junio de 2005

El País, Cali, 1 de enero a 30 de junio de 2005

EL RECONOCIMIENTO DE SÍ MISMO EN LOS MILITANTES DEL M-19*

Mario Luna Benítez**

Resumen

El presente artículo ofrece una serie de reflexiones sobre el tipo de reconocimiento que de sí mismos tienen ex militantes del antiguo movimiento guerrillero M-19 y muestra que no existe entre ellos una imagen homogénea y estable derivada de su participación en la acción armada y política del grupo.

Abstract

This article undertakes a reflection on the "self understanding" that ex M-19 guerrilla members have of themselves. It argues that there is not an homogeneous and stable self image that may be deduced from their armed and political participation and experience.

Palabras clave: Acción Colectiva, Actor Político Armado, Frente Nacional, Identidades Sociales, Proceso de Subjetivación, Discurso.

Key Words: Collective Action, Armed Political Actors, National Front, Social Identities, Discourse.

* El presente texto forma parte de un conjunto de investigaciones del autor sobre el grupo guerrillero M-19, adelantadas en el marco del Grupo de Investigación *Acción Colectiva y Cambio Social* del Centro de Investigaciones -CIDSE- de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle.

Artículo recibido el 17 de septiembre de 2007

Aprobado el 13 de noviembre de 2007

** Sociólogo. Profesor del Departamento de Ciencias Sociales, Universidad del Valle.

Introducción

La investigación del problema del reconocimiento subjetivo de sí mismos en los militantes del M-19, parte del examen del tipo de relaciones que mantienen los individuos que participan de una acción colectiva política con el “marco normativo” que la orienta y traza directrices para la militancia (Cf. Snow, 1986). Sabemos que este marco normativo concreta una serie de regulaciones internas (creencias y valores como principios, y normas que definen reglas de juego para los partícipes) producto de “un cuadro de interpretación” más general sobre distintos aspectos concernientes a la acción colectiva que las organizaciones políticas tratan de realizar.

El mencionado cuadro de interpretación contiene una serie de representaciones e ideas sobre la sociedad, el Estado y el régimen político como contextos más generales de la acción política, pero también sobre el sentido y los fines que la organización persigue, las relaciones con los campos más inmediatos donde la acción se lleva a cabo y los medios a utilizar, lo que quiere decir que traza las posibilidades y límites de la acción. El marco normativo cumple una función de integración de esos aspectos implicados en la acción y en las orientaciones que siguen lo adoptan. De otra parte, las formas organizativas y el liderazgo son un intento por hacer aceptable, predecible, continuo y permanente dicho “cuadro de interpretación” (Cf. Melucci, 1987)¹, cuadro que se encuentra sometido a múltiples tensiones, incluyendo las derivadas de las ideas informales de quines a él se acogen. En el caso del m-19 si bien hubo un liderazgo fuerte, sus formas organizativas fueron fluidas, aspecto que examinaremos, aunque solo en sus efectos.

Los analistas normalmente fijan su atención en el aspecto colectivo y suponen en otro nivel el análisis de los individuos. En pocas oportunidades es tratado el tema del impacto producido en el sentido colectivo de la acción, más allá del tema del carisma de los líderes. Lo normal es preguntarse por sus formas de ingreso a la acción, a pesar de que la relación no se agota en ese punto, pues gira además sobre la forma subjetiva en que los individuos se integran a ella. Esa forma subjetiva es el centro de la presente reflexión.

La solución a ese problema de integración que mencionamos supone que la acción colectiva crea esquemas de identificación, con pretensiones normativas, en función de los intercambios políticos. Este perfil puede subordinar otras aristas de identificación sociocultural presentes en la biografía de esos partícipes. En el caso del M-19, el asunto es específico: el grupo no impulsó la creación de un tipo de militante orgánico, homogeneizado por una ideología y una política. En las condiciones históricas particulares de Colombia, como indicaremos, fue abierto y flexible, hecho que va a suponer relaciones diversas entre sus militantes y la acción colectiva buscada.

El lector encontrará en los renglones siguientes algunas formas iniciales de respuesta a preguntas como por qué el M-19 es un actor político y por qué sus militantes se tratan como partícipes de una acción colectiva política. Este punto abre el camino para considerar vínculos profundos de sus miembros con su sociedad de origen, pasando a indicar luego de qué

¹ El cuadro de interpretación y el marco normativo se elaboran en medio de interacciones, de negociaciones y de la resolución de oposiciones entre orientaciones diversas (Melucci, 1987, pp. 34-35). Además, en el mismo proceso toma forma un discurso simbólico selectivo que apoya a los consensos en torno a la acción colectiva política y por consiguiente sirve de modo de integración en ella (Tarrow, 1997, pp. 207-233).

manera la emergencia del M-19 está inscrita en la propia crisis del Frente Nacional y en la crisis de las fuerzas de izquierda que lo combatieron, para finalmente avanzar en un intento “tipológico”, en la presentación de algunos casos singulares y en la formulación de una hipótesis acerca de cómo en esos militantes puede reconocerse a la sociedad nacional de la época.

Bases para considerar al M-19 como un actor político

El campo de la acción colectiva política considera a los partidos políticos civiles actuando en competencia normal en un régimen democrático o, en su defecto, en oposición a regímenes fuertes para restaurar la democracia. El M-19 es un actor político por su pretensión de generar una acción colectiva de oposición orientada a ampliar la participación en el régimen democrático colombiano. El argumento básico considera su deseo de articular la acción armada con la escena democrática, asociada a intercambios con actores institucionales y sociales. La tipología de Eduardo Pizarro, discutida en otro lugar (Luna, 2006b), daría para excluir de esta definición a las guerrillas que según él tienen un perfil militar. Ciertos enfoques que ponen el énfasis en la limitada capacidad de representación democrática de las guerrillas ofrecen un grado de dificultad para una definición como la nuestra (Palacios, 1999, pp. 64-67); Bejarano, tiende a adoptar argumentos variables sobre las estructuras y ámbitos de acción de las guerrillas y da otro lugar al tema de la representación (Bejarano, 1995), abriendo la posibilidad para darles un tratamiento político negociado.

Para algunos autores el uso de la violencia en ciertas acciones sociales no impide analizarlas bajo parámetros de la teoría de la acción colectiva (Tilly, 1978, pp. 174-188). Por su parte, della Porta (1987, 1990, 1995) discute la asignación de terrorismo que descalifica a las guerrillas italianas como actores políticos, al considerar su orientación para producir consensos colectivos y propiciar cambios políticos, e incluir el contexto de conflictos sociales en los que hacían uso de la coerción física. El problema es tratado por Wieviorka (1998), incluyendo el examen de la deriva hacia el terror. Así los guerrilleros son incluidos en las mismas categorías de pertenencia e identificación con las que se evalúan a los miembros de los partidos civiles. Della Porta critica las hipótesis que los definen como individuos en condiciones de anormalidad social. En el mismo sentido apunta Catanzaro (1995, pp. 7-16), al descubrir en los guerrilleros fundamentos políticos similares a los de las corrientes políticas italianas, con ideologías compartidas, con simbologías, pertenencias y subjetividades socioculturales semejantes y, aún más, al descubrir su asociación con subculturas políticas de la resistencia y la lucha partisana de la segunda guerra mundial, que también están en la base de la formación de los partidos políticos civiles.

Un enfoque similar hemos tenido sobre el M-19 (Luna, 2005), que nos permite avanzar a un segundo aspecto: el M-19 en su búsqueda de esa acción de oposición no brindó a sus militantes un perfil político normativo, homogéneo y general, que los integrara y creara un reconocimiento de sí mismos en su presentación pública y en sus intercambios políticos. El M-19 no elaboró un discurso, con sus principios, para seleccionar a sus miembros y guiar sus acciones políticas. No se propuso producir un militante que tuviera el perfil de una manera de ser social, en la definición de Jacques Ion (2006), un “militant affilié”², a pesar de promover

² El modelo es altamente masculino de izquierda, “suponía un compromiso a largo plazo, una inscripción en una organización jerarquizada, una separación radical de lo privado y lo público, un sacrificio de la persona individual y una politización de la causa para extenderla a un número de personas que la sostuvieran (la lucha de masas) y traducirla sobre la escena política” (T. del A.) (Ion, 2006, pp. 277-278).

la idea de “un hombre M-19”, una idea definida en el plano práctico operativo y en el orden de la resistencia a la represión, que llamaba a no doblegarse en el combate. En ésta no integraba “en un sistema de valores nuevos”, ni adscribía a un mundo social en el sentido de Bertaux (1997, pp. 13-14) y estaba abierta a la interpretación de los militantes. Por el contrario, el M-19 promovió la imagen del hombre corriente colombiano como partícipe directo del cambio, sin proponerle “revoluciones culturales”, apenas si la reforzaba con la promoción del “hombre nuevo” del Ché³, cuyas cualidades al fin y al cabo idealizaban al varón latinoamericano con sus patrones morales.

El M-19 abrió sus puertas a la concurrencia de los pequeños discursos portados por los militantes en su diversidad social y cultural, los mismos que agenciaban en sus intercambios sociales, incluyendo desde los de alto status social hasta los que provenían de sectores populares. En lo colectivo se entronizó en ese proceso una flexibilidad ética, influida por lenguajes socioculturales diversos e inscrita en distintos niveles de las transacciones políticas del grupo, individuales y colectivas. De otra parte, si bien existieron militantes con “intensidad del compromiso político” (Schmitt, 1992, p. 218), con su alto sentido de pertenencia colectiva, que coincidían con las altas jerarquías de los fundadores y de los mandos intermedios, hubo además un tipo de militante más flexible y libre, cercano a una especie de “militant affranchi”⁴. Sin embargo, en este extremo no se llegó a una militancia libre generalizada, esto es, sin relaciones con procesos jerárquicos de autoridad, aunque si hubo casos de una militancia que privilegiaba la fluidez de las relaciones horizontales en redes sociales o en contactos individuales.

Esta apertura del M-19 precisa un enfoque diferente pues sus asuntos colectivos sufren el impacto de las lógicas individuales y socio-culturales de sus militantes. En nuestro ejercicio, el hecho refuerza el papel metodológico de sus testimonios para descifrar *los reconocimientos de sí mismos*. Además, lleva a una búsqueda centrada en el cruce entre el ciclo vivido por el m-19 y el punto alcanzado por el individuo en sus trayectorias sociales, en el sentido de Bertaux (1997, pp. 15-16), donde resaltan en algunos las encrucijadas socioculturales de su vida.

El contexto histórico del M-19 y el enfoque sociológico de sus militantes

En el M-19 los principios ideológicos débiles, la concurrencia de múltiples lenguajes socioculturales en lo colectivo, su inestabilidad y sus contradicciones, su inasible diversidad empujando su deseo de una democratización general – nombrada por metáforas de lenguaje prepolítico como la del “sancocho nacional” – y su pugnacidad frente a la llamada oligarquía y a su estrecha relación con los militares – una especie de clamor por la independencia del Estado – tiene simetría y está asociada con la crisis de la política institucionalizada, desde la terminación formal del Frente Nacional.

³ Para una idea de éste patrón de “hombre” el relato vivaz de “Benigno” (Ramírez, 1997)

⁴ “Se puede ser militante sin estar comprometido en la duración y sin adherirse a un grupo; también se lo es haciendo publicidad de la vivencia personal, de modo que el testimonio se eleva al rango de recurso de la acción; se puede ser militante privilegiando los lazos horizontales entre individuos antes que a los verticales jerarquizados en el grupo; se puede estar involucrado en una causa y cuidarse de comprometer lo personal; se puede ser militante y hablar a *motu proprio*, y sin hacer de esta expresión un pasaje a la popularización de la causa” (T. del A.) (Ion, 2006, pp. 278)

El Frente Nacional (FN)⁵, lo recordamos aquí, fue un régimen político de coalición acordado por los dirigentes de los partidos conservador y liberal – un “pacto *ad-hoc*” lo llama Daniel Pécaut (1987) – con el consentimiento activo de las élites civiles y la jerarquía católica, para estabilizar la escena política electoral y la participación en la burocracia del Estado, fuentes ambas de los enfrentamientos partidistas, uno de los rasgos sobresalientes de *la violencia*. Este régimen político, acordado para 1958-1974, selló la alternación en el poder del Estado de los dirigentes de los dos partidos y un reparto burocrático paritario de las funciones gubernamentales y de los empleos en todas las instituciones públicas de nivel nacional, regional y local.

En 1974, cuando emerge el M-19, está al orden del día la crisis de ese FN, que incluye las de los partidos tradicionales, de la representación democrática y de la autonomía del Estado. Las transacciones gremiales y los arreglos de clientela dominan la escena, y entra en crisis el hacer la política basada en principios sociales, económicos, culturales e ideológicos que diferenciaban los programas de partido sobre muchos temas. Esos principios, golpeados por su inserción en la violencia, dejan de orientar las diferencias de los ciudadanos en los aspectos socioculturales, una crisis de las subculturas políticas (Pécaut, 1987), del talante político (una forma de presentación pública) que les definía una manera de ser cultural y socialmente conservador o liberal y comunista en el extremo. Además, con el dominio de esos arreglos, la representación democrática nacional se vuelve un imposible y, en general, se reproduce una separación de lo político con lo social, como un todo, en los intercambios políticos. Esta separación es un rasgo principal de la crisis de lo político en Colombia.

Por su parte, la izquierda vive con retraso un periplo parecido. Para los años 70, ésta se había diversificado en corrientes de oposición civil con aspiración a instituirse como partidos políticos ya fuesen democráticos, comunistas o socialistas, o simplemente marxistas de varios tipos. El partido comunista dominaba la escena con su historia tradicional de lucha por las reformas, cercana a la del propio liberalismo; el socialismo, en su versión distanciada del comunismo, al sustentar aspiraciones nacionales más que adhesiones internacionales⁶, había fructificado como corriente organizada inestable, con principios políticos flexibles, y se había diluido con el correr de los años 60; las nuevas corrientes del marxismo, ligadas al leninismo y en disidencia con el comunismo, disputaban fuertemente el campo de la oposición, con principios ideológicos fuertes e inserciones prácticas en el mundo sindical y popular; y las nuevas corrientes socialistas, de un marxismo intelectual renovado con la recepción y la apropiación de las nuevas ciencias sociales, fluctuaron entre constituirse en corrientes de pensamiento alternativo o en llegar a una práctica de partido que implicaba la adopción de principios ideológicos separadores entre sus grupos pero integradores de la militancia a otros niveles.

Los debates en medio de esa diversificación de la izquierda giraron en torno al análisis del Frente Nacional⁷ y de los rasgos del desarrollo capitalista en la sociedad colombiana, junto con debates sobre el lugar social ocupado por el agro y la necesidad de la reforma agraria democrática. Las diversas líneas de pensamiento, dieron lugar a esquemas de interpretación

⁵ Una descripción detallada del Frente Nacional, de sus rasgos y de sus acciones, y de su sentido político en Palacios, Marco (1995: 239-291).

⁶ Cf. Entrevista del autor y de María Elena González C. a Raúl Alameda y a Luis Emiro Valencia, mayo de 2005 y julio 12 de 2005 respectivamente.

⁷ Era un análisis sobre su carácter antidemocrático y su condición de generador de violencia. Esta imagen negativa, en la que la oposición política ponía el énfasis, sería el fundamento para justificar una reacción de violencia política.

de las realidades nacionales⁸, que a su vez sustentaron “marcos normativos” orientados en la dualidad de perspectiva entre la reforma y la revolución. Esta dualidad era el eje de las separaciones entre las corrientes marxistas y servía de base de apoyo a la definición de los principios de pertenencia y de las militancias.

Pero, además, en medio de esos debates, ocuparon un lugar destacado las discusiones sobre los aspectos de procedimiento, sintetizadas en la alternativa entre los usos de los medios legales o de los medios ilegales, o bien, entre la participación electoral, que se suponía acompañaba a la reforma, y la lucha radical armada, acompañante a su vez de la idea de revolución. Estas dualidades que sintetizaban la discusión sobre las estrategias fueron adoptadas como otros principios normativos que separaban a los grupos políticos y a las militancias.

Este último no fue un debate en el aire, tuvo su contexto de definición práctica. El desarrollo de la oposición civil, de viejo o nuevo cuño, fue acompañado de la emergencia de las guerrillas, en los años 60, que disputaron fuertemente el campo social y político de la oposición revolucionaria. Sobre su variedad y su análisis no nos detenemos aquí, remitimos a los estudios anteriores (Cf. Pizarro, 1996, Luna, 2006b), solo señalamos que para 1974 los grupos principales, por diversos factores, estaban en crisis, a excepción de las FARC, adormecidas en el letargo de sus “zonas refugio” de colonización. Las guerrillas tenían sus principios normativos de definición, que las separaban dogmáticamente unas de otras y eran motor de la disputa en el campo de las militancias radicales de izquierda.

Visto así el panorama de la izquierda, en los años 70, podemos establecer cómo poco a poco predominaron en ella las luchas trazadas por las ideologías y de una posible relación intelectual creativa frente a las realidades sociales sus divisiones pasaron a la disputa dogmática (un último coletazo de los motivos primarios de la violencia de los años 50). Esta disputa instauraba también para la izquierda un paulatino separarse lo social (entendido como las luchas sociales y además como la orientación por la demanda de la política social y los derechos sociales) de la misma política, para definirse ésta en el campo de las abstracciones ideológicas y de la misma lógica de las clientelas. Ese alejamiento de lo social, a imagen y semejanza de la propia dificultad del Frente Nacional para resolverlo, pauta la crisis de la izquierda.

La emergencia del M-19 coincide con esta crisis y a ella quiso responder con deseos de unidad de acción política (la experiencia de Firmes) tanto como deseó dar respuesta a la crisis de las guerrillas con propuestas similares (la coordinadora guerrillera). Para tomar distancia de ese presente problemático de la izquierda, el M-19 decretó, con sus propias limitaciones, la suficiencia y saturación de las interpretaciones sobre el país, y determinó el olvido de las ideologías. Sin embargo, con su filiación en este contexto de la izquierda nunca pudo resolver lo principal, esa separación de lo social y de lo político incrustado en el corazón de sus definiciones. De esa forma, detrás de un matizado vanguardismo, lo social en su caso llegó a ser finalmente la variedad sociocultural de sus militantes, una asimilación y reducción que tuvo una auto legitimación política en la idea de que el M-19 era “el pueblo o la democracia en armas”, una idea que en los años 80 llegó a ser el eje de su orientación política de

⁸ Esos esquemas respondían a adopciones más o menos libres del ejercicio del marxismo portador de sentidos creativos y abiertos de la interpretación de la realidad nacional, o bien, a adopciones cerradas y religiosas, en ese mismo ejercicio, basadas en creencias ideológicas derivadas del “quehacer teórico”. Estas adopciones creaban una base existencial para las divisiones de las militancias.

oposición, en la que desde su emergencia habían concurrido otras ideas de la izquierda tradicional.

Si el M-19 no se orientó por imponer un “marco normativo” fuerte quedó a merced de los efectos de otros cambios institucionales sobre sus militantes. La crisis del Frente Nacional es también la crisis de un tipo de sociedad nacional integrada en distintos órdenes y orientada hacia el logro de ciertos niveles de bienestar, en la que los miembros de los grupos y las clases sociales tuvieron la oportunidad de desempeñar roles sociales y económicos que permitían cierto equilibrio en el tiempo entre sus trayectorias biográficas (familiares, educativas, laborales, sociales y políticas), así fuera en forma limitada. Este logro social, que tenía sus restricciones, entrará en crisis, cambiando los parámetros prácticos que eran el soporte de una identidad social. Este quiebre puede ser reconocido en el estudio de las trayectorias biográficas de la militancia del M-19.

Estos antecedentes históricos nos llevan a un ajuste del enfoque sociológico, validado por el tipo de datos empíricos obtenidos: Una fracción de miembros del M-19, formados en los parámetros de la sociedad del Frente Nacional, pueden examinarse en los términos clásicos de la acción social, concebida como la interiorización de unos valores y unas normas, expresados en roles sociales, acorde con una idea de sociedad en la que las conductas, los roles sociales y las creencias estaban estrechamente relacionados (Dubet et. al., 1995, pp. 104-107). Otra fracción de militantes concuerda más con la desintegración de esa sociedad del Frente Nacional, o provenían de sectores sociales donde los beneficios de ella habían sido precarios y se imponía la hegemonía de otros actores de violencia. En estos miembros el enfoque sociológico está más del lado del campo del análisis de la individuación y de la subjetivación (Touraine, 1997, pp. 27-97), asociado a las realidades sociales nacidas de una crisis de las sociedades nacionales, de los Estado-nación y de la quiebra del horizonte de desarrollo de una sociedad industrial, donde el eje de las acciones colectivas estaba dominado por un conflicto central (capital y trabajo) (Dubet, 1994, pp. 52-69).

En la primera orientación el actor individual resulta ser un *sujeto moral*, un maestro de sí mismo mediando el proceso de una socialización que lo inscribía en la dimensión de lo social y le daba sentido ético a sus proyectos, a sus relaciones con otros, y que atemperaba sus pasiones y sus intereses egoístas. El individuo reproducía los parámetros de la acción colectiva en la que se inscribía. La forma de acción colectiva de oposición proyectada por el EPL, inscrita en el P.C.m.l., le es afín. En éste, la política era concebida como la exposición pública de creencias y de principios ideológicos – oficiando como normas y regulaciones – y el sujeto histórico esperado resultaría de su realización práctica.

La segunda orientación concibe que el actor social (o una parte de él) puede constituirse en un sujeto no reducible a lo social y a sus determinismos (Dubet et. al., 1995, 104), o bien, reivindica una relación entre historia social y biografía individual cuyos criterios de la puesta en acto de esa relación no son los de una articulación directa e inmediata entre las llamadas “estructuras sociales” y unos individuos caracterizados como sus agentes, sin que esto signifique dejar de lado la operación sociológica del problema (Martucelli et. al., 2004, pp. 295-296). Sirve para estudiar actores no definidos por su inserción en estrategias de integración (rol social, pertenencias e identidades primarias) y/o estrategias de concurrencia (participación en un juego de intereses dentro de un “mercado”, definido no como exclusivamente económico), esto es, actores cuya acción no es una expresión de un rol social o de sus intereses (Cf. Dubet, 1994). Sirve para estudiar *los actores sociales* que no corresponden a la propuesta de Mead (1963) de creación en negativo del sujeto, o identidad negativa.

Tendríamos dos situaciones de los militantes del M-19: En un primer polo, los individuos que asocian sus diversas lógicas de acción y cuyo reconocimiento de sí como sujetos sociales no significa un gran esfuerzo, profundizan una identidad primaria integradora o toman distancia en un sentido de historicidad (Touraine, 1987). En un segundo polo, los individuos que con dificultad correlacionan sus estrategias de acción y las experimentan disociadas, su auto reconocimiento se expone como *una experiencia vivida* en sus diversas trayectorias.

En los movimientos sociales clásicos la distancia crítica permite el reconocimiento de sí mismo en una relación negativa con el sistema que los integra. Mientras en los actores cuyas acciones colectivas no tienen ese status, tal el caso del M-19, dada la disociación entre sus estrategias, el sujeto individual no expone un principio central integrador que le brinde coherencia a su actividad y a su experiencia como actor, y por el contrario, expresa disociaciones y tensiones profundas y realiza *puntuaciones de lenguaje que pueden definirlo como un no sujeto*. En este caso no tiene realidad *una identidad social*, ni positiva ni negativa, y es marcada una distancia entre la acción social realizada y la experiencia social reconstruida. En ellos la búsqueda a ultranza en sus relatos de una identidad social es un camino difuso encubierto apenas por los esfuerzos del investigador para asignarla en una operación más política que de desciframiento sociológico. Los actores resultan ser un compuesto caleidoscópico de fraseos nuevos con fragmentos recuperados de discursos sociales. En este compuesto más que dominados por *una identidad* que los integre, los actores están definidos por *variadas alteridades* (se es más *el otro*) que son resultado de su participación en distintos intercambios sociales.

Aspectos del tratamiento metodológico a los relatos

El reconocimiento de un sí mismo es captable en los relatos en una lectura longitudinal, de la que reconstruimos un discurso como más abajo lo definimos. Pero advertimos que no en todos los casos es un indicador de una identidad social personal presente en la acción colectiva. La identidad es una categoría experimentada en la esfera de la circulación en público y de los intercambios sociales, por fuera de esta esfera el auto reconocimiento es una abstracción (Adorno y Horkheimer, 1969, p.54). Hay individuos que apenas dentro del artificio de la situación de investigación se acercan a trazar de sí mismos una imagen, pero es difícil denotarla automáticamente como su identidad social. Para efectos de nuestro ejercicio la *constitución en sujeto* que parte del auto reconocimiento es examinada en el hablar en primera persona (el *je* en francés) más que en *el moi* reflejo interactivo experimentado en las diversas lógicas de acción⁹. Este sujeto o primera persona sería el *resultado de un trabajo* del actor en la situación de investigación y en la que reconstruye la experiencia social apropiándose la como suya. Esa situación le permite ganar capacidad de crítica y conocimiento de sí mismo y por lo tanto le posibilita adoptar un principio de autonomía mediada que no es un dato de su experiencia social.

Ahora bien, desde el punto de vista operativo, el primer paso es el considerar los datos de las entrevistas con los militantes del m-19 en *su condición de discurso* (Bertaux, 1997). Dentro de este término, elaborado con flexibilidad, introducimos reflexiones abiertas sobre sí mismos (percepciones e imágenes captadas en situaciones interactivas y en fases de su curso de vida), su dimensión subjetiva (recuerdos familiares, escolares, laborales, políticos, económicos), pequeños fraseos distribuidos a lo largo de las entrevistas con los que se quiere por momentos

⁹ Esta idea es sugerida por la lectura de Paul Ricoeur (1990).

dar cuenta de sí mismos (de sus aprendizajes, de sus valores, de sus sentimientos, de sus creencias y sus normas, de sus prácticas). También incluimos los elementos con los que se quiere dar coherencia al relato o, en el caso contrario, la presencia de formas de puntuarlo que manifiestan la presencia del azar, de la circunstancia, del juego y del dominio del contexto social más que de decisiones o determinaciones de ellos mismos. Esta operación de método no implica que concibamos el texto de las entrevistas como meras formas discursivas que niegan objetividad a los “hechos” narrados¹⁰.

El segundo paso es destacar que los *cuadros* de trayectorias biográficas están basados en relatos orales y documentales mediados por la situación interactiva dialógica. En general, son producto de un diálogo con el investigador y dentro de una diversidad de relaciones establecidas. Por su imagen de académico varios militantes sintieron la exigencia de una presentación de sí coherente, hilvanada en sus detalles, aunque fueran diálogos guiados por la asociación libre buscando ciertos objetivos. Los de base documental son entrevistas de periodistas en las que aparece el artificio de buscar “desde afuera” una coherencia para articular el curso de vida de los guerrilleros. Ahora bien, en los casos de notable “disociación social” (impactos de la violencia, pérdida de estudios o de tiempo laboral y de inserción social o institucional) dominó más el peso de los hechos que los esfuerzos narrativos de coherencia¹¹ y, en algunos casos, el entrevistado no buscó la coherencia que diera la impresión de tener o haber tenido un proyecto de vida integrado, en un hecho más cercano a su situación social y a su experiencia subjetiva en la época de su militancia.

En algunos militantes, la narración de la disociación social de sus trayectorias se vuelve objeto de definición política, esto es, de explicación causal y funcional (p. e. de la vivencia de la violencia de los años 50 o de la represión) que legitima motivos para la rebelión. Esta estrategia narrativa es un juego para hacer de la disociación un recurso, una forma de gestionar una “identidad política” legítima que aparece más en los reportajes periodísticos realizados a los líderes del M-19 (Cf. Lara, 1982).

Reunimos entonces los discursos en un *rango*, entre los que indican niveles de integración social y de reconocimiento de sí mismos como “pertenecientes” a una sociedad colombiana unificada, así sea en su imaginario, y los que indican las diversas fragmentaciones que vive la sociedad colombiana. Los *primeros* son tipificados por el militante que expresa una integración negativa con el sistema y que llamaríamos *convencional* a la manera de la definición de Mead ya citada; su auto reconocimiento gira en torno a un elemento cultural que para él es central en su proyecto de vida, que puede ser del orden de la propia sociedad colombiana y que se vuelca de forma crítica sobre ella con una imagen (p. e. cierta noción de la justicia, de la democracia, etc.). De los *segundos*, es ejemplo el militante que no tiene principio cultural integrador, ni crítico ni convencional, y que articula el reconocimiento de sí mismo en elementos inciertos de su propia vivencia, brindando una imagen del juego del azar que moldea sus trayectorias de vida separándolas. Su discurso indica una experiencia sin proyecto de vida.

¹⁰ Tomamos la alerta de Daniel Bertaux sobre este error: “Entre las experiencias vividas por un sujeto y su elaboración como relato se interponen mediaciones. Concentrar la atención en éstas (percepción, memoria, reflexividad del sujeto, capacidad narrativa, los parámetros de la situación de entrevista, etc.) puede conducir – es la posición textualista – a la conclusión de que todo discurso autobiográfico, y por extensión todo relato de vida, no son otra cosa que una reconstrucción subjetiva que en esencia no tiene ninguna relación con la historia realmente vivida” (Bertaux, 1997, p. 36), (T. del A.).

¹¹ Relacionada con lo que Bertaux (1997, p. 34) ha llamado la “ideología biográfica”.

Ahora bien, el trabajo de reconstrucción de experiencia, de los miembros del M-19, es mediado por tres dimensiones colectivas: *El plano generacional* que comprende la edad y la educación, la región de proveniencia del militante (que puede involucrar distancia crítica para asumirse como sujetos, una diferencia marcada entre los indígenas y los de colonización antioqueña), los años de activismo de izquierda, en la oposición civil, en la guerrilla y en el M-19, y el lugar ocupado en el esquema de jerarquía-base del M-19. Una segunda, *las fases del M-19* en las que se militó. Una tercera, *la época del país*, cuyas variables serían: grado de integración, grado de estabilidad, nivel de descomposición o disociación entre sus sistemas, variables gruesas que en un futuro permitirían afinar su correlación con los discursos sociales presentes en los militantes. Inter generacionalmente el período abarca desde 1920 hasta 1982. De la conjugación de dimensiones resulta una variedad de experiencias vividas en el conjunto.

Una posible tipología de militantes

La tipología de los militantes del M-19 es un resultado de un proceso de investigación realizado en dos niveles que se complementan, en un ir y venir del uno al otro: por un lado, de una lectura de múltiples relatos de miembros del M-19, consignados en las entrevistas, y, por otro, de un acercamiento analítico a esos relatos, alimentado por búsquedas teóricas, que nos permitiera hallar el sentido de sus discursos y las formas de sus trayectorias de vida¹². En un sentido inverso al de la propia investigación aquí exponemos primero su resultado, la tipología construida, y luego los relatos, éstos ya atravesados por los hallazgos. No sobra advertir, en primer lugar, que por razones de espacio no nos detenemos en el significado de dicha construcción de tipología para la acción colectiva política. Aunque merece una reflexión mayor, nos limitamos a presentar una conclusión; en segundo lugar, los relatos de cada miembro son complejos y se simplifican por la brevedad; en los tipos destacamos el perfil que creemos domina y singulariza a cada militante, pudiendo el lector, relevar otros como los importantes. Nuestro ejercicio es exploratorio y aproximativo.

Para establecer las dimensiones de la tipología, además haremos uso analítico del tipo de *trayectoria de vida* de los militantes. Esta puede abarcar un trecho de la vida narrada del exguerrillero hasta su ingreso al M-19 o hasta el momento de la entrevista. Los casos basados en fuentes secundarias tienen limitaciones para ser elaborados. Reducimos las variables para construirla: edad, educación, región, inserción en el trabajo, fase y actividad del M-19 al ingreso, que implica la necesidad de un tipo de militante. Serían así apenas indicadas rupturas de trayectorias potenciales y tipos de disociaciones que pueden corresponderse con las presentes en contextos sociales, en particular, contextos de violencia. Ahora bien, contamos con que el ejercicio de las armas en todos los entrevistados lleva a rupturas en sus trayectorias, implicando disociaciones entre diversas lógicas de su experiencia. Los niveles indicados según el *tipo de trayectoria de vida* experimentada son:

1. Con *integración o asociación mayor* de las trayectorias biográficas y de las lógicas de acción hasta desempeñar un rol social profesional (luego de estudios técnicos o universitarios). Caso de **Jacob**, similar al caso de **Navarro Wolf**.

¹² Elaboramos esta noción en otro lugar (Luna, 2006a) basados en Della Porta (1987), Bertaux (1997) y De Coninck y Godard (1998). La fuente de la idea de trayectorias biográficas están en el método de las “genealogías sociales e historias de familias” de Bertaux (1992, p.44-46).

2. Aunque es difícil proponer gradaciones, definimos un nivel intermedio de varias opciones cualitativas. Con *cierta integración pero incluyendo rupturas* en el curso de su vida y de una formación institucional que sobrepasa la adolescencia (secundaria, estudios técnicos o universitarios con los que rompe). **Pizarro, Fayad, Bateman, Sharión y Ernesto**. En el campo, donde son más evidentes las *rupturas previas* escolares o laborales, tenemos a **Ezequiel**.

3. Con *ruptura mayor* de una integración, o *disociada*, hay variaciones cualitativas: con ruptura temprana de trayectorias institucionales que tendían a la búsqueda de un rol en el campo o la ciudad, p. e. de la relación familiar y de la primaria sin que mediara el contexto de la vieja violencia, en el caso de **Santos**, o mediando ese contexto como en **Iván Marino Ospina**, o bien, *por disociación presente en nuevos contextos sociales*, ligados a actores de violencia o actividades ilícitas, sean guerrilleros o no, caso de **Lorenzito**, similar al de **Rigo**.

En cuanto al discurso vemos que entre más convencional sea contendrá mayor búsqueda de coherencia y de integración de la experiencia que trata de narrarse, entre menos convencional sean sus elementos menos importa la búsqueda de coherencia e integración. Los indicadores del *tipo de discurso* son:

1. *Convencional*, con variantes cualitativas. Por ejemplo, el discurso referido a un rol social (de categoría social, élite, campesino u otro), o a una institución social, política, militar o religiosa, etc. En general, hay inserción de fragmentos de ese discurso social en el de la guerrilla y, por ende, pudo sufrir cambios sucesivos hasta ser absorbido para lograr una plena identificación con la condición de guerrillero, según su imagen clásica o la creada por el m-19. Casos de **Jacob, Ernesto y Ezequiel, Bateman, Pizarro**. Incluye también el discurso *convencional de antiguos contextos de violencia*. Está centrado en recuperar la imagen de una vivencia como recurso para construir una memoria histórica en función de reinventar la violencia (en algunos casos se participa en su producción, en otros se recoge o transmite). Casos de **Iván Marino Ospina** o bien el de **Sharión**.

2. *No convencional* y es establecido en *la noción de experiencia* (Dubet, 1994, p. 91-112), esto es, tratando de articular o no en el discurso trayectorias incongruentes o lógicas de vida disociadas. Es el caso de **Santos** y de **Rigo**.

3. *No convencional*, correspondiente a *discursos de la nueva violencia*, sea guerrillera o de otro orden. En ellos son reinventadas formas de reconocimiento 'tradicional'. Caso de **Lorenzito**. El de **Fayad** es un discurso que parte de una idea de la violencia años 50 para crear un nuevo sentido e iniciar otra etapa de violencia guerrillera, es un discurso m-19. Puede citarse a **Lukas** y a **Lucía**.

Cuadro de tipologías

| Tipo de Trayectoria → Tipo de discurso | Más Integrada | Integrada con rupturas | Disociada |
|--|---|---|-----------------------------|
| Convencional | Tipo 1: Jacob , Duplat, Navarro, Junior, Sonia Dorita, Gonzalo | Tipo 2: Ernesto, Sharión, Ezequiel, Pizarro, Bateman | Tipo 3: Ospina |
| No convencional Experiencia | Tipo 4: Leyla | Tipo 5: Cecilia, Fernando | Tipo 6: Santos, Rigo |

| | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---|
| De la nueva violencia | Tipo 7: Delio | Tipo 8: Fayad Yolanda | Tipo 7: Lorenzito Lukas, Lucía |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---|

El cuadro presentado resulta del cruce de indicadores. En otra sede elaboramos los relatos de todos los incluidos (Luna, 2006a). Una guía resultado del desarrollo de esta tipología es: en la cúpula del M-19 dominan los *discursos de base convencional*, articulados por un principio social, de cualquier orden que sea, mientras que en sus bases son más recurrentes los de *base no convencional*. Aquí presentaremos cinco casos basados en entrevista que nos permitan avanzar en una hipótesis más general. Aparecen subrayados en el cuadro. En cada caso introducimos primero los rasgos de las trayectorias, incluye el tipo de participación en el M-19, y señalamos aspectos del auto reconocimiento, finalmente pasamos a su ubicación en la tipología.

Caso 1: Jacob

Jacob es hijo de una familia de raigambre del Valle que tuvo intereses terratenientes y reproduce tradiciones sociales y culturales de la región. Tiene 50 años (1996). Inició su acercamiento a la izquierda a finales del bachillerato, a mediados de los años 60. Su militancia con la guerrilla es iniciada a los 20-21 años, siendo un universitario. Su activismo escolar lo enfrentó muy temprano al régimen del Frente Nacional, aunque experimenta las oportunidades sociales creadas con éste, con la gran expansión de la educación, y las del ejercicio de una intelectualidad desde la familia y la universidad (el acceso a los libros y a una cultura europea de la época). Su adhesión a una ideología marxista viene del bachillerato y se consolidó en sus 3 años de universidad en la Nacional. Es un desilusionado de la primera fase del ELN. En Cuba, a donde fue a parar, prosiguió estudios técnicos y estableció un hogar que persistió por varios años hasta que recibe entrenamiento militar y logístico para ingresar al m-19, alrededor del año 82. Regresó como guerrillero rural, a los 36 años, después de adquirida una madurez política e ideológica, que poco tenía que ver con las trayectorias de otros miembros del M-19. Ingresó en la época militar y política más intensa del M-19 y se retira luego del auge y la crisis del grupo en el gobierno de Betancur.

Jacob dice reconocer una tendencia primaria profunda y de formación cultural en su familia (de infancia) que lo acercó a la izquierda y le trazaría un camino: un sentido de la generosidad con los pobres (no identificada con la caridad cristiana) ligada a la lógica de la filantropía de las élites vallunas, que le daba solvencia social a su familia (un reconocimiento para mantener nombre y prestigio), una actividad realizada de manera “natural”, sin arrogancias ni mayores esfuerzos, como una costumbre; también un sentido justiciero familiar, que permitía una percepción de las diferencias sociales y sensibilizaba la observación de los signos de la pobreza, sentido de justicia que no liga a una práctica del cristianismo, sino a una evaluación práctica del derrotero de su familia: esta sufría las penurias de la decadencia, tocada como estaba por los embates agresivos de la modernidad del Valle y por un doble vínculo con la violencia, en el despojo que los hacía víctima de ésta y en su participación como victimarios en algunos ejes de la red familiar.

Generosidad y laboriosidad justiciera eran bases desde donde su padre construía su actividad social y política en su ciudad. Ambos patrones de vida le transmitían a Jacob un derrotero social y político, anudado en la idea *retrospectiva* de haber sentido en su formación la exigencia de cumplir “una *misión*, de que estamos hechos para algo grande... como la *misión*

en la vida [no religiosa]... se hablaba de ciertos principios, ciertas metas de tipo espiritual... eso no estaba elaborado de manera explícita pero uno sabía que no se podía quedar atrás en el campo de su actuación... de su militancia... no hubo motivaciones de adquirir dinero”. Esta idea la reivindica Jacob para diferenciar socialmente su proyecto e integrar su vida, desde sus años juveniles, en metas de justicia y solidaridad social. Eran nociones primarias, dice, que no venían de una reflexión racional sobre la explotación o de compromisos históricos con el cambio, esto vendrá después incorporado al estudio del marxismo y a la práctica política. Según él, son metas prácticas cristalizadas con la experiencia vivida de la represión de las élites en sus fases de estudiante: reelabora un sentimiento de la injusticia social reinante que profundiza su distancia subjetiva con el “sistema social” y la transforma en recurso para su vinculación a las armas. Y cobran peso en la idea de la heroicidad que implica la práctica de esos valores con la idealización de la Revolución Cubana, una fusión que funda su conciencia de ‘un destino revolucionario’.

El discurso de la solidaridad y la justicia filantrópica es soporte del reconocimiento social de las élites en cuanto tales en Colombia y en el Valle. La filantropía opera como sustituto o complemento de las políticas públicas de bienestar. Interesa subrayar el aspecto subjetivo que concierne a los donadores, como prestigio e influencia social, ligado en el caso de Jacob a una conjura del sentimiento de inseguridad social en las clases medias que traía la modernidad. Y la creación de una red de solidaridad social barrial sostenida por ese prestigio, que luego va a ser usada por integrantes del m-19 en sus relaciones con la familia de Jacob. Es un mecanismo subjetivo para distanciarse de una trayectoria institucional y allegar una “toma de conciencia política” sobre proyectos de reforma social.

Jacob es del **tipo 1**, con cierta asociación de sus trayectorias, es un tipo de actor integrado al sistema en sentido negativo, en la medida en que él se piensa como un producto reactivo y, a su vez, como el medio para un perfeccionamiento social que borre las fallas del sistema.

Caso 2: Ernesto

Ernesto nace en Garzón, Huila, en 1964, de padres huilenses. La familia de su padre ha sido de militares. Su infancia y su adolescencia transcurren por diversas regiones del país, viviendo en casas fiscales de los batallones. Inicia su activismo de izquierda en sus primeros años de secundaria en Bogotá y lo perfecciona con una militancia en el MOIR en Montería. Desilusionado de la izquierda electoral ingresa al M-19, en 1981, dejando a un lado sus recién empezados estudios universitarios. Es el inicio de la fase militar más dura del M-19 y también la época en la que Colombia sufre los efectos de contextos de violencia nuevos e intensos. Ingres a la Fuerza militar urbana del M-19 y muy pronto integrará la guerrilla rural, luego d la primera pasada por la cárcel, de una amnistía y un viaje a Cuba. Llega a ocupar posiciones de mando intermedias. Es guerrillero rural destacado y tan afirmado en lo militar que decide buscar sus propios medios de reingreso a la vida civil, después de casi una década de vida guerrillera, pues según él un retiro es preferible a una dejación de las armas.

Ernesto, posee un hablar entrecortado, repite palabras claves, gaguea en fases difíciles del recuerdo, comunica ansiedad y nerviosidad en la entrevista. Sin embargo, sus palabras quieren ser enfáticas y dar seguridad cuando habla de la política pero en especial cuando detalla los aspectos de la milicia. Muestra ironía cuando critica a militantes del M-19 o cuando se refiere a los militares a los que él considera sus enemigos principales. Es el típico guerrillero de fuerte convicción formado cuando el M-19 declaró al Ejército Nacional como su blanco principal. Su reflexión cargada de sentimiento es puntuada por palabras y frases

como ‘prácticamente’ y ‘era una situación muy particular’, que denotan su búsqueda del sentido de lo práctico y de reconocerse en los hechos. Él manifiesta que ese tipo de auto reflexión es un mecanismo aprendido del maoísmo, cuando era exaltada la búsqueda de una ‘revolución personal’ y de ser un hombre integral. Es para él un hecho progresivo del avance de su experiencia, de su compromiso, de su conciencia de juventud y de sus pasos posteriores. Es un hábito que le permite vincular lo personal y los eventos de su entorno político y nacional.

Su discurso da prueba de conocer lo militar y logístico. Dice aprehenderlo en su vida en la caserna. Una *disposición socio-cultural* usada en su trayectoria en la guerrilla para ganarse un lugar como combatiente (para él, fue la clave de su selección para ingresar al M-19 y no su experiencia política con el MOIR). Ernesto reelabora así tradiciones familiares militares. Hila con ellas una forma discursiva donde resalta un relato apasionado de hechos particulares y una agudeza para reconocerse en la experiencia militar *sui generis*. El curso de su experiencia y los hechos que la acompañan se integran a un discurso de lo *militar* con el que se percibe a sí mismo y le da sentido a su vida. Esta imagen de sí mismo como un experto está marcada por el sentimiento de adhesión carismática a los superiores (el respeto hacia su padre y a su realización práctica, y hacia el comandante Boris). Esta imagen se acompaña de dos aspectos. En su percepción de los hechos y en el sentido que les atribuye sobresale una *moralización* y un marcado objetivo de lucha contra la corrupción. Moralización desde un agudo sentido del compromiso, de la honestidad, del cumplimiento y de una actividad incansable, un esquema con el que evalúa a la guerrilla, a lo institucional y a las FF. AA. La lucha contra la corrupción le da la razón de ser a su ‘empresa’ y a la experiencia vivida.

En esos tres aspectos toma posición frente al curso de su vida. El dominio de lo militar, es el eje de la coherencia, mientras los otros dos le crean la relativa distancia frente al ‘sistema social y político’ y la institución militar. Todos legitiman su vida guerrillera y se sintetizan en su obsesión porque de la guerrilla nazca un “ejército verdadero” – leal al Estado y al ciudadano, sustituto del ejército nacional –, objetivo éste que en su discurso traduce esa distancia y le da a su vez una identidad negativa (integradora) con el propio sistema. Su discurso tiene una singularidad dramática, está articulado por la expresión del odio concentrado a la corrupción militar (‘cuando ya eran mis enemigos los conocí mejor’, dice). Este odio lo separaba de sus adversarios y lo unía a ellos. Está impregnado además de un cierto fatalismo y resignación para aceptar los dramas que para él trajo la alternativa militar y la guerra. Esta subjetividad no es una ruptura radical, está trazada como un destino transmitido desde su ‘herencia cultural’ primaria: para legitimarse pesan las palabras de su madre – cuando la despedida en Corinto, en 1984, “mijo no regrese ni como traidor ni como desertor” –, la prueba para Ernesto de su reconocimiento como luchador, de su honestidad, de su compromiso y de su realización militar, rasgos de un miembro de un ‘verdadero ejército’.

Ahora bien, la coherencia subjetiva de su discurso no encubre las dislocaciones en su vida: cambios azarosos en la trayectoria escolar, una trayectoria política ligada al azar de ciertos encuentros, la negación de sus hermanos, la situación actual que le niega la inserción en la vida civil, no reconocido como ciudadano (sin cédula que le de prueba de sus derechos, dice él). Finalmente, dicho discurso ha sido también institucional cuando se exigen cambios en las FF. AA. Igualmente, el modelo de autoridad resaltado en su relato de los cuarteles, aceptado por él como *la disciplina*, y que apoya el relato de una ética aprendida, no es un producto del ejército pues ha sido *un modelo formativo dominante en Colombia*, desde tiempo atrás – la idea de que la “letra con sangre entra” o de “se trata de corregir a los chicos porque lo propio es que posean una naturaleza malvada” –, modelo modificado tardíamente en el país, mucho más allá del fin de las hegemonías conservadoras. Ese modelo de normal aplicación en padres

y abuelos, aceptado por Ernesto, sigue teniendo un viejo reducto en la vida militar (tanto como en la jerarquía eclesiástica, el campesinado y lo popular, y pudiéramos añadir en la guerrilla), es una especie de subcultura del exceso que va a ser criticada por las nuevas generaciones de clase media y de élite como lo “antidemocrático”.

Ernesto es del **tipo 2**, se piensa como sujeto de una reforma institucional a tono con el imaginario del M-19. Es un ‘actor político’ integrado de forma negativa en la idea de encarnar una lucha por perfeccionar el sistema y la institución militar apoyado en un ‘deber ser’ de las FF. AA. Esta identidad negativa-integradora recupera, para construir memoria política y actuar, el recuerdo de los valores ético-militares de su padre. Es un esquema de valoración donde la imagen del guerrillero rural es la máxima realización del hombre combinada con la imagen recuperada de su padre militar. Desde ese esquema trata de reconocerse a sí mismo en medio de las dislocaciones dramáticas en su trayectoria biográfica.

Caso 3: Ezequiel

Ezequiel nació en 1960 en la vereda de Milán, Florencia, Caquetá. Procede de padres campesinos y de colonos de la región, con experiencia urbana en Florencia. Habiendo realizado algunos años de bachillerato, en un colegio de curas, y siendo un jornalero campesino ingresa de 18 años al M-19. No tiene antecedente político a este ingreso. Es un guerrillero que vivió todas las facetas militares rurales, desde las brigadas móviles hasta la desmovilización, pasando por la concentración de fuerzas en el Caquetá en 1981-1982. Once años de milicia lo acreditan como un duro combatiente, que llegó a mandos intermedios – teniente coronel – bajo la jefatura de Boris, en la columna del M-19 militarmente más fuerte. Participa del redescubrimiento de esa región sur para el país, que produce el M-19 con su acción, un reconocimiento de las zonas selváticas de la amazonía a través de la violencia política, mostrando un país fragmentado en el territorio, integrado sólo en su zona andina. En el momento de la entrevista, a los 36 años, tenía un cargo político ganado en las elecciones municipales en el Huila.

Ezequiel habla de una manera fluida y corriente, con un tono firme, seco y parco, sin mucha floritura y yendo al grano, que revela su seguridad centrada en su experiencia guerrillera y en su formación en el M-19. Si no fuera por sus facciones mestizas, aindiadas, nada de su hablado ni de su porte nos diría de su “origen campesino”. Un casi imperceptible comerse las *c* y *p* antes de consonante, revela las dificultades y las entonaciones del hablar popular, sin que Ezequiel muestre el porte humilde y modesto que las acompaña.

El sentido narrado de su experiencia se inscribe en el discurso político de “romper la columna vertebral del régimen, el ejército”, y de “vencer el bipartidismo”, y su relato muestra como poco a poco se funde él, junto con su conocimiento del campo, en el proyecto del M-19. Es un conocedor de la experiencia política y militar del Caquetá, del Cauca y de las columnas más beligerantes del M-19 que se tomaron el Valle. Ezequiel tiene el porte del guerrillero del M-19 y destaca su ascenso en la jerarquía. Este asumirse con seriedad en su experiencia no le impide mencionar la forma casi banal de sus nombramientos en la guerrilla y, para sorpresa de quien lo escucha, muestra gran complacencia por el reconocimiento de méritos que le llegaba con ellos, a veces como una ocurrencia inesperada de sus comandantes; esa banalidad cobra orgullo y trascendencia para él cuando hace énfasis en su percepción de la superioridad social, política y militar de sus jefes. Es una distancia social que en su discurso se transforma en punto de mira para reconocerse a sí mismo. Ella le da legitimidad a su vida guerrillera, enaltece su condición campesina. Además, hay en Ezequiel esa seguridad y esa altivez que da

el haber pertenecido a un proyecto que tuvo realizaciones y que fue construido desde ciertas osadías, que para él sigue vivo por otros medios políticos a pesar de su declive en 1996 momento de la entrevista.

El reconocimiento de su capacidad militar y una cierta visión política (una mirada sobre la pobreza y el sufrimiento campesino, repetida con énfasis, y una idea sobre las injusticias cometidas por el ejército) integran el curso de su vida y le sirven de soporte para un reconocerse a sí mismo. Adjunta además el relato de dos elementos subjetivos convencionales del medio rural: una *religiosidad* y una devoción a la Virgen unidas a un *fatalismo* como forma de interpretar el destino. Dice tener una *religiosidad interna* nacida al separarse políticamente de los curas (por sus prácticas), aunque no dejó de asistir a las misas de los curas presentes en el M-19; un trazo de ella, subrayado por él, fue el buscar siempre en cada combate un lugar donde si lo mataban su cuerpo no fuera a quedar desintegrado y disperso (el temor a la disgregación de los restos mortales en espera a la “resurrección de los muertos” de la cristiandad). El *fatalismo* oficia en la interpretación del sentido y del acontecer en el curso de la vida ‘*que le tocó vivir*’, y en el momento de la muerte o de la ‘mala suerte’: “*de esas cosas de la vida, mis padres vivían en Florencia y compraron una finca en Milán y se fueron a vivir allá*”, o bien, el ‘*se llegó el día y la hora*’ y ‘*ésto era lo que me tocaba*’ con que asumían el castigo, los enjuiciados en la guerrilla, o los efectos de la guerra.

Todos son principios que asocian en Colombia el campo a un destino de violencia política (la facilidad de los ingresos a la guerrilla en la región como ese “*azar que se le atraviesa a uno en el camino y le define el destino como algo previamente escrito*”). Un proceso espontáneo que va más allá pues Ezequiel es el ejemplo de quien, con la actividad guerrillera, se topa con un reconocimiento no buscado de antemano; era alguien que vivía una vida anónima de campesino en una región también ‘anónima, olvidada y perdida’ para el país (no era un campesino cafetero en el ejercicio de los derechos que le dan soporte a su existencia social y lo hacen sentir partícipe con su labor de la construcción de un país). El orgullo de Ezequiel nos hace pensar que en su complacencia se medía la distancia social y política entre los campesinos enrolados en su región y el mundo formalizado de lo urbano, que con los proyectos de guerrilla encuentra por fin una representación problemática de la articulación entre lo local y lo nacional, de la superación de la distancia entre campo y ciudad, al menos en el caso del m-19 que los proyectaba más allá. El talante público mencionado de Ezequiel hace parte de la novedad del talante social emergente con los nuevos contextos de violencia de los años 80 (el Caquetá y el Putumayo no fueron tocados por la violencia de los 50), con sus discursos desintegradores de la sociedad del Frente Nacional.

Ezequiel es del **tipo 2**, siendo *un sujeto convencional al estilo colombiano del campo*, que sufre los impactos propios de una guerra que crea disociaciones fuertes en el curso de vida de sus partícipes – hasta dejar atrás la condición campesina original –, en este caso campesinos fácilmente dispuestos, como en el *juego del azar*, a dicho desgarramiento de violencia. Ezequiel brinda un talante de reconocimiento centrado en su participación en la guerrilla, talante articulado a una imagen de su procedencia campesina, que le reporta una identidad primaria integradora. De ella viene la recurrencia de aspectos tradicionales del campo que integran miradas sobre su lugar en la guerrilla desde la jerarquía social de los comandantes, quienes le asignaron lugares de autoridad militar y política.

Caso 4: Sharión

Sharión nació en 1960 en Toro municipio del norte del Valle del Cauca. Hija de pequeño campesino liberal y de madre desheredada de familia de campesinos ricos conservadores. Era una niña de brazos cuando migró junto con su familia a Cali, por causa de ‘la violencia’. Creció y vivió su adolescencia en esta ciudad. Aunque con contactos personales con redes de izquierda y con militancia estudiantil previa, Sharión pasa directamente a formar parte de la guerrilla sin una previa y definida participación política. Pasa de las ideaciones familiares sobre el país y lo político, y de los contactos afectivos de amistad y fraternidad con la izquierda, a una militancia radical armada. Abandona en sus inicios los estudios técnicos que realizaba una vez terminada su secundaria. Tenía 19 años, vivió la experiencia del entrenamiento en el exterior, participó del desembarco de una columna guerrillera en el sur, fue herida y tomada prisionera. Guerrillera rasa tuvo su “carcelazo” de dos años tan pronto se inició en su participación rural, después de casi 3 años de colaboración urbana. Luego de ser amnistiada, y teniendo presente la imagen de su cuñado (guerrillero urbano del M-19) muerto a manos de agentes del DAS, recién salido de la cárcel, ella toma el camino del exilio. Vivió ella la época del robo de armas del Cantón Norte, la toma de la Embajada dominicana y la amnistía de Belisario Betancur en 1983.

Sharión, tiene 38 años. Su manera de hablar es típica de una mujer crecida en barrio popular de Cali, con gran capacidad de burla sobre sí misma y los pares en la conversación, un tipo de “humor negro”. Como perfil de su personalidad subraya una cierta agresividad que atribuye a un rasgo particular de su formación en un barrio popular y a los conflictos de ese contexto vivido con intensidad en sus años adolescentes. También subraya su rebeldía, heredada de su padre, y, lo principal, reivindica a su vez una reacción contra la violencia política sufrida por éste y su familia en los albores de los años 60. Ella es la hija menor con una acentuada relación filial de “preferida de su padre”. El nombre de *Sharión*, que proviene de su padre y según ella marca su identidad con él, sintetiza la forma como narra su vida política y su compromiso, su manera de pensarse en él y presentarlo en la entrevista, como explicación de su destino.

En el *énfasis puesto en esta percepción de su lugar en la familia* nos topamos con una construcción de “memoria histórica” en medio del lazo familiar que, además de influenciarla, al reproducir cierta imagen de la realidad política y social nacional, le sirve de elemento integrador de su experiencia, que legitima la toma de armas y la oposición política. Es una imagen del conflicto político violento, regional o nacional, que cruza la vida familiar, y que según ella se origina en el recuerdo de infancia del relato paterno de su vivencia de *la violencia* a inicios de los años 60. A esta imagen une las palabras de su padre para que no deseara realizaciones culturales, el ser bailarina clásica, “usted tiene que ser secretaria, lo otro es un deseo realizable sólo en los ricos”, y “nosotros somos pobres debido a la violencia”. A la pobreza une la imagen de una madre desheredada por casarse con liberal. Traza así un horizonte de imaginarios para reinventar una tradición de violencia política que según Sharión explicaba su vínculo con el m-19 y que como discurso le sirve para distanciarse del sistema político. Este eje de la narración, surgido *a posteriori* del ingreso a la guerrilla, integra idealmente su trayectoria personal y la constituye en sujeto confirmándole una distancia con los caminos normales de realización de su vida, los que correspondían a su condición social.

Es una distancia que le permite pensar su adhesión al M-19 y su proyecto de cambio, pero que retrospectivamente enlaza varias etapas de su vida y le sirve para asimilar las múltiples rupturas que implicó el ingreso a la violencia política (la salida de la casa, el ingreso novedoso a la sexualidad, su primer ‘hogar’ cuando su joven militancia y que contraviene normas familiares, hogar desbaratado por la clandestinidad, luego un viaje inesperado al exterior para la preparación a la guerrilla, y así mismo la cárcel ante el desembarco frustrado y el sufrimiento familiar, la huída al exterior, el alejamiento del proyecto político, etc.). Le concede pues un sentido integrador a sus decisiones de juventud y en esa integración oculta una gran distancia con la vivencia real de los quebrantos y las incongruencias sociales nacidas de una trayectoria de vida decidida por ella.

Su construcción de “memoria histórica” es motivada por primera vez en el reencuentro con su padre a la salida de la cárcel. Es reiterada luego como la clave de su vida y de su decisión al momento de la entrevista. Sharión la articula a su reformulación de valores y creencias personales sobre la realidad social y política. No se trata de una redefinición ideológica nacida de su inserción en un movimiento social, a pesar de haber sido activista en el movimiento estudiantil, sino de una representación construida como rasgo de una experiencia familiar. Es reforzada en el M-19 por las experiencias similares explotadas por sus dirigentes como motivos para la acción, especialmente Bateman, en un intento de creación de una memoria colectiva dentro del grupo como soporte de su visión política común, que va cruzando el camino del reconocimiento individual de Sharión. Ella le permite encontrar ante su padre una representación, que compromete el interés familiar, para explicar su compromiso político lejos de una motivación ideológica (tal vez porque se trató de una conversación en la intimidad y no de un discurso en lo público, aunque adquiere este carácter en la entrevista; también es posible que esa atribución tome fuerza porque se trate de un relato femenino).

En síntesis, si bien es esta ‘memoria histórica’ la que marca la distancia con el sistema social y la constituye en sujeto, hay otros ingredientes más en los que se reconoce Sharión. El talante de su militancia narrado con humor, la de ser la consentida de su padre, rebelde y combativa ante la autoridad interna del M-19, con sus jerarquías narradas como relaciones paternas según el caso.

Sharión es del **tipo 2**, tiene unas trayectorias biográficas integradas hasta cuando ingresa al m-19. Ella se reconoce a sí misma a través de percepciones asociadas al contexto de la antigua violencia, que retoma de su familia, junto con imágenes dictadas por su padre sobre los límites impuestos, al curso de su vida, por las condiciones sociales y económicas vividas en lo urbano. Con esta serie de imágenes legitima su militancia con la guerrilla.

Caso 5: Lorenzito

Lorenzito nació en 1975 en un corregimiento de Corinto-Cauca. Hijo de una alianza entre una indígena paez, campesina de Caloto, y un antioqueño hijo de inmigrante paisa. Su padre, siguiendo cierta bonanza familiar, buscó ser pionero en los cultivos ilegales. Lorenzito asegura que tuvo dinero y comodidades, que a sus hermanos y a él no les faltó el sostén económico y los regalos navideños. La región comprende la zona plana de haciendas e ingenios de caña de azúcar y la zona montañosa de economía campesina, minera e indígena, donde se insertan en los años 70 y 80 cultivos ilícitos y actividades asociadas a su auge como el contrabando. Esta composición genera un contexto de fragmentación de las actividades agrícolas campesinas tradicionales, afectando a las familias, y la zona se transforma en reducto de la actividad de diversos grupos ilegales y armados. Lorenzito hacía la primaria

cuando ingresó a los diez años a la guerrilla. Siguió el camino abierto por sus hermanos mayores quienes tomaron esa decisión en la adolescencia. En la guerrilla siempre estuvo al lado de los dirigentes por su edad y las actividades asignadas a los niños (Libardo Parra, Marcos Chalita y Pizarro). Ingresó justo con el declive del M-19, cuando la región sobresalía por ser un territorio dominado por un nuevo contexto de violencia. Sus hermanos mueren después de desmovilizados en distintos negocios ilegales y su hermana muere a manos de las FARC por supuesta traición. Su padre vive la ruina del despilfarro y de sus malos manejos en los negocios.

Desde el primer diálogo, en su forma de hablar, en su lenguaje y su forma de razonar, Lorenzito sorprende por el predominio de un fuerte acento paisa y una lógica antioqueña de ver las cosas y de presentarse a sí mismo. Contrasta con su aspecto físico de indígena – que podría anunciar un hombre retraído y malicioso – una habilidad especulativa para improvisar sin rumbo y con fragmentaciones. Lorenzito se ubica en el centro de una historia, social y política, y define en relación con ella sus recuerdos y a través de ella toma una distancia para pensarse y pensar su vida pasada y presente: “Recordar es tener la facilidad de ser uno... en unos instantes de recuerdos, ser libre. La historia trae consigo muchas cosas, trae satisfacciones, trae desventajas...”, a lo que mezcla ideas políticas sobre el país, la democracia y la necesidad de sostenes familiares.

En esa mezcla se reiteran las puntuaciones de “estilo paisa” como “el superarse”, el “sentirse hombre”, el “tener una familia por quien velar”, el “sacar adelante la vida y la familia”, el definir la guerrilla como una empresa y a sus agentes como gerentes. Por su lenguaje se pensaría que estuvo involucrado en un tipo de actividad legal, coherente, con recursos adquiridos previamente para desempeñarla, sin desgarramientos y que además en su ejercicio se hubiera producido un crecimiento, un aprendizaje y un alcance de objetivos previos (un éxito). Parecería ser el lenguaje de un actor integrado al sistema, una impresión que a lo largo de la entrevista desea producir Lorenzito.

El de Lorenzito es un discurso que quiere unificar el significado de la experiencia vivida. Para ello recurre hábilmente al discurso de uno de los líderes del M-19 para colocar, al inicio de su experiencia, el deseo de realización de un sueño y la vivencia de una locura, retórica del M-19 usada para negar la tradicional causa argumentada del “hambre o pobreza” como motivación a la toma de las armas. Así al narrar su ingreso a la guerrilla sintetiza su experiencia en ella contrastando la vida tradicional del campo con la *dimensión de protagonista de una historia* (lo que la política tradicional no define en sus adherentes o en el ciudadano común) recurriendo a una metáfora mediática que le sirve de síntesis para resaltar una vez más la noción de ser un personaje: “todos los días uno vivía una historia distinta y una película donde uno era el protagonista”.

Es un momento de conciencia en el diálogo de la entrevista en el que se reconoce auto identificándose con la Historia, con una Fuerza que lo trasciende y donde el individuo aparentemente sería lo de menos, pero en el fondo se siente orgulloso y héroe de esa vida, su vida. Este esquema se prolonga hasta la reflexión sobre su situación actual y su familia, situación que conecta de inmediato con una reflexión sobre el fracaso de la política del M-19, caído en un grupo tradicional más, y sobre su destino individual: “yo soy un espectador más de esta política [...] porque tengo frustraciones grandes [...] uno ve, no hay revolución perfecta, que no existe el hombre realmente integral del que se hablaba, de que no hay moral”.

En el hilo narrativo esa subjetividad de “la ideación paisa” (centrada en un yo fuerte) da la imagen de dirigir su vida y dominar el contexto que lo rodea. Ella integra su experiencia y lo defiende, en la mirada retrospectiva, de un mundo en fragmentación, que ha sido su propio contexto de vida, de donde nace la fuerza que impulsó sus decisiones. Cuando en realidad es su vida en sí misma – con el destino que se va forjando y la del destino de su entorno – la que se percibe como sirviendo de expresión a las dislocaciones, dándole sentido a las trayectorias inconclusas, a la mezcla de hechos disímiles del contexto social creado por los actores ilegales, locales, regionales y nacionales.

Esta manera de mezclar distintos elementos nos dice de un recurso típico de la ideación de la cultura paisa, que juega un papel central en la reconstrucción de la experiencia y de la afirmación ideal de una identidad, un recurso para reconocerse. Es un tipo de discurso sobre sí mismo, la familia, el trabajo, las dificultades en el hacer la vida que tiene perfiles reconocidos en Colombia y que encierra valores fuertes y un sentido conservador aunque dinámico en las trayectorias de vida. En el caso de Lorenzito hay una fuerza de esa ideación que propone, después de sucedida la experiencia de rupturas en la guerrilla y otras más (en la reinserción, en el matrimonio, en el destino de los familiares, etc.), un proyecto de vida coherente.

Lorenzito es del **tipo 9**, en su historia se descubre el contexto de las nuevas violencias como *el sujeto principal*, que se esconde bajo el discurso de un supuesto *sujeto fuerte* que desea ser Lorenzito al presentarse como gobernando su vida (él nunca pudo tener seudónimo propio y el diminutivo se lo pusieron por extensión del de Lorenzo, su hermano mayor guerrillero). Frente a tal contexto, los fraseos políticos capturados del M-19 y los sociales recuperados de su historia familiar son los soportes que sirven para tomar distancia de lo vivido y para proponerse a sí mismo como un sujeto autónomo, que reconoce una continuidad e integración en el relato que reconstruye su experiencia.

Conclusión

Los anteriores desarrollos resaltan las dificultades que existen para asignar al M-19 una identidad colectiva e individual homogénea. La diversidad social le dio especificidad política y cultural a esa guerrilla y la estableció como un fenómeno de la transición y la inscribió en los propios parámetros del Frente Nacional, en cuya superación final el propio M-19 se empeñaba. A partir de la tipología esbozada el M-19 aparecerá como un fenómeno de reformulación de tradiciones y de lógicas de acción dominadas por el azar, rasgo de cierta forma de modernidad tardía, que sella el carácter disociado de sus propias estrategias y de sus vínculos sociales y políticos. Si pudiéramos hablar de un hilo narrativo colectivo del discurso diríamos que éste se compone de fragmentos de discursos de la sociedad colombiana.

El análisis propuesto muestra además la diferencia entre el M-19 y otras guerrillas colombianas, y también con el caso italiano en el que la ideología imprimía un sello fuerte a la guerrilla urbana y a sus miembros, operando un distanciamiento del mundo externo social, cultural y político, reforzado por el encierro clandestino (Della Porta, 1995). El M-19, un grupo abierto a muchas redes, en vez de separar, atrae diversos parámetros socioculturales, alimenta prácticas y discursos individuales, interesado como estaba en usar todas las *disposiciones socioculturales* y en hacer un recurso de ese mosaico de “hombres corrientes”, para su acción organizada (Friedberg, 1997).

Un examen más detenido de la tipología presentada, aclararía que esa dimensión colectiva no puede ser tenida como una simple unidad, ni puede ser tomada como “un dato previo” por el investigador, que no pueden darse por descontadas –desde unas supuestas condiciones macro estructurales – las percepciones, las valoraciones y las decisiones que les dieran a unos individuos el sentido “comunitario” de su acción; que es necesario detenerse en el análisis del proceso que les permite definir la situación que los hace susceptibles de actuar en común. Pero, por otro lado, ayudaría a mostrar que las diferentes subjetividades por sí solas no bastan para explicar por qué unos individuos se reconocen y llegan a formar parte de un “nosotros” con cierto grado de integración. Quiere esto decir que la dimensión colectiva tiene que ser reconstruida como el producto de procesos sociales diferenciados, donde compiten una variedad de orientaciones subjetivas de la acción, y respecto de lo que vale la pena preguntarse de qué manera esos elementos variados y hasta disímiles concurren a formar un conjunto y cómo puede desde esa diversidad constituirse y mantenerse un actor “colectivo”.

Bibliografía

- ADORNO, T. y HORKHEIMER, M. (1969). *La sociedad*. Buenos Aires, Proteo.
- BEJARANO, Jesús Antonio (1994). *Una agenda para la paz, aproximaciones desde la teoría de la resolución de conflictos*. Bogotá, TM Editores.
- PALACIOS, Marco (1999). “Agenda para la democracia y negociación con las guerrillas” (pp. 59-107), en LEAL, Francisco (ed). *Los Laberintos de la guerra. Utopías e incertidumbres sobre la paz*. Bogotá, TM Editores, Universidad de los Andes.
- BERTAUX, Daniel :
- 1992 *Les transmissions familiales intergénérationnelles: Esquisse d'une approche comparative*, Communication présentée à la conférence franco-soviétique « Psychanalyse et Sciences Sociales ». Moscou, 30 mars – 5 avril 1992.
- 1997 *Les récits de vie*. Paris, Éditions Nathan Université.
- CATANZARO, R. y MANCONI, L. (a cura di) (1995) *Storie di Lotta Armata*, Bologna, Il Mulino.
- DE CONINCK, F. y GODARD, F. (1998) «El enfoque biográfico a prueba de interpretaciones. Formas temporales de causalidad”, en Lulle, Th, et. al. (Coords.), *Los usos de la historia de vida en las Ciencias Sociales II*. Barcelona, Anthropos, IFEA, CIDS.
- DELLA PORTA, Donatella:
- 1987 “Storie di vita e movimenti collettivi. Una tecnica per lo studio delle motivazioni della militanza politica”, en *Rassegna Italiana di Sociologia* 4, ottobre-dicembre.
- 1990 *Il Terrorismo di Sinistra*. Bologna, Il Mulino.
- 1995 *Social Movements, Political violence, and the State”. A comparative Analysis of Italy and Germany*. Cambridge University Press.
- DUBET, François (1994) : *Sociologie de l'expérience*. Paris, Éditions du Seuil.
- DUBET, F., WIEVIORKA, M. (sous la dir.) (1995). *Penser le sujet, autour d'Alain Touraine*. Colloque de Cerisy. Paris, Fayard.
- FRIEDBERG, Erhard (1997): *Le pouvoir et la règle. Dynamiques de l'action organisée*. Paris, Éditions du Seuil.
- ION, Jacques (2006). « Le nouveau paysage militant. Entretien avec Jacques Ion », en MOLÉNAT, Xavier (Coord.) *L'individu contemporain. Regards sociologiques*. Auxerre, Éditions Sciences Humaines.
- JIMENO, Myriam (2006). *Juan Gregorio Palecho: historia de mi vida*. Bogotá, CRIC, ICANH, Universidad del Cauca, Universidad Nacional de Colombia.

- LARA, P. (1982). *Siembra Vientos y recogerás tempestades*. Bogotá, Editorial Planeta.
- LUNA, Mario:
2005 *El M-19, una interpretación de un actor político armado*. Informe de investigación. Departamento de Ciencias Sociales, Universidad del Valle- CIDSE.
2006 *Resistir es vencer, la hipérbole política y militar del M-19*. Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, (sin publicar).
2006b “Sociología de la guerrilla en Colombia: Guerrillas y M-19”, en *Sociedad y Economía* 10, pp. 157-188.
- MARTUCELLI, D y CARADEC, V. (éds) (2004) *Matériaux pour une sociologie de l'individu*. Presses Universitaires du Septentrion.
- MEAD, G. H. (1963). *L' esprit, le soi et la société* (1934). Paris, PUF.
- MELUCCI, Alberto (1987). « Sul coinvolgimento individuale nell'azione collettiva », en *Rassegna Italiana di Sociologia*. a. XXVIII, 1, pp. 29-53
- PALACIOS, M. (1995). *Entre la legitimidad y la violencia Colombia, 1875-1994*. Bogotá, Norma.
- PÉCAUT, Daniel (1987). *L'ordre et la violence. Évolution socio-politique de la Colombie entre 1930 et 1953*. Paris, Éditions de l'ÉHESS.
- RAMÍREZ, Benigno (1997). *Memorias de un soldado cubano*. Barcelona, Tusquets Editores.
- RICOEUR, Paul (1990). “Individuo e identidad personal”, en Paul Veyne *et. al. Sobre el individuo*. Barcelona, Paidós Studio, pp. 67-90.
- SCHMITT, C. (1992) “Théorie du partisan”, en *La notion de politique. Théorie du Partisan*. Paris, Flammarion.
- SNOW, David (1986). “Frame alignment processes, micro mobilization and movement participation”, en *American Sociological Review* 51. august, pp. 464-481.
- TARROW, Sidney (1997). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid, Alianza Universidad.
- TILLY, Charles, (1978). *From Mobilization to Revolution*. California, Reading, Massachusetts. Addison Wesley.
- TOURAINÉ, Alain:|
1987 *El regreso del actor*. Buenos Aires, Eudeba.
1997 *¿Podremos vivir juntos?* Buenos Aires, FCE.
- WIEVIORKA, Michel (1988). *Sociétés et terrorisme*. Paris, Fayard.
- Entrevistas del autor y de María Elena González C. a: Raúl Alameda y a Luis Emiro Valencia, en Bogotá, mayo de 2005 y julio 12 de 2005 respectivamente.
- Entrevistas del autor a: Jacob (Cali, agosto de 1996), Ernesto (Cali, octubre 7 de 1996), Ezequiel (Bogotá, 21 de septiembre 1996), Sharión (Paris, febrero de 1997), Lorenzito (Cali, septiembre de 1996).

ACCIONES COLECTIVAS DE LAS MUJERES EN CONTRA DE LA GUERRA Y POR LA PAZ EN COLOMBIA*

María Eugenia Ibarra Melo**

Resumen

Este artículo describe y analiza las acciones colectivas de las mujeres en contra de la guerra y por la paz en Colombia. De igual modo, se estudia con las categorías de género y acción colectiva cómo esta participación política apoya otros procesos emancipatorios que implican interacciones estratégicas.

Abstract

This article describes and analyzes the collective actions of the women against the war and by the peace in Colombia. Equally, it studies with the categories of gender and collective action how this political participation supports other emancipatory processes that imply strategic interactions.

Palabras Clave: Mujeres y Acciones Colectivas – Mujeres y Paz – Mujeres y Participación Política

Key Words: Women and Collectives Actions - Women and Peace - Women and Political Participation

* Este artículo es uno de los productos de la tesis doctoral: “Transformaciones identitarias de las mujeres como resultado de su participación política en las guerrillas y en las acciones colectivas por la paz en Colombia”, presentada en la Universidad Complutense de Madrid en el año 2007.
Artículo recibido el 28 de agosto de 2007
Aprobado el 5 de octubre de 2007

** Socióloga. Ph.D.

Género y acción colectiva

Las acciones colectivas de las mujeres colombianas se enmarcan en diferentes campos. Se pueden enumerar las movilizaciones de las redes de mujeres por la ampliación de los derechos sexuales y reproductivos; las que emprende el movimiento feminista para denunciar las injusticias estructurales y simbólicas de las que son objeto las mujeres; las que desarrollan las secretarías de la mujer de las centrales de trabajadores para evidenciar las inequidades de género en el mercado de trabajo; las que han surgido en los movimientos afrodescendientes e indígenas para equiparar los derechos de las mujeres en sus comunidades y las que exigen la libertad de los secuestrados, denuncian las desapariciones y demandan mayor atención para los desplazados, entre otras. En este artículo interesa analizar la confluencia de activistas en dos grandes alianzas que luchan por evidenciar la violencia contra las mujeres en el conflicto armado colombiano y proponen una negociación política que incluya la perspectiva de género en los acuerdos con los actores armados. Se hace uso de dos categorías analíticas: en primer lugar, la de género, para analizar el comportamiento político en sus acciones por la paz y en contra de la guerra; en segundo lugar, la de acción colectiva, para estudiar sus movilizaciones e interacciones estratégicas.

El género, contrario a lo que se cree, no posee un significado claro y universal, a pesar de ser una categoría con notable influencia en la teoría feminista que la utiliza para subrayar “la cualidad fundamentalmente social de las distinciones basadas en el sexo” (Scott, 1990, p.24). De acuerdo con Nicholson (2003), este concepto se emplea al menos en dos sentidos distintos y, en algunos aspectos, contradictorios. De un lado, se contrapone al término sexo, un uso que ha servido para diferenciar lo que se define como construcción social de un hecho biológico y, por otro, se refiere a la construcción social, pero esta vez respecto a la distinción masculino/ femenino (Nicholson, 2003, p.47), es decir a la influencia de los estereotipos y los roles en la definición de la identidad personal.

Para Joan Scott (1990), una de las principales consecuencias de la irrupción de esta categoría en la tradición antropológica y sociológica contemporánea es el descubrimiento que las diferencias y las relaciones de género constituyen una instancia de poder que atraviesa toda la vida social. No sólo los espacios de la vida privada, sino el ámbito de la vida pública, es decir, la relación compleja entre los micropoderes y los macropoderes.

Cuando se habla de género se alude a las relaciones sociales de poder históricas entre mujeres y hombres, tanto en contextos públicos como privados. Se desnaturaliza la sexualidad como uno de los objetivos de la crítica feminista que al representarla en forma no naturalizada o biologizante la considera como una construcción histórico-cultural. Por otro lado, se representa las sexualidades en plural, al tiempo que la categoría de género se convierte en una manifestación no sólo dual, sino múltiple. En esta misma dirección, Flax (1986, p. 37) considera problemático un punto de vista imparcial. “Toda persona que intente pensar desde la perspectiva de las mujeres puede iluminar algunos aspectos de la totalidad social que haya sido suprimida previamente por la visión dominante. No podríamos hablar por ‘la mujer’ porque no existe tal persona, excepto dentro de un conjunto específico de relaciones (ya generalizadas) con el ‘hombre’ y con muchas mujeres concretas y diferentes”.

Para esta autora, el género debería entenderse en sentido relacional: las relaciones de género no están determinadas por la naturaleza, sino que han sido estructuradas bajo relaciones sociales de dominación. La tarea de las teóricas feministas estaría orientada hacia la recuperación de las historias de las mujeres y de sus actividades en la descripción y comprensión del conjunto de las relaciones sociales. Ni mujeres ni hombres son como se les ha descrito. Las características que se les asignan son resultado de las relaciones de poder. En efecto, las oposiciones naturaleza/cultura, mujer/ hombre, cuerpo/ mente, entre otras, están sujetas a críticas. Sin embargo, ellas constituyen un punto de partida para explorar la construcción cultural del género y para entender las asociaciones simbólicas de las categorías hombre y mujer como resultado de ideologías culturales y no de características inherentes o fisiológicas (Moore, 1996).

La categoría de género, como en otras investigaciones que estudian la participación de las mujeres en espacios tradicionalmente ocupados por los varones, permite analizar la participación política de las mujeres en acciones colectivas, que sus líderes denominan iniciativas por la paz y alianzas en contra de la guerra. Unas acciones que producen intercambios de actitudes, alianzas políticas e interpretaciones de la realidad y que sientan las bases para la movilización social.

En este artículo, se entiende por acción colectiva, siguiendo la tradición de las teorías de la movilización de recursos (Tarrow, 1997, 1991. Tilly, 1978. McCarthy y Zald, 1977) y de la construcción de la identidad del actor (Melucci, 1994, 1995. Touraine, 1987, 2005), la actuación que surge de la interacción estratégica de los actores, que busca un objetivo y que se basa en cálculos de costos y beneficios y en la cual hay un proceso de construcción de identidad política, en este caso la de las mujeres. No sólo nos interesa explicar cómo su insatisfacción por el incremento de la violencia las reúne, sino las condiciones que transforman su descontento en movilización (McCarthy y Zald, 1977). Para explicar ésta y teniendo en cuenta el problema del *free-rider* planteado por Olson (1992), también es necesario prestar atención a la selección de incentivos y a los beneficios que esperan obtener por su participación.

Una participación que va más allá de evidenciar la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano y de solicitar una negociación política a esta prolongada confrontación. Como lo hace el movimiento feminista, ellas denuncian las injusticias socioeconómicas, políticas, culturales y simbólicas arraigadas en los procesos y prácticas que marginan a las mujeres e impiden su participación igualitaria en la construcción de la cultura, en la esfera pública y en la vida diaria. Unas iniquidades de género, que en términos de Fraser (1997), son injusticias distributivas que exigen la redistribución. Pero además, como el género no sólo es un factor de diferenciación política y económica, sino un factor de diferenciación cultural y valorativa, también exige el reconocimiento de la singularidad.

La organización de estas mujeres obedece a la ampliación del entramado social que defiende posturas pacifistas y que desde sus primeras apariciones en escena reivindica su pertenencia genérica, sin que ello implique una adscripción irrestricta al movimiento feminista o a alguna tendencia particular de éste. El análisis de las acciones colectivas de las mujeres, que reivindican la paz en la casa y en la calle y se oponen a la militarización de las relaciones sociales, demuestra que en sus signos de identificación colectiva, existen más coaliciones y alianzas que una identidad compartida. Un “nosotras” que no es homogéneo como lo pretenden sus líderes, sin

negar que estén construyendo, de manera cada vez más incluyente, una identidad colectiva desde una perspectiva emancipatoria, por una necesidad política de lucha. En términos de Melucci (1996), una solidaridad estratégica, con un objetivo inmediato: la negociación política del conflicto armado colombiano con perspectiva de género.

A continuación se describe, de forma panorámica, el surgimiento de las dos grandes alianzas de mujeres por la paz en Colombia, sus principales repertorios de acción colectiva y sus estrategias políticas de oposición y cooperación con los actores que confrontan. También se analiza el proceso de formación de la identidad política en el que ellas enmarcan sus reivindicaciones.

Primeras acciones colectivas de las mujeres por la paz y en contra de la guerra

Todos los informes de la Mesa Mujer y Conflicto Armado (2001a, 2001b, 2003, 2004) denuncian que los actores armados fortalecen su dominio sobre los territorios y los individuos y regulan la vida cotidiana en las comunidades mediante el ejercicio de la violencia y la amenaza constante. De acuerdo con estos informes, uno de los efectos más graves es el incremento de los

desplazados¹, los desaparecidos y los asesinatos². Una situación que se complica aún más para las mujeres, que conviven con el miedo constante de ser agredidas sexualmente³, dados los casos de violaciones públicas, como actos de retaliación contra la población civil⁴. De este modo, el ejercicio de la ciudadanía en condiciones de igualdad y libre de violencia es una aspiración postergada para ellas. Y como plantea Molineux (2003, p. 24) “En todo el mundo existen violaciones a los derechos de las mujeres, algunas tradicionales y de larga duración, otras legitimadas por los estados modernos, otras legitimadas por nuevas formas de comunalismo, política identitaria y autoritarismo étnico, que abarcan desde las violencias sexuales registradas durante las guerras de la antigua Yugoslavia hasta el patriarcado terrorista de los Talibanes en Afganistán”. En Colombia agregaríamos el castigo por transgredir las normas de

¹ Según la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES (2007), entre 1985 y 2006, se habrían presentado en el país un total de 3.832.527 desplazados, uno de los desastres humanitarios más grandes del planeta.

² De acuerdo con el informe sobre los derechos de las mujeres en Colombia de la Red Nacional de Mujeres y la Confluencia Nacional de Redes de Mujeres (2003), en el período comprendido entre julio de 2001 y junio de 2002, más de una mujer murió diariamente en Colombia a causa de la violencia sociopolítica; más de una mujer a causa de ejecuciones extrajudiciales y homicidios políticos; más de una mujer cada 15 días fue víctima de la desaparición forzada; una murió cada 17 días, víctima de homicidio contra personas marginadas; cada 13 días una mujer murió en combate. Estos datos significan que 445 mujeres perdieron la vida por la violencia sociopolítica. De ellas 415 murieron fuera de combate.

³ De las 13.352 víctimas de delitos sexuales en 2001 el 86% eran mujeres (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en www.medicinalegal.gov.co/paginanezw_crnv_ppal1.html, consultada en octubre de 2002).

⁴ Aunque la Corte Penal Internacional tiene en cuenta la variable sexo en las violaciones a los Derechos Humanos y contempla en las definiciones de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra la violación, la esclavitud sexual, el embarazo y la esterilización forzadas y cualquier otra forma de violencia sexual que constituya una violación grave de los convenios de Ginebra, en Colombia las tipificaciones para juzgar estos delitos y crímenes, a menudo, son desconocidas por los tribunales por ausencia de pruebas.

género en medio del conflicto y oponerse a la violencia y el terror impuesto por distintos actores.

No obstante, cada vez más mujeres con maltrechos entramados organizativos desafían el poder autoritario de los grupos armados y afirman su liderazgo en los procesos de resistencia e interlocución frente a estos actores y el Estado. A pesar de los riesgos que entraña asumir liderazgos bajo las amenazas, las persecuciones, los asesinatos, el desplazamiento o la desaparición forzada. En otros términos, como consecuencia de las acciones violentas contra la sociedad civil, tanto en comunidades rurales como urbanas, las organizaciones de mujeres despliegan importantes esfuerzos pacifistas que intentan formar campos de neutralidad activa. Se oponen a las presiones de los actores armados y se expresan en contra de las restricciones a las libertades civiles, la inseguridad y la violencia política, social, étnica y sexual. La dramática situación de los Derechos Humanos produce el activismo político de las mujeres por la paz y en contra de la guerra. Ellas acuden al Estado colombiano, a las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a ONG, colectivos y movimientos sociales nacionales y globales y solicitan apoyo para sus denuncias y reivindicaciones.

Desde mediados de los años noventa, diferentes organizaciones de mujeres de Colombia se unen para conmemorar fechas como el 8 de marzo; el 25 de noviembre, día de la No-violencia contra la mujer; el 24 de mayo, día internacional de las mujeres por la paz y el desarme y el 21 de septiembre, día internacional por la paz. Estos eventos buscan fortalecer el movimiento social de mujeres, pero sobre todo acentuar una posición crítica frente a los efectos del conflicto armado en la vida de las mujeres y exigir una negociación política, que contemple la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado. La bandera que enarbolan, desde ese momento, tiene una clara orientación pacifista, a pesar de las diferencias tanto en las reivindicaciones como en las expectativas de conformación de los colectivos de los que proceden.

La primera acción colectiva de importancia se enmarca en la movilización a Mutatá, en el año 1996, convocada por líderes feministas, sindicalistas, funcionarias y profesionales de diferentes ONG de las principales ciudades del país. Con este ejercicio de resistencia civil, sus promotoras asumen, como lo plantean en sus comunicados, una postura antibelicista y declaran su neutralidad activa frente a los actores armados (Ruiz, 2003). En esta confluencia de mujeres y organizaciones surge la Ruta Pacífica de las mujeres por una solución negociada al conflicto armado⁵, una propuesta política feminista que desde ese momento se define: “pacifista, antimilitarista y constructora de una ética de la no violencia en la que la justicia, la paz, la equidad, la autonomía, la libertad, y el reconocimiento de la otredad sean principios fundamentales” (Ruta Pacífica, 2006).

De aquí en adelante, cada 25 de noviembre, sus integrantes se movilizan hacia un lugar diferente de Colombia para expresar su solidaridad con las víctimas de la confrontación armada. Unas acciones colectivas que se han convertido en un hecho real de oposición a la violencia armada, pero también a la violencia simbólica, física, pública y privada.

⁵ Forman parte de La Ruta Pacífica más de 315 organizaciones y grupos de mujeres coordinados en 8 regionales (Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Cundinamarca, Putumayo, Antioquia, Chocó y Cauca).

Más adelante se analiza lo que representan estas movilizaciones y cómo sus organizadoras capitalizan políticamente su impacto social. Lo que iniciaron las feministas como una denuncia pública del incremento de la violencia que vulneraba en mayor medida los derechos de las mujeres, desemboca en una gran movilización social con integrantes de todas las tendencias. Muchas comparten el desarraigo, la pérdida de sus seres queridos, la ausencia de sus hijos y compañeros o las violaciones a sus derechos fundamentales, pero, sobre todo, las une, como afirman de manera enfática en sus testimonios, su capacidad para resistir pacíficamente a las acciones bélicas y de vivir en una sociedad libre de violencias.

Estas mujeres proceden de pequeños colectivos, asociaciones, corporaciones, fundaciones y sindicatos y se inscriben en dos grandes confluencias de organizaciones: la Ruta Pacífica de las Mujeres por la Paz y la Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, IMP⁶. Ellas se integran a partir de su solidaridad con los eventos y reivindicaciones y no sólo los acompañan, sino que se apropian sus objetivos y los replican en sus organizaciones o en sus localidades. La voluntad colectiva de encontrar la verdad, la justicia y la reparación les identifica con otras mujeres con quienes construyen un universo simbólico para reclamar sus derechos. En este sentido, las mujeres articuladas a esos espacios en contra de los antagonismos entre los grupos armados, tendrían una participación política, pues su contienda política, como dirían McAdam, Tarrow y Tilly (2005), tiene lugar en público y supone su interacción como víctimas de la violencia de los actores armados y el Estado, a quienes reclaman el cese de las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Las acciones emprendidas, de manera conjunta e intencionada, confirman su responsabilidad de actuar y de conferirle sentido político a la violencia física y simbólica que las afecta. Unas acciones acompañadas por imaginativos y variados repertorios con los que construyen un sujeto colectivo y flexibilizan “el cautiverio hogareño, fundamental a la identidad tradicional femenina” (Lagarde, 1993).

⁶ En esta alianza han confluído *asociaciones mixtas* como: la Asociación Colombiana de Familiares y Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por los Grupos Guerrilleros, ASFAMIPAZ, y la Fundación para la Educación y el Desarrollo, FEDES; *amplias iniciativas nacionales* que también trabajan por la paz y que están integradas por otras formas de asociación como: la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz y la Red Nacional de Iniciativas de Paz y Contra la Guerra, REDEPAZ; *importantes organizaciones sectoriales* como: la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia, ANMUCIC; Central Unitaria de Trabajadores- Departamento de la Mujer (Caquetá, Casanare y Boyacá); *antiguos colectivos feministas* como: la Corporación Ofelia Uribe; *nuevas formas organizativas* conformadas en las localidades para la promoción de los derechos de la mujer y su participación política como: la Asociación de Mujeres por la Paz y la Defensa de la Mujer Colombiana, ASODEMUJ; Mujeres Pazíficas de Cali, el Colectivo HUITACA y Oye Mujer; *organizaciones con una importante trayectoria regional* en capacitación de campesinos y sectores populares como: la Fundación para la Educación Popular, FUNCOOP; y *amplias redes de mujeres* con distintos objetivos, entre ellas las que reivindican su identidad étnica como: la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas y un amplio número de *Mujeres indígenas* de distintos grupos étnicos; las que tienen mayor *identificación regional* como: la Red de Mujeres de la Región Caribe y la Red de Mujeres Jóvenes de la Región Caribe. Por último, también se han unido a IMP las *mujeres populares* a través de la Red de Organizaciones Sociales de Mujeres Comunales y Comunitarias de Colombia, ROSMUC; el Sindicato Nacional de Trabajadoras al Cuidado de la Infancia en Hogares de Bienestar, SINTRACIHOBI y la Asociación de Mujeres de Quibdó, ASOMUQUIB.

Interacciones políticas que mantienen el desafío de las mujeres para frenar la guerra y conseguir la paz

Las líderes de estas dos alianzas, Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz y la Ruta Pacífica, crean, coordinan y mantienen la interacción entre distintos colectivos y sectores. Desde un principio, sus convocatorias son amplias e incluyentes y abrieron espacios para los procesos regionales, locales y sectoriales. Tienen habilidad para reconocer las diferencias tanto en las concepciones como en las formas organizativas, en las reivindicaciones inmediatas y en los intereses estratégicos de los grupos que se acercaban a sus propuestas de paz. Desde el comienzo, demuestran que las mujeres de cualquier condición social, pertenencia étnica, orientación sexual, posición política, formación académica, creencia religiosa, ubicación geográfica, grupo generacional o estado civil, se oponen a la acción insurgente y paramilitar, pero también a la forma como el Gobierno tramita el conflicto político, a las acciones y omisiones del Estado, al que le imputan la mayor responsabilidad en la situación de los Derechos Humanos que crea la desatención de la cuestión social.

Sus primeras acciones generan confianza y solidaridad con las víctimas y por esa vía ganan mayores adhesiones. Las organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, de desplazadas, de familiares de secuestrados y desaparecidos, estudiantiles, sindicales, feministas, populares; de todos los rincones del país, articulan sus demandas a estas acciones colectivas dentro de un proceso político que las incluye como mujeres. En principio, como lo dejan claro en sus testimonios, lo hacen para protegerse de la guerra, pero, sobre todo, para visibilizarse como sujetos políticos y autoinstituirse/ como ciudadanas.

Esa confianza que genera la organización de acciones colectivas por la paz tanto en las personas como en sus procesos sociales, la retornan cooperando y solidarizándose con sus denuncias y reivindicaciones. Algunas veces, estas acciones evitan la violencia contra sus representantes y activistas, pero, sobre todo, se plantean para apoyar causas concretas. Por ello enmarcan sus reivindicaciones en un proceso creativo y dinámico, que permita visibilizar⁰¹ su propuesta política. Por ejemplo, en 1997, la Ruta Pacífica convoca el *Cabildo Internacional de Mujeres por la Paz* para pronunciarse “contra el armamentismo, la violencia, la impunidad y el olvido”. Un espacio con invitadas de otras sociedades con conflicto que presentan su experiencia en la construcción de la paz. En 1998 convocan, en Cartagena de Indias, el *Tribunal de las Mujeres, Denunciando la Impunidad y Recobrando la Memoria*, que pretende enviar las denuncias de las mujeres a la Corte Penal Internacional y al Tribunal Permanente de los Pueblos.

Aunque fueron invitadas a las audiencias del Caguán, durante las negociaciones entre el Gobierno de Andrés Pastrana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se niegan a participar. Entre otras razones porque el esquema de negociación impide una interlocución directa de la sociedad civil y el tema de la convocatoria, el empleo, no constituye una prioridad de su lucha. No obstante, en los acercamientos del año 1999 con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, participan como representantes de la sociedad civil. A finales de este año, la Ruta Pacífica y la Organización Femenina Popular, OFP, consolidan una alianza para promover acciones de resistencia civil por la

Acciones colectivas de las mujeres en contra de la guerra y por la paz en Colombia paz. Desde entonces, el último martes de cada mes, sus militantes protestan vestidas de negro y en silencio en las plazas públicas de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barrancabermeja, Popayán, Bucaramanga, entre otras. De esta forma expresan su desobediencia civil y se adhieren al pacifismo de las Mujeres de Negro⁷.

En el año 2000, la Ruta Pacífica se moviliza hacia Barrancabermeja y asiste al encuentro: *Una mirada a la guerra por la vida. Causas y Efectos de la Guerra en la Mujer Colombiana*, para denunciar el incremento de la violencia armada en el Magdalena Medio. Ante el acrecentamiento del conflicto en el oriente de Colombia, la Ruta regresa a Barrancabermeja en 2001 y acude al *Encuentro Internacional de Mujeres Contra la Guerra* promovido por la OFP, para denunciar ante la opinión pública nacional e internacional las intimidaciones de los paramilitares a sus sedes y activistas.

Mientras las feministas y las populares se aliaban en eventos simbólicos para denunciar la violencia y solicitar la protección de sus derechos, las trabajadoras de la Escuela Nacional Sindical impulsaban, en el año 2001, la participación de las mujeres en las negociaciones de paz en el Caguán. Partieron de la evaluación sobre la escasa participación de las mujeres en espacios de negociación y adoptaron como respaldo político la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad las Naciones Unidas. Un instrumento no acogido por los negociadores, a pesar de que este mandato insta a los Estados miembros, a los actores del conflicto y a las personas responsables de planes o procesos de negociación a atender las necesidades de las mujeres y garantizar la protección de sus derechos. Además de exigir la prevención de los efectos del conflicto sobre sus vidas y recomendar el incremento de su participación en todos los niveles de decisión, prevención, manejo y resolución de conflictos (Naciones Unidas, 2000).

La escasa apropiación de los instrumentos políticos para incidir en los procesos de paz propició la conferencia: *la Paz en Colombia Vista por las Mujeres* realizada en Estocolmo. De este proceso surge la Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, IMP, una alianza de organizaciones y sectores que se comprometió a concertar la Agenda de las mujeres para la negociación política del conflicto armado. Antes de la posesión del presidente Álvaro Uribe (2002-2006), IMP junto con la Ruta Pacífica, la Red Nacional de Mujeres, la Mesa Nacional de Concertación y la OFP convocan en Bogotá la movilización nacional: *¡las Mujeres Paz...harán Movilizándose Contra la Guerra!* para presionar un nuevo proceso de negociación con los actores armados más amplio e incluyente. A la convocatoria acudieron, de acuerdo con sus líderes, más de 40.000 personas, una vasta representación sectorial y organizativa. A partir de este evento, sus acciones colectivas vinculan a más organizaciones e incrementa el entramado social que lucha por la consecución de la paz en Colombia. Además, su propuesta de resistencia civil adquiere mayor visibilidad política no sólo en el movimiento por la paz, sino ante las instituciones y los Organismos Internacionales.

Después de esta movilización, IMP continúa el proceso de formulación de la *Agenda de las mujeres por la paz*. Un ejercicio democrático que parte del reconocimiento de identidades diversas y múltiples de las colombianas y propone desentrañar el *continuum* entre violencia patriarcal y militarismo. En principio, persigue aglutinar al movimiento de mujeres en torno a reivindicaciones conjuntas, pero en el largo plazo,

⁷ Es un movimiento internacional de mujeres que se opone a la guerra y el militarismo. Los grupos más activos se encuentran en Israel, Palestina, Belgrado e Italia (Breines, Gierycz y Reardon, 2002).

aspira a la disolución de las desigualdades sexuales y a la emancipación femenina. Mediante esta estrategia, según sus líderes, IMP tendría más herramientas éticas y

políticas para la interlocución y negociación en los procesos de paz y, además, las mujeres implicadas en su difusión se empoderarían políticamente.

En noviembre de 2002, se presenta la *Agenda de las Mujeres por la Paz* en el Congreso de la República durante la *Constituyente Emancipatoria de las Mujeres*. Este instrumento se convierte en la carta de navegación de la alianza por la paz. Mientras sus militantes de base se encargan de la negociación con las autoridades locales, la dirigencia nacional consolida las relaciones con Representantes a la Cámara y Senadores y fortalece el cabildeo de distintas propuestas que se debaten en el Congreso de la República.

En 2003, IMP, la Ruta Pacífica y la Mesa de Concertación de Mujeres presentan públicamente, en la ciudad de Bogotá, el *Movimiento de Mujeres Contra la Guerra*. Un acuerdo que se enmarca en la campaña por “la *Desmilitarización de la Vida Civil y la Recuperación de la Ciudadanía para las Mujeres*”, que denuncia la utilización del cuerpo de las mujeres como botín de guerra. En el marco de esta campaña se realizaron distintas actividades en el país. Las organizadoras de estos eventos, respaldadas en los estudios y evaluaciones de la Mesa Mujer y Conflicto Armado, como en sus propias indagaciones, establecen que las mujeres se cohíben de denunciar los delitos sexuales porque las autoridades no atienden sus declaraciones. Por lo tanto, en los talleres promueven la desnaturalización de los roles de género y la identificación de las vulneraciones a los derechos, así como la utilización de las instancias y los argumentos jurídicos para reclamarlos.

Uno de los repertorios de acción más contundentes de esta campaña es la *Movilización*, de más de 3.000 personas, a *Puerto Caicedo en el Putumayo*. En sus comunicados expresan que con esta travesía rechazan la estrategia de interdicción del Plan Colombia porque afecta la salud de los lugareños y la biodiversidad de la selva amazónica, porque incrementa las violaciones a los Derechos Humanos y criminaliza de los campesinos vinculados a la siembra de coca. Como ya es habitual en estas marchas, rechazan el acompañamiento de las Fuerzas Armadas y reclaman el libre derecho a habitar y transitar el territorio.

Para impulsar la segunda parte de la campaña, *La Recuperación de la Ciudadanía para las Mujeres*, IMP se integra a la *Alianza de Mujeres* liderada por la Corporación Sisma Mujer. Una alianza constituida para desarrollar la estrategia integral de promoción de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, CEDAW, y la ratificación de su protocolo facultativo, como un instrumento para garantizar los derechos de las mujeres y la defensa del Estado social de derecho. En adelante, las acciones por la paz de estas organizaciones se centran en el impulso al proceso de la Marcha Mundial de Mujeres, una red global para la acción feminista en contra de la pobreza y la violencia.

Por esta época, 2004, se adhieren más colectivos a sus conmemoraciones y se despliega un fuerte activismo por la defensa de los Derechos Humanos y la paz en el país. Se retoma la *Operación Sirirí*⁸ por los acuerdos humanitarios y se define la insistencia y la

persistencia como dos recursos para lograr la libertad de los secuestrados y encontrar a los desaparecidos. Otro evento importante es la convocatoria con la Red Nacional de Mujeres a los *Ágora de las Mujeres: Voces y Pensamientos de las Mujeres por los Acuerdos Humanitarios y Voces y Pensamientos de las Mujeres en Verdad, Justicia y Reparación* para debatir los conceptos y la normatividad jurídica que avalan la participación de las mujeres en los procesos de diálogo y negociación (IMP, 2005). Como se puede observar, sus acciones no sólo se orientan a la denuncia, también dan importancia a la capacitación de las militantes tanto en aspectos organizativos como jurídicos y, por supuesto, políticos.

IMP insiste en consolidar las alianzas con otras organizaciones de paz y acentúa sus acciones de interlocución en los procesos de diálogo, negociación y planificación local, regional y nacional. En mayo convoca a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, a la Comisión Colombiana de Juristas, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo al foro: *Las Mujeres Opinan sobre el País*. Con estos actos IMP se acerca a las instituciones y ejerce veeduría ciudadana de leyes y proyectos dirigidos a las mujeres. Un aspecto que la enfrenta a la otra gran alianza, la Ruta Pacífica, dirigida por las feministas, para quienes este tipo de acciones sólo conducen al logro de pequeñas reformas y mantienen intacto el orden patriarcal.

A pesar de las disputas por la orientación de la lucha, en agosto de 2004, IMP y la Ruta Pacífica realizan en Bogotá el *Encuentro Internacional de Mujeres Contra la Guerra*, un acto con el que afianzan las alianzas internacionales y articulan las acciones locales con las luchas globales. Bajo el eslogan *Ni guerra que nos mate ni paz que nos oprima*, se reúnen para reflexionar, debatir y construir alternativas de paz. Sus discusiones giran en torno a tres ejes: a) Militarismos, fundamentalismos, nacionalismos y terrorismos desde donde se justifican las guerras actuales; b) Los costos de la guerra y su incidencia en la feminización de la pobreza y c) La guerra como deslegitimadora del avance de la democracia y la ciudadanía de las mujeres.

Otro gran despliegue de acciones colectivas para apoyar las reivindicaciones de las mujeres se orienta a respaldar a las feministas de la Red Nacional de Mujeres, cuando emprenden la lucha jurídica ante la Corte Constitucional por la despenalización del aborto mediante una demanda de inconstitucionalidad a la Ley que prohíbe esta práctica. Un gran logro para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las colombianas. Como defensoras de los Derechos Humanos se declaran en Operación Sirirí para promover el acuerdo humanitario y respaldar a los familiares de secuestrados y desaparecidos, organizados en distintos colectivos que movilizan la mayor solidaridad nacional con las víctimas del conflicto armado. En estas y otras acciones colectivas la alianza de la Ruta Pacífica y la IMP actúa para favorecer las luchas concretas de grupos y sectores que conforman el entramado por la paz. Las

⁸ El Sirirí es un pájaro pequeño que persigue a las águilas hasta hacerlas huir. Fabiola Lalinde es la artífice de esta campaña. Ella deambuló, durante 20 años, por los despachos de la Policía y el Ejército, ministerios y oficinas de Derechos Humanos, hasta que obtuvo información sobre el paradero de su hijo, un sociólogo desaparecido por el Ejército colombiano en una operación de rescate de heridos del Ejército Popular de Liberación, EPL.

acciones de este año, 2004, terminan con la movilización al Chocó para apoyar la resistencia civil de las mujeres negras al confinamiento y el desplazamiento forzado.

El proceso de paz entre el Gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, busca la desmovilización de este actor armado⁹. Pero mientras IMP propone una

participación veedora de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación con perspectiva de género, la Ruta Pacífica y la OFP plantean su descontento por la forma como se desarrollan las negociaciones. Sus líderes señalan que las AUC carecen de reconocimiento político y, en consecuencia, no apoyan el proceso. Por lo tanto, la alianza entre estas iniciativas se resquebraja y esta ruptura debilita su coalición en contra de la guerra. No obstante, las acciones de cada alianza siguen generando dividendos importantes para la paz como para el empoderamiento político de sus líderes y activistas de base.

IMP considera que se debe superar la polarización que dificulta la consecución de la paz y lanza una estrategia de interpelación política denominada *Mesa Nacional de Incidencia por el Derecho a la Verdad, la Justicia y la Reparación con Perspectiva de Género*. Sustentada en sus objetivos de conformación: a) lograr la participación de las mujeres en la negociación del conflicto armado y b) disminuir los efectos del conflicto en la vida de las mujeres. Para el seguimiento al proceso instalan una Mesa nacional y seis Mesas regionales, concebidas como espacios para el análisis, la reflexión y la elaboración de significados de la violencia en la vida de las mujeres. Allí se escuchan los testimonios de las sobrevivientes y se elaboran estrategias de presión al proyecto que constituye el marco jurídico de las negociaciones entre el Gobierno y los actores armados o Ley de justicia y paz (*Voces de Mujer*, 12).

Con los insumos generados en esta Mesa, la alianza IMP -Red Nacional de Mujeres elabora una propuesta que incorpora la visión de las mujeres en la Ley de justicia y paz, un planteamiento que sugiere la inscripción de los estándares consagrados en el Estatuto de Roma. Con estas acciones logran modificaciones en cinco artículos de la Ley (36, 39, 42, 51 y 59) (*Voces de mujer*, 14: 2) que reconocen, sobre todo, la necesidad de incluir la perspectiva de género en la tipificación de los delitos, la

⁹ El actual fenómeno del paramilitarismo “es resultado de una crisis política y militar del Estado colombiano, del auge de la guerrilla y de la persistencia del narcotráfico” (Rangel, 2005). En la negociación con el Gobierno nacional las AUC desmovilizan varios de sus frentes, incluso antes de la firma de los acuerdos de paz, lo que aparece como un gesto de buena voluntad para demostrar a la opinión pública nacional e internacional su decisión de abandonar las armas. Pero a pesar del número de efectivos desmovilizados y de las mejorías en los indicadores de seguridad en los sitios donde se produce la dejación de las armas, no ocurre lo mismo en todas las localidades de ubicación. En algunas zonas, los frentes desmovilizados han sido relevados en las actividades de control territorial y poblacional por nuevas facciones armadas, a tal punto que se habla de una tercera generación de paramilitares. En otras se han desmovilizado sólo las estructuras militares, pero no las milicias urbanas. Esta situación ha acarreado serias preocupaciones entre los colectivos de mujeres que consideran que las conversaciones entre el Gobierno y los paramilitares no están conduciendo a la desarticulación del paramilitarismo, sino que se han quedado en la desmovilización de sus estructuras militares, dejando intactas sus estructuras criminales y mafiosas. Según las cifras oficiales se han desmovilizado 31.687 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia hasta julio de 2007 (véase www.mapp-oea.org, visitada en agosto de 2007).

Atención específica a las mujeres y las niñas que sufren agresiones sexuales, el derecho a preservar la intimidad de las víctimas y su representación en la Comisión Nacional de Reparación. Finalmente, la Mesa nacional de incidencia sugiere al Estado acoger las recomendaciones de las Relatorías especiales de violencia contra la mujer y cumplir con los compromisos adquiridos al ratificar los convenios internacionales. Así mismo, la Comunidad Internacional debería crear una comisión de verificación mixta.

Los eventos más destacados durante el 2005 son: *la movilización de apoyo a las comunidades indígenas del Cauca* afectadas por las acciones de las FARC y por la respuesta del Ejército nacional a estos hostigamientos; *la III Plenaria de la Constituyente Emancipatoria de las Mujeres* para evaluar el cumplimiento de los propósitos y objetivos trazados por *la Agenda de las mujeres por la paz*; la participación de IMP en los encuentros entre el Gobierno y el ELN en la segunda ronda de acercamientos en la Habana y la participación de dos representantes de la alianza por la paz en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Patricia Buriticá, directora de IMP y Ana Bernal, directora de Redepaz.

Como se puede observar, estas acciones colectivas de las mujeres por la paz son diversas y se orientan a impactar a la opinión pública y a incluir en la agenda política sus reivindicaciones de género. De acuerdo con los teóricos de los movimientos sociales, sus acciones desafían más el orden simbólico que el orden público (Touraine, 2005), pues todos sus repertorios de acción son pacíficos, reducen al máximo inmiscuirse con los actores armados legales e ilegales y los choques entre sus activistas y la Fuerza Pública. A continuación se muestra cómo han logrado mantener estas interacciones entre tantos enfoques, tendencias y formas de organización.

Formación de la identidad política

Para tramitar sus denuncias estas organizaciones acuden, principalmente, a las instancias estatales, conocen la función de las Cortes, los entes de control y las instituciones, pero también solicitan el apoyo de los Organismos Internacionales y las ONG defensoras de Derechos Humanos, al tiempo que generan espacios y estrategias para visibilizar sus propósitos, así como las omisiones del Estado en la atención de los problemas sociales que se incrementan con el conflicto armado y que reducen los indicadores de desarrollo humano (PNUD, 2003). De esta manera, han adquirido recursos o poderes que, en buena medida, son una ganancia simbólica lograda a través de su reconocimiento como sujetos políticos. Una visibilidad adquirida con el uso de los numerosos repertorios de acción colectiva, como los que describimos, que cada vez convocan a más mujeres y atraen mayores activismos.

Ellas combinan viejas formas de movilización como las marchas, los plantones, los comunicados públicos con nuevos repertorios, por ejemplo, utilizan las llamadas *rutias* para protestar desde los lugares más recónditos del país. En ocasiones recurren a los tradicionales modelos femeninos de regulación de los conflictos y actúan como mediadoras de acontecimientos violentos, así como para prevenirlos y mitigarlos. Cada vez usan más la práctica del arbitraje y participan en las instancias creadas para impartir justicia comunitaria.

Con diferentes acciones convierten los espacios públicos en espacios políticos en los que reivindican los derechos conculcados a las mujeres. Utilizan símbolos con arraigo cultural y se apropián calles y plazas representativas de sus ciudades y pueblos.

Realizan plantones, gritan consignas y legitiman sus demandas sociales e instalan los Ágora públicos para discutir sus posiciones frente al conflicto armado. También acuden al Congreso de la República para debatir los asuntos de trascendencia nacional; construyen agendas de negociación desde la perspectiva de las mujeres y reclaman una justicia diferenciada e incluyente a través de los tribunales simbólicos o las cortes de mujeres que condenan a los victimarios. De este modo, amplían el ejercicio de su ciudadanía y se “empoderan” como líderes en sus organizaciones.

A pesar de no contar con el apoyo de los medios masivos de comunicación, que en ocasiones minimizan y ridiculizan sus actuaciones, convierten esa invisibilidad mediática en una oportunidad para afianzar los recursos adquiridos con la movilización y es con estos recursos que negocian con el Estado las reformas estructurales conducentes a la obtención de sus propósitos. Mantiene informada a la opinión pública a través de sus comunicados en la prensa, la radio, los canales alternativos de comunicación y, por supuesto, a través de sus páginas en Internet y diferentes enlaces que difunden sus acciones. Convocan a la ciudadanía a pronunciarse en contra de la guerra y a sumarse a sus apuestas por la paz. Por ejemplo, de manera alterna, al proceso de negociación con los paramilitares, proponen las Mesas de incidencia regional y nacional para recavar información sobre las víctimas y recuperar testimonios y pruebas que permitan su acompañamiento en los tribunales y en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

Estos repertorios son cada vez más intelectualizados y abstractos, aunque utilizan símbolos tradicionales también subvierten la tradición y transforman las estructuras sociales vigentes con su propuesta de una nueva sociedad libre de violencias¹⁰. Estas organizaciones logran mantener su desafío frente a los actores armados y el Estado, crean incertidumbre en la sociedad y potencian distintas solidaridades con su causa. Amplían el entramado social y establecen alianzas estratégicas con los movimientos feminista, pacifista y el sindical, con los que tienen afinidad en las formas de confrontación. Se pronuncian contra las violaciones a los derechos de las mujeres y proponen soluciones políticas al conflicto armado con perspectiva de género.

Sus manifestaciones en público innovan las rutinarias formas de acción colectiva, son cada vez más creativas, espontáneas y provocadoras, rompen con la rutina y logran sorprender a los observadores. Sus líderes se esmeran en que estas produzcan rupturas con la convención, la norma, la tradición y desafíen la autoridad. Sus protestas superan la tradicional actitud reactiva y contestaria y hoy son visibles sus propuestas y su cooperación institucional, aunque no dejan de interpelar el poder Estatal y a los actores

¹⁰ En sus campañas, en diferentes eventos o en sus comunicados se pueden leer las siguientes consignas: “Las mujeres no parimos ni forjamos hijos e hijas para la guerra”, “Es mejor ser con miedo que dejar de ser por miedo”, “las mujeres paz- haremos, movilizándonos contra la guerra”, “mujeres en ruta por la vida, el desarrollo, la equidad y la paz”, “Que de nuestros vientres y manos no brote ni un hijo, ni una semilla más para la guerra. Todo para la vida”, “Que regresen a la tierra la vida y la muerte como hechos naturales. Las mujeres nos negamos a reproducir más hijos para la guerra” “Soy civil y estoy contra la guerra”, “Por un hogar, un país, un planeta libre de miedos y de violencias”, “Las mujeres no queremos ni guerra que nos mate ni paz que nos oprima”, “Con aguja, hilo y telar tejaremos con fuerza y empuje la paz”.

Acciones colectivas de las mujeres en contra de la guerra y por la paz en Colombia armados con sus acciones de resistencia civil. Al mismo tiempo que fortalecen su rechazo a los autoritarismos de derecha y de izquierda, se liberan de las estructuras que limitan su participación social y política. No sólo llevan a cabo una crítica persistente de la situación del país, sino que desarrollan labores pedagógicas que inciden en el cambio de comportamientos y contribuyen a la resolución no-violenta de los conflictos cotidianos. En términos de Melucci, estas acciones colectivas apelan a la solidaridad, explicitan un conflicto e implican rupturas de los límites del sistema de relaciones sociales en el que se desarrolla la acción (Melucci, 1996, p. 28).

Desde el reconocimiento de la diversidad social y cultural de la sociedad colombiana, proponen una reflexión diferente del país que desean y convierten su proyecto en un derrotero para desactivar paradigmas respecto al conflicto armado y las causas que lo producen. Sus evaluaciones sugieren que las causas de la crisis no sólo están en el enfrentamiento entre actores, sino en las inequidades sociales asociadas con la creación de ejércitos privados que defienden intereses particulares. Sus líderes trabajan por superar la visión que tienen las mujeres como dominadas, por una reflexión feminista, más sugestiva, que examina el sentido y las dimensiones de sus prácticas emancipatorias, de los espacios que las convocan y de los mecanismos de resistencia que emplean para oponerse al poder bélico. Son críticas con la glorificación de la violencia en las doctrinas y proyectos revolucionarios de los actores armados, pero también de la política gubernamental de Seguridad Democrática. Como planteaba Virginia Wolf (1977), ellas, con estas posiciones, trasgreden los mandatos del silencio y la invisibilidad, pues denuncian sus malestares ante la sociedad y al Estado.

De este modo, no sólo asumen la capacidad de ser madres nutrias y sacrificadas, sino que revaloran las posibilidades que les da esa condición para afirmarse a sí mismas, como diría Ruddick (1990), desde una posición situada sexual, histórica y socialmente. Entran en un proceso creciente de participación política que desnaturaliza la maternidad ligada a la reproducción y situada en el espacio doméstico. Un fenómeno que ellas evidencian en sus prácticas cotidianas y que aparece ante los otros como una práctica disruptora.

Pero el verdadero poder de estas acciones colectivas, en términos de Tarrow (1997), está en la capacidad de sus líderes para construir un marco de significados políticos y culturales apropiados en el cual inscribir sus desafíos. Esta habilidad se refleja en el contenido de sus propuestas cada vez mejor sustentadas con recursos jurídicos, políticos, culturales y ecológicos. También es visible en la apropiación de símbolos que subvierten la cultura y que utilizan para contraestigmatizar y resignificar esos estereotipos femeninos que impiden la participación política de las mujeres. Lo hacen para alterar de manera radical los procesos y estructuras que reproducen la posición subordinada de las mujeres como género, pues no obedecen a opciones reactivas individuales, sino colectivas Young (2000). En estas acciones es notable la influencia del pensamiento y la práctica feministas, aunque, como se decía al principio, no hay adscripciones concretas a ninguna tendencia.

Muchas veces se constata un discurso esencializado de la femineidad, que apela a sus símbolos más convencionales para lograr visibilidad como víctimas. Lo que, al parecer, es una estrategia para afianzar la identidad de género de las integrantes de estas organizaciones y, sobre todo, para rechazar los valores bélicos asociados a la masculinidad. Por ello, en sus manifestaciones públicas refuerzan su condición de “dadoras de vida”; politizan el duelo y el dolor maternal; el cuidado, la protección, la

ética de las mujeres y esa supuesta distancia frente al uso de la violencia como mecanismo para resolver conflictos.

Se presentan del todo indefensas, se refugian en templos y lugares públicos o en espacios “sagrados” e inviolables que garanticen su vida y en los que sea posible su denuncia. Cada vez, sus lamentos son más ruidosos, aunque en sus protestas predomina el silencio verbal. No siempre se alejan de los roles de género para enfrentar a los grupos armados y al Estado, en su intervención política ponen en práctica su capacidad para conciliar las actividades en el espacio público y privado y se apropian recursos de otras luchas. Por ejemplo, de los rituales indígenas para fortalecer la autonomía frente a los actores armados y las propuestas políticas de los partidos que intentan cooptarlas. De las prácticas culturales de las comunidades negras para valorar su singularidad y

resignificar su devaluado estatus social. De la resiliencia de las mujeres populares para paliar las crisis económicas y emocionales, y de las estrategias sindicales para construir agendas y negociar sus reivindicaciones.

Como en otras luchas sociales, en estas el componente teatral es muy importante. Sus líderes insisten en introducir cambios en el lenguaje y en las prácticas sociales y en borrar el predominio de las imágenes masculinas que defienden posturas bélicas. Ellas dramatizan sus concepciones, impactan con sus acciones y generan reflexiones en quienes les observan, muestran, como plantean Gusfield y Laraña (1994), que algo está pasando, que su propia existencia demuestra que “aquello que antes era impensable ahora lo es”. Para aprovechar esas “cualidades femeninas” y mantener el interés de sus militantes recuperan prácticas tradicionales como el bordado, los cantos y bailes populares, el trueque y las vigilias. Se preparan para cada evento: tejen, dibujan, pintan, cortan y cosen la colcha de retazos que “las arropará contra los violentos”; recolectan semillas y alimentos para compartir con los desamparados; adaptan espacios, combinan escenarios, se apropian estilos y estimulan a sus integrantes para aumentar apoyos con su causa, pero, sobretodo, para visibilizarse como sujetos políticos. Aprovechan los mecanismos de participación ciudadana consignados en la Constitución Nacional, asisten a los Cabildos públicos, interponen Derechos de petición y Acciones de tutela, impugnan gabinetes gubernamentales para que cumplan la ley de cuotas¹¹, entre otras acciones. De este modo, se apropian de lo público y ejercen sus derechos políticos como ciudadanas.

Gran parte de su eficacia simbólica y su capacidad de promover cambios en la sociedad radica en la habilidad y la elocuencia de sus discursos, en sus sugerentes emblemas y en las sensaciones e imágenes que suscitan en el público y en sus potenciales seguidores. Las imágenes de la madre desgarrada de dolor eran llamativas para los medios de comunicación y los curiosos, pero no generaba más que una solidaridad momentánea, como lo recuerdan en sus testimonios. Por ello, ahora intentan impactar con las imágenes de las mujeres que a pesar del sufrimiento producido por la violencia se sobreponen a éste y convierten sus lamentos en acciones políticas, es decir, en reclamos y propuestas frente al intercambio humanitario y la participación comisiones de seguimiento y verificación. Demuestran que lo que antes era normal ahora está sujeto a cambio, y lo que se daba por hecho puede controvertirse en público. En todo ello desempeña un papel importante el carácter colectivo de estos procesos simbólicos,

¹¹ La Ley 581 del 2000 define que el 30% de los cargos de nivel decisorio en todos los órganos del poder público o en las entidades públicas que no forman parte de las tres ramas, así como en los distintos órdenes territoriales, deben ser ocupados por las mujeres.

Acciones colectivas de las mujeres en contra de la guerra y por la paz en Colombia la acción de los movimientos que “aquello que en principio parecían ideas libres y acciones individuales en realidad son compartidos y realizados por otros” (Gusfield y Laraña, 1994, p. 113).

Estas acciones de las mujeres por la paz y en contra de la guerra se convierten en una agencia de significación colectiva. Este análisis nos permite afirmar que su propuesta crece, se nutre y fortalece con mayores resultados en el ámbito político sin dejar de lado esas pequeñas fracturas que provocan en la cultura y que resquebrajan las prácticas patriarcales y las instituciones que las sustentan. Los cambios no pueden ser considerados revolucionarios y sus líderes lo tienen claro, pero tampoco se puede calificar como “imperceptibles reformas” en la condición de las mujeres. Una reflexión que enfrenta a las dos principales orientaciones que participan en las acciones por la paz: la feminista y la sindicalista, la primera representada por la Ruta Pacífica y la segunda por IMP.

Las feministas consideran que el acercamiento al Estado hace peligrar sus luchas, porque estas pueden ser procesadas políticamente y acabar transformadas en modestas reformas. Ellas no quieren que su acción se convierta en un fenómeno transitorio y que sus líderes sean destacadas representantes tras los bastidores de la política convencional. Sus aspiraciones van más allá de lo político y lo social, su propuesta busca mayores transformaciones culturales que erosionen el dominio masculino y reduzcan las discriminaciones de género. De acuerdo con los planteamientos que defienden, no sólo solicitan justicia redistributiva, también reclaman reconocimiento de sus diferencias, en el sentido que lo propone Fraser (1997). Es decir, que más allá de mejorar algunos servicios sociales o garantizar derechos civiles, las feministas aspiran a que se reconozcan los aportes de las mujeres sin desconocer sus diferencias ni intentar homologarlas con los varones. En este sentido, plantean que su interacción con el Estado seguirá enmarcada en la exigencia de transformar algunas instituciones políticas, pero son concientes que ello depende de la capacidad de empoderarse políticamente para modificar esas concepciones tradicionales acerca de los roles genéricos, que también condicionan el avance de las aspiraciones por la igualdad entre los géneros.

Las sindicalistas, por el contrario, creen que el movimiento debe aprovechar la estructura de oportunidad política e insertarse en los espacios en los que son posibles los cambios políticos. Por ello enfatizan en la puesta en marcha de la Agenda de las mujeres por la paz, son más rigurosas en el seguimiento de los resultados inmediatos y del mediano plazo, aunque son concientes de la incidencia que deben provocar a largo plazo con cada acción que realicen para lograr la equiparación de las mujeres frente a los varones.

Estas acciones colectivas tienen una naturaleza diversa y compleja pues en ellas, como se indicó, confluyen una amplia gama de procesos sociales y actores que se unen por un desafío colectivo: frenar la guerra y conseguir la paz con la participación de las mujeres. Su lucha no se habría expandido y mantenido si no se hubieran insertado a diferentes redes globales que apoyan y auspician sus eventos. Unas alianzas solidarias que financian diferentes actividades, difunden sus objetivos y cooperan para proteger a sus líderes y organizaciones. Lo que también constituye una amenaza para su sostenibilidad, pues la dependencia de estos recursos condiciona la contundencia de su movilización. Unas acciones que tienen cierta regularidad, pero que, en algunos momentos, bajan de intensidad, precisamente, por las presiones e intimidaciones que reciben sus líderes tanto de los actores armados ilegales como de la Fuerza Pública,

como lo sustentan sus demandas a la Relatora de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras instancias. Las cuales consignan estas denuncias en importantes informes dirigidos tanto al Gobierno nacional como a los actores armados irregulares para que respeten los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario¹². Estos documentos

permiten, además, que la academia¹³, las instituciones, los organismos internacionales e, incluso, la Iglesia estudien y evalúen, de manera más rigurosa, cómo esas violaciones a los derechos de las mujeres amplían las disparidades de género e impiden su posicionamiento público y las relegan al espacio privado.

En efecto, estas organizaciones ponen en evidencia al Gobierno cuando demuestran el deterioro de los indicadores de desarrollo humano por causas asociadas al conflicto armado; cuando denuncian la impunidad de las acciones violentas de grupos paraestatales; la connivencia de algunos funcionarios con éstos; la corrupción política y los intereses que atienden los encargados de aplicar justicia. Un conjunto de situaciones que revelan la debilidad del Estado para atender los reclamos de la ciudadanía, en especial la vulneración de los derechos de las mujeres.

¹² Véase Coomaraswamy, Radica (2002): *Informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer. Misión a Colombia* (1 al 7 de noviembre de 2001, presentado en marzo de 2002 a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. E/CN.4/2002/83/Add. 3; Coomaraswamy, Radica (1998): *Informe sobre la violencia contra la mujer en tiempos de conflictos armados*, Comisión de Derechos Humanos de Organización de Naciones Unidas, 54º período de sesiones. E/CN.4/1998/54, 26 de enero de 1998 y Amnistía Internacional (A.I) (2004): *Está en nuestras manos, no más violencia contra las mujeres. Colombia: Cuerpos marcados, crímenes silenciados: Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado*, Índice AI: AMR 23/040/2004

¹³ Pocos textos se han escrito sobre las mujeres y la paz en Colombia. Los más destacados son el de Carmiña Navia (2004): *Guerras y paz en Colombia. Las mujeres escriben*, que ganó el premio extraordinario de ensayo sobre estudios de la mujer de la Casa de América y el de Gloria Tobón y María Martínez (eds.): *El tiempo contra las mujeres. Debates feministas para una agenda de paz*, Bogotá, Humanizar. Otros se publican con el auspicio institucional como el de Arango, Pilar (coord.) (1995): *Mujer y conflicto armado. Elementos para la discusión* publicado por la Secretaría de Mujer y Género de Bogotá. Otras académicas publican sus resultados de investigación en compilaciones, como es el caso de Norma Villarreal, (1997): “Mujeres y madres en la Ruta por la paz” en Luz Gabriela Arango (comp.): *La crisis sociopolítica colombiana. Un análisis no coyuntural de la coyuntura*, Santafé de Bogotá, CES- Universidad Nacional de Colombia y la Fundación Social. La revista *En otras palabras* del Grupo mujer y sociedad de la Universidad Nacional, la Corporación Casa de la Mujer y la Fundación Promujer dedicó el número 8 al tema de las Mujeres, violencias y resistencias en las que escribieron reconocidas feministas del país. La historiadora Magdala Velásquez publicó un corto artículo en la revista *Nova & Vetera No. 40* (2000): “Anotaciones para una postura feminista en torno a las mujeres, la guerra y la paz”. Por último destacamos los esfuerzos de las organizaciones y de sus activistas por publicar sus reflexiones en revistas y documentos propios, tres ejemplos son ilustrativos de este estilo: Mujeres Pazíficas (2002): *Que nuestro cuerpo no sea escenario de guerra*, Santiago de Cali, Mujeres Pazíficas; OFP (2004): *Documento propositivo en construcción. Memorias I. Movimiento social de mujeres en contra de la guerra*, Barrancabermeja, Organización Femenina Popular; Pineda, Rocío (1997): *Mujeres entre la guerra y la paz: Lisistratas colombianas a las puertas de un nuevo milenio*, Conferencia presentada en el V Congreso Nacional de la Unión de Ciudadanas de Colombia en Cali- Octubre 12 de 1997.

En todas estas interacciones políticas es cada vez más visible la subversión de los valores de la sociedad patriarcal. Un proceso que evidencia modificaciones y fracturas en la identidad tradicional de las mujeres y que a nuestro juicio conforman un nuevo sujeto político. Acudir a estos elementos fortalece su capacidad de convocatoria, su autoridad moral y su idoneidad para lograr acuerdos dentro de la pluralidad construida en el devenir histórico del feminismo, del movimiento popular de mujeres y de la investigación académica sobre la realidad de las mujeres (Tobón, 2003). Salen de sus reclusiones y se enfrentan al espacio público en un acto reivindicativo de una ciudadanía negada. En esa salida de los confines de lo doméstico y en su entrada a los umbrales de lo público transgreden las fronteras de lo político, desafían la tradición y las normas culturales, traspasan los límites geográficos, las normas invasivas impuestas por los actores armados y las fronteras señaladas por sus padres, maridos e hijos. No obstante, cruzar ese umbral y construir discursos movilizadores no es una tarea fácil.

Esa insubordinación incrementa el número de víctimas del poder autoritario, y las convierte en blanco de los organismos de justicia privada. En consecuencia, la posibilidad que tienen de ganar visibilidad en la vida política depende de su capacidad para concebir y desarrollar estrategias destinadas a sobreponerse a los obstáculos no sólo culturales, sino también reales.

No obstante, como plantea Judith Butler (2001), quien desde una posición feminista, rechaza la identidad femenina deba ser el fundamento del movimiento feminista. Para ella, la unidad de las mujeres no puede apoyarse en un sólo atributo, le incomoda la dimensión normativa implícita en los intentos de establecer una identidad femenina común y propone que ésta no gire en torno al binario masculino/ femenino. Argumenta que este aspecto queda separado políticamente de la constitución de la clase, la raza, la etnicidad y otros ejes que conforman la identidad. Un planteamiento apoyado, en parte, por Donna Haraway (1995) para quien en estos casos es más preciso hablar de alianzas y coaliciones por afinidad que por identidad. Pues en estas acciones colectivas no es claro que sus integrantes viren hacia la unidad de pensamiento y acción en torno al género. Lo que se demuestra, más bien, es la diversidad de posiciones de sujeto de sus militantes, así como la variedad de comunidades a las que pertenecen sumadas a las resistencias individuales a despojarse de la feminidad esencial.

En sus acciones colectivas ellas convierten lo personal en político cuando perciben la necesidad de reclamar sus derechos a través de los canales democráticos o por una acción política disruptiva. Con su activismo en estas organizaciones dan “sentido a su vida”, resignifican la experiencia femenina y reelaboran la maternidad. Por ello, en su consigna más representativa, se posicionan frente a los actores armados y plantean que “no van a parir ni a forjar más hijos e hijas para la guerra. Ni soldados ni víctimas de una guerra que no les pertenece”. Pero no sólo gritan la consigna, sino que, efectivamente, reducen la natalidad, reclaman sus derechos sexuales y reproductivos y aunque sienten resistencia al aborto, condenan a las autoridades de salud pública y no a quienes recurren a este método. Se apropian de las reivindicaciones feministas y hacen rupturas en su propia subjetividad. Sin embargo, otras mujeres de estas mismas organizaciones consideran inestimable la experiencia única de gestación de un ser vivo, que les da también la conciencia de su papel en la reproducción de la especie y quieren conservar esa “superioridad” (Touraine, 2005, p. 233).

En esta nueva experiencia política resignifican la maternidad, entendida como uno de los campos donde se realiza el paso del ser al deber ser “donde la posibilidad biológica de parir se convierte en mandato por medio de la afirmación de un instinto materno universal en las mujeres. Dicha afirmación garantiza, en primer lugar que asuma ella misma que tiene que ser madre y, en segundo lugar, que gracias a ese instinto la maternidad biológica se transforme en maternidad sociológica— es decir, en la maternidad como hecho social una vez superado el dato biológico” (Osborne: 1993, p.77). Su salida a la arena política insinúa una desestructuración y reconstitución de los referentes identitarios tradicionales del ser mujer. Pasan de la función reproductiva, puramente biológica, a una acción política de reclamo y vindicación de su papel como madres. Toman “la maternidad como una oportunidad para ejercer la libertad y extraer legitimidad para interpelar el poder político” (Magallón, 2006, p. 234). Asumen ser madres con otros sentidos, aunque se topan con barreras culturales para el ejercicio de una maternidad comprometida con las transformaciones sociales y políticas y con la construcción conjunta de una cultura de paz. A pesar de ello, construyen una nueva identidad alrededor de la solidaridad maternal.

Conclusiones

La separación público/ privado es un mecanismo que contribuye a la exclusión de las mujeres del ejercicio político. No obstante, como se constata en este artículo, cuando la violencia irrumpe en el hogar y vulnera sus derechos, esas mujeres marginadas, más presionadas por el dolor que por la convicción ideológica, participan en organizaciones que denuncian su vulnerabilidad. Como plantean las feministas, la guerra en el país ha despertado más la conciencia de género que el propio movimiento, a pesar de que el reto feminista es transformar los procesos de conciencia de las mujeres.

Las mujeres con menor formación académica, sin ninguna adscripción política y con una ciudadanía restringida demuestran con distintas acciones colectivas su capacidad para exigir la verdad, la justicia y la reparación a los actores armados y al Estado. Denuncian las violaciones a sus derechos fundamentales en instancias internacionales y establecen alianzas con otros sectores para afianzar su lucha política.

Entre los rasgos de la participación política por la paz y en contra de la guerra de las mujeres sobresale la inscripción en procesos dirigidos por sectores sociales tradicionalmente excluidos como el campesino, el popular, el indígena y el afrodescendiente, que no sólo son víctimas de las acciones armadas, sino también de la violencia estructural.

Su activismo en estas organizaciones las convierte en líderes que incursionan en la política convencional y en la no convencional. Su actividad se amplía al nivel local, a las corporaciones públicas, al ámbito regional y nacional y a la dirección de instancias gubernamentales. Pero sus logros más importantes son las posiciones que ocupan en las organizaciones de la sociedad civil.

Aunque su lucha inicial denuncia la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado y promueve la incorporación de la perspectiva de género en los acuerdos de paz con los actores armados, sus iniciativas también generan otros procesos asociados con la defensa de la vida, la cultura, el territorio, la autonomía, la inclusión social y la ampliación de la ciudadanía. Por ello, plantean la reconciliación nacional como objetivo final de las negociaciones de paz. Más allá de la

Acciones colectivas de las mujeres en contra de la guerra y por la paz en Colombia desmovilización de los combatientes, proponen la participación de los grupos excluidos en la construcción de una sociedad más incluyente, igualitaria y democrática. Es decir, que su activismo por la paz y en contra de la guerra amplía sus objetivos, en la medida en que su experiencia se incrementa y responde a los efectos políticos, económicos, sociales y culturales del conflicto armado, así como de otros procesos de discusión internacional sobre los derechos de las mujeres.

Bibliografía

- BREINES, I. GIERYCZ, D. y REARDON, B. (2002). *Mujeres a favor de la paz*. Madrid, Unesco- Narcea ediciones.
- BUTLER, Judith (2001). *El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad*. México, Paidós.
- CODHES (2007). Boletín 69, 12 de septiembre de 2007.
- FLAX, Jane (1986). "Gender as a Social Problem: in and Feminist Theory". *American Studies/Amerika Studien*. Journal of the German Association for American Studies.
- FRASER, Nancy (1997). *Iustitia interrupta*. Bogotá, Siglo del hombre- Universidad de los Andes.
- GUSFIELD, J. y LARAÑA, E. (1994). *Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad*. Madrid, CIS.
- HARAWAY, Donna (1995). *Ciencia, cyborgs y mujeres*. Madrid, Cátedra.
- IMP (2005). *Verdad, justicia y reparación: Derechos también para las mujeres*. Bogotá, Asdi, Federación de trabajadores públicos de Suecia.
- LAGARDE, Marcela (1993). *Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas*. México, UNAM.
- MAGALLÓN, Carmen (2006). *Mujeres en pie de paz*. Madrid, Siglo XXI.
- McADAM D. TARROW, S. y TILLY, C. (2005). *Dinámica de la contienda política*. Barcelona, Hacer editorial.
- McCARTHY, J. y ZALD, M. (1977). "Resource Mobilization and social Movements: A Partial Theory", *American Journal of Sociology*. 86, 6, pp. 1212-1241.
- MELUCCI Alberto:
1994 "Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales", *Zona abierta* 69. pp. 153-180.
1995 "The Process of Collective Identity, en H. Johnston y B. Klandermans (eds). *Social Movements and Culture*. Minneapolis, University of Minnesota.
1996 *Challenging Codes. Collective Action in the Information Age*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado (2001a). *Primer avance del informe sobre violencia contra las mujeres y las niñas en el conflicto armado colombiano*. Bogotá, en www.mujieryconflictoarmado.com consultado en agosto de 2006.
- Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado (2001b). *Informe sobre la violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia. Primer informe segundo avance 2001*. Bogotá, Ántropos.
- Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado (2003). *Informe sobre la violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia. Tercer informe-2002*. Bogotá, Ántropos.

- Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado (2004). *Mujer y conflicto armado. Informe sobre la violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia. Cuarto informe enero de 2003- junio de 2004*. Bogotá, Antropos.
- MOLINEUX, Máxime (2003). *Movimientos de mujeres en América Latina. Estudio teórico comparado*. Madrid, Cátedra.
- MOORE, Henrietta (1996): *Antropología y feminismo*. Madrid, Cátedra.
- Naciones Unidas (2000). *Resolución 1325*. Consejo de seguridad, sesión 4213ª.
- NICHOLSON, Linda (2003). “La interpretación del concepto de género” en S. Tubert (ed) *Del sexo al género*. Madrid, Cátedra, pp. 47-82.
- OLSON, Mancur (1992). *La lógica de la acción colectiva*. México, Limusa.
- OSBORNE, Raquel (1993). *La construcción sexual de la realidad*. Madrid, Cátedra.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2003). *El conflicto: callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano-Colombia 2003*. Bogotá.
- RANGEL, Alfredo (2005). “¿A dónde van los paramilitares?” en Alfredo Rangel (ed): *El poder paramilitar. Narcotráfico, poder local, balance estratégico y perspectiva internacional*. Bogotá, Fundación seguridad y democracia. pp. 1-11.
- Red Nacional de Mujeres y Confluencia Nacional de redes de mujeres (2003). *Informe derechos de las mujeres en Colombia*. Bogotá.
- RUDDICK, Sara (1990). *Maternal Thinking. Toward a Politics of Peace*. Londres, the Women Press.
- RUIZ, Martha (ed) (2003). *Ruta Pacífica de las Mujeres. Las mujeres no parimos hijos ni hijas para la guerra*. Bogotá, Ruta Pacífica y Suippcol.
- Ruta Pacífica (2006). www.rutapacifica.org.co consultada en agosto de 2006.
- SCOTT, Joan (1990). “El género: una categoría útil para el análisis histórico” en J. Amelang y M. Nash (eds.). *Historia y género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea*. Valencia, Alfons el Magnanim, pp. 23-56.
- TARROW, Sidney :
- 1991 *Struggle, Politics and Reform: Collective Action and Cycles of Protest*. New York, Cornell University Press.
- 1997 *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid, Alianza.
- TILLY, Charles (1978). *From mobilization to Revolution*. Reading, Adison-Wesley.
- TOBÓN, Gloria (2003). “Afirmar la vida, develar la guerra: las agendas de paz desde las mujeres” en G. Tobón y M. Martínez (eds.) *El tiempo contra las mujeres. Debates feministas para una agenda de paz*. Bogotá, Humanizar, pp. 15- 26.
- TOURAINÉ, Alain :
- 1987 *El regreso del actor*. Buenos Aires, Universitaria.
- 2005 *Un nuevo paradigma. Para comprender el mundo de hoy*. Barcelona, Paidós.
- YOUNG, Kate (2000). “El potencial transformador en las necesidades prácticas: empoderamiento colectivo y el proceso de planificación” en M. León (comp.). *Poder y empoderamiento de las mujeres*. Bogotá, UNAL. Tercer Mundo, pp. 99-118.
- Voces de mujer. Boletín 12 noviembre –diciembre 2004, Bogotá: IMP.
- Voces de mujer. Boletín 14 junio-julio 2005. Bogotá, IMP.
- WOOLF, Virginia (1977). *Tres Guineas*. Barcelona, Lumen.

GUERRA E IDENTIDAD POLÍTICA: EL CAMPO DE MARTE ESTADOUNIDENSE POSTMODERNO*

Heriberto Cairo Carou**

Resumen

El presente artículo aborda el estudio de la faz interna de la “guerra contra el terrorismo”, tal como la ha definido la administración Bush. Haciendo uso de las nociones de *Campus Martius* y de *herotopías* (de Michel Foucault), el autor esboza una visión crítica de la política de seguridad interna en los Estados Unidos, luego de los atentados del 11 de septiembre.

Abstract

This paper deals with the analysis of the domestic side of "war against terrorism", as defined by the Bush administration. Using the concepts of *Campus Martius and heterotopías* (by Michel Foucault), the author depicts a critical vision of the United States' domestic security policy after the attacks of september 11.

Palabras Clave: Campo de Marte, Guerra e Identidades Políticas, Estados Unidos de Norteamérica, Territorio, Seguridad nacional, Terrorismo, 11 de Septiembre.

Keys Words: *Campus Martius*, Ward and Identity, United States, Territory, National Security, Terrorism, September 11.

* La elaboración del presente artículo se benefició en sus inicios de la ayuda de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (Ref. PR2003-0058), a la que el autor agradece su apoyo.

Artículo recibido el 23 de agosto de 2007

Aprobado el 3 de octubre de 2007

** Heriberto Cairo Carou es Profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid.

La conjunción entre guerra y territorio se encuentra en el centro de la definición del Estado moderno, tal y como lo manifiesta Weber en sus trabajos. La guerra es la expresión máxima del “monopolio de la violencia física legítima” que detentaría el Estado, y el “territorio” del Estado sería el ámbito de referencia de la misma. Constituyen, por tanto, el *vortex* de las prácticas estatales. Pero la guerra (y la paz) son conductas territoriales en más sentidos. No sólo ocurren en conjuntos espaciales concretos, sino que son el resultado de geoestrategias específicas, y son hechos inteligibles mediante discursos territoriales particulares. Esta diversidad de relaciones entre espacio y guerra tienen que ver con las diferentes caras de la guerra, que resume Shapiro:

[L]a Guerra en el Estado moderno muestra dos caras diferentes. La más prominente es [estratégica], [...] la guerra como instrumento de la política del Estado, y, como tal, la fisonomía de la guerra representa en sí misma la expresión de una verdad logística más profunda: la necesidad del Estado de enfrentarse a un peligroso mundo desordenado mediante el uso de la fuerza [...] [Ciertas] características de la guerra [están unidas] con proyectos duraderos del Estado: mantener la seguridad, despejar espacios para un funcionamiento vital y efectivo, cumplir con las obligaciones respecto a los amigos, etc. [...] La otra cara de la Guerra es ontológica [...]; se centra más en la afirmación de la identidad que en los efectos instrumentales del uso mortal de la fuerza (Shapiro, 1996, p. 457).

En este trabajo se aborda el estudio de la faz interna de la “Guerra contra el terrorismo”, es decir, vamos a mirar hacia lo que ocurre en el interior de las fronteras estadounidenses con motivo de esa guerra. Utilizo la institución romana del *Campus Martius* y el concepto foucaultiano de heterotopías para deconstruir el conjunto de prácticas que conforman la seguridad nacional tras los atentados del 11 de septiembre. En general, se intentarán contraponer textos de diversa índole con la “realidad” a fin de leer otros significados además de los intencionados, y poder entender mejor el sistema de conocimiento a partir del que surgen, así como su capacidad productiva. Esa es la utilidad del concepto de “heterotopía” de Foucault. Las heterotopías son lugares que se definen “por vía de contraste con las utopías”, como “lugares reales que son algo así como contra-espacios, un tipo de utopía efectivamente representada” (Foucault, 1967). Entre las utopías y las heterotopías sería posible distinguir experiencias de “espejo”: “Me veo a mi mismo allí donde no estoy, en un espacio irreal, virtual que se abre detrás de la superficie [del espejo]”, y entonces el espejo es una utopía pero es también una heterotopía “en la medida que el espejo existe en la realidad, donde ejerce una suerte de contra-acción sobre la posición que ocupo”. Por consiguiente, las heterotopías pueden permitirnos leer espacios reales porque en las heterotopías “los lugares reales que pueden ser encontrados en la cultura, pueden ser representados, contestados e invertidos simultáneamente” (Foucault, 1986, p. 24).

Se trata en definitiva de mostrar como las nuevas postmodernas “guerras virtuosas”, desarrolladas fuera de Europa Occidental y América del Norte reconfiguran la política, el territorio y la soberanía en los rincones del mundo en que se desarrollan, pero también en Occidente, y en particular en los Estados Unidos.

Las transformaciones de la guerra y las narrativas de la guerra global contra el terrorismo

La propensión de los Estados-nación modernos a la guerra dio un nuevo giro tras el fin de la Guerra Fría, que para algunos analistas supuso también el fin del “siglo XX largo”, es decir

de toda una época que se habría con las rivalidades interimperialistas que terminaron por conducir a la Primera Guerra Mundial y se cerraba con la caída de muro de Berlín. En todo este tiempo los Estados Unidos habían pasado de ser una potencia desafiante en el concierto mundial a una situación en la que quedaba como única superpotencia, habiendo pasado, entre medias, por una transición geopolítica que la había conducido a una situación hegemónica poco después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Las guerras del siglo XX marcaron, por lo tanto, también el ascenso de los Estados Unidos como potencia.

Pero desde los años 1990 se han producido más y más referencias acerca de la aparición de “nuevas guerras” (Dodds, 2000). Kaldor (1999), por ejemplo, ha usado el término para referirse a los conflictos que tuvieron lugar tras el fin de la Guerra Fría en lugares tan diferentes como la antigua Yugoslavia, Ruanda o Sierra Leona, donde grupos armados militares, paramilitares y de diversas insurgencias se habían entablado luchas violentas. La política de identidad había desempeñado un papel importante en estas guerras, pero no está tan claro que sólo por estas características se aparten significativamente de los patrones históricos de la guerra; por ejemplo, Gray afirma que aunque la Guerra del Golfo “tiene algo de nuevo”, la guerra desde 1945 se ha caracterizado por el empleo de armas de alta tecnología y por la “movilización militar permanente” (Gray, 1997, p. 21). El mismo Gray nos ofrece una larga lista de términos para describir este nuevo tipo de guerra, y termina por elegir el de “guerra postmoderna”, en tanto que opuesta a guerra “moderna”, debido a sus similitudes con otros fenómenos sociales (postmodernos). En cualquier caso, el fin de la Guerra Fría significó algo más que un simple cambio en el orden geopolítico mundial, lo que incluye la promoción política e ideológica del concepto de “guerra virtuosa” (Der Derian, 2001), un término que sigue siendo útil para discernir las características de las guerras de la Posguerra Fría. Der Derian las resume en referencia la guerra liderada por Estados Unidos en Afganistán:

Llamo guerra virtuosa a este nuevo conflicto híbrido, que se ha desarrollado a partir de las tecnologías de campo de batalla de la Guerra del Golfo y las campañas aéreas de Bosnia y Kosovo; recurre a la doctrina de la guerra justa (cuando es posible) y a la guerra santa (cuando es necesario); clona la info-guerra de la vigilancia global con la guerra-en-red de medios de comunicación múltiples. En el nombre de la santísima trinidad del orden internacional (mercado libre global, Estados soberanos democráticos e intervenciones humanitarias limitadas) los Estados Unidos han encabezado una revolución en asuntos militares (RAM)¹ que subyace en la guerra virtuosa (Der Derian 2002, p. 8).

Es importante examinar los diferentes elementos de esta definición. La centralidad de la norma de integridad territorial en el orden de la Posguerra Fría ya se ha subrayado antes, pero hay que hacer hincapié una vez más que se trata de una transformación necesaria, de una precondition, para el desarrollo de las guerras virtuosas.

La revolución en asuntos militares a la que nos hemos referido antes constituye la dimensión militar de un cambio más importante que no es sólo tecnológico, sino que también tiene una dimensión social; es un cambio que se ha “iniciado debido a toda una serie de factores, que incluyen la globalización del capital, la transformación de la organización empresarial, la capitalización de las tecnologías digital y molecular, y el avance hacia economías basadas en el conocimiento y sociedades en red” (Dillon y Reid, 2001, p. 58). Autores como Ek (2000) o Latham (2002) estudian el concepto de RAM y los discursos asociados al mismo, basta ahora

¹ Las siglas en inglés son RMA (*Revolution in Military Affairs*).

señalar que la RAM hace menos claros los límites entre los asuntos exteriores e interiores de un Estado e implica transformaciones características en el modo de guerra. Más tarde me ocuparé de la primera cuestión, pero en relación a la segunda, es importante hacer hincapiés

En el hecho de que la RAM implica algo más que un simple cambio tecnológico. Es cierto que el empleo de alta tecnología ha sido habitual en la Guerra del Golfo, en Bosnia, Kosovo, Afganistán o en la Guerra de Irak, bien sea directamente para atacar al enemigo o para apoyar a las facciones locales aliadas, y también ha surgido un modelo de “guerra sin bajas” de esos conflictos (Kaldor, 2002). Aunque satisface muchos intereses (los del complejo militar-industrial o los de los ideólogos neoconservadores en busca de nuevos enemigos, entre otros), sus efectos más directos han sido ontológicos por naturaleza y han reafirmado una identidad estadounidense: “[Estos conflictos] no implican bajas estadounidenses, y pueden ser vistos en televisión, y demuestran la determinación y el poderío del gobierno de los Estados Unidos” (Kaldor, 2002). En pocas palabras, “desde la perspectiva de una historia coyuntural, [...] la RAM aparece como una transición de un modo social de guerra, la Guerra Total Industrializada, a otro, la Guerra post-Heroica o Deporte-Espectáculo” (Latham, 2002, p. 263).

Pero como señalaba antes nos vamos a ocupar de las transformaciones actuales en “la otra cara de la Guerra”, la ontológica, la que busca afirmar la identidad de las poblaciones en los Estados-nación, y a la hora de hacer esto es conveniente empezar recordando el anuncio de la más noticiosa de las últimas acciones bélicas de Estados Unidos en el planeta, la así llamada “Operación Libertad Iraquí” (*Operation Iraqi Freedom*), que el 19 de Marzo de 2003 según el presidente George W. Bush se comenzaba a ejecutar para lograr dos objetivos principales:

Mis conciudadanos, en este momento, fuerzas americanas (estadounidenses) y de la coalición están en las primeras etapas de las operaciones militares encaminadas a desarmar Irak, liberar a su pueblo y defender al mundo de un grave peligro².

Está claro que Bush ofrece un abanico de razones suficientemente amplio, que se inscribe en varias narrativas que hacen inteligible la acción, a saber: la existencia de armas de destrucción masiva que amenazaban la seguridad de los Estados Unidos, la opresión del pueblo iraquí por un dictador sin piedad y la existencia de un peligro para el mundo. El presidente de los Estados Unidos y los otros promotores de la acción cambiaron —y siguen cambiando, hoy en día la narrativa más “popular” es la que asocia la presencia de tropas extranjeras al intento de impedir una guerra civil interétnica en Irak de una a otra, según iban dictando las nuevas situaciones; por ejemplo, las manifestaciones masivas contra la guerra que se desarrollaron en todo el mundo animaron a usar más los argumentos acerca de la “liberación de Irak”. Pero el uso de uno no implica que sea más “real” o “relevante” que el otro, sólo hace más inteligible la acción en un contexto específico.

El ambivalente uso de estas narrativas por la administración Bush se capta bien en una tira de dibujos de Tom Tomorrow (Ilustración 1). El autor usa la película *Matrix reloaded*, una continuación de la original *Matrix* —que trata el tema de la permanente falta de fijeza de la realidad virtual, en la que uno no puede estar nunca seguro de la “realidad” de que

² “My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger” *President Bush Addresses the Nation* (March 19, 2003).

En <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03/iraq/20030319-17.html> (revisado el 24-05-2003).

“realmente” está pasando—, para mostrar la ambigüedad del discurso del gobierno estadounidense. Tomorrow, el personaje de la tira, intenta responder a la cuestión general de “¿Cuál es la Matrix del Partido Republicano?” “Es una ilusión que nos envuelve a todos nosotros... en la que la realidad misma es algo maleable... sujeto a constante revisión”. Uno de los personajes de la viñeta lo ilustra: “¡No importa si no encontramos Armas de Destrucción Masiva, porque *realmente* fuimos a la guerra para liberar al pueblo iraquí!”. Pero esta es también una historia acerca de la performatividad del discurso y la inteligibilidad de las acciones. No importa si las razones que se dan son verdad o mentira; lo que importa es ofrecer una explicación de la racionalidad de la acción que sea convincente. Nadie entendería la Guerra de Irak en la actualidad en términos de los “deseos del Emperador”, y sólo unos pocos —aunque sospecho que su número va en incremento— lo entenderían como “voluntad de Dios”. Pero la “defensa del mundo” o la “libertad del pueblo iraquí” son narrativas perfectamente inteligibles, como hemos visto antes.

Pero, además, la búsqueda de la “verdad”, la indagación acerca de cuál fue la auténtica razón para la iniciar la Guerra de Irak no es sólo algo inútil, sino que además nos desviaría de la auténtica cuestión, ya que, como nos señala Zizek:

Deberíamos estar muy atentos a no pelear falsas batallas: los debates sobre la maldad de Sadam Husein, sobre cuánto costará la guerra, etc., son falsos debates. El foco se debería centrar sobre lo que efectivamente está pasando en nuestras sociedades, sobre que tipo de sociedad está surgiendo aquí como resultado de la “Guerra contra el terror”. En vez de hablar sobre agendas conspirativas ocultas, uno debería desplazar el foco sobre lo que está ocurriendo, sobre qué tipo de cambios están teniendo lugar aquí y ahora. El resultado último de la Guerra será el cambio de nuestro orden político (Zizek, 2003).

Guantánamo, las detenciones secretas, las leyes patrióticas son señales claras de que algo ha cambiado *aquí*, pero ese *aquí* no es sólo los Estados Unidos, como muestran los vuelos de la CIA por todo el mundo con detenidos para ser torturados en cárceles secretas, con la complicidad o, al menos, la “distracción” de los gobiernos europeos. Pero exploraré, antes que nada alguno de los sentidos de la política como continuación de la guerra, de la que nos hablaba Foucault (1997), a través de las prácticas representaciones asociadas con un espacio consagrado al culto de la guerra: el *Campus Martius*.

El *campus martius* y sus sucesores

El *Campus Martius* en la antigua Roma estaba consagrado a Marte, el dios de la guerra. En los primeros siglos tras la fundación de la ciudad era una explanada situada en el exterior de la ciudad, más allá del *pomerium* o límite de carácter sagrado de la urbe. En el *Campus Martius* se hacían los ejercicios militares del ejército y juegos gimnásticos de los jóvenes, y, por su emplazamiento fuera de la ciudad, era un lugar adecuado, cuando había que dar audiencia a un general con *imperium* o a parlamentarios enemigos que no podían entrar en la ciudad, o para la celebración de los *triumphs*, los éxitos militares. En suma, se usaba como “lugar para las asambleas de los ciudadanos, en su condición militar como ejército y en su condición civil, como *comitia centuriata*” (Platner, 1929, p. 92). La *comitia centuriata* resultó de las reformas de Servius Tullius, que fue el sexto rey de Roma en el siglo VI antes de nuestra era. Preocupado por hacer de Roma una potencia mayor y más capaz de competir con sus enemigos, llegó a la conclusión de que la incorporación de los plebeyos al servicio de las armas y al pago de tributos sería una medida adecuada. A tal fin estableció una nueva

división del pueblo, una nueva clasificación de la vida, basada no en el nacimiento, como la antigua división en tribus, sino en la residencia, la propiedad y la edad. Estas nuevas agrupaciones, que constituirían la nueva base para la organización del ejército, las *centurias*, en poco tiempo se convirtieron en una división política también, ya que asumieron los papeles políticos que habían tenido las asambleas de patricios, la *comitia curiata*.

La *comitia centuriata* reunía a patricios y plebeyos, es decir, a todos los ciudadanos sin distinciones, y no perdió nunca su carácter militar; por ejemplo, la llamada a la asamblea era realizada mediante trompetas, ya no por la voz del *lictor*, y ya no se reunía en el Foro, sino en el *Campus Martius*. Y las votaciones se realizaban por centurias en el *ovile* o *saepa*, un espacio cerrado situado dentro del *Campus Martius*. De esta forma el lugar destinado a la (celebración de) la guerra se conectaba inseparablemente a la política interna en la organización espacial clásica de la ciudad. De nuevo nos encontramos con otra muestra de cómo la política es una continuación de la guerra con otros medios, según el ya mencionado aforismo foucaultiano.

Hay que hacer también hincapié en que el *Campus Martius* no era por completo un espacio “público”, al menos en el sentido moderno del término —es decir de libre acceso para todo el mundo—, porque de la asamblea de centurias estaba excluida mucha gente: los extranjeros (*peregrini*), los esclavos, las mujeres y los *ararians*³ (Schmitz, 1875). Por lo tanto, se trataba de un lugar cuidadosamente delimitado según reglas estrictas que incluían/excluían los cuerpos pertinentes. Era, por lo tanto, claramente una heterotopía, en el sentido de Foucault, con una de sus características sobresalientes: “un sistema de apertura y cierre que, a la vez, las aísla y las hace penetrables” (1967 [1986, p.26]).

El *Campo de Marte* y la *asamblea de ciudadanos* se reconstituyen en otros momentos, es decir, el ejército y la guerra vuelven a desempeñar un papel constitutivo del cuerpo político en otras circunstancias y lugares. Así, el *Campo de Marte* moderno se constituirá en los barracones de los ejércitos permanentes tras la Revolución francesa, y la *nación* será la nueva *comitia centuriata*. En este sentido, Norton (1988) señala acertadamente que el ejército moderno representa la idea de la nación como una unidad, que es un concepto que magnifica la percepción de la utilización de la fuerza armada como legítima, por lo que vincula estrechamente a los ciudadanos al ejército. El ejército es así un signo de la nación.

Sin embargo, es cierto que estos ejércitos nacionales permanentes nacieron en estrecha relación con la defensa y conquista de territorios y con la acumulación de capital; por lo tanto, antes de ser signos de unidad nacional fueron exclusivamente instrumentos de poder económico y político de los que controlaban los nacientes Estados europeos de los siglos XVI y XVII. Pero después de 1780 y la Revolución industrial, se produjeron cambios profundos en la estructura y, sobre todo, en la organización de clases, que tomó una forma ampliamente *nacional*, es decir, que se organizó en la práctica dentro de las fronteras estatales, por más que las clases principales *estructuralmente* fuesen transnacionales. "Esto significó que la *praxis* de clase no pudo supervisar la geopolítica", pero la guerra continuó siendo racional, aunque ya no lucrativa, y privativa del Estado, con un factor que aumentaba la probabilidad de que ocurriese: "la forma en que la lucha de clases se resolvió en ciudadanía había hecho del mundo un lugar más peligroso" (Mann, 1987, p. 66). En definitiva, la guerra se había convertido en "guerra popular".

³ *Ararians* eran contribuyentes al fisco de Roma, pero no tenían derecho de sufragio (Schmitz, 1875, pp. 330-340).

Schama (1989) describe el “nacionalismo militarizado” de la Revolución francesa no como un subproducto de las circunstancias sino como algo intrínseco a la misma. Pick (1993) señala que hay que mirar hacia fuera y hacia dentro, para poder ver la paradoja de una Revolución que a la par que apelaba a valores universales, a la humanidad, más allá de las fronteras de la República, también contenía un poderoso impulso particularista; por ejemplo, Robespierre demandaba en 1793 la expulsión de los generales extranjeros del ejército “a los que hemos encomendado imprudentemente el mando de nuestro ejército” (cit. en dic, 1993, p. 160). Y era necesario purgar el ejército de extranjeros, porque precisamente el ejército iba a ser el encargado de enfrentarse a los peligros extranjeros.

Debe quedar claro, por consiguiente, que los ejércitos permanentes no sólo pueden desempeñar las estrictas funciones económicas y políticas para las que fueron creados, sino que de hecho, en los tiempos actuales, la capacidad del ejército de representar a todas las gentes que están encuadradas en un Estado sólo es posible gracias a que el ejército ha sido producido como signo de la nación (Norton, 1988, p. 147). Y esta característica esencial se mantiene a pesar de los cambios que se han producido en períodos recientes. De este modo, en los países centrales y semiperiféricos, todos los ciudadanos pueden participar de forma vicaria en las guerras en las que combate "su" ejército, alegrarse y enorgullecerse con las victorias de "sus" muchachos" o entristecerse y avergonzarse de las derrotas de los "suyos", conforme al nuevo modo de guerra, la Guerra Deporte-Espectáculo, que hemos descrito antes. En definitiva, los ejércitos en esos países han entrado de lleno en la sociedad del espectáculo y producen guerras para consumo interno y legitimación del sistema social, pero guerras que causan miles y millones de muertos. Pero esta ya es una historia más postmoderna.

El campo de marte (estadounidense) en la posguerra fría

El *Campus Martius* tenía una localización precisa, como acabamos de ver, pero, ¿dónde está el *Campo de Marte* actual? Por supuesto que no ocupa un lugar material o físico determinado; para aproximarnos a su perfil debemos explorar la faz ontológica de las guerras virtuosas postmodernas, lo que voy a hacer, primero, a través del análisis de la reconfiguración de las “estructuras espaciales domésticas” (Williams, 2003, p.288) en los Estados Unidos tras el 11 de septiembre de 2001, y, después, mediante el examen de los significados y discursos asociados a los Cementerios Nacionales en los Estados Unidos. Esto nos permitirá entender mejor la configuración de la identidad “americana” a través de la guerra.

Según afirmaba en 2002 el entonces Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, una guerra se puede iniciar preventivamente en el marco de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos:

[D]efender a los Estados Unidos requiere tareas de prevención, autodefensa y a veces ataques preventivos. No es posible defenderse contra cualquier clase de ataque concebible en cada lugar concebible en cualquier minuto del día o de la noche. Defenderse contra el terrorismo y otras amenazas del siglo XXI puede requerir que llevemos la guerra hasta nuestros enemigos. La mejor, y en algunos casos, la única defensa es un buen ataque⁴.

⁴ “[D]efending the U.S. requires prevention, self-defense and sometimes preemption. It is not possible to defend against every conceivable kind of attack in every conceivable location at every minute of the

Estas palabras de Rumsfeld no con sólo una afirmación militarista agresiva y una defensa de la guerra preventiva, sino que implícitamente formulan el colapso de la distinción entre el interior y el exterior en el terreno de la acción militar. El espacio interno queda abierto al escrutinio del ejército:

tras el 11S la legislación sobre la seguridad del 'territorio nacional' (homeland) [...] permite niveles sin precedentes de vigilancia interior, e insinúa la posibilidad de que operen tribunales militares en el sistema jurisdiccional interno de los Estados Unidos, [y] difumina muchas de las anteriores distinciones entre la lucha contra la delincuencia interna y la guerra global (Shapiro, 2004, p.178).

Este es un cuestionamiento definitivo, como afirma Shapiro, de la presunción de Giddens de que la pacificación de la población del Estado haya tenido como consecuencia la subsiguiente retirada del ejército de los asuntos domésticos (Shapiro, 2004, pp. 178-9). Sin embargo, no sería justo pensar en que esta es una posición característica de los neoconservadores radicales de la administración Bush, porque el ex presidente William Clinton ya hizo una declaración de índole parecida en el discurso inaugural de su primer mandato, en el que se afirmaba la creciente dificultad de distinguir entre asuntos exteriores y asuntos internos, que en última instancia le llevaba a pedir nuevas formas de ver el mundo:

Debemos aprender a negociar una nueva geografía, en la que los límites sean irrelevantes y las distancias sin significado (Clinton 1997, cit. en Ek, 2000, p. 862).

Por supuesto, que no es la primera vez que los militares se han movilizado para intervenir en asuntos internos de un país, dentro o fuera de los Estados Unidos. Por poner un caso, las dictaduras militares latinoamericanas recurrieron frecuentemente en sus discursos de seguridad nacional a narrativas en las que se incluían imágenes referentes a ese colapso entre interior y exterior, como era la idea de las "fronteras internas" que, al ser también fronteras, podían ser patrulladas por militares, intentando legitimar así su intervención.

Lo novedoso del caso es que la intervención formal de los militares en asuntos internos del Estado, hasta ahora privativos de la policía, tiene lugar ahora en países democráticos. En el documento de Estrategia Nacional para la Seguridad del Territorio Nacional (*National Strategy for Homeland Security*) de los Estados Unidos, se hacen provisiones específicas sobre el uso de las fuerzas armadas en apoyo de las autoridades civiles:

Las fuerzas armadas fueron una parte integral de la respuesta de nuestra nación a los ataques terroristas del 11 de Septiembre [...] En Abril de 2002, el presidente Bush aprobó una revisión del Plan de Comando Unificado (Unified Command Plan) que incluía el establecimiento de un nuevo comando de combate unificado, el Comando Norte de los Estados Unidos (U.S. Northern Command). Este Comando será responsable de la defensa del territorio nacional y del apoyo a las autoridades civiles (Office of Homeland Security, 2002, p. 44).

day or night. Defending against terrorism and other emerging 21st century threats may well require that we take the war to the enemy. The best, and in some cases, the only defense, is a good offense" Secretary Rumsfeld Speaks on "21st Century Transformation" of U.S. Armed Forces (transcript of remarks and question and answer period). National Defense University, Fort McNair, Washington, D.C. (January 31, 2002). En <http://www.defenselink.mil/speeches/2002/s20020131-secdef.html> (revisado el 15-05-2003).

Según Williams, el terrorismo y las medidas antiterroristas están generando una nueva “normatividad”, esto es, nuevos “principios éticos que orientan la conducta humana, así como los límites constitucionales e institucionales de las acciones del gobierno que pudieran violar esos principios” (2003, p. 274-5). Ciertas privacidades y derechos que antes eran respetados, ya no lo serán más, y las estructuras espaciales asociadas con ellos también han cambiado. Se está construyendo una nueva “normalidad” mediante el uso de tres tipos de técnicas: “el control del movimiento en el espacio; el control del acceso a lugares, y la re-definición de la escala de las conductas políticas y no-políticas” (Williams 2003, p.284). Todas estas técnicas se manifiestan en diversas situaciones: la omnipresencia de la vigilancia, los rigurosos controles de embarque en los aeropuertos, la detención prolongada de personas (fundamentalmente de religión musulmana) sospechosas de tener vínculos con el terrorismo (aunque no necesariamente con pruebas de esos vínculos) o la erosión de la privacidad de cuerpos y lugares.

Mirando hacia dentro... desde fuera

La imaginación geopolítica del Estado, a primera vista puede parecer que está orientada sólo “hacia afuera”, pero en realidad es parte de un ejercicio político de doble sentido, de ida y vuelta. Porque la imaginación geopolítica de un Estado (Agnew 2003 [2005, p. 2 y ss.]) —es decir, la visión del mundo y de su funcionamiento geográfico que sostienen los intelectuales de Estado— es sólo la otra cara de la identidad nacional, o quizás sea mejor decir que la identidad nacional requiere una imaginación geopolítica que permita definir el Otro contra el que se ha de construir dicha identidad.

David Campbell, por poner un ejemplo, ya puso en relación ambos extremos mostrando como “la identidad de los Estados Unidos de América ha sido escrita y reescrita a través de las políticas exteriores que se aplican en su nombre” (1998a: x). La identidad nacional es en este sentido producida y reproducida en el acto de establecer los límites políticos entre los Otros y Nosotros o los límites jurídicos entre el Interior del Estado y el Exterior del mismo, entre el Peligro y la Seguridad, en definitiva. Y, como toda identidad, la nacional es siempre inacabada, nunca termina de conformarse definitivamente, surge de una inmensa ausencia original y, como propone Ernesto Laclau (1994, p. 3), es mejor contemplarla en términos de proceso, como proceso de identificación. Además, los procesos de construcción de la identidad no son uniformes en todos los países, depende en buena medida de la posición que ocupan en el sistema interestatal.

Como ya hemos visto en el capítulo anterior hay un creciente debate sobre cuál es la naturaleza del poder de los Estados Unidos en la actualidad. Decía que términos como “imperial”, “imperialista” o incluso “colonial” han sido utilizados crecientemente para describir la política exterior americana, pero más allá de esa discusión es importante hacer hincapié en que el objetivo fundamental de la actual política exterior de los Estados Unidos es reafirmar su completa soberanía sin restricciones. Y quizás tengan razón los que interpretan que la acción unilateral en el escenario interestatal o el rechazo de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional no son síntomas de una renovada política imperialista, como la que desarrolló Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico a finales del siglo XIX, sino que su objetivo es más bien reforzar la soberanía estatal. Y Kaldor va aún más allá:

Los Estados Unidos quedan mejor descritos no como un país imperial sino como ‘el último Estado-nación’. Es el único Estado, en este mundo globalizado, que todavía tiene la capacidad de actuar unilateralmente. Su conducta está determinada menos por

consideraciones imperiales que por preocupaciones de su propia opinión pública nacional. La guerra sin-bajas es también una forma de movilización política. Se trata de satisfacer al propio electorado, no de expandir su influencia en el mundo, incluso aunque esas acciones tengan un profundo impacto en el resto del mundo (Kaldor, 2002).

Sin embargo, creo que esta interpretación de los objetivos de la política exterior de los Estados Unidos se ajustaría mejor a la conducta de un país aislacionista, y este no es, evidentemente, el caso norteamericano tras la Guerra Fría. Pero, además, hay que tener en cuenta que una política de afirmación de la soberanía no es incompatible con una política de afirmación de la hegemonía, del dominio completo e irresistible, en el resto del mundo.

En su trabajo sobre “otros espacios” Michel Foucault usa los cementerios para mostrar los significados cambiantes de las heterotopías. Los cementerios cristianos hasta el siglo XVIII estaban situados en el espacio consagrado de las iglesias, en medio de las ciudades, y con la excepción de algunos notables, había pocas tumbas individuales. Se concedía poca importancia a los restos humanos ya que se creía que la “vida eterna” estaba al alcance de los humanos. Sin embargo, a partir del siglo XIX los cementerios se convirtieron en un lugar más importante en una sociedad que ya no estaba segura de la inmortalidad humana, en especial para aquellos que creían que el cuerpo es “a fin de cuentas el único resto de nuestra existencia en el mundo”. Estas nuevas consideraciones acerca de la naturaleza humana condujeron necesariamente a un cambio en el emplazamiento de los cementerios:

[P]or otro lado, sólo a partir de comienzos del siglo XIX los cementerios comenzaron a estar situados fuera de los límites de las ciudades. Correlativamente a la individualización de la muerte y a la apropiación burguesa de los cementerios, surge una obsesión con la muerte como una “enfermedad”. La muerte, se supone que trae enfermedades a los vivos, y es la presencia y la proximidad de la muerte justo al lado de las casas, junto a la iglesia, casi en medio de la calle, la que propaga la muerte en sí misma (Foucault, 1967 [1986, p. 25]).

El *Campus Martius* romano era de propiedad pública y estaba situado fuera del *pomerium*, características que salvando las distancias comparten los cementerios de hoy en día. Si, como hemos descrito, el sentido de pertenencia a la comunidad política que tenían los romanos iba de la mano de la celebración de la conducta violenta en la guerra (y consecuentemente de la muerte), en el caso de los cementerios modernos el recuerdo de los desaparecidos es reinterpretado en relación a los que les sobreviven, pero en el caso de los muertos en guerra la referencia es la comunidad nacional.

De variadas formas y en muy diversas sociedades el recuerdo de los muertos en la guerra es motivo de celebración comunitaria, y alimenta un sentido no sólo de identidad sino también de misión nacional. La institución del Día en Memoria de los Caídos (*Memorial Day*) ilustra adecuadamente este punto, y ayuda a mostrar además cómo los cementerios funcionan como heterotopía.

En el discurso anual del Día en Memoria de los Caídos del año 2003, el presidente George W. Bush hizo diversas referencias al “deber” y al “recuerdo”, repitiendo varias veces la siguiente frase: “Esta nación no olvida”. Del mismo modo que la memoria individual tiene que entrenarse para no perderse, la memoria colectiva no sólo es entrenada sino cuidadosamente seguida y regulada: “Todos los americanos (estadounidenses) y cada una de las naciones libres de la Tierra pueden seguir los pasos de su libertad a través de los indicadores blancos

de lugares como el Cementerio Nacional de Arlington⁵, donde los héroes que murieron en las guerras “nacionales” están enterrados.

Los Cementerios Nacionales⁶ se crearon en Estados Unidos en 1862, en plena Guerra de Secesión, cuando el Congreso autorizó la compra de “campos” para construir cementerios “para los soldados hayan muerto al servicio del país”. Hoy en día hay 140 Cementerios Nacionales, que se distribuyen entre todos los estados y que están bajo diversas administraciones. Más de dos millones y medio de ciudadanos estadounidenses, incluyendo veteranos, de todas las guerras y conflictos en los que se ha visto envuelto Estados Unidos (desde la Guerra de Independencia hasta la Guerra de Irak) están enterrados en ellos.

El objetivo de las prácticas realizadas en los Cementerios Nacionales y de la retórica que las acompaña es mantener “viva” la comunidad política mediante el recuerdo de los muertos en guerras cercanas o distantes, que en su momento contribuyeron a la construcción o reforzamiento de la identidad nacional. Cementerios como Arlington, en Virginia, o Punchbowl, en Hawaii, son, según Ferguson y Turnbull “un espacio simbólico que es dialógico y heteroglósico, y que evoca una textura rica y diversa de memorias y narrativas” (1999, p. 117). Las narrativas asociadas a los Cementerios Nacionales están plagadas de referencias al “honor” y la “obligación sagrada” de servir a la patria, reconfortan a parientes y amigos, a la par que permite al Estado celebrar la muerte, produciendo representaciones y significados de sentimientos “comunitarios” y sumisión patriótica:

El orgullo desmedido del poder estatal se oculta a simple vista: los soldados muertos ‘dan sus vidas’ (nadie las tomó), y ahora ‘duermen uno junto al otro’ (en una suerte de larga, fraternal siesta). Punchbowl muestra al Estado trabajando en la producción de las ficciones reconfortantes de la necesidad y la libertad (Ferguson and Turnbull, 1999, p. 131).

No ha habido cambios significativos en la retórica asociada a los Cementerios Nacionales con las nuevas guerras virtuosas, aunque en la medida en que se concibieron como guerras sin-bajas sí se ha procurado ocultar el flujo de féretros que llegan hacia ellos desde los campos e alguno de los, por ahora fracasos posbélicos en Irak o Afganistán.

Por último quisiera llamar la atención de nuevo sobre la capacidad del ejército de representar y unir a todos (o, al menos, la mayoría de) los habitantes del Estado gracias a que el ejército ha sido producido como signo de la nación. Un ejemplo que ilustra bien esta capacidad lo encontramos en el debate que se produce en el Senado de los Estados Unidos el día siguiente al inicio de la Guerra de Irak, con ocasión de una resolución de apoyo al Presidente y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, sobre todo “a aquellos valientes americanos (estadounidenses) que están arriesgando sus vidas por nosotros”⁷. Los comentarios de aquellos que apoyan la acción bélica y comparten alguno o todos los motivos alegados por el presidente Bush para iniciarla son perfectamente previsibles y se ajustan al guión general.

⁵ “All Americans and every free nation on earth can trace their liberty to the white markers of places like Arlington National Cemetery” *President Bush Honors the Brave and Fallen Defenders of Freedom*. Arlington National Cemetery, Arlington, Virginia. (May 26, 2003). En: <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/05/20030526-1.html> (revisado 23-12-2003).

⁶ Información detallada sobre los Cementerios Nacionales de Estados Unidos se puede obtener en <http://www.cem.va.gov/CEM/index.asp> (revisado el 10-12-2006)

⁷ *Commending the President and the Armed Forces of the United States of America* (Senate – March 20, 2003), p.S4075. En <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/C?r108.:/temp/~r1086oTYfG> (revisado el 1-08-2006).

Son más interesantes para nuestros objetivos las palabras de aquellos (muy) pocos senadores críticos con la Guerra, por ejemplo, el senador por Massachussets, Edward Kennedy, afirmaba:

Muchos americanos (estadounidenses), incluyéndonos a muchos de nosotros en el Congreso, se opusieron a esta guerra, pero en el día de hoy y mientras dure el conflicto, estamos unidos en apoyo de los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas. Nos comprometemos a hacer todo lo que podamos para apoyarlos (Ibíd., p.S4082).

En parecidos términos, se expresaba Feingold: “Voté en contra de la resolución autorizando el uso de la fuerza en Irak, y creo que hice lo correcto [...] Pero el comienzo de las acciones militares nos une en la medida que ahora nos centramos en el apoyo a nuestras tropas”⁸. En definitiva, la resolución se aprobó por unanimidad de los presentes, y muchas casas y autos a lo largo de todos los Estados Unidos mostraron durante meses la bandera nacional como signo de apoyo a las tropas en Irak. Muestras inequívocas todas ellas del proceso de reafirmación de la identidad nacional mediante la participación vicaria (a través de un ejército-equipo profesional) en la guerra-partido deportivo que se sigue desarrollando tras su final oficial.

Conclusiones

Las guerras que han acaecido tras el fin de la Guerra Fría, que han modelado un nuevo tipo de conflictos, que James der Derian denomina “guerras virtuosas” (2001). Esta denominación caracteriza también las respuestas de Estados Unidos tras los ataques del 11 de Septiembre de 2001 porque, como señala Alain Badiou, “en la representación formal que hace de sí mismo, el poder imperial estadounidense privilegia la forma guerra como un testimonio —el único— de su existencia [...] Los Estados Unidos se han llegado a convertir en una potencia hegemónica en y a través de la guerra” (2002, p.25). Pero estas guerras virtuosas no sirven sólo para aplicar castigos concretos a enemigos concretos, sino que también constituyen espectáculos para consumo interno y externo, y actúan asimismo como instrumentos para reafirmar la dominación en el interior del Estado y en el sistema interestatal: “En realidad, el adversario importa poco y puede ser eliminado de la escena inicial del crimen. La simple capacidad de destruir esto o aquello hará el trabajo, incluso si al final lo que queda son unos miles de pobres diablos o un ‘gobierno’ fantasma. En suma, bajo la premisa suprema de una apariencia de victoria cualquier guerra es conveniente” (Badiou 2002, p. 28).

Si prestamos atención a estas nuevas guerras virtuosas podremos entender y localizar el nuevo *Campo de Marte* bajo una espacialidad en red. Los modos de guerra reticulares implican “una inversión y una virtualización del *continuum* de la guerra” (Der Derian 2001: 160). Y si, como decía antes, la política es la continuación de la guerra por otros medios, las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) permiten la expansión de la comunidad que celebra la guerra virtuosa. Así, el nuevo *Campo de Marte* rodea cuerpos que son conectados a las “redes dominantes de la guerra virtuosa”. El *Campo de Marte* moderno comienza en los cuarteles en los que los ciudadanos de los Estados-nación cumplen su servicio militar obligatorio, pero en la actualidad el *Campo de Marte* postmoderno surge en la cobertura mediática de las guerras. Finalmente, es conveniente enfatizar que este nuevo *Campo de Marte* postmoderno, como el antiguo *Campus Martius* romano, cubre “la fractura entre las virtudes militares y los valores civiles [que] se veía con gran claridad, representando

⁸ *Ibidem.*, p.S4091.

un vacío democrático que todo tipo de soluciones virtuosas parecen dispuestas a rellenar” (Der Derian 2001, p. 171).

El Campo de Marte postmoderno surge durante la transición de un modo de guerra, la Guerra Total Industrializada, a otro, la Guerra Deporte-Espectáculo (*Spectator-Sport*). Por supuesto que algunas naciones (Rusia, China, India...) continúan realizando la guerra conforme a modelos anteriores, pero la mayoría de las potencias que se definen como “occidentales”, y en particular los Estados Unidos, están completamente embarcados en el desarrollo de este nuevo tipo de guerra. La amenaza de la guerra nuclear y el peligro de que se materializara el Día del Juicio Final fueron circunstancias claves para alcanzar un “equilibrio del terror”, que implicaba la “resignación generalizada respecto a lo existente, hacia los poderes coexistentes de los especialistas que organizan el destino” (Internationale Situationniste 1962, p. 3). La amenaza de ataques terroristas es ahora la clave para la reconstrucción de la comunidad política, y el surgimiento de una nueva normalidad y las estructuras espaciales a las que se asocia. La Guerra “Espectáculo Deportivo” implica, por supuesto, la participación de la gente, pero de una forma muy diferente a cómo lo hacía en los modos de guerra moderno y tradicional. Ya no es necesario que batallones de ciudadanos-soldados mueran en las trincheras, ahora ciudadanos-espectadores celebran la precisión y el poderío de su “equipo” en estas supuestas “guerras sin-bajas”.

La “victoria” en la guerra uniría a la comunidad política estadounidense —y quizás a toda la “civilización” occidental, si hacemos caso de las presunciones de Samuel Huntington (1996)—, previamente purificada por Leyes “Patrióticas”, en un *Campo de Marte* virtual en perfecta comunión con sus líderes. Por lo tanto, las guerras virtuosas no se refieren sólo a distantes y puede que confusas y desconocidas —para la mayoría de los ciudadanos “normales”— tierras habitadas por formas de vida nuda, sino que son el recurso final que el gobierno de los Estados Unidos está utilizando para reasegurar sus fronteras y mantener su hegemonía. Pero, ciertamente, si la victoria no se consigue, la comunidad política se puede resquebrajar, y por eso el presidente George W. Bush se resiste férreamente a abandonar Irak de un modo que parezca implicar que los Estados Unidos han sido ya no derrotados, sino que no han cumplido los objetivos de la invasión de ese país.

Bibliografía

- AGAMBEN, Giorgio (1995). *Homo sacer: Il potere sovrano e la nuda vita*. Torino Giorgio Einaudi [trad. al inglés por D. Heller-Roazen: *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*. Stanford (California), Stanford University Press, 1998].
- AGNEW, John (2003). *Geopolitics: Re-visioning World Politics*. Londres: Routledge (2ª ed) [trad. al castellano por M. Lois: *Geopolítica: Una re-visión de la política mundial*. Madrid, Trama Editorial, 2005].
- BADIOU, Alain (2002). “Philosophical considerations of some recent facts”, *Theory & Event*, 6(2).
- CAMPBELL, David (1998a). *Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity* (2ª ed). Minneapolis, University of Minnesota Press.
- DER Derian, James:
2001 *Virtuous war: mapping the military-industrial-media-entertainment network*. Boulder (Colorado), Westview Press.
2002 “The war of networks”, *Theory & Event*, 5(4).

- DILLON, M., y REID, J. (2001). "Global liberal governance: biopolitics, security and war", *Millennium: Journal of International Studies*. 30(1), pp.41–66.
- DODDS, Klaus (2000). "Political geography II: some thoughts on banality, new wars and the geopolitical tradition", *Progress in Human Geography*. 24(1), pp.119–129.
- EK, R. (2000). "A revolution in military geopolitics?", *Political Geography*, 19(7), pp.841–874.
- FERGUSON, K. y TURNBULL, P. (1999). *Oh, say, can you see?: the semiotics of the military in Hawai'i*. Minneapolis, University of Minnesota Press.
- FOUCAULT, Michel :
- 1967 "Des espaces autres" (Conférence au Cercle d'études architecturales, 14 mars 1967. *Architecture, Mouvement, Continuité*. 5, pp.46–49 [trad. al inglés por J. Miskowiec: "Of other spaces", *Diacritics*, 16(1), 1986, pp.22–27].
- 1997 *Il faut défendre la société: cours au Collège de France (1975-1976)*. Ed. établie, dans le cadre de l'Association pour le Centre Michel Foucault, sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana, par Mauro Berani et Alessandro Fontana [trad. al inglés por D. Macey : *Society must be defended: lectures at the Collège de France, 1975-76*. New York, Picador, 2003].
- GRAY, C. H. (1997). *Postmodern war: the new politics of conflict*. Londres: Routledge.
- HUNTINGTON, Samuel P. (1996) *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. Nueva York, Simon & Schuster [trad. al castellano por J. P. Tosaus: *El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial*. Barcelona, Editorial Paidós, 1997].
- Internationale Situationniste (1962). "Géopolitique de l'hibernation", *Internationale Situationniste*. 7, 3–10.
- KALDOR, Mary :
- 1999 *New and old wars: organised violence in a global era*. Cambridge, Polity Press.
- 2002 "Beyond militarism, arms races and arms control" (After September 11 Archive, *Social Science Research Council*). En <http://www.ssrc.org/sept11/essays/kaldor.htm> (revisado el 28-02-2004).
- LACLAU, Ernesto (1994). "Introduction", en E. Laclau (ed.) *The Making of Political Identities*. Londres, Verso.
- LATHAM, A. (2002). "Warfare transformed: a braudelian perspective on the 'Revolution in Military Affairs'", *European Journal of International Relations*, 8(2), pp.231–266.
- MANN, Michael (1987). "War and social theory: Into battle with classes, nations and states", en C. Creighton y M. Shaw (eds). *The sociology of war and peace*. Londres, Macmillan, pp.54-72.
- NORTON, Anne (1988). *Reflections on political identity*. Baltimore (Maryland), Johns Hopkins University Press.
- Office of Homeland Security (2002). *National Strategy for Homeland Security*. Washington, DC.
- PICK, Daniel (1993) *War Machine: The Rationalisation of Slaughter in the Modern Age*. New Haven y Londres, Yale University Press.
- PLATNER, S. B. (1929). *A Topographical Dictionary of Ancient Rome*. Londres, Oxford University Press [Thomas Ashby (rev.)].
- SCHAMA, Simon (1989) *Citizens. A Chronicle of the French Revolution*. Harmondsworth, Penguin.
- SCHMITZ, L. (1875) "Comitia centuriata", en W. Smith (ed). *A Dictionary of Greek and Roman Antiquities*. Londres, John Murray.

SHAPIRO, Michael J:

1996 “Warring bodies and bodies politic: tribal warriors versus state soldiers”, en M. J. Shapiro, y H. R. Alker (eds.). *Challenging boundaries*. Minneapolis, University of Minnesota Press, pp.455–480.

2004 *Methods and Nations*. Londres, Routledge.

WILLIAMS, R. W. (2003) “Terrorism, anti-terrorism and the normative boundaries of the US polity: the spatiality of politics after 11 September 2001”, *Space and Polity*. 7(3), pp.273–292.

ZIZEK, Slavoj (2003) “The Iraq War: where is the true danger?” (fragmento de la conferencia “Love without mercy”, introducción al número 21 de la revista *Lacanian Ink*, 10 de Marzo de 2003). En <http://lacan.com/iraq.htm> (revisado el 27-05-2004).

Ilustración 1



Fuente: Tom Tomorrow: “This Modern World”, *Honolulu Weekly* 13(21) (May 21-27, 2003), p.32.

INFORMALIDAD Y SUBEMPLEO: UN MODELO *PROBIT* BIVARIADO APLICADO AL VALLE DEL CAUCA*

Carlos Humberto Ortiz, José Ignacio Uribe y
Gustavo Adolfo García**

Resumen

En este artículo se describe analíticamente a los trabajadores informales *vis a vis* los subempleados en el contexto del Valle del Cauca (Colombia). También se realiza un análisis conjunto de los determinantes de la informalidad y el subempleo utilizando un modelo econométrico que incorpora la correlación de los términos de error (modelo *probit* bivariado). Este procedimiento arroja una mejor caracterización de la calidad del empleo en el Valle del Cauca.

Abstract

In this paper informal workers are described *vis a vis* underemployed workers in Valle del Cauca (Colombia). An integrated analysis of determinants of informality and underemployment that embodies the correlation of error terms (model bivariate probit) is also carried out. This procedure yields a better characterization of the quality of jobs in Valle del Cauca.

Palabras clave: Informalidad, Subempleo, Calidad del Empleo, Probit Bivariado, Oferta Laboral, Demanda Laboral. Clasificación JEL: J21, J42, J81, J82, J83.

Key words: Informality, Underemployment, Labour Quality, Bivariate Probit, Labor Supply, Labour Demand.

* Este artículo es resultado de un proyecto de investigación sobre exclusión en el mercado laboral financiado por la Universidad del Valle y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la elaboración del Informe sobre Desarrollo Humano del Valle del Cauca 2007 (ver Ortiz, Uribe, García y Posso, 2007).

Artículo recibido el 30 de octubre de 2007

Aprobado el 16 de noviembre de 2007

** Profesores del Departamento de Economía de la Universidad del Valle y miembros del Grupo de Investigación en *Economía Laboral y Sociología del Trabajo*.

1. Introducción

Informalidad y subempleo son las variables tradicionalmente utilizadas para agregar los empleos de baja calidad. Es usual que estas variables se analicen separadamente, pues la informalidad mide la baja calidad desde el punto de vista de la demanda de trabajo (la informalidad agrega las empresas de las cuales se presume baja productividad), mientras que el subempleo capta la baja calidad del trabajo desde la visión de la oferta (el subempleo agrupa a los trabajadores que se sienten de alguna forma insatisfechos con su empleo). Sin embargo, las necesarias relaciones entre las ofertas y las demandas en el mercado laboral – lleven o no al equilibrio– permiten postular que la informalidad y el subempleo son variables estrechamente relacionadas. Por tanto, en este trabajo se reclama que un análisis conjunto de ambas variables arroja una mejor caracterización de la calidad del empleo. El modelo econométrico adecuado para este análisis es el *probit* bivariado, pues este modelo tiene en cuenta la interdependencia de las perturbaciones aleatorias de ambas variables. Sobre esto se volverá después.

La región de análisis está constituida por las cabeceras municipales del Valle del Cauca de 2001 a 2006 según la información de la Encuesta Continua de Hogares (ECH). Cabe mencionar que el DANE utiliza como muestra del Valle del Cauca a los municipios de Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira. Circunstancialmente también incluye a los municipios de Obando, El Cerrito, Florida y Riofrío. Se puede discutir la representatividad de esta muestra, pero es la que el DANE tiene disponible. Este artículo es producto de un proyecto de investigación sobre exclusión en el mercado laboral financiado por la Universidad del Valle y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

A continuación se describe brevemente lo que se entiende comúnmente por informalidad y subempleo en Colombia. El DANE (2005) considera informales a los trabajadores que desempeñan las siguientes posiciones ocupacionales:

1. Empleados y obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta diez personas en todas sus agencias y sucursales.
2. Trabajadores familiares sin remuneración.
3. Empleados domésticos.
4. Trabajadores por cuenta propia, excepto los profesionales o técnicos independientes.
5. Patrones o empleadores en empresas de diez trabajadores o menos.

Nótese que esta clasificación incluye a personas sin preparación técnica o que trabajan en empresas pequeñas. Se supone que ambas condiciones se relacionan con escasez de capital humano y físico. Esta medida de informalidad laboral es la que adopta el DANE en Colombia siguiendo la tradición de la OIT (2007) y de su Programa de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC). Se pretende así caracterizar las actividades económicas de menor productividad y, en consecuencia, de bajos ingresos. Desde este punto de vista, la informalidad refleja las características objetivas de los empleos, o sea de la demanda laboral.

Existe otra aproximación a la caracterización de la informalidad laboral que se preocupa fundamentalmente por el grado de cumplimiento de las normas y el marco institucional del mercado laboral, como la seguridad social en salud y pensión. Uribe y Ortiz (2006) muestran que estas dos definiciones están muy cercanamente entroncadas; por tanto, en este trabajo, y

dada su mayor afinidad con el tema de la calidad del empleo y la situación de los trabajadores, se utiliza la definición de informalidad laboral del DANE.

Por otra parte, el DANE considera dos tipos de subempleo: subempleo visible e invisible. El primero corresponde a los trabajadores cuya jornada laboral es menor de la que quisieran tener (insatisfacción con la jornada laboral); y el subempleo invisible corresponde a los trabajadores que ganan menos de lo que esperan (insatisfacción con el ingreso), o se desempeñan en actividades para las cuales están sobre-calificados (insatisfacción por competencias) (DANE, 2005). Así, el subempleo caracteriza la calidad del empleo desde la perspectiva subjetiva de la oferta laboral, y se refiere a una subutilización de las capacidades productivas de los trabajadores o a una remuneración inadecuada.

Aunque la informalidad y el subempleo se relacionan son claramente variables diferentes. Incluso numéricamente son diferentes: redondeando cifras se puede afirmar que en la Colombia de 2006 seis de cada diez trabajadores son informales, mientras que sólo cuatro de cada diez están subempleados. Estas aproximaciones son también válidas para el Valle del Cauca. Por tanto, se concluye que entre el 40 y el 60% de los trabajadores en Colombia y en el Valle sufre problemas relacionados con baja calidad del empleo. No es este un fenómeno local, es un problema general en América Latina (OIT, 2002; BID, 2004; Farné, 2003; Infante y Sunkel, 2004; Infante y Vega-Centeno, 1999). El título del trabajo del BID, “Se buscan buenos empleos”, expresa la gran preocupación de gobiernos y analistas por la escasa generación de empleo de buena calidad en Latinoamérica.

Este trabajo pretende dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la relación entre la informalidad y el subempleo? ¿Responden estas variables a los mismos determinantes? ¿Qué tan grande es la intersección de estas variables? Si la informalidad refleja la calidad del empleo desde la demanda, y el subempleo refleja la calidad del empleo desde la oferta, y si el mercado laboral se equilibra *expost*, ¿Por qué las magnitudes que arrojan estas variables son diferentes? Contribuir a responder las anteriores preguntas ayuda a entender mejor las características del mercado laboral en el Valle del Cauca, especialmente la calidad del empleo generado.

En Colombia se ha estudiado la informalidad y muy poco el subempleo. En cualquier caso, aunque se refieran al mismo asunto (la calidad del empleo), estas variables no se han examinado conjuntamente. Dada la correlación entre las variables que nos ocupan, la técnica econométrica adecuada para este análisis es el denominado modelo probit bivariado. La informalidad y el subempleo están relacionados por ser resultado de decisiones en un mercado laboral común con respecto a una variable común (la calidad del empleo). Por tanto, las perturbaciones aleatorias de cada una de estas variables están correlacionadas; la técnica mencionada aprovecha esta correlación para obtener estimadores más eficientes de los coeficientes asociados a los determinantes sistemáticos de las variables de estudio, comparados con los que se obtendrían si estos modelos se estimaran por separado.

En este trabajo se utiliza la información de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del DANE correspondientes a los segundos trimestres del 2001 al 2006 para el sector urbano del Valle del Cauca. Conviene aclarar que los datos de la ECH del 2001 muestran una mayor volatilidad que en los demás años, por lo cual en ocasiones sólo tenemos en cuenta el período 2002-2006.

El trabajo está dividido en dos partes. En la primera parte se realiza un análisis descriptivo de la evolución del mercado laboral y las dimensiones de la informalidad y el subempleo. En

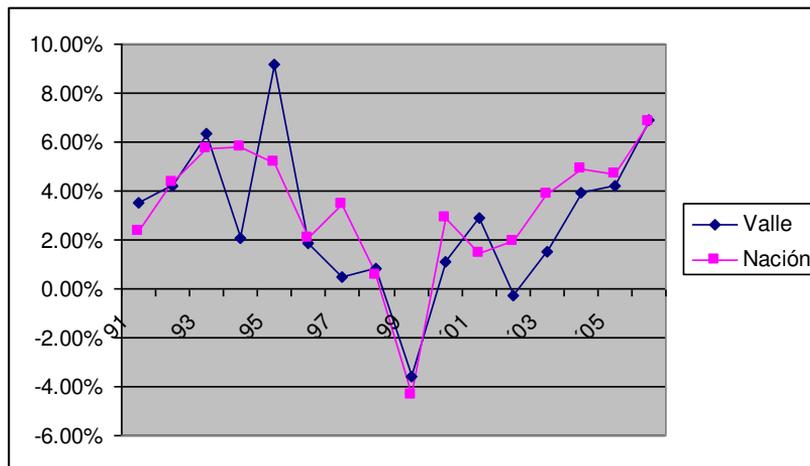
esta sección se comparan de forma agregada las variables mencionadas a nivel del Valle y de Colombia. Posteriormente, en la segunda parte, se corre un modelo Probit bivariado que estima el impacto de los determinantes socioeconómicos y personales sobre la informalidad y el desempleo en el Valle del Cauca. Finalmente, se presentan las conclusiones.

2. Análisis Descriptivo de la Informalidad y el Subempleo en el Valle del Cauca

2.1 Tasa de informalidad y subempleo en el Valle del Cauca

La Gráfica 1 muestra la recuperación económica del Valle del Cauca y de la Nación a partir de 2000. Se observa una estrecha coordinación del ciclo entre región y nación.

Gráfica 1
Crecimiento Económico: Valle y Colombia



Fuente: DANE, Planeación Departamental del Valle.

La Tabla 1 muestra que la tasa de informalidad del Valle en los últimos años presenta una ligera tendencia decreciente. Este es un comportamiento típico de los períodos de recuperación económica, cuando la mayor actividad permite que el sector moderno de la economía aumente la demanda de trabajo. Esto favorece una mayor colocación de la fuerza de trabajo primaria del hogar (especialmente de jefes de hogar, cuyas características de responsabilidad y madurez los hace atractivos ante las empresas), lo que permite que la fuerza de trabajo secundaria pase a la inactividad laboral (especialmente los jóvenes que retornan al colegio, y los ancianos que retornan a la inactividad), y también favorece que las amas de casa se vinculen nuevamente a las labores domésticas. Por estas razones se encuentra que la tasa de participación tiende a disminuir: de 65.6% en 2001 a 62.8% en 2006.

Por otra parte, la Tabla 1 muestra que la tasa de subempleo en el período reciente experimenta una tendencia creciente. Ésta se explica fundamentalmente por una insatisfacción creciente con los ingresos (la tasa específica correspondiente aumenta en el período de análisis: de 24.7% a 30.9%), y en el 2006, adicionalmente, se presenta un súbito incremento en la insatisfacción por competencias. Conviene aclarar que se puede estar insatisfecho en el empleo por varias razones a la vez, por lo cual la suma de las tasas

específicas de subempleo puede ser mayor que la tasa de subempleo (sucede muy claramente en el 2006: 13.4%+10.2%+30.0% > 37.4%).

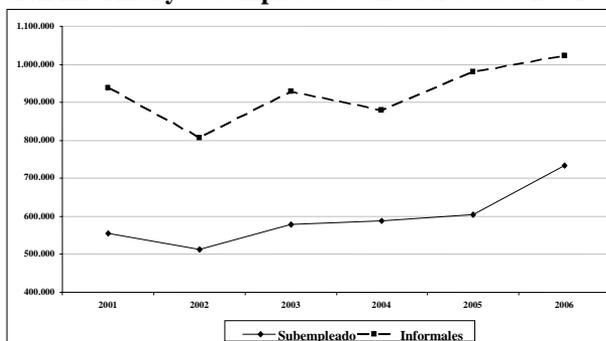
| Tabla 1 | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Informalidad y Subempleo en el Valle del Cauca 2001-2006 (%) | | | | | | |
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Tasa global de participación | 65.6 | 63.9 | 64.6 | 63.1 | 64.6 | 62.8 |
| Tasa de ocupación | 53.4 | 53.5 | 55.8 | 53.5 | 56.4 | 53.5 |
| Tasa de informalidad | 66.8 | 62.8 | 63.9 | 63.0 | 60.7 | 61.3 |
| Tasa de subempleo | 32.2 | 33.5 | 34.3 | 35.6 | 32.8 | 37.4 |
| Insuficiencia de horas | 16.1 | 14.0 | 13.8 | 14.8 | 13.4 | 13.4 |
| Empleo inadecuado por competencias | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.8 | 10.2 |
| Empleo inadecuado por ingresos | 24.7 | 26.3 | 28.1 | 28.6 | 25.1 | 30.9 |

Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH-DANE Cabeceras segundos trimestres.

Así, la tasa de informalidad en el período reciente muestra una ligera tendencia decreciente, mientras que la tasa de subempleo muestra una tendencia claramente creciente. Sería inadecuado saltar a la conclusión de que la informalidad y el subempleo no están relacionados. Para interpretar adecuadamente los movimientos de las tasas correspondientes se debe tener en cuenta que la tasa de informalidad se calcula con respecto a la ocupación, mientras la tasa de subempleo se calcula con respecto a la población económicamente activa. En consecuencia, el vínculo entre informalidad y subempleo se puede desdibujar si se presentan diferencias entre la dinámica del empleo (creciente en la recuperación), y la dinámica de la participación laboral (decreciente por el fenómeno de aumento de la inactividad laboral).

En consecuencia, para analizar el vínculo entre informalidad y subempleo es necesario observar la evolución de estas variables en niveles. Como muestra la Gráfica 2, la informalidad y el subempleo en el Valle del Cauca se mueven coordinadamente en el período reciente (aunque las tasas correspondientes no lo hagan). Este comportamiento refuerza el planteamiento, al cual nos referimos arriba, de que ambas formas de medición de la calidad del empleo están relacionadas.

Gráfica 2
Población informal y subempleada Valle del Cauca 2001 - 2006



Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH-DANE Cabeceras segundo trimestre.

Como los mercados se equilibran *ex post*, no es extraño que la percepción de la baja calidad del empleo desde el lado de la oferta –subempleo– y la misma aproximación desde el lado de la demanda –informalidad– se muevan coordinadamente. Sin embargo, claramente persiste una brecha, la cual se puede explicar porque no todos los informales ni todos los subempleados tienen el mismo nivel de calidad del empleo –para algunos puede ser incluso relativamente alto–. Pero hay otro factor que puede ser importante. En un trabajo anterior, Uribe y Ortiz (2006) mostraban que incluso trabajadores del sector informal, para los cuales uno podría presumir baja calidad del empleo (como empleados domésticos y trabajadores familiares sin remuneración, etc.), manifiestan mayoritariamente estar satisfechos con sus puestos de trabajo; esta situación refleja que la baja calidad del empleo no es un problema de exceso de aspiraciones sociales y económicas por parte de los trabajadores, sino, como se ha argumentado otros informes, de una restricción estructural en la creación de empleo de buena calidad.

2.2 El Empleo por Posición Ocupacional en Colombia y el Valle del Cauca

La Tabla 2 muestra que en el primer lustro del siglo XXI alrededor del 65% de los empleados en las cabeceras municipales de Colombia –dos de cada tres– trabajan en el sector informal. Y la mitad de estos informales son trabajadores por cuenta propia no profesionales ni técnicos, lo cual implica que las denominadas actividades de “rebusque” generan uno de cada tres empleos en la economía colombiana. Les siguen en orden de importancia las actividades formales de la mediana y gran empresa con un promedio de 24% del empleo total en el periodo de estudio; después vienen las microempresas que generan en promedio en el período el 22% del empleo; 9% de los ocupados son empleados domésticos y ayudantes familiares sin remuneración; y por último, el gobierno genera en promedio el 7.7% de la ocupación.

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Sector informal | 64.5 | 65.6 | 67.3 | 65.4 | 63.7 | 64.0 |
| 1. Cuenta propia No profesionales ni técnicos | 34.6 | 33.8 | 34.9 | 33.8 | 32.9 | 32.6 |
| 2. Microempresas | 21.3 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 22.9 |
| 3. Servicio doméstico | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 5.0 | 5.2 |
| 4. Ayudantes familiares | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 3.4 | 3.3 |
| Sector formal | 35.5 | 34.4 | 32.7 | 34.6 | 36.3 | 36.0 |
| 1. Cuenta propia Profesionales y técnicos | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.2 |
| 2. Mediana y gran empresas | 23.8 | 24.1 | 23.5 | 24.8 | 26.1 | 27.1 |
| 3. Gobierno | 9.3 | 7.6 | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 6.5 |
| 4. Otro | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| Total ocupados | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH-DANE Cabeceras | | | | | | |

segundos trimestres.

El Valle del Cauca también presenta altas tasas de informalidad, pero éstas son menores que las del agregado nacional (véase Tabla 3). La estructura del empleo a lo largo del periodo se ha ido recomponiendo a favor de la mediana y gran empresa, pasando de 27% en el 2001 a 31% en el 2005 (esto es congruente con la argumentación anterior de que la recuperación económica expande el sector moderno y contribuye así a la disminución de la informalidad laboral). Por su parte, las actividades de los trabajadores informales por cuenta propia han ido perdiendo importancia: mientras que en el 2001 representaban el 35% del empleo total, al 2005 han caído al 28% (este fenómeno también es congruente con nuestra argumentación sobre el retiro relativo de la fuerza de trabajo secundaria durante la recuperación). El peso de las microempresas en el empleo ha permanecido relativamente constante, situándose alrededor de un 23%. El servicio doméstico y ayudantes familiares participan en promedio con un 10% del empleo, mientras que los empleos del gobierno tienden a disminuir su participación.

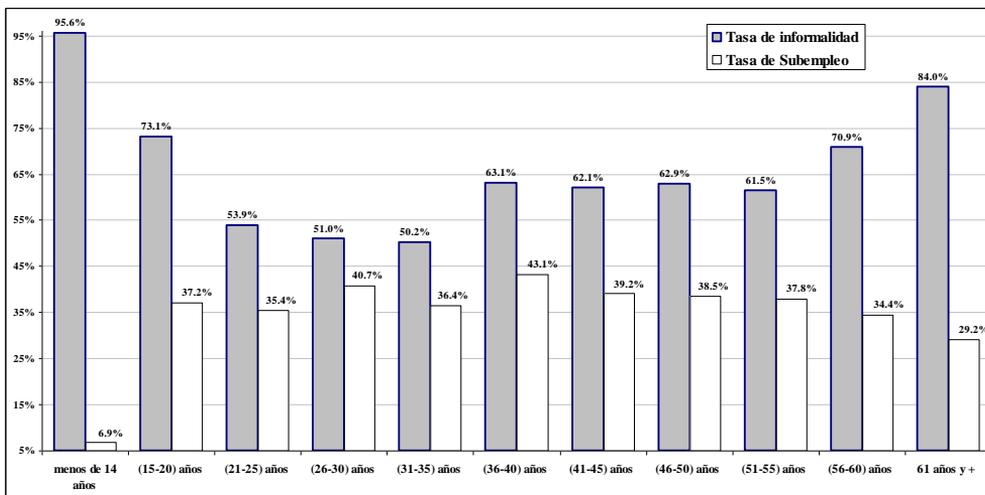
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sector informal | 66.8 | 62.8 | 63.9 | 63.0 | 60.7 | 61.3 |
| 1. Cuenta propia | | | | | | |
| No profesionales ni técnicos | 35.0 | 30.2 | 28.8 | 28.8 | 27.7 | 28.1 |
| 2. Microempresas | 21.8 | 22.6 | 24.9 | 25.1 | 22.4 | 23.1 |
| 3. Servicio doméstico | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.1 |
| 4. Ayudantes familiares | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 2.9 | 4.4 | 4.0 |
| Sector formal | 33.2 | 37.2 | 36.1 | 37.0 | 39.3 | 38.7 |
| 1. Cuenta propia | | | | | | |
| Profesionales y técnicos | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 2.1 |
| 2. Mediana y gran empresas | 27.1 | 28.7 | 29.4 | 30.9 | 31.6 | 31.8 |
| 3. Gobierno | 3.8 | 6.0 | 4.7 | 3.4 | 5.2 | 4.3 |
| 4. Otro | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.5 |
| Total ocupados | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH-DANE Cabeceras segundos trimestres. | | | | | | |

2.3 ¿Quiénes son los informales y subempleados del Valle del Cauca?

En esta sección se caracteriza a los trabajadores informales y a los subempleados, teniendo en cuenta la edad, el género, la posición en el hogar y el nivel educativo.

La Gráfica 3 presenta la evolución por grupos de edad de la informalidad y el subempleo en el Valle del Cauca del año 2006. En cuanto a la informalidad, la información refleja el ciclo de vida laboral: las personas inician y terminan su vida laboral en el sector informal; por tanto, el perfil de la informalidad por edades tiene forma de U. La teoría económica laboral plantea que las personas tienen mayor probabilidad de ser formales en su edad más productiva, cuando se ha acumulado suficiente capital humano en términos de educación y experiencia laboral y la persona está en la plenitud de sus capacidades. En cambio, el subempleo muestra un perfil en forma de U invertida, pues el subempleo se relaciona con las expectativas de los agentes: los muy jóvenes y los más mayores no tienen altas expectativas. No existen todavía trabajos académicos que expliquen el perfil del subempleo; los datos del 2006 muestran que la tasa de subempleo es bastante estable, con excepción de los extremos de la vida laboral (los muy jóvenes y los mayores), quienes presentan menores tasas.

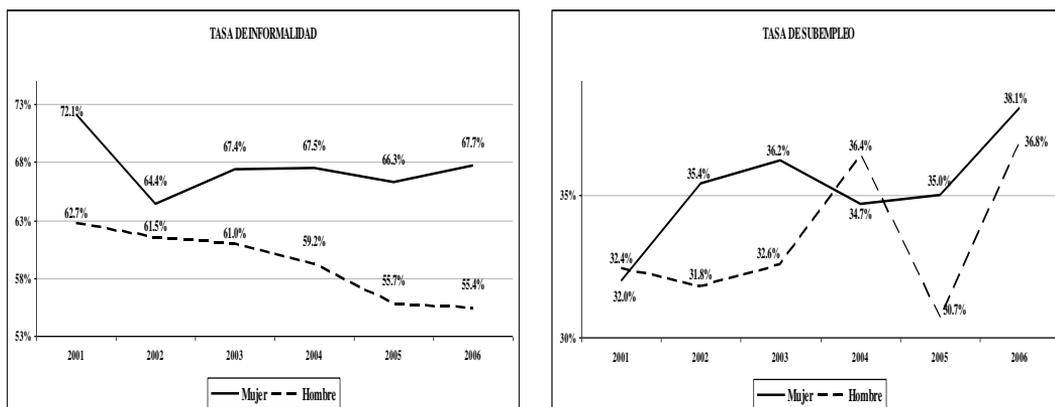
Gráfica 3
Informalidad laboral y subempleo por edad
Valle del Cauca 2006



Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH-DANE Cabeceras segundo trimestre.

Gráfica 4

**Tasas de informalidad y subempleo por género
Valle del Cauca 2001-2006**



Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH-DANE Cabeceras segundos trimestres.

La Gráfica 4 revela que las mujeres tienen mayor probabilidad de participar en la informalidad y en el subempleo que los hombres. De hecho, en los últimos años la proporción de los hombres ocupados en actividades informales ha disminuido de forma continua, mientras que la tasa de informalidad femenina se ha mantenido alta y estable (la recuperación económica parece ser sexista; lo cual es consistente con la hipótesis de que las empresas modernas prefieren contratar a jefes de hogar, usualmente hombres). También es claro que usualmente las mujeres sufren un mayor nivel de subempleo.

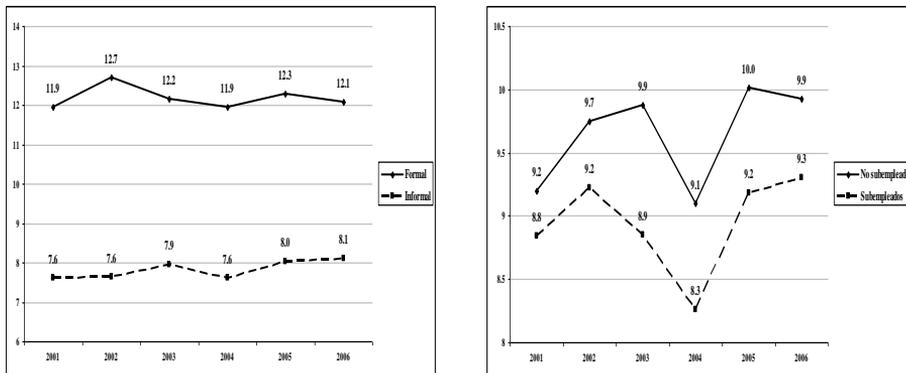
La composición de la informalidad y del subempleo en el Valle del Cauca en 2006 revela que la mayor participación en estas modalidades les corresponde a los jefes de hogar y a sus cónyuges, aproximadamente el 62-63% (Tabla 4). Esto no es extraño dado que sobre estos miembros del hogar recae la mayor responsabilidad del sostenimiento del hogar. Cabe resaltar que las mayores tasas específicas de informalidad no les corresponden a estos miembros (sino a los otros parientes y a los otros no parientes); como se argumentó anteriormente, la responsabilidad, la estabilidad y la dedicación de los jefes de hogar los hace más atractivos para el mercado laboral.

| | Tasa de informalidad | % | Tasa de subempleo | % |
|---------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Jefe | 57.6 | 43 | 39.6 | 44.7 |
| Cónyuge | 68.3 | 20 | 36.1 | 17.4 |
| Hijos | 55 | 19.7 | 37.0 | 24.6 |
| Otros parientes | 70 | 11.3 | 37.2 | 10.6 |
| Otros no parientes | 81.7 | 6 | 23.9 | 2.6 |
| Total | 61.3 | 100 | 37.4 | 100 |

Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH-DANE, Cabeceras segundo trimestre.

La Gráfica 5 muestra la evolución reciente de los años aprobados de educación según informalidad o subempleo. Se muestra la gran brecha en nivel de calificación que existe entre los trabajadores del sector formal y el informal. Mientras que los primeros tienen en promedio 12 años de educación, los segundos sólo tienen aprobados un poco menos de 8 años de educación. De igual forma, los subempleados tienen un nivel educativo promedio inferior a los no subempleados; pero la brecha es escasamente de un año. La estabilidad de los niveles educativos de los ocupados y la constancia relativa de la brecha entre informales/formales y subempleados/no subempleados, indica que no existe una mayor dinámica educativa en la región.

Gráfica 5
Educación en el mercado laboral según calidad del empleo
Valle del Cauca 2001-2006

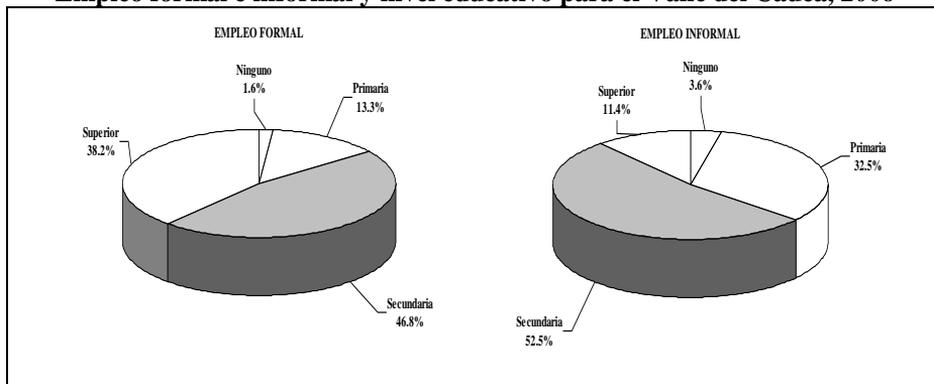


Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH-DANE Cabeceras segundos trimestres.

La Gráfica 6 muestra que la brecha en la formación educativa es explicada por la mayor incidencia de formación superior entre los trabajadores formales (con respecto a los informales), la mayor incidencia de la formación primaria entre los trabajadores informales (con respecto a los formales), y la mayor incidencia de la no educación entre los trabajadores informales (con respecto a los formales). En ambos sectores la importancia de la educación secundaria es notable; aproximadamente la mitad de los trabajadores sólo alcanza el nivel de formación secundaria (no necesariamente completa).

Gráfica 6

Empleo formal e informal y nivel educativo para el Valle del Cauca, 2006



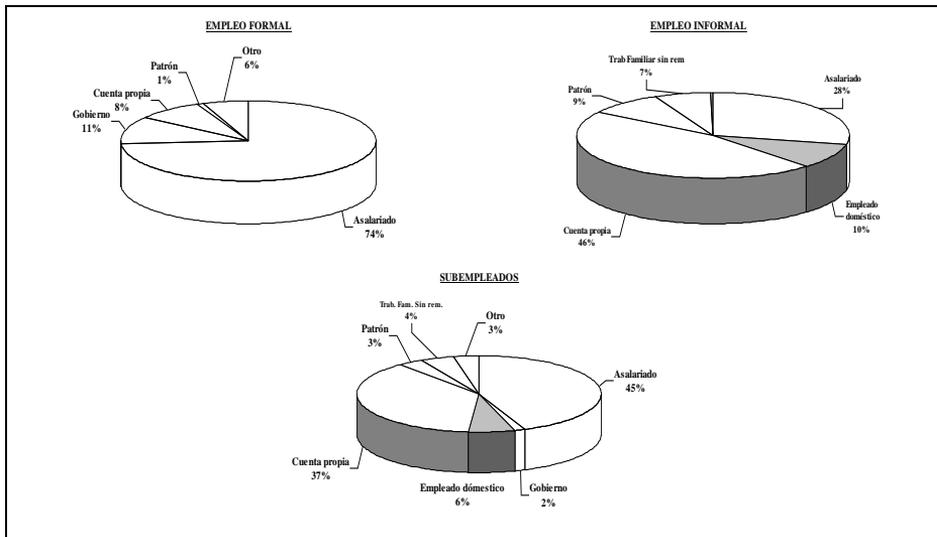
Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH-DANE Cabeceras segundo trimestre.

2.4 ¿Qué hacen los informales y subempleados?

La Gráfica 7 muestra la estructura del empleo para los formales, informales y subempleados por posición ocupacional para el segundo trimestre de 2006. Tres cuartas partes de los trabajadores formales son empleados asalariados, les siguen en importancia los trabajadores del gobierno, los trabajadores por cuenta propia y, finalmente, los patronos. En contraste, casi la mitad de los trabajadores informales son trabajadores por cuenta propia, les siguen en importancia los empleados asalariados, los empleados domésticos, los patronos y finalmente los trabajadores familiares sin remuneración. Los subempleados se caracterizan por ser en su mayoría trabajadores asalariados y por cuenta propia, le siguen los empleados domésticos, los trabajadores familiares sin remuneración, los patronos y por último los empleados del gobierno.

Los trabajadores formales son fundamentalmente asalariados, tanto privados como públicos (85%). Una pequeña fracción de trabajadores formales son profesionales o técnicos que trabajan independientemente. Y sólo el 1% de los trabajadores formales son patronos. Como muestra la Gráfica 7, los informales y los subempleados tienen composiciones similares en términos de posición ocupacional: cuentapropistas, asalariados y empleados domésticos, en ese orden, representan el 84% de los informales; similarmente, asalariados, cuentapropistas y empleados domésticos, en ese orden, representan el 88% de los subempleados. Se encuentra una mayor proporción de patronos entre los informales (10%) comparados con los subempleados (3%), porque entre los primeros se contabilizan fami y microempresas.

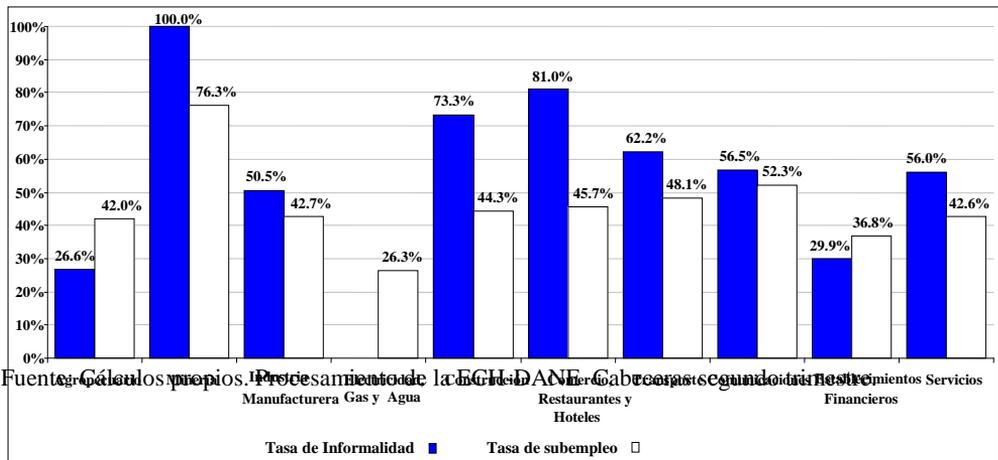
Gráfica 7
Composición de los formales, informales y subempleados por posición ocupacional
Valle del Cauca 2006



Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH-DANE Cabeceras segundo trimestre

A continuación se examinan las tasas de informalidad y subempleo por rama de actividad (Gráfica 8). Se comprueba que la informalidad es generalmente alta en el Valle del Cauca. Sin embargo, existen importantes diferencias: las mayores tasas de informalidad se encuentran en la minería (100%), el sector comercio (81%), la construcción (73.3%), el sector del transporte (62.2%), el sector de las Comunicaciones (56.5%) y los demás servicios (56%). Las demás actividades muestran tasas de informalidad más bajas, estos son la industria manufacturera (50.5%), los establecimientos financieros (29.9%), el sector agropecuario (26.6%) y, por último, el sector de la electricidad gas y agua con un grado de informalidad nulo.

Gráfica 8
Tasa de informalidad y subempleo por rama de actividad
Valle del Cauca 2006



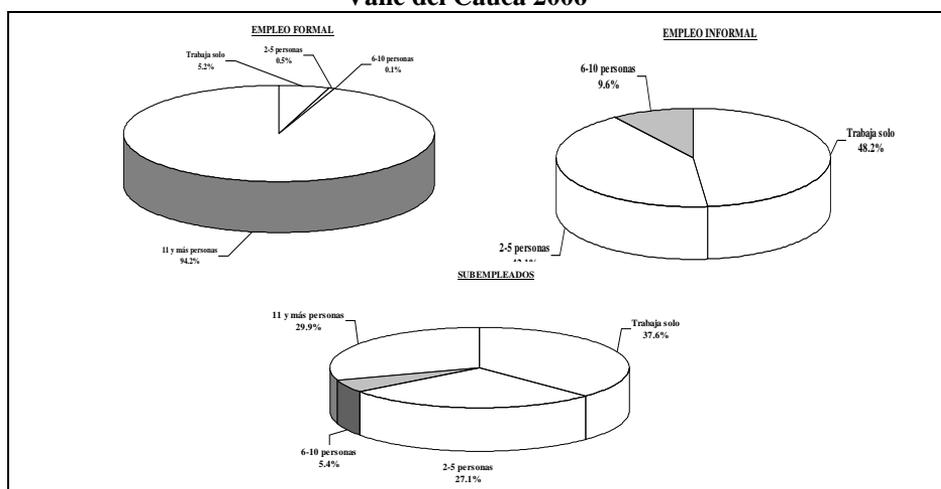
Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH-DANE Cabeceras segundo trimestre

El subempleo es usualmente menor que la informalidad en las diferentes ramas de actividad económica. También se observa que existe en general una relación directa entre estas dos dimensiones: en las ramas donde la tasa de informalidad es alta, la tasa de subempleo también lo es. Es por esta razón que la composición de la actividad productiva incide en la calidad agregada del empleo: las regiones más industrializadas (o más modernas) disfrutaban en general de menores niveles de informalidad y subempleo (García, 2005).

Con base en la concepción estructuralista de la informalidad, Uribe y Ortiz (2006) proponen dividir el sector informal en tres subsectores: empresas unipersonales, empresas entre 2 y 5 trabajadores (famiempresas) y empresas con más de 5 y hasta 10 trabajadores (microempresas); y el sector formal se divide entre las empresas de hasta 10 trabajadores (empresa formal pequeña) y las empresas con más de 10 trabajadores (empresa formal grande). Se aclara que el sector formal pequeño incluye a los trabajadores por cuenta propia que son profesionales y técnicos.

Por definición, los trabajadores que laboran en empresas con plantas iguales o mayores a 11 trabajadores se consideran formales. Y sólo los profesionales y/o técnicos, aunque trabajen en empresas pequeñas, se consideran formales. Esto explica la composición que presenta la primera torta en el extremo superior izquierdo. Los informales son el complemento de los anteriores: son los que trabajan en plantas menores a 11 trabajadores y no son profesionales ni técnicos. La torta superior derecha muestra que aproximadamente la mitad de los informales son trabajadores por cuenta propia, y la otra mitad trabaja en fami o microempresas. Como se mencionó anteriormente, la composición de los subempleados es similar a la de los informales: la mayoría son trabajadores por cuenta propia o trabajan en famiempresas (plantas de 2 a 5 trabajadores). Pero entre los subempleados se encuentra una proporción significativa de trabajadores formales (28%), pues laboran en empresas formales (más de 11 trabajadores). Esto es indicativo de que también entre las empresas formales existe insatisfacción de algún tipo con el empleo (Gráfica 9).

Gráfica 9
Composición de los formales e informales por tamaño de empresa
Valle del Cauca 2006

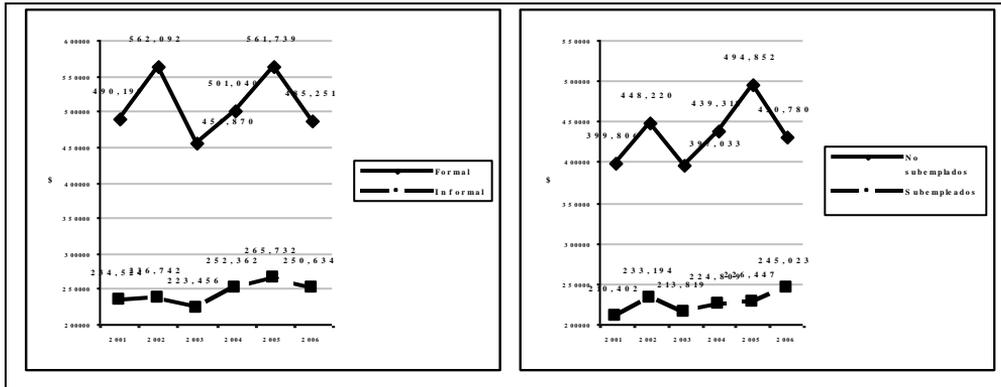


Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH-DANE Cabeceras segundo trimestre.

2.5 ¿Cuánto ganan los informales y subempleados?

Un análisis de la evolución del ingreso medio entre 2001 y 2006 arroja que en promedio los trabajadores formales ganan más que los informales (Gráfica 10). Similarmente, los trabajadores no subempleados ganan más en promedio que los subempleados. La Gráfica también permite apreciar que las brechas de ingresos formal/informal y no-subempleo/subempleo son muy similares. Se deduce, por tanto, que la estructura de los ingresos laborales en el período analizado es bastante estable.

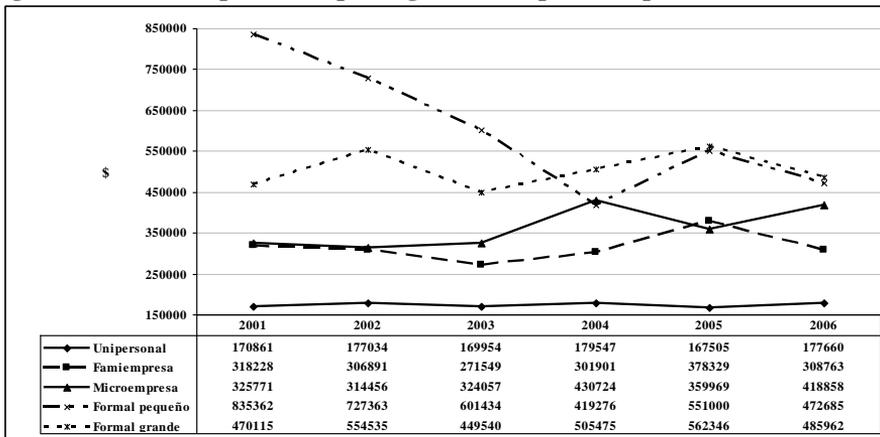
Gráfica 10
Ingreso laboral real promedio por sector para el Valle del Cauca



Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH-DANE Cabeceras segundos trimestres. A precios constantes de 1998.

La Gráfica 11 muestra la evolución de los ingresos medios por subsegmento ocupacional. Estos ingresos se estiman en pesos constantes de 1998. Para realizar este examen y evitar confusión nos enfocaremos en la estructura de remuneraciones de 2006.

Gráfica 11
Ingreso laboral real promedio por segmento ocupacional para el Valle del Cauca

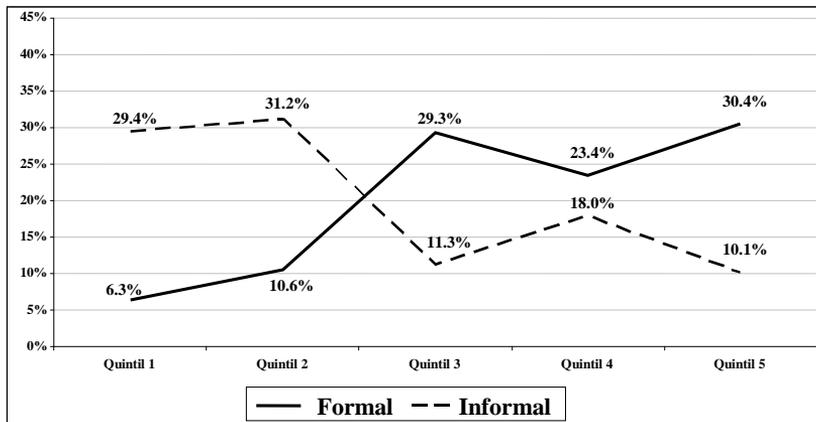


Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH-DANE Cabeceras segundos trimestres. A precios constantes de 1998.

Los trabajadores unipersonales son los que menos ganan, 178.000 pesos constantes de 1998 por mes. Los trabajadores de las famiempresas ganan en promedio 309.000 pesos constantes de 1998; y los trabajadores de las microempresas ganan en promedio 419.000 pesos constantes de 1998. En el sector formal, tanto los grandes como los pequeños ganan alrededor de 480.000 pesos constantes de 1998. Esta estructura de remuneraciones ha sido bastante estable en el período de análisis. Sin embargo, los formales pequeños sí han perdido capacidad de compra en el período analizado. Posiblemente, la flexibilización laboral que impuso la última reforma laboral del 2002 ha afectado más fuertemente a los profesionales y técnicos independientes; de hecho, como muestra la Gráfica, los ingresos reales de estos trabajadores se han reducido prácticamente a la mitad entre 2001 y 2006 (Ortiz, Uribe y García, 2007).

La Gráfica 12 muestra la distribución de los trabajadores formales por quintil de ingreso (línea continua), y también la distribución de los trabajadores informales por quintil de ingreso (línea punteada). Se deduce así que existe una asociación directa entre nivel de ingreso y formalidad, y una asociación inversa entre informalidad y nivel de ingreso. Ello significa que los puestos mejor remunerados se concentran en el sector formal.

Gráfica 12
Trabajadores formales e informales por quintil de ingresos laborales
Valle del Cauca 2006



Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH-DANE Cabeceras segundos trimestres.

La Tabla 5 muestra los ingresos de los trabajadores informales o subempleados en el Valle del Cauca en el año 2006. Las cifras hablan por sí mismas. Uno de cada tres trabajadores informales o subempleados recibe ingresos menores de medio salario mínimo. Dos de cada tres trabajadores informales y/o subempleados reciben ingresos que no superan el salario mínimo. Nueve de cada diez trabajadores informales y/o subempleados reciben ingresos que no superan los dos salarios mínimos. Así, se deduce que el perfil de ingresos de informales y subempleados es muy similar. Sólo el resto de los trabajadores, uno de cada doce (8%), recibe más de dos salarios mínimos, pero incluso entre estos la distribución también es desigual.

Tabla 5
Ingresos de los trabajadores informales y subempleados
Valle del Cauca 2006

| | Tasa de informalidad | % Acum. | Tasa de subempleo | % acum.. |
|------------------------|----------------------|---------|-------------------|----------|
| No recibe | 85.0% | 1.8% | 58.1% | 1.6% |
| Menores de 1/2 SMLM | 88.0% | 36.6% | 66.4% | 35.5% |
| Desde 1/2 hasta 1 SMLM | 72.8% | 64.5% | 53.2% | 61.9% |
| Desde 1 hasta 2 SMLM | 43.9% | 92.0% | 37.1% | 92.0% |
| Desde 2 hasta 3 SMLM | 36.0% | 96.0% | 29.8% | 96.3% |
| Desde 3 hasta 5 SMLM | 35.0% | 98.7% | 27.2% | 99.0% |
| Desde 5 hasta 8 SMLM | 17.7% | 99.2% | 16.7% | 99.6% |
| Desde 8 hasta 10 SMLM | 23.0% | 99.6% | 16.8% | 99.8% |
| Más de 10 SMLM | 40.4% | 100.0% | 9.5% | 100.0% |

Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH-DANE Cabeceras segundos trimestres.

De la Tabla 5 se observa, además, como ya se había mostrado en el análisis por quintiles de ingreso, que la informalidad y el subempleo tienden a disminuir con el nivel de ingreso. La alta tasa de informalidad de los informales que ganan más de 10 SMLM puede deberse a

problemas de representatividad (esta población tiene una muy baja participación en la encuesta).

2.6 Condiciones laborales

En la Tabla 6 se muestra la afiliación a la seguridad social en salud, así como el tipo de régimen de afiliación para el Valle del Cauca en el año 2005.

Se observa que la mayoría de los trabajadores formales gozan de seguridad social en salud (92.6%); los informales también tienen una alta tasa de afiliación en salud (72.9%), pero es de todas formas inferior. Entre los afiliados formales, la gran mayoría (95.9%) pertenecen al régimen contributivo; y de los informales afiliados pertenecen al régimen contributivo sólo el 64.3%.

El anterior comportamiento es muy similar al que se presenta cuando los trabajadores son clasificados entre no subempleados y subempleados. En general, los no subempleados tienen mayor cobertura en seguridad social en salud, y participan más en el régimen contributivo.

| | Afiliado | % | Contributivo | % | Subsidiado | % |
|------------------------|-----------------|----------|---------------------|----------|-------------------|----------|
| Formal | 92.6% | 44.5 | 95.9% | 54.5 | 4.1% | 8.4 |
| Informal | 72.9% | 55.5 | 64.3% | 45.5 | 35.7% | 91.6 |
| Total | | 100 | | 100 | | 100 |
| | Afiliado | % | Contributivo | % | Subsidiado | % |
| No subempleados | 83.4% | 58.1 | 95.9% | 54.5 | 16.0% | 42.8 |
| Subempleados | 76.9% | 41.9 | 64.3% | 45.5 | 29.5% | 57.2 |
| Total | | 100 | | 100 | | 100 |

Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH-DANE Cabeceras segundos trimestres.

Con respecto a la seguridad social en pensiones, la Tabla 7 muestra una menor cobertura para cada uno de los grupos analizados. De los trabajadores formales el 71.4% está afiliado al régimen pensional; y de los informales sólo el 10.7% está afiliado. Si se mira a los trabajadores desde la perspectiva de la satisfacción laboral, entre los no subempleados la afiliación al régimen pensional es de sólo el 40.2%, y de los subempleados sólo el 26.6% está afiliado.

| | Afiliado | % |
|------------------------|-----------------|----------|
| Formal | 71.4% | 80.8 |
| Informal | 10.7% | 19.2 |
| Total | | 100 |
| No subempleados | 40.2% | 65.8 |
| Subempleados | 26.6% | 34.2 |
| Total | | 100 |

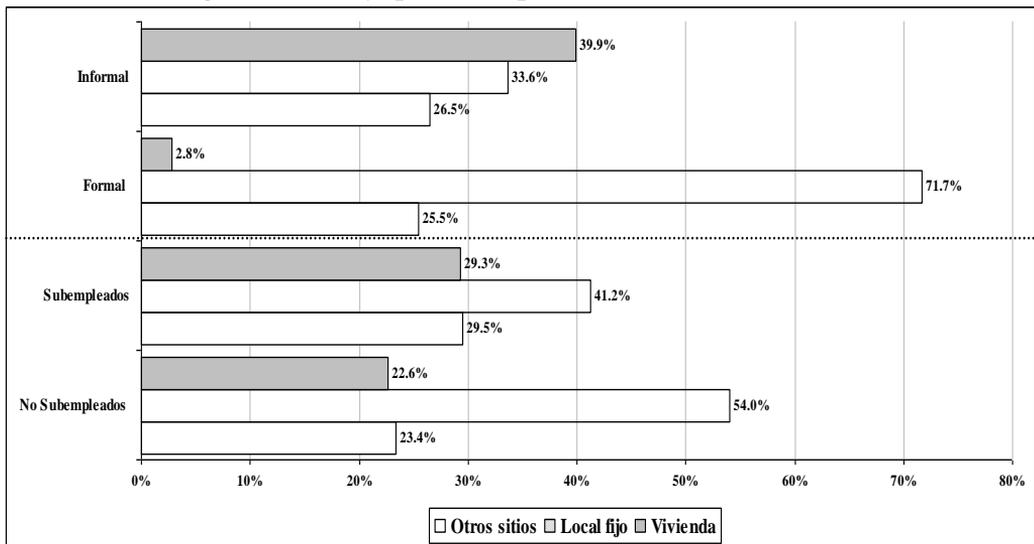
Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH-DANE Cabeceras segundos trimestres.

Una de las más notables diferencias entre trabajadores formales e informales es el sitio donde realizan su actividad. La Gráfica 13 muestra que mientras en el sector formal predomina el establecimiento fijo (71.7%), en el sector informal sólo el 33.6% de la actividad se realiza en este tipo de establecimientos. En el sector informal las actividades son realizadas en orden de importancia en viviendas, locales fijos y en otros espacios que comprenden la actividad en la calle, kioscos y carros.

Por su parte, los no subempleados, como los formales, realizan sus actividades laborales principalmente en sitios fijos (54%). Y los subempleados realizan su actividad en locales fijos (41.2%), en otros sitios (29.5%) y en viviendas (29.3%).

Nótese que el comportamiento de los informales y de los no subempleados es similar; aunque no se puede decir lo mismo del comportamiento de los informales y los subempleados.

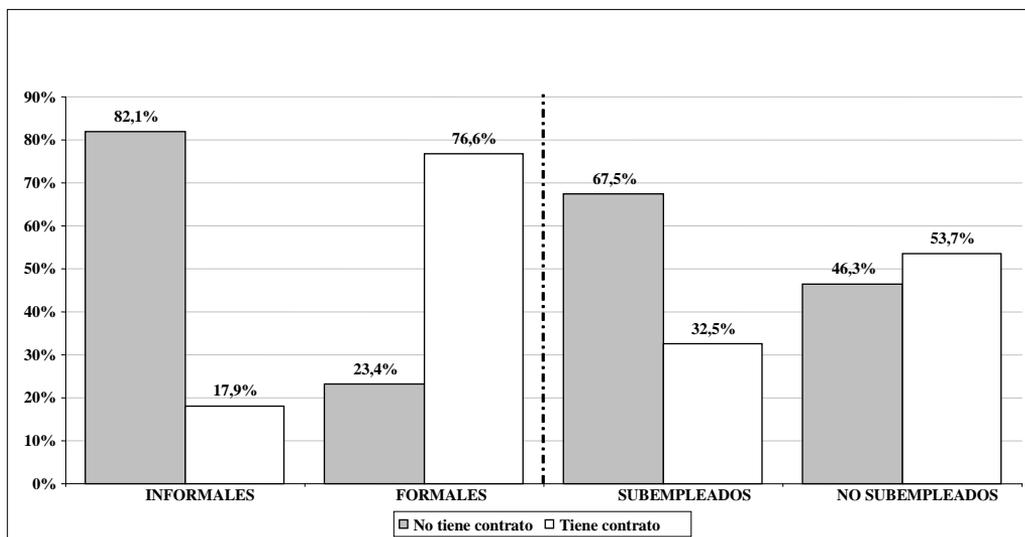
Gráfica 13
Lugares de trabajo por sector para el Valle del Cauca 2006



Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH-DANE Cabeceras segundo trimestre.

En la Gráfica 14 se muestra la tenencia de contrato por sectores para el Valle del Cauca en el año 2006. Como era de esperar, entre los trabajadores informales sólo 17.9% tiene contrato escrito de trabajo; mientras que entre los formales el 76.6% tiene contrato escrito. Viéndolo de otra forma, sólo el 32.5% de los subempleados tiene contrato escrito; mientras que el 53.7% de los no subempleados lo tiene. Se deduce que la tenencia de contrato escrito es una variable que se relaciona claramente con la calidad del trabajo, pues se relaciona básicamente con los trabajadores formales y no subempleados.

Gráfica 14
Tenencia de contrato escrito para informales y subempleados
Valle del Cauca 2006



Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH-DANE Cabeceras segundo trimestre.

Con las anteriores estadísticas descriptivas se puede hacer una caracterización de los informales y subempleados del Valle del Cauca. En términos generales se tiene que la principal características de los empleos de baja calidad (informales y subempleados) es la precariedad expresada en menores ingresos, peores sitios y condiciones de trabajo, poca utilización de los contratos escritos de trabajo y baja afiliación a la seguridad social en salud y pensión.

Los informales son en su mayoría jefes de hogar, con un nivel educativo de secundaria incompleta (menos de ocho años de educación promedio), trabajan por cuenta propia en empresas unipersonales en el sector terciario de la economía, generan un ingreso de menos de dos salarios mínimos, no están afiliados a la seguridad social, trabajan principalmente en viviendas o sitios diferentes a locales fijos, y la mayoría no tienen contratos laborales escritos, y entre los que tienen contrato una gran proporción tienen contrato a término fijo.

El subempleo afecta a todo el núcleo familiar, en especial a los hijos. Además, los subempleados tienen educación secundaria incompleta (casi nueve años de educación promedio), son en su mayoría cuenta propias y asalariados que trabajan en sectores del comercio, el transporte y los servicios, en empresas unipersonales con ingresos inferiores a los dos salarios mínimos. Son empleados que en su mayoría no están afiliados a un fondo pensional, tienen contratos a término fijo o no tienen contrato escrito de trabajo, y sus principales actividades las realizan en viviendas, la calle, kioscos y otros sitios diferentes a local fijo.

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los empleos en el Valle del Cauca son informales (6 de cada 10 trabajos), y dada la similitud entre informales y subempleados, se puede

deducir que una gran proporción de los trabajadores se sienten subempleados, de hecho el 70% de los subempleados son informales.

3. Un modelo Probit bivariado para los determinantes de ser informal y/o subempleado en el Valle del Cauca 2006

El modelo Probit Bivariado o Biprobbit es una extensión de los modelos multiecuacionales de regresión clásicos, en el que se considera un sistema de ecuaciones cuyos errores están correlacionados (Greene, 2003). La especificación general de un modelo con dos ecuaciones es la siguiente:

$$\begin{aligned}
 y_1^* &= \beta_1 x_1 + \varepsilon_1, \\
 y_1 &= 1 \quad \text{si } y_1^* > 0, \text{ ó } 0 \text{ en caso contrario,} \\
 y_2^* &= \beta_2 x_2 + \varepsilon_2, \\
 y_2 &= 1 \quad \text{si } y_2^* > 0, \text{ ó } 0 \text{ en caso contrario,} \\
 E[\varepsilon_1] &= E[\varepsilon_2] = 0 \\
 V[\varepsilon_1] &= V[\varepsilon_2] = 1 \\
 C[\varepsilon_1, \varepsilon_2] &= \rho
 \end{aligned}$$

El supuesto de que las perturbaciones aleatorias de las ecuaciones están correlacionadas permite modelar aquellas decisiones que implican entornos comunes. Para el caso de la informalidad y el subempleo puede pensarse que el entorno común son las condiciones del mercado laboral que hacen que las elecciones no sean independientes. La incorporación de esta correlación entre perturbaciones permite obtener estimadores más eficientes que si se estima cada ecuación por separado (Zellner y Huang, 1962).

Al igual que en los modelos binarios convencionales, los coeficientes estimados no cuantifican directamente el incremento en la probabilidad dado un cambio marginal en una variable independiente, por ello es necesario el cálculo de las derivadas parciales o efectos marginales.

En el conjunto de los determinantes de la informalidad y del subempleo se han incluido variables que denotan características socioeconómicas y del puesto de trabajo, tanto actual como anterior, como son las siguientes: nivel educativo de la persona y del hogar, edad, género, estado civil, antigüedad en el empleo actual, posición ocupacional, rama de actividad y tamaño de la empresa. La definición de las variables aparece en la Tabla 1 del Anexo.

La estimación del modelo Biprobbit permite que los determinantes de las dos elecciones sean o no los mismos. Cuando los determinantes no son iguales el modelo a estimar es un modelo Biprobbit aparentemente no relacionado (*seemingly unrelated bivariate probit model*). Para el caso del modelo de informalidad y subempleo se optará por esta última forma de estimación, teniendo en cuenta que, aunque existe una relación intrínseca entre informalidad y subempleo, estos son fenómenos determinados por variables diferentes.

Los datos utilizados para el análisis de regresión son los de la ECH del DANE del segundo trimestre de 2006 para las cabeceras municipales del Valle del Cauca.

La estimación del modelo se presenta en la Tabla 2 del Anexo. En general, los coeficientes del modelo son altamente significativos. Además, la prueba de Wald (el estadístico ρ es igual a cero) se rechaza, lo cual constituye evidencia estadística significativa de que el modelo Biprobit es adecuado (ver la Tabla 3 del Anexo).

En la Tabla 8 se presentan los efectos marginales sobre la informalidad y el subempleo por separado, y cuando se cumple conjuntamente ser informal y subempleado.

Las probabilidades predichas a partir de los modelos arrojan que en las cabeceras municipales del Valle del Cauca se tiene una probabilidad estimada de 62.4% de ser informal (cerca a la verdadera tasa de informalidad), una probabilidad estimada de 44.8% de ser subempleado, y una probabilidad de 31.6% de ser tanto informal como subempleado. Estos valores son similares a las relaciones cuantitativas entre informales y subempleados que se describieron previamente (por ejemplo, la probabilidad de ser subempleado e informal, 31.6%, sobre la probabilidad de ser subempleado, 44.8%, es consistente con el 70% de participación de los informales entre los subempleados ($31.6/44.8 = 70.5$), mostrando que el modelo presenta buenas predicciones. Se puede deducir de estos valores que el mercado laboral vallecaucano se caracteriza por una baja calidad de los puestos generados.

Se pasa ahora al análisis de los efectos marginales estimados de las diferentes variables. De acuerdo con el modelo estimado, un año adicional de educación disminuye significativamente la probabilidad marginal de ser informal; el efecto de esta misma variable sobre el subempleo no es estadísticamente significativo; pero sí disminuye significativamente la probabilidad conjunta. Por otra parte, la escolaridad media del hogar no incide significativamente sobre la informalidad, aunque sí disminuye significativamente la probabilidad de ser subempleado, y también disminuye significativamente la probabilidad conjunta. En cualquier caso, la educación, medida en una forma u otra, parece incidir significativamente en la disminución de la informalidad y el subempleo.

La antigüedad en el puesto de trabajo actual disminuye de forma significativa la probabilidad marginal de ser informal, la probabilidad marginal de ser subempleado y la probabilidad conjunta. Ello implica, como es de esperar, que la estabilidad laboral se relaciona con los buenos empleos.

Así, tanto la educación como la experiencia en el trabajo, elementos claramente relacionados con el capital humano de los trabajadores, se relacionan directa y significativamente con la calidad del empleo.

Con respecto a la edad se tiene que un año adicional aumenta la probabilidad de ser informal en 0.6%, y la probabilidad de ser subempleado la disminuye en 0.3%. Estos resultados son consistentes con lo encontrado en la Gráfica 2. El primer efecto captura el ciclo de vida laboral que induce a los más veteranos a terminar su vida laboral en el sector informal. Con respecto al subempleo, la lógica es diferente. A mayor edad disminuye la probabilidad marginal de ser subempleado porque las personas con más edad o encuentran puesto adecuados a sus expectativas o cambian sus expectativas después de cierto tiempo.

La condición masculina disminuye la probabilidad de ser informal en un 8.3%, disminuye la probabilidad de ser subempleado en 4.5%, y disminuye la probabilidad conjunta. Estos resultados son consistentes con la existencia de discriminación laboral contra la mujer.

La condición de jefe de hogar no parece afectar la probabilidad de ser informal (el coeficiente no es significativo); en cambio, sí parece aumentar la probabilidad marginal de ser subempleado en 5.5%, lo cual implica que los jefes de hogar prefieren tener empleos que no satisfacen sus expectativas antes de caer en el desempleo. Este comportamiento se relaciona claramente con la responsabilidad de proveer el sustento familiar. Ser casado, sin embargo, no parece relacionarse significativamente con las variables analizadas.

Tabla 8
Modelo biprobit de informalidad y subempleo para el Valle del Cauca 2006
(Efectos marginales)

| | Pr(Informal) | Pr(subempleado) | Pr(informal, subempleado) |
|---|---------------|-----------------|---------------------------|
| Años aprobados de educación | -0.0331 *** | | -0.0138 *** |
| Escolaridad promedio en el hogar | | -0.0070 *** | -0.0045 *** |
| Edad | 0.0057 *** | -0.0033 *** | 0.0002 |
| Género masculino | -0.0825 *** | -0.0449 ** | -0.0633 *** |
| Jefe de hogar | -0.0292 | 0.0552 *** | 0.0231 |
| Casado | -0.0333 * | -0.0301 | -0.0332 ** |
| Antigüedad en años en el empleo actual | -0.0003 ** | -0.0006 *** | -0.0005 *** |
| Posición ocupacional en el empleo actual | | | |
| (Base: Gobierno) | | | |
| Asalariado | | 0.1035 * | 0.0662 * |
| Empleado doméstico | | -0.0870 | -0.0564 |
| Cuenta propia | | 0.1322 * | 0.0837 * |
| Patrón | | -0.1332 ** | -0.0870 ** |
| Trabajador familiar sin remuneración | | 0.1918 ** | 0.1186 ** |
| Jornalero o peón | | 0.2638 *** | 0.1605 *** |
| Otro | | 0.4043 *** | 0.2382 *** |
| Rama de actividad | | | |
| (Base: Servicios) | | | |
| Agrícola y Minería | -0.2324 *** | | -0.1030 *** |
| Industria | -0.1038 *** | | -0.0440 *** |
| Electricidad, gas y agua | -0.6316 *** | | -0.3188 *** |
| Construcción | 0.0143 | | 0.0059 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 0.1833 *** | | 0.0745 *** |
| Transporte | 0.0847 ** | | 0.0344 ** |
| Comunicaciones | 0.0265 | | 0.0109 |
| Establecimientos financieros | -0.2000 *** | | -0.0878 *** |
| Tamaño de la empresa en el empleo actual | | | |
| (Base: Trabaja sólo) | | | |
| 2-5 Trabajadores | | -0.0658 * | -0.0423 * |
| 6-10 Trabajadores | | -0.1701 *** | -0.1117 *** |
| 11 y más Trabajadores | | -0.1012 * | -0.0650 * |
| Tamaño de la empresa en el empleo anterior | | | |
| (Base: Trabaja sólo) | | | |
| 2-5 Trabajadores | 0.0137 | | 0.0057 |
| 6-10 Trabajadores | -0.1007 ** | | -0.0429 ** |
| 11 y más Trabajadores | -0.2332 *** | | -0.0979 *** |
| Probabilidad | 0.6240 | 0.4481 | 0.3157 |

Fuente: Véase tabla 2 del anexo

* p<.1; ** p<.05; *** p<.01

No se analizan los efectos de la posición ocupacional en la informalidad porque la posición ocupacional hace parte de la definición de informalidad. Los resultados de la posición ocupacional sobre el subempleo no son concluyentes. Sin embargo, la condición de trabajador familiar sin remuneración, la de jornalero o peón, y la de otra posición ocupacional sí parecen aumentar significativamente la probabilidad de ser subempleado, mientras que la

condición de patrón parece disminuirla. Los efectos de estas posiciones ocupacionales sobre la probabilidad conjunta reflejan básicamente los efectos sobre la probabilidad de ser subempleado.

Con respecto a la rama de actividad, que no resultó significativa para el subempleo, se encontró, como era de esperar, que las actividades de la industria, la electricidad, gas y agua, y la de los establecimientos financieros disminuyen de forma significativa la probabilidad de ser informal en 10.4%, 63.2% y 20%, respectivamente. Por el contrario, estar ubicado en el sector del comercio, restaurantes y hoteles, y el del transporte, aumenta la probabilidad de ser informal en 18.3% y 8.5% con respecto a las actividades de servicios comunales, sociales y personales. Estos resultados son consistentes con la hipótesis de la existencia de dualidad en el mercado de trabajo, en el sentido de que hay segmentación entre empleos de buena calidad y empleos de mala calidad. Estas actividades representan el sector moderno de la economía y por ello implican mejores condiciones laborales. Cabe mencionar que las ramas de actividad agrícola y minera también arrojan un efecto negativo sobre la informalidad; sin embargo, los trabajadores de estas ramas viven en las cabeceras municipales, y por tanto no son representativos del conjunto de las actividades mencionadas.

El modelo arroja que el tamaño de planta en el empleo actual incide significativamente en el bienestar de los trabajadores. La condición de microempresario (tamaño de planta entre 6 y 10 trabajadores) es la única que parece disminuir significativamente la probabilidad de ser subempleado; parece que los trabajadores prefieren empresas pequeñas aunque no demasiado. Sería conveniente profundizar en las razones de este resultado.

El modelo arroja que el empleo anterior incide significativamente en la probabilidad de trabajar solo. A mayor tamaño de planta del empleo anterior, menor y más significativa es la probabilidad de llegar a tener un empleo unipersonal informal. Un análisis similar aplica para la probabilidad conjunta de ser simultáneamente informal y subempleado. Estos resultados son consistentes con la existencia de fuertes barreras a la movilidad del trabajo entre los sectores formal e informal (Uribe y Ortiz, 2006).

Conclusiones

Utilizando un modelo *biprobit*, en este trabajo se encuentra una alta relación entre la informalidad y el subempleo. De hecho, los principales determinantes socioeconómicos y personales de las probabilidades marginales asociadas a ambas variables coinciden (educación con signo negativo, género masculino con signo negativo, experiencia en el empleo actual con signo negativo). Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los determinantes que se mencionan a continuación. Con respecto a la edad se encuentra que un año adicional aumenta la probabilidad de ser informal mientras que disminuye la probabilidad de esta subempleado; el primer efecto captura el ciclo de vida laboral que induce a los más veteranos a terminar su vida laboral en el sector informal, el segundo efecto refleja que las personas de mayor edad o encuentran puestos adecuados a sus expectativas o cambian sus expectativas después de cierto tiempo. Con respecto a la jefatura del hogar, se encuentra que su efecto marginal es negativo aunque no significativo en el caso de la informalidad, pero sí es positivo y significativo en el caso del subempleo. Esta aparente paradoja se puede explicar como sigue: desde la demanda (de las empresas) se busca trabajadores presuntamente responsables para los mejores puestos, lo cual favorece que los jefes de hogar consigan empleos de buena calidad; por otra parte, desde la oferta, los jefes de hogar deben

conseguir trabajo por la presión de la subsistencia así no estén satisfechos con lo que consiguen (lo cual aumenta su propensión a ser subempleados).

Otros determinantes de la informalidad y el subempleo que tiene que ver con la actividad productiva muestran una gran coincidencia: los sectores que disminuyen la informalidad y que disminuyen la probabilidad conjunta de ser informal y subempleados son los mismos: Agricultura y minería; industria manufacturera; servicios públicos (electricidad, gas y agua), y establecimientos financieros. Y los sectores que aumentan la probabilidad marginal de ser informales y la probabilidad conjunta de ser informales y subempleados son también los mismos: comercio, restaurante y hoteles, y Transporte. Esta situación es compatible con la hipótesis de segmentación del mercado laboral: los buenos empleos tienden a concentrarse en algunas actividades y los malos en otras.

La misma conclusión puede plantearse del efecto del tamaño de planta. En este caso se encuentra que a mayor tamaño de planta del empleo anterior la probabilidad de pasar a un empleo como trabajador unipersonal informal es negativa. Además, el módulo del signo y la significación estadística aumentan con el tamaño de planta. O sea, si el empleo anterior está ubicado en una planta grande, es poco probable que se pase a ocupar un empleo típicamente de baja calidad; y la probabilidad marginal asociada es más negativa y más significativa para tamaños de planta mayores. El mismo análisis aplica para la probabilidad conjunta de ser informal y subempleado. Este resultado es importante porque es difícil encontrar indicadores de movilidad laboral; los resultados son compatibles con la hipótesis de segmentación: la movilidad de buenos empleos hacia malos es baja.

Las probabilidades predichas a partir del modelo muestran que las cabeceras municipales del Valle del Cauca presentan un alto deterioro de la calidad del empleo. Que la probabilidad de ser informal sea del 62%; que la probabilidad de estar subempleado sea del 45%; y que la probabilidad de ser simultáneamente informal y subempleado sea del 32% son indicadores de que una gran proporción de los empleos presentan deficiencias de calidad: por lo menos la tercera parte de la población tiene empleos que son objetiva y subjetivamente de baja calidad.

Además, los resultados del modelo son consistentes con los análisis descriptivos que se realizaron inicialmente. En estos se encuentra que a pesar de la recuperación económica, la calidad del empleo se ha deteriorado en el Valle del Cauca entre 2001 y 2006: el empleo informal y el subempleo en términos de personas se expanden coordinadamente. Aunque la tasa de informalidad muestra una ligera tendencia decreciente (efecto de la recuperación económica), la tasa de subempleo muestra una insatisfacción creciente. El factor más importante de esta insatisfacción es la creciente insatisfacción con el ingreso. Los datos muestran que los más castigados han sido los trabajadores formales pequeños (típicamente profesionales o técnicos independientes), quienes han visto reducida su remuneración laboral promedio a la mitad entre 2001 y 2006.

El análisis tanto descriptivo como econométrico arroja que una modernización de la economía, en el sentido de buscar una expansión de las actividades industriales manufactureras, los servicios públicos (electricidad, gas y agua), los establecimientos financieros y el sector agropecuario, podría redundar en una mejoría significativa de la calidad del empleo en el Valle del Cauca.

Bibliografía

- BID (2004). *Good Jobs Wanted. Labor Markets in Latin America, Economic and Social Progress in Latin America*, 2003. Inter-American Development Bank.
- DANE (2005). *Manual de Conceptos Básicos y de Recolección*. Encuesta Continua de Hogares-ECH, abril-junio 2005.
- FARNÉ, S. (2003). “Estudio sobre la Calidad del Empleo en Colombia”. OIT, oficina Regional para América Latina y el Caribe, Perú.
- GARCÍA, GUSTAVO (2005). "El Componente Local de la Informalidad Laboral en Colombia 1988 -2000", Revista *Desarrollo y Sociedad* 56. Universidad de los Andes.
- GREENE, W. (2003). *Econometrics Análisis*. Prentice Hall. New Jersey, Fifth Edition.
- INFANTE, R. y SUNKEL, G. (2004). *Chile: Trabajo Decente y Calidad de Vida Familiar, 1990-2000*. Santiago, OIT.
- INFANTE, R. y VEGA-CENTENO, M. (1999). “La calidad del empleo: lecciones y tareas” en R. Infante (ed.) *La Calidad del Empleo. La Experiencia de los Países Latinoamericanos y de los Estados Unidos*. Santiago, OIT.
- OIT Organización Internacional del Trabajo (2007). Tendencias Mundiales del Empleo. Breve informe, enero de 2007. En línea <http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/download/getb07sp.pdf>. Consultado el 4 de febrero de 2007.
- OIT, Organización Internacional del Trabajo (2002). *Globalización y Trabajo Decente en las Américas*. Lima, informe del Director General, XV Reunión Regional Americana, 2002.
- OIT Organización Internacional del Trabajo (1999a). *Trabajo decente*. Ginebra, Memoria del Director General a la 87ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.
- OIT Organización Internacional del Trabajo (1999b). *Trabajo decente y protección para todos. Prioridad de las Américas*. Lima, Memoria del Director Regional a la 14ª Reunión Regional de los Estados miembros de la OIT en las Américas.
- ORTIZ, C. URIBE J. y GARCÍA G. (2007). “Segmentación de Escala y Segmentación Regional en el Mercado Laboral Urbano de Colombia 2000-2005”, en *El Desarrollo: Perspectivas y Dimensiones. Aportes Interdisciplinarios*. Bogotá, CIDER, Universidad de los Andes, Agosto.
- ORTIZ, C. y URIBE J. (2005). “Hacia un Modelo de Desarrollo Incluyente para el Valle del Cauca”. *Revista Estudios Gerenciales*, Vol. 23, No. 102, p. 2 – 59.
- ORTIZ, C., URIBE, J. GARCÍA, G. Y POSSO C. (2007). *Exclusión Social en el Mercado Laboral del Valle del Cauca: Desempleo y Calidad del Empleo 2001-2006*, Informe final para el PNUD (Desarrollo Humano del Valle del Cauca), Mayo de 2007, en: http://economialaboral.univalle.edu.co/PNUD_final.pdf
- URIBE, J. y ORTIZ, C. (2006). *Informalidad Laboral en Colombia 1988-2000: Evolución, Teorías y Modelos*. Cali, Universidad del Valle.
- ZELLNER, A., y HAUNG, D. (1962). “Further Properties of Efficient Estimators for Seemingly Unrelated Regression Equations.” *International Economic Review*, 3, pp. 300-313.

ANEXOS

| Tabla 1 | |
|---|---|
| VARIABLES UTILIZADAS EN EL ANÁLISIS DE REGRESIÓN | |
| VARIABLES | DEFINICIÓN |
| Dependientes | |
| Informal | Se sigue la definición de informalidad del DANE 1 = Informal 0 = Formal |
| Subempleado | Se incluye tanto subempleo visible como invisible 1 = Subempleado 0 = No subempleado |
| Independientes | |
| Años aprobados de educación | Se refiere al número de años aprobados de educación formal |
| Escolaridad promedio en el hogar | Se refiere a los años promedio de educación formal en el hogar |
| Edad | Es la edad de la persona |
| Género masculino | 1 = Hombre 0 = Mujer |
| Jefe de hogar | 1 = Jefe de hogar 0 = Otro caso |
| Casado | 1 = Casado o en unión libre 0 = Otro caso |
| Antigüedad en años en el empleo actual | Número de años que lleva la persona en el empleo actual |
| Posición ocupacional en el empleo actual | 1 = Asalariado 2 = Empleado doméstico 3 = Cuenta propia 4 = Patrón 5 = Trabajador familiar sin remuneración 6 = Jornalero o peón 7 = Otro |
| Rama de actividad | = 1 Agricultura, selvicultura, pesca y minería = 2 Industria manufacturera = 3 Electricidad, gas y agua = 4 Construcción = 5 Comercio, restaurante y hoteles = 6 Transporte = 7 Comunicaciones = 8 Establecimientos financieros = 9 Servicios |
| Tamaño de la empresa en el empleo actual | = 1 Trabaja sólo = 2 2-5 personas = 3 6-10 personas = 4 11 y más personas |
| Tamaño de la empresa en el empleo anterior | = 1 Trabaja sólo = 2 2-5 personas = 3 6-10 personas = 4 11 y más personas |
| Fuente: Elaboración propia. | |

Tabla 2
Modelo biprobit de informalidad y subempleo para el Valle del Cauca 2006

| | Modelo | |
|--|--|-------------|
| | Informal | Subempleo |
| Años aprobados de educación | -0.0873 *** | |
| Escolaridad promedio en el hogar | | -0.0178 *** |
| Edad | 0.0150 *** | -0.0084 *** |
| Género masculino | -0.2186 *** | -0.1136 ** |
| Jefe de hogar | -0.0770 | 0.1397 *** |
| Casado | -0.0880 * | -0.0760 |
| Antigüedad en años en el empleo actual | -0.0008 ** | -0.0015 *** |
| Posición ocupacional en el empleo actual | | |
| <i>(Base:Gobierno)</i> | | |
| Asalariado | | 0.2624 * |
| Empleado doméstico | | -0.2243 |
| Cuenta propia | | 0.3335 * |
| Patrón | | -0.3491 ** |
| Trabajador familiar sin remuneración | | 0.4880 ** |
| Jornalero o peón | | 0.6886 ** |
| Otro | | 1.1738 *** |
| Rama de actividad | | |
| <i>(Base:Servicios)</i> | | |
| Agrícola y Minería | -0.5913 *** | |
| Industria | -0.2681 *** | |
| Electricidad, gas y agua | -6.6902 *** | |
| Construcción | 0.0378 | |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 0.5069 *** | |
| Transporte | 0.2319 ** | |
| Comunicaciones | 0.0707 | |
| Establecimientos financieros | -0.5083 *** | |
| Tamaño de la empresa en el trabajo actual | | |
| <i>(Base: Trabaja sólo)</i> | | |
| 2-5 Trabajadores | | -0.1676 * |
| 6-10 Trabajadores | | -0.4529 *** |
| 11 y más Trabajadores | | -0.2578 * |
| Tamaño de la empresa en el trabajo anterior | | |
| <i>(Base: Trabaja sólo)</i> | | |
| 2-5 Trabajadores | 0.0361 | |
| 6-10 Trabajadores | -0.2589 ** | |
| 11 y más Trabajadores | -0.6185 *** | |
| Constante | 1.0922 *** | 0.4205 ** |
| Método de estimación | Probit bivariante aparentemente no relacionado con errores estándar robustos | |
| N | 3348 | |
| Wald chi2(33) | 6702.12 | |
| Prob > chi2 | 0.000 | |
| Log pseudolikelihood | -3938.815 | |
| rho | 0.2391 *** | |
| Wald test of rho=0: | chi2(1) = 13.9771 | |
| | Prob > chi2 = 0.0002 | |

Fuente: Procesamiento en Stata de la ECH-DANE, cabeceras municipales, segundo trimestre.

* p<.1; ** p<.05; *** p<.01

| Método de estimación | Logit multinomial |
|-------------------------------|---|
| N | 3545 |
| Wald chi2(33) | 1650,79 |
| Prob > chi2 | 0,000 |
| Pseudo R2 | 0,177 |
| Test IIA (Omitted) | Ho: Odds(Outcome-J vs Outcome-K) are independent of other alternatives. |
| Baja calidad | 0.881 (for Ho) |
| Calidad media superior | 0.449 (for Ho) |
| Buena calidad | 0.449 (for Ho) |

Fuente: Procesamiento en Stata de la ECH-DANE segundo trimestre.

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA: UN ANÁLISIS MULTINIVEL CON BASE EN EL ECAES DE ECONOMÍA 2004*

Milena Patricia Valens Upegui**

Resumen

En este trabajo se analiza la calidad de la educación superior en Colombia medida a través del ECAES –Examen de Calidad de la Educación Superior- de Economía de 2004. Se realizó un análisis multinivel con datos de 2377 estudiantes y 59 programas de Economía pertenecientes a 52 universidades en todo el país. Se determinó que existen diferencias significativas entre los puntajes medios de las universidades y entre los obtenidos por los estudiantes que son explicadas por sus características personales y por las características de la institución a la que pertenecen.

Abstract

In this paper the quality of the higher education in Colombia measured through ECAES of Economy of 2004 is analyzed. A multilevel analysis was made with data of 2377 students and 59 located programs of Economy in 52 universities around the country. One determined that significant differences between the average result of the universities and the ones obtained by the students are explained by the characteristics associated to the students and by the characteristics of the institution they belong to.

Palabras Clave: Calidad de la Educación, Entorno Familiar, Efecto Plantel, Análisis Multinivel. JEL: C51, I20, I21, I23.

Key Words: Quality of the Education, Family Environment, Effect Establishment, Multinivel analysis.

* Este artículo es producto del trabajo de grado presentado para optar por el título de Economista de la Universidad del Valle. Agradezco los comentarios de mi tutor, el profesor José Ignacio Uribe García.
Artículo recibido el 12 de octubre de 2007

Aprobado el 2 de noviembre de 2007

** Economista de la Universidad del Valle.

Introducción

La Teoría del Capital Humano ha hecho importantes contribuciones para explicar la forma en que la educación hace que el proceso de producción se beneficie con las externalidades que la capacitación trae consigo, en el sentido de volver la mano de obra más cualificada para utilizar el capital de una manera más eficiente y la posibilidad de que esas personas calificadas introduzcan innovaciones que permitan nuevas y mejores formas de producción, es decir, esta teoría plantea que la educación trae consigo mayor productividad.

Una gran virtud del enfoque del capital humano tiene que ver con la importancia que le asigna a la calidad de la educación porque la educación de mejor calidad se debe traducir en mayor productividad e ingresos [...]. Un ejercicio para Colombia se encuentra en Tenjo (1993b) (Castellar y Uribe, 2003, p. 4).

Sin embargo, los estudios empíricos realizados para analizar el efecto positivo del capital humano utilizan como variable proxy el número de años de escolaridad, es decir, la cantidad, y dejan de lado el problema de la calidad. Esto se puede traducir en medidas imperfectas del componente educacional de la fuerza laboral, ya que, si la teoría del capital humano analiza correctamente los efectos de la educación sobre el crecimiento, los trabajadores que hayan realizado sus estudios en un establecimiento de calidad deben ser más productivos y, microeconómicamente hablando, ganar unos sueldos más altos (McConnell, 2003). Así, el problema de la calidad de la educación es relevante tanto para el crecimiento de los países como para el desarrollo de los mismos.

En Colombia, gracias a la Constitución de 1991, se abona el terreno para hablar de calidad en la educación, pero, sólo hasta el 28 de diciembre de 1992 se legitima este aspecto con la Ley de Educación Superior (Ley 30 de 1992) con la que se crearon organismos tales como el Consejo Nacional de Acreditación. No obstante, instituciones como el ICFES –Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior- habían sido creadas con anterioridad.

En esta investigación se supone que los resultados en los ECAES son una buena “proxy” de la calidad de la educación superior

[...]. En consecuencia, los ECAES de economía tuvieron una preparación suficiente como para ser consideradas pruebas evaluativas del nivel de competencia de los estudiantes. En otras palabras, se puede postular que las pruebas ECAES de economía sí miden de alguna forma el nivel de preparación de los estudiantes”. (Ortiz 2005, pp. 197-198)

En ese sentido, este estudio se realizó con base en los Exámenes de Calidad de la Educación Superior (ECAES) realizados a los estudiantes de Economía en el 2004 como una aproximación a la calidad de la educación superior en general y con base en algunas variables asociadas a las universidades. Se estimó un modelo de dos niveles con el fin de determinar la influencia de las variables asociadas a los estudiantes y de las asociadas a las universidades -

carrera sobre las diferencias en los resultados obtenidos por los estudiantes en el ECAES de Economía realizado en el año 2004.

Se plantea como hipótesis que existe una variación residual significativa entre los rendimientos de los estudiantes y entre los rendimientos medios de las universidades, es decir, que existen diferencias significativas en la calidad de la educación superior en Colombia a nivel intra e inter universidades – medida a través de los resultados obtenidos en el ECAES de Economía 2004 – que se explican por la diferenciación existente entre los estudiantes y entre las universidades. Así, se quiere identificar el impacto de algunas variables y determinar el peso relativo de los factores asociados a los individuos y a las instituciones sobre las diferencias en el rendimiento de los estudiantes. Se encontró que existen diferencias significativas en la calidad de la educación superior en los dos niveles de agregación estudiados, las cuales se explican por las diferencias entre universidades y entre estudiantes.

El documento se divide en cinco secciones: después de esta introducción viene el estado del arte a nivel nacional e internacional. En la tercera sección, se expone la metodología utilizada, para continuar con el proceso de modelización y los resultados. Finalmente, se plantean las conclusiones.

Estado del arte

La investigación sobre la calidad de la educación fue motivada en gran medida por el hecho de que el “valor añadido” de una institución al desarrollo de los estudiantes varía entre ellas. Desde sus inicios, ha habido una evolución en los modelos y las técnicas utilizadas, las variables a estudiar, los instrumentos para recoger los datos, etc.

El trabajo de Coleman (1966) fue cuestionado debido a la utilización de un enfoque metodológico “input – output”, la escogencia de variables fácilmente medibles como los recursos educativos y por dejar de lado variables como el clima educativo y las expectativas de los docentes. El estudio se propuso indagar sobre si los insumos escolares tenían un efecto sobre las diferencias en el desempeño escolar y concluyó que éste efecto era casi nulo, ya que dichas diferencias se debían casi en su totalidad a la distinción en el origen social del estudiante. El informe Coleman sirvió para que se cuestionar a la intervención pública en el sector educativo.

En la misma línea de Coleman, Jencks (1972) concluyó que el rendimiento escolar está influenciado en gran medida por las características propias de los estudiantes. También, Hanushek (1997) realiza una revisión de más de 400 estudios en los que se demuestra que no existe relación entre los recursos escolares - tales como recursos del aula, la razón profesor alumno, salario del profesor, gasto por niño, etc. - y el rendimiento.

No obstante, dichos estudios fueron realizados en países desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Suecia, Australia, Israel, etc. en los que el porcentaje del PIB dedicado a la educación es relativamente alto y las diferencias entre la calidad y la cantidad de los recursos entre escuelas es relativamente bajo.

En los países en vía de desarrollo existen elevadas tasas de natalidad y de deserción escolar, instituciones educativas inadecuadas, infradotadas, recursos humanos poco calificados, etc. Por este motivo, autores como Levin y Lockheed (1993) argumentaron que la educación

incide de manera notable sobre el rendimiento, inclusive más que los atributos familiares tomados en conjunto. Por lo tanto, los autores plantean que es relevante estudiar en qué medida los distintos atributos del plantel, tales como la educación de los maestros, la razón alumno – profesor y la infraestructura física, inciden en el rendimiento académico y en qué medida dichos efectos difieren dependiendo de la naturaleza de las instituciones (públicas o privadas).

En ese sentido, mostraron que la educación de los docentes, el número de docentes por alumno y la infraestructura de la institución tienen un efecto positivo sobre los resultados en las pruebas en las instituciones de naturaleza privada. Sin embargo, en las públicas, según plantean los autores, aumentos en la educación de los docentes y mejoras en la infraestructura no están asociados con un mayor rendimiento.

Finalmente, respecto al gasto público y la calidad relativa de las instituciones públicas respecto a las privadas, los autores se plantean el interrogante sobre si el Estado puede mejorar la calidad de la educación gastando más dinero. Los resultados muestran que, pese al aumento sustancial en el gasto social, la diferencia en calidad entre colegios públicos y privados ha permanecido constante. Por lo que los autores concluyen, de una forma un poco apresurada, que el problema de la calidad de la educación pública es de incentivos y de estructura organizacional más no de inyección de recursos.

El estudio hecho por Correa (2004) a los resultados del ICFES de los estudiantes de secundaria en Cali a través de un modelo de varios niveles, es una herramienta fundamental para el entendimiento de la importancia de este tipo de análisis en Colombia y de su extensión a la educación superior, sin dejar de lado la utilidad proporcionada en cuanto al acercamiento a un concepto sobre qué es la calidad en la educación y cómo puede ser medida, sus principales determinantes y la utilización de la técnica multinivel.

Para identificar los factores que explican las diferencias en los resultados obtenidos en las pruebas del ICFES 2001 en Cali, el autor estimó un modelo multinivel de dos niveles: estudiantes y planteles. El primero, detalla las características de los estudiantes y de su familia y el segundo, incorpora las características de la institución y de sus profesores. En ese sentido, en este modelo se tiene en cuenta que existe dependencia del alumno con el establecimiento.

Así, el autor concluye que:

El análisis de los datos confirma que, en Cali, el efecto de las variables asociadas al plantel sobre el rendimiento educativo es significativo, lo que implica que las políticas educativas tienen que estar encaminadas a mejorar la calidad de los planteles (Correa 2002, p. 101).

Además de que es importante resaltar que la fuerza de la relación entre el logro escolar y las características individuales y familiares varía positiva y significativamente de una institución a otra. Por lo tanto, el autor recomienda, dado que de los resultados en las pruebas ICFES depende en gran medida el acceso a la educación superior, que si se busca universalizar el

acceso a ésta se debe incidir sobre los factores que determinan los resultados en estas pruebas, debido a que si no se refuerza este aspecto se continuará con la tendencia de sobre

selección de estudiantes con mayores capitales culturales y económicos, es decir, con el problema de inmovilidad social.

Metodología

Para identificar los factores que explican las diferencias en los resultados obtenidos por los estudiantes de Economía de Colombia en los ECAES 2004, se utilizó un *Modelo Multinivel*, debido a que la estructura de los datos de la población a estudiar es jerárquica, es decir, la población consta de universidades y alumnos dentro de esas universidades.

Las observaciones individuales (estudiantes) no son completamente independientes, es decir, los estudiantes tienden a ser similares unos con otros dentro de cada programa de Economía debido a que los individuos que hacen parte de la misma universidad reciben una serie de influencias comunes que reducen la heterogeneidad natural del grupo. Así, la correlación promedio (correlación intra-clase) entre las variables medidas entre los estudiantes de la misma institución será más grande que la correlación media entre variables medidas en estudiantes de diferentes instituciones (Hox 1995).

A diferencia de los modelos de regresión lineal tradicionales, los modelos jerárquicos lineales consideran que la población tiene una estructura jerárquica, en este caso, los estudiantes están “anidados” en universidades y por tanto, dentro de cada institución los estudiantes no son completamente independientes.

En ese sentido, uno de los supuestos de las regresiones tradicionales es violado, por lo que una estimación tradicional arrojaría resultados inadecuados en cuanto a los errores estándar: serían más pequeños. Así, los *tests* estadísticos construidos con estos valores se traducirían en resultados falsamente significativos.

Los modelos multinivel no toman esa falta de independencia como un problema de los datos, sino que modelan su naturaleza “anidada” y resuelven el problema de una inadecuada estimación de los errores estándar. Además, estos modelos consideran que la relación entre las características de los estudiantes varía de institución - carrera a institución - carrera, por lo que, en este caso particular, existiría un “efecto universidad”.

El modelo jerárquico lineal estimado es de dos niveles: estudiantes y universidades - carrera. El primero, detalla las características de los estudiantes y de su familia y el segundo, incorpora las características de la institución y del programa de Economía al cual pertenece cada individuo. Así, en este modelo se tiene en cuenta que existe dependencia del alumno con el establecimiento.

Este análisis permite la descomposición de los resultados obtenidos en sus componentes intra-universidad e inter-universidad y el estudio de la asociación entre las variables en esos diferentes niveles de agregación debido a que, a diferencia de los modelos convencionales, éste no descansa sobre el supuesto de la independencia de las observaciones.

El estudio de los modelos multinivel se realizó, en mayor proporción, con base en el libro Modelos Jerárquicos Lineales de Gaviria y Castro 2005. Por este motivo, la presentación que se realizará a continuación, en gran medida, sigue su notación y línea argumental.

Modelo de dos niveles

Se tiene que

$$\gamma_{ij} = \beta_{0j} + \beta_{1j}x_{1ij} + \varepsilon_{ij} \quad (1)$$

Donde x_1 es una variable asociada al individuo i de la institución j , γ es el rendimiento del individuo i de la universidad j , β_{0j} es el rendimiento esperado en la institución j cuando x_1 es igual a 0, β_{1j} es el incremento (disminución) en el rendimiento por cada unidad que aumenta x_1 del alumno en la universidad j y ε_{ij} es la variación residual del estudiante i en la institución j , es decir, lo que se aparta del rendimiento esperado según su x_1 . Se asume que $\varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2)$: la varianza es homogénea para todas las universidades.

Dado que β_{0j} y β_{1j} son valores de cada universidad, se está suponiendo variabilidad entre contextos. Esta suposición exige un desarrollo independiente debido a que convierte estos coeficientes en variables aleatorias en el nivel macro:

$$\beta_{0j} = \beta_0 + \mu_{0j} \quad (2)$$

$$\beta_{1j} = \beta_1 + \mu_{1j} \quad (3)$$

β_{0j} se descompone en β_0 (rendimiento medio en la población de universidades. Es la parte sistemática de la ecuación) y en μ_{0j} (rendimiento diferencial de la universidad j . Representa la parte aleatoria del modelo en el segundo nivel vinculada al punto de corte). Por su parte, β_{1j} se descompone en β_1 (incremento medio en el rendimiento en la prueba ECAES por el aumento en x_1 en la población de universidades, que forma la parte fija del modelo) y en μ_{1j} (incremento diferencial en el rendimiento en el ECAES por el aumento en x_1 en la universidad j)

β_{0j} y β_{1j} tienen una distribución normal bivariada, en cuanto a que cada coeficiente posee una parte sistemática y una aleatoria, donde β_0 es la media general para la población de universidades, β_1 es la pendiente para la población de escuelas, $\sigma_{\mu_0}^2$ es la varianza entre puntos de corte, $\sigma_{\mu_1}^2$ es la varianza entre pendientes y $\sigma_{\mu_0\mu_1}$ es la covarianza entre punto de corte:

$$\begin{aligned} \varepsilon(\beta_{0j}) &= \beta_0 & \nu(\beta_{0j}) &= \sigma_{\mu_0}^2 \\ \varepsilon(\beta_{1j}) &= \beta_1 & \nu(\beta_{1j}) &= \sigma_{\mu_1}^2 \\ \text{cov}(\beta_{0j}, \beta_{1j}) &= \sigma_{\mu_0\mu_1} \end{aligned}$$

La idea de la variación en los contextos o macro niveles es fundamental cuando se habla de los modelos multinivel, si esta variación no existiera, este tipo de modelación no sería necesaria. En ese sentido, se debe tener en cuenta que $\sigma_{\mu_0}^2$ y $\sigma_{\mu_1}^2$ pueden tomar valores iguales o mayores a cero y $\sigma_{\mu_0\mu_1}$ un valor igual a cero, positivo o negativo.

Al introducir variables explicativas, usar una notación más compacta y definir dos vectores de unos ($x'_{0ij} = [1,1,1,\dots,1]$ y $W'_{0j} = [1,1,1,\dots,1]$) β_{0j} y β_{p0} quedan expresados como $\beta_{0j}x_{0ij}$ y $\beta_{p0}W_{0j}$, respectivamente y el modelo multinivel de dos niveles para P variables explicativas asociadas a los i estudiantes (nivel 1) y L variables explicativas asociadas a las j universidades (nivel 2) sería:

$$\gamma_{ij} = \sum_{p=0}^P \beta_{pj}x_{pij} + \varepsilon_{ij} \quad \text{Donde } \varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma_{\varepsilon}^2) \quad (4)$$

$$\beta_{pj} = \sum_{l=0}^L \beta_{pl}W_{lj} + \mu_{pj} \quad \text{Donde } \mu_{pj} \sim N(0, T) \quad (5)$$

Obsérvese que en $\varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma_{\varepsilon}^2)$ σ_{ε}^2 es la varianza dentro de las universidades y se supone constante en todas ellas y T es una matriz que en su diagonal tiene las varianzas de cada μ_p ($\sigma_{\mu_p}^2$) y por fuera de ella sus covarianzas. En las ecuaciones (4) y (5) todos los parámetros se tratan como coeficientes, lo cual se traduce en una ventaja más adelante a la hora de estimar el modelo.

El modelo nulo

Es un caso particular del modelo anterior. Aquí no existe ninguna variable explicativa, por lo que constituye una herramienta metodológica. Si la varianza de este modelo no es

estadísticamente distinta de cero, no tendría sentido incluir variables explicativas en el modelo jerárquico en ninguno de sus dos niveles.

El nivel 1 estaría representado por

$$\gamma_{ij} = \beta_{0j} + \varepsilon_{ij}$$

Y el nivel 2 por

$$\beta_{0j} = \beta_0 + \mu_{0j}.$$

Así, el modelo completo sería

$$\gamma_{ij} = \beta_0 + (\mu_{0j} + \varepsilon_{ij}) \text{ Donde } \varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2) \text{ y } \mu_{0j} \sim N(0, \sigma_{\mu_0}^2)$$

$\sigma_{\mu_0}^2$ es la varianza entre las universidades y σ_ε^2 es la varianza entre los estudiantes. Por lo tanto, si estas dos varianzas no fuesen estadísticamente significativas no tendría sentido introducir variables explicativas debido a que este hecho significaría que no habría nada que explicar. No obstante, la varianza de cada nivel generalmente es significativa por lo que el paso a seguir sería introducir variables independientes que disminuyan la varianza no explicada.

Proceso de modelización y resultados

La existencia de varianza dentro de las universidades indicaría que los sujetos se diferencian entre ellos dentro de cada institución. Así mismo, la existencia de varianza en el segundo nivel indicaría que las universidades difieren en el rendimiento medio en el ECAES de cada una de ellas. Lo que se quiere hacer con los modelos multinivel es, una vez verificada su existencia, explicar la máxima cantidad de varianza en cada uno de los niveles, a partir de las variables incluidas en el modelo (Gaviria y Castro 2005).

Los modelos multinivel suponen una estrategia de modelización que consiste en un patrón complejo de construcción y prueba de modelos sucesivos. Este proceso comienza con el modelo nulo, ya que será el punto de comparación de los modelos posteriores que incluyen variables explicatorias en ambos niveles, en otras palabras, se busca encontrar un modelo que explique más varianza que el modelo nulo.

Al igual que en los modelos tradicionales, la significancia de un predictor está dada por la razón entre su estimador y su error típico. Si el valor de dicho cociente es mayor a dos ($p < 0.05$) el parámetro será significativo. Por su parte, el ajuste del modelo se evalúa al comparar el valor del estadístico de verosimilitud en dos modelos en los que el primero esté anidado respecto al segundo, es decir, donde el primero sea un caso particular del segundo en el sentido de poder obtenerlo al igualar a cero algunos de sus parámetros. Por este motivo, el proceso de modelización multinivel se hace respecto al modelo nulo, ya que éste siempre es un caso particular de cualquier otro modelo alternativo. Las estimaciones se realizaron con el software MlwiN 2.02.

Población estudiada y definición de variables

Para la realización de este estudio se combinaron dos bases de datos: una asociada a los estudiantes y otra a las universidades. La primera, fue suministrada por el área de Procesamiento del ICFES y contiene información extraída del formulario de inscripción a la prueba respecto a las características socioeconómicas de los estudiantes. La segunda, fue

construida a partir de la información encontrada en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) del Ministerio de Educación Nacional.

Como resultado de dicha combinación y una vez se filtra la base para los individuos que se registraron como estudiantes y para los cuales existía información, se trabajó con 2377 estudiantes ubicados en las 52¹ universidades que ofrecen el programa académico de Economía en Colombia y cuyos estudiantes tuvieron presencia en el ECAES de Economía 2004.

Las variables utilizadas no tuvieron ningún tipo de estandarización. Particularmente en puntaje, este proceso no se realizó para que los parámetros estimados dieran luces sobre los efectos directos de las variables sobre el puntaje obtenido por los estudiantes. Las variables son las siguientes:

- Sexo: variable categórica codificada con 0 para los hombres y 1 para las mujeres.
- Estacivil: variable categórica recodificada con 0 para los estudiantes que no están unidos y 1 para los que sí lo están.
- Estrato: variable numérica que representa el estrato de los estudiantes.
- Hablaotroidioma: variable categórica codificada con 0 para los estudiantes que sí leen otro idioma y 1 para los que no lo hacen.
- Quierepostgrado: variable categórica codificada con 0 si el estudiante manifestó querer seguir estudiando (independientemente de la categoría maestría, doctorado, etc.) y 1 si no lo manifestó.
- Educpadre y Educmadre: variables categóricas recodificadas con 0 si el nivel educativo es básica secundaria, 1 si no tuvo escuela, 2 preescolar, 3 básica primaria, 4 media vocacional, 5 tecnológico o técnico, 6 universitario y 7 postgrado.
- Ocupadre y Ocumadre: variables categóricas recodificadas con 0 si la ocupación es trabajador independiente, 1 empresario, 2 administrador o gerente, 3 profesional independiente, 4 profesional empleado, 5 trabajador empleado, 6 rentista, 7 obrero, 8 jubilado, 9 hogar, 10 estudiante y 11 si no devenga ingresos o busca trabajo.
- Eval_semestre: variable numérica que representa el semestre en el que se encontraba el estudiante a la hora de presentar la prueba.
- Edad: variable numérica que representa la edad del estudiante.
- Ciudadppal: variable categórica codificada con 0 para las universidades ubicadas en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla y 1 para el resto.
- Planconenfasis: variable categórica codificada con 0 si el programa académico es Economía o Economía General y 1 para el resto.
- Sedeinst: variable categórica codificada con 0 si la universidad es sede principal y 1 si es una seccional.

¹ Cuando se discrimina por algunas características propias de la institución, como por ejemplo sede, el número de universidades se incrementa a 59.

- Caracteracademicoinst: variable categórica codificada con 0 si es universitario y 1 si no lo es.
- Razonorigeninst: variable categórica codificada con 0 para las universidades no oficiales y 1 para las que sí lo son.
- Modalidadinst: variable categórica que toma valor de 0 para las instituciones con modalidad universitaria y 1 para el resto.

Modelo nulo

La regresión se realiza teniendo en cuenta la variable constante que toma el valor de uno para cada estudiante, esto debido a que se quiere introducir el intercepto en la ecuación. Los resultados de este modelo son resumidos en la siguiente tabla:

Tabla 1
Resultados del Modelo Nulo

| VARIABLE | Parte Fija | Parte Aleatoria | | Coeficiente de Verosimilitud |
|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| | β_0 | $\sigma^2_{\mu_0}$ | $\sigma^2_{\varepsilon_0}$ | |
| Constante | 98,380 (0,828) | 36,928 (7,399) | 56,847 (1,669) | 16523,090 |

Fuente: Cálculos propios. () Error típico

El punto de corte del modelo nulo representa el rendimiento medio de todos los estudiantes de todas las universidades que presentaron el ECAES en el 2004. En ese sentido, el promedio obtenido por los estudiantes en esta prueba fue de 98,380, con una desviación típica de 0,828 que indica que es significativo.

La varianza entre el rendimiento medio de todas las universidades (varianza inter – universidad, $\sigma^2_{\mu_0}$) es 36,928, con una desviación típica de 7,399. Esto significa que la varianza entre el rendimiento medio de todas las universidades es significativa: existen diferencias en la calidad del programa de Economía entre las distintas universidades de Colombia, en el sentido que obtienen rendimientos medios diferenciados.

La varianza entre los alumnos dentro de las universidades (varianza entre – estudiantes o intra – universidades, σ^2_{ε}) es de 56,847 con una desviación típica de 1,669. Al igual que la anterior, es significativa. Esto quiere decir que hay diferenciación entre los estudiantes.

Estos resultados indican que hay variación residual significativa en el modelo nulo. Es decir, que hay variación sin explicar entre los rendimientos de los estudiantes y entre los rendimientos medios de las universidades y que por lo tanto se debe buscar una explicación a dicha variación. En ese sentido, se justifica la utilización de un modelo multinivel puesto que su proceso de modelización consiste en expandir el modelo: introducir variables en ambos niveles que logren explicar la variación residual entre las universidades.

Los modelos multinivel son necesarios porque en datos agrupados las observaciones en el mismo grupo son generalmente más similares que las observaciones de grupos diferentes.

Esto viola el supuesto de independencia de todas las observaciones. Esta falta de independencia puede ser expresada con un coeficiente de correlación: la correlación intra-clase (ρ). (Hox, 1995).

$$\rho = \frac{\sigma_{\mu_0}^2}{\sigma_{\mu_0}^2 + \sigma_{\varepsilon_0}^2} = \frac{36,958}{36,928 + 56,847} = 0,394$$

Este coeficiente indica que del total de la varianza del rendimiento de los estudiantes el 39.4% corresponde a varianza entre las universidades. En otras palabras, la diferenciación entre los puntajes obtenidos en el ECAES por los estudiantes es explicada en dicha proporción por el “efecto universidad”: asistir a una determinada universidad sí importa.

Expansión del modelo

El siguiente paso en el proceso de modelización es determinar si las variables asociadas a los estudiantes y a las universidades inciden significativamente en el rendimiento en el ECAES. En otras palabras, lo que se busca en este paso es determinar cuáles variables ayudan a explicar la variación residual existente. Para tal fin, se deben incluir en el modelo nulo uno a uno y de forma independiente los predictores con los que se cuenta, analizar los resultados de la parte fija y de la aleatoria y determinar cuáles son significativos a la hora de explicar la variación.

Vale la pena resaltar que en esta investigación se parte del supuesto de que las universidades variarán tanto en rendimientos medios como en pendientes por lo que en este paso se traerán a colación los resultados obtenidos cuando los predictores varían en el nivel universidades. Los resultados se observan en las dos tablas siguientes:

Tabla 2
Variables Asociadas a los Estudiantes que Presentaron el ECAES de Economía en el 2004

| VARIABLE | Parte Fija | | Parte Aleatoria | | | | Coef. Verosim. |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| | β_0 | β_1 | $\sigma_{\mu_0}^2$ | $\sigma_{\varepsilon_0}^2$ | $\sigma_{\mu_1}^2$ | $\sigma_{\mu_{01}}$ | |
| Sexo | 100,099 (0,910) | -3,133 (0,357) | 43,170 (8,888) | 53,582 (1,587) | 1,588 (1,184) | -6,939 (2,753) | 16390,200 |
| Estacivil | 98,614 (0,814) | -2,896 (0,621) | 35,474 (7,155) | 56,372 (1,655) | 0,000 (0,000) | 0,000 (0,000) | 16501,440 |
| Estrato | 98,101 (0,954) | 0,085 (0,145) | 36,627 (7,289) | 56,849 (1,670) | 0,000 (0,000) | 0,000 (0,000) | 16522,760 |
| Hablaotro idioma | 101,226 (0,838) | -3,336 (0,548) | 27,637 (7,217) | 55,899 (1,651) | 2,632 (2,368) | 2,299 (3,048) | 16486,610 |
| Quiere postgrado | 98,514 (0,826) | -1,202 (0,507) | 36,537 (7,324) | 56,724 (1,666) | 0,000 (0,000) | 0,000 (0,000) | 16517,470 |
| Educpadre | 97,647 (0,845) | 0,206 (0,069) | 35,022 (7,042) | 56,700 (1,665) | 0,000 (0,000) | 0,000 (0,000) | 16514,220 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| Educmadre | 98,140 (0,848) | 0,077 (0,066) | 36,376 (7,240) | 56,834 (1,699) | 0,000 (0,000) | 0,000 (0,000) | 16521,740 |
| Ocupadre | 98,517 (0,846) | -0,038 (0,047) | 36,953 (7,406) | 56,830 (1,669) | 0,000 (0,000) | 0,000 (0,000) | 16522,450 |
| Ocumadre | 98,801 (0,872) | -0,071 (0,047) | 36,749 (7,365) | 56,798 (1,668) | 0,000 (0,000) | 0,000 (0,000) | 16520,820 |
| Eval_ semestre | 104,661 (1,689) | -0,660 (0,155) | 35,719 (7,172) | 56,454 (1,658) | 0,000 (0,000) | 0,000 (0,000) | 16505,170 |
| Edad | 105,743 (1,278) | -0,296 (0,041) | 32,939 (6,695) | 55,730 (1,636) | 0,000 (0,000) | 0,000 (0,000) | 16470,870 |

Fuente: Cálculos propios. () Error típico

Se observa que las variables estrato, educmadre, ocupadre y ocumadre resultaron ser no significativas, lo que quiere decir que estas variables no son determinantes a la hora de explicar la variación inter e intra universidad existente.

Para la variable sexo se observa un aumento en el rendimiento medio esperado respecto al modelo nulo (ahora es 100,099) esto debido a que el punto de corte ahora se refiere a la población cuya variable independiente toma el valor de cero, en este caso, a los hombres. El valor del parámetro asociado a esta variable (la pendiente) es -3,133 y representa el incremento en el rendimiento medio en el ECAES cuando la variable sexo cambia de valor para cada universidad, es decir, las mujeres obtienen 3,133 puntos menos que los hombres. Este resultado es acorde con lo que normalmente se encuentra en este tipo de pruebas: en promedio, a los hombres les va mejor que a las mujeres.

En cuanto a la parte aleatoria, es evidente que las universidades difieren entre sí en el punto de corte y en la pendiente debido a que los valores de sus varianzas son diferentes de cero, existe heterogeneidad entre cada universidad – carrera. En ese sentido, se observa que la varianza residual entre las universidades aumentó con respecto al modelo nulo (pasó de 36,928 a 43,170) es decir, la introducción de esta variable no es determinante a la hora de explicar la varianza, a pesar de que el valor es significativo.

Además, tenemos que la variación residual entre las pendientes de las universidades debida a la distinta relación que se establece entre el sexo de los estudiantes y su rendimiento en el ECAES no es significativa, es decir, no hay instituciones donde el género de los estudiantes influya fuertemente en los resultados en el ECAES. Sin embargo, se tiene que la covarianza sí es significativa y tiene un valor negativo. Esto quiere decir que los valores de intercepto y de pendiente en cada universidad están relacionados, en este caso, el signo negativo implica que las universidades que tienen mayor puntaje promedio tienen menor pendiente y viceversa.

A su vez, la otra parte aleatoria del modelo (la variación entre estudiantes dentro de las universidades) puede observarse que es significativa e igual a 53,582 y que se presentó una disminución respecto al modelo nulo, por lo que puede decirse que la variable sexo sí tiene un efecto sobre la varianza entre individuos.

VARIABLES COMO ESTADO CIVIL, HABLA OTRO IDIOMA Y QUIERE POSTGRADO TAMBIÉN PRESENTAN LOS SIGNOS ESPERADOS: EL INCREMENTO EN EL RENDIMIENTO MEDIO DISMINUYE CUANDO EL ESTUDIANTE ESTÁ

unido, no habla otro idioma y no desea realizar estudios de postgrado en un futuro, respectivamente.

Lo anterior podría explicarse porque las personas que han adquirido un compromiso tienden a dedicarle menos tiempo al estudio debido a que poseen diferentes obligaciones. Por su parte, el hecho de hablar otro idioma - del total de la muestra el 21.7% hablan otro idioma y de ese porcentaje el 92.6% hablan inglés - implica directamente tener un conocimiento por encima del promedio del mismo; este hecho podría contribuir a un mejor aprendizaje (tal y como lo

está reflejando la media de los estudiantes que hablan otro idioma) ya que en Economía la gran mayoría de las lecturas propuestas y de los mejores libros están en inglés. También, el hecho de querer realizar estudios de postgrado en un futuro constituye un indicador del grado de esfuerzo que un estudiante le pone a su pregrado, de ahí los resultados encontrados.

Al igual que las variables anteriores, *eval_semestre* y *edad* tienen un efecto negativo sobre el rendimiento medio, no obstante, ese efecto no es tan esperado como los anteriores debido a que en su lugar se esperaría que las personas con edades más altas y en niveles más elevados en su carrera tuvieran mayor conocimiento y por tanto, mejores resultados en la prueba.

En ese sentido, vale la pena mencionar que el 80% de los estudiantes se encuentran en un rango de edad de 20 a 26 años (Valens, 2007) y que el 76% se encuentra ubicado en los semestres noveno y décimo (Valens, 2007) por lo que las personas ubicadas por fuera de estos rangos son datos atípicos y no obtuvieron buenos resultados.

Por el lado de la variable *eval_semestre*, la explicación no es evidente debido a que por debajo del rango el semestre mínimo encontrado es el sexto, semestre en el cual, en la mayoría de los programas, ya se han aprendido los conocimientos básicos necesarios para presentar este tipo de pruebas, y el máximo es el doce, el cual constituye un semestre que muchos programas consideran dentro de su pensum, es decir, las personas ubicadas en semestres superiores al décimo no pueden ser consideradas a priori como repitentes ni ponerles etiquetas de esa índole que puedan dar cuenta de la relación negativa existente entre semestre y puntaje.

Sin embargo, por el lado de la *edad* sí puede encontrarse una explicación más escueta, ya que, a pesar de que no se posea información respecto a la edad que tenía cada estudiante cuando empezó la carrera, sólo aproximadamente el 20% de los estudiantes tiene entre 27 y 62 años². Es decir, dicho porcentaje representa a estudiantes que han tenido un proceso académico “anormal”, pues sus edades no están dentro del rango de 20 a 26 años en el que se encuentra la gran mayoría de estudiantes, y, dado el signo negativo encontrado en este estudio asociado a la variable *edad*, esa anomalía en el proceso se traduce en malos rendimientos.

Por su parte, cuando se introduce la educación del padre se observa una disminución en el promedio cuando el padre tiene educación secundaria, no obstante, a medida que el nivel educativo aumenta el rendimiento medio en el ECAES también lo hace. Esto capta lo que normalmente se conoce como “la calidad de los hijos”, ya que se dice que personas con un

² El 0.5% está ubicado entre los 13 y 19 años.

alto nivel educativo van a educar mejor a sus hijos por sus propias capacidades y tienen una visión más amplia de la calidad de las instituciones donde deben estudiar sus hijos y así matricularlos allí o simplemente dar consejos al respecto. Este “efecto institución” será tratado más adelante.

Un fenómeno bastante interesante de analizar es que las universidades no difieren entre sí en las pendientes asociadas a cada una de las variables: las varianzas asociadas a este parámetro son iguales a cero, excepto en sexo, variable que ya se estudió con detalle y en habla otro idioma, donde dio no significativa.

Lo anterior significa que no hay variación residual entre las pendientes de las universidades, debido a la distinta relación que se establece entre dichas variables y su rendimiento en el ECAES. Además, se tienen valores iguales a cero asociados a las covarianzas lo que significa, que los valores de intercepto y de pendiente (en esas variables) en cada universidad no están relacionados.

Una cuestión muy importante en la modelación multinivel a la hora de realizar la inclusión de cada uno de los predictores es analizar si las varianzas intra e inter universidad aumentan o disminuyen respecto al modelo nulo.

En ese sentido, en cuanto a la variación entre estudiantes, ésta disminuye con la inclusión de cada una de las variables asociadas a los estudiantes, aunque no se observan grandes cambios: el más grande se encuentra cuando se incluye la variable edad, no obstante, no es muy grande. La varianza entre universidades aumenta para la variable sexo y disminuye para todas las demás: la disminución más significativa se produce al incluir la variable habla otro idioma (pasa de 36,928 a 27,637) pero, para el resto de predictores los cambios no son muy grandes.

Como se puede apreciar, la inclusión de las variables en el nivel de los estudiantes no produce una disminución muy grande en las varianzas entre e intra universidades, es decir, aún queda varianza por explicar. Además, llama la atención el hecho de que la varianza entre estudiantes no sufra grandes disminuciones con la inclusión de predictores propios de este nivel. Por lo tanto, es importante estudiar qué sucede cuando se las variables que se introducen son las que están asociadas con las universidades.

Tabla 3
VARIABLES ASOCIADAS A LAS UNIVERSIDADES - Carrera que Presentaron el ECAES de Economía en el 2004

| VARIABLE | Parte Fija | | Parte Aleatoria | | | | Coef. Verosim. |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| | β_0 | β_1 | σ_{μ_0} | $\sigma_{\varepsilon_0}^2$ | $\sigma_{\mu_1}^2$ | $\sigma_{\mu_{01}}$ | |
| Ciudadppal | 99,739 (1,157) | -3,515 (1,479) | 44,804 (11,267) | 56,848 (1,669) | 0,000 (0,000) | - 14,411 (6,298) | 16512,950 |
| Planconenfasis | 98,913 (0,942) | -3,043 (1,647) | 39,678 (8,719) | 56,844 (1,699) | 0,000 (0,000) | - 11,902 (5,969) | 16518,500 |
| Sedeinst | 98,703 | -2,164 | 37,405 | 56,855 | 0,000 | -4,284 | 16522,030 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------|
| | (0,904) | (2,112) | (8,112) | (1,670) | (0,000) | (8,712) | |
| Caracter académicoinst | 98,966 (0,889) | -4,939 (1,621) | 37,548 (7,954) | 56,865 (1,670) | 0,000 (0,000) | - 14,559 (5,166) | 16516,460 |
| Razon origeninst | 97,281 (0,942) | 4,109 (1,753) | 34,964 (8,232) | 56,839 (1,669) | 0,000 (0,000) | -1,609 (7,264) | 16518,000 |
| Modalidadinst | 98,380 (0,828) | 0,000 (0,000) | 36,928 (7,399) | 56,847 (1,669) | 0,000 (0,000) | 0,000 (0,000) | 16523,090 |

Fuente: Cálculos propios. () Error típico

Las variables plan con énfasis y sede de la institución resultaron no ser significativas. La modalidad de la institución tiene los mismos valores que el modelo nulo. Esto se debe a que las universidades que tuvieron estudiantes en el ECAES 2004 tienen la misma modalidad, para este caso, universitaria.

En este tipo de predictores se encontraron también muchos resultados esperados. Puede observarse que cuando la universidad se encuentra en una ciudad diferente a Bogotá, Cali, Medellín o Barranquilla, el puntaje medio disminuye, de la misma forma que cuando el carácter académico de la institución no es universitario.

En cuanto a la razón de origen de la institución, al comparar los resultados con el modelo nulo, se observa una disminución en el puntaje promedio cuando la universidad no es oficial y un incremento de 4.109 puntos, el más alto encontrado hasta el momento, cuando el estudiante pertenece a una universidad oficial.

La variación asociada a la pendiente entre universidades es igual a cero para todas las variables, es decir, el efecto que tiene el cambio de cada uno de estos predictores sobre el puntaje no difiere de universidad – carrera a universidad – carrera. En cuanto a la covarianza, ciudad principal y carácter académico de la institución presentan una relación negativa entre los valores de intercepto y de pendiente, no obstante, dicha asociación resultó ser no significativa para razón de origen.

Al comparar las varianzas inter e intra universidad con las del modelo nulo puede apreciarse que sólo la inclusión de la variable razón de origen disminuye dichas “heterogeneidades”, mientras que carácter académico y ciudad principal las aumentan. No obstante, sólo esta última provoca una variación considerable con respecto al nulo en el nivel inter universidad.

El coeficiente de verosimilitud es utilizado para evaluar el ajuste relativo de un modelo. Dado que el interés de esta investigación es analizar modelos que incluyan de manera conjunta variables de los estudiantes y de las universidades, éste coeficiente será traído a colación más adelante.

Modelo total con variables de los estudiantes

En la sección anterior se dio cuenta de la variación residual entre las pendientes de las universidades debida a la distinta relación que se establece entre cada predictor y el resultado en el ECAES, además, su relación con el intercepto. Ahora, se quiere comparar el modelo

nulo con unos modelos alternativos en los que se incluyan, en primera instancia, todas las variables de los estudiantes y todas las variables de las universidades y luego, todos los predictores en su conjunto, por lo que de ahora en adelante no resulta relevante volver a analizar dichas variaciones.

En este modelo se introdujeron los predictores asociados a los estudiantes en su totalidad. En el proceso realizado, la inclusión de la última variable con la que se contaba (edad) hizo que la variable educación del padre dejara de ser significativa, por lo que ésta última se sacó del modelo debido a que la idea en este tipo de modelación es dejar únicamente las variables que sean significativas.

En el modelo uno puede apreciarse que cuando se incluyen todos los predictores asociados a los estudiantes la varianza inter universidad no explicada disminuye significativamente: pasa de 36.928 a 26.903. De la misma forma, la varianza entre estudiantes pasa de ser 56.847 a 51.204.

La correlación intra clase pasó de 39.4% a 34.4%. Esto significa que del total de la varianza en el rendimiento en el ECAES el 34.4% corresponde a variación entre las universidades. El introducir variables asociadas a los estudiantes hizo que el “efecto universidad” se redujera.

Tabla 4
Resultados del Modelo Uno: Modelo Total con
Variabes de los Estudiantes

| VARIABLE | | Constante | Sexo | Estacivil | Hablao tro idioma | Quiere postgr ado | Eval_se mestre | Edad |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Parte Fija | β_0 | 114,849 (1,803) | | | | | | |
| | β_1 | | -3,846 (0,306) | -1,219 (0,624) | -2,492 (0,446) | -1,088 (0,481) | -0,349 (0,152) | -0,352 (0,043) |
| Parte Aleatoria | $\sigma^2_{\mu_0}$ | 26,903 (5,482) | | | | | | |
| | $\sigma^2_{\varepsilon_0}$ | 51,204 (1,504) | | | | | | |
| Coef. Verosim. | | 16263,240 | | | | | | |

Fuente: Cálculos propios. () Error típico

Modelo total con variables de las universidades

La inclusión de las variables del nivel de las universidades en su conjunto hizo que el carácter académico de las instituciones dejara de ser significativo, razón por la cual dicha variables se excluyó de la estimación.

Tabla 5
Resultados del Modelo Dos: Modelo Total con
Variabes de las Universidades – Carrera

| VARIABLE | Constante | | razonorigeninst |
|----------|-----------|--|-----------------|
|----------|-----------|--|-----------------|

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Parte Fija | β_0 | 98,832 (0,979) | | |
| | β_1 | | -5,003 (1,560) | 5,549 (1,705) |
| Parte Aleatoria | $\sigma^2_{\mu_0}$ | 28,126 (5,745) | | |
| | $\sigma^2_{\varepsilon_0}$ | 56,849 (1,669) | | |
| Coef. de Verosimilitud | | 16508,670 | | |

Fuente: Cálculos propios. () Error típico

Las variables razón de origen de la universidad y ciudad principal explican casi la misma cantidad de varianza que todas las variables asociadas a los estudiantes en su conjunto, ya que la varianza entre universidades pasó de ser 36,928 en el modelo nulo a 28,126. Esto da cuenta del gran poder explicativo que tienen estas dos variables. La varianza entre estudiantes tuvo un muy leve incremento.

El coeficiente de correlación intra clase es ahora 33.1%, lo que indica que con la inclusión de este tipo de variables asociadas a las universidades la disminución del “efecto universidad” es aún más grande. Este modelo muestra que la diferenciación existente en los puntajes que miden la calidad del programa de Economía en Colombia está fuertemente influenciada porque la universidad se encuentre ubicada o no en una ciudad principal y porque la institución tenga una determinada razón de origen.

Modelo total con variables de los estudiantes y de las universidades

En este modelo se quiere analizar la asociación con el rendimiento que tienen todos los predictores en su conjunto. Así, los dos grupos de variables son incluidos en la estimación.

Tabla 6
Modelo Tres: Modelo Total con
Variables de los Estudiantes y de las Universidades - Carrera

| VARIABLE | Parte Fija | | Parte Aleatoria | | Coef. Verosim. |
|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| | β_0 | β_1 | $\sigma^2_{\mu_0}$ | $\sigma^2_{\varepsilon_0}$ | |
| Constante | 115,457 (1,840) | | | | 16245,860 |
| Sexo | | -3,835 (0,306) | 19,185 (4,030) | 51,209 (1,503) | |
| Estacivil | | -1,238 (0,624) | | | |
| Hablaotroidioma | | -2,555 (0,445) | | | |
| Quierepostgrado | | -1,108 (0,481) | | | |
| Eval_semestre | | -0,358 (0,152) | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|--|--|--|
| Edad | | -0,354 (0,043) | | | |
| Ciudadppal | | -4,719 (1,311) | | | |
| Razonorigeninst | | 5,147 (1,425) | | | |

Fuente: Cálculos propios. () Error típico

La varianza entre universidades bajó hasta 19,185. De la misma forma, disminuyó la intra universidad: pasó de 56,847 a 51,209. El efecto conjunto que tienen estas variables ayuda a explicar en gran proporción las “heterogeneidades” inter e intra universidades que se habían observado en el modelo nulo, esto debido a que la variación residual disminuyó significativamente.

En cuanto al coeficiente de correlación intra clase, la inclusión de los dos grupos de variables hizo que este disminuyera hasta un 27.25%. El efecto conjunto que tienen estas variables hizo que la variación entre los rendimientos en el ECAES explicada por la varianza entre las universidades se redujera, es decir, las variaciones en los rendimientos dependen ahora en menor medida de las diferencias entre las universidades (“efecto universidad”).

Ahora, el paso a seguir es evaluar el ajuste a los datos de los modelos anteriores, es decir, analizar el coeficiente de verosimilitud:

Esta estrategia nos lleva a comparar los modelos construidos con el modelo nulo. La regla aproximada señala que la diferencia entre las razones de verosimilitud de los modelos comparados debe ser al menos el doble de grande que la diferencia entre el número de parámetros que incluyen uno y otro modelo (Gaviria y Castro, 2005, p. 99).

Tabla 7
Análisis del Ajuste de los Modelos

| | Diferencia entre coef. de verosimilitud | Diferencia entre el número de parámetros |
|------------------------------------|--|---|
| Modelo Nulo vs. Modelo Uno | 259.85 | 6 |
| Modelo Nulo vs. Modelo Dos | 14.42 | 2 |
| Modelo Nulo vs. Modelo Tres | 277.23 | 8 |

Fuente: Cálculos propios.

Se observa que los tres modelos realizan un aporte significativo con respecto al modelo nulo. En esa medida, dado que el modelo tres es el que incluye más parámetros, es el más completo a la hora de explicar las diferencias en el rendimiento obtenido en el ECAES 2004.

Conclusiones

Es interesante destacar que, al igual que en la gran mayoría de estudios realizados en Colombia a nivel primaria y secundaria, los hombres obtienen un mejor desempeño en el tipo de pruebas que actualmente se realizan con el objeto de medir la calidad en la educación. No obstante, con la ocupación del padre y de la madre y sus niveles de escolaridad no sucede lo

mismo. A pesar de que en ese tipo de estudios influyen significativamente, a nivel superior – particularmente en el programa de Economía – estas variables resultaron ser no significativas.

Este resultado llama bastante la atención debido a que sí existe un “efecto plantel” en el que se podría justificar el hecho de que estas variables no resulten ser significativas al transmitirse su poder explicativo en el hecho de que estos padres al tener más ingresos compran una mejor educación para sus hijos – tal como se vio con la educación del padre ya

que esta variable que se volvió no significativa al incorporar los predictores de las universidades – Sin embargo, en las universidades oficiales no se cobran matrículas altas, pero sus estudiantes, tal como se vio en el análisis de las variables asociadas a la institución, obtuvieron los mejores resultados. En ese sentido, este argumento no es muy válido a simple vista.

No obstante, hay que tener en cuenta que en las universidades oficiales en Colombia se incurre en una especie de “sesgo de selección” en el sentido que son “las mejores para los mejores”. Es decir, a pesar de que en ellas la mayoría de los estudiantes pertenecen a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 y podría pensarse que son individuos cuyos padres no tuvieron unos ingresos altos para comprar la mejor educación secundaria, los estudiantes que entran a este tipo de instituciones son los mejores debido a los procesos de admisión que se llevan a cabo en las instituciones públicas. Todo lo anterior también constituye una explicación al hecho de que el estrato no sea una variable significativa.

En general, los signos asociados a las variables fueron los esperados. Además, esta investigación ha confirmado que el rendimiento obtenido por los estudiantes se ve altamente influenciado por las variables asociadas a las universidades que resultaron significativas, en el sentido de tener un alto poder explicativo sobre las variaciones encontradas entre los puntajes obtenidos por los estudiantes y los puntajes medios entre las universidades.

Los resultados de la estimación del modelo nulo indicaron que el 39.4% de la varianza total en el rendimiento se debe a las variaciones existentes entre universidades. Al incluir los dos grupos de variables, esta medida se redujo a un 27.25% y la varianza entre universidades no explicada se redujo también considerablemente. La inclusión de los grupos por separado no logra disminuir tanto la correlación intra clase, sin embargo, las variables asociadas a las universidades lo hace en mayor medida que las de los estudiantes.

También, se establece que el efecto sobre los rendimientos de las variables asociadas a los estudiantes varía de forma significativa de universidad a universidad. El tipo de modelación empleado en esta investigación permite dar cuenta de que existen instituciones más inequitativas que otras, en el sentido técnico de asumir las pendientes como una medida de esta característica. Si existe una pendiente elevada respecto a los predictores de los estudiantes significa que existe una mayor dependencia del rendimiento con las características propias del individuo y no con de la influencia de la institución.

El gráfico 3 (Valens, 2007) muestra los residuos ordenados ascendentemente con el intervalo de 95% de confianza. En la gráfica se ven plasmados los residuos de todas las universidades

incluidas en esta investigación. Las universidades cuyo intervalo de confianza está por encima del cero son aquellas que se encuentran por encima de la línea predicha por el parámetro fijo β_0 . En esa medida, se puede afirmar que la mayoría de universidades se encuentra por debajo de la media, a un nivel del 5%. Lo cual no es nada alentador ya que estamos hablando de la calidad de dichas instituciones.

A nivel econométrico, la calidad de la educación superior no ha sido un tema estudiado. Esto puede justificarse en que la variable *proxy* para medir la calidad en este nivel – el puntaje obtenido por los estudiantes en el ECAES – tuvo su aparición hace pocos años. También, se debe resaltar que la metodología empleada en este estudio ha sido poco utilizada en Colombia en la investigación educativa, a pesar de que ha sido reconocida como la más apropiada para tratar este tipo de datos.

En ese sentido, es fundamental reconocer ésta investigación como una primera aproximación en Colombia respecto a la incidencia de diferentes factores sobre la calidad y dejar la puerta abierta a posteriores estudios en diferentes áreas del conocimiento para lograr así un diagnóstico certero de qué está pasando en materia de educación superior en Colombia.

Es muy importante resaltar la poca información disponible y la dificultad que existe actualmente para acceder a ella, por lo que se recomienda ampliar y mejorar las bases de datos respecto a la información de los estudiantes que presentan este tipo de pruebas y, sobre todo, la consolidación de un sistema de información sobre variables indicadoras de calidad en cada uno de los programas académicos ofrecidos en Colombia debido a que las variables utilizadas internacionalmente para hacer este tipo de mediciones no se encuentran discriminadas por programa.

Actualmente, a pesar de toda la discusión existente acerca de qué tan saludable para el sistema de educación superior puede llegar a ser medir la calidad con este tipo de pruebas, los resultados obtenidos en el ECAES han venido cobrando importancia a la hora de señalar cuáles universidades ofrecen mejor calidad y muy seguramente va a convertirse en una señal en el mercado laboral a nivel individual. En ese sentido, es fundamental realizar estudios pertinentes a la investigación educativa en este nivel y así poder realizar recomendaciones de política más adecuadas. Pero, para ello, es necesario contar con una información más detallada, accesible y sobre todo asequible para las personas interesadas en continuar con este tipo de investigaciones.

“Siuviésemos que caracterizar a la investigación educativa hoy diríamos que ésta es empírica, multidisciplinar, multivariada y multinivel” (Keeves y McKenzie, 1999, p. 208).

Bibliografía

- AITKIN, M. y LONGFORD, N. (1986). “Statical Modelling Issues in School Effectiveness Studies”, *Journal of The Royal Statistical Society, Ser A*, 149, 1 – 43.
- ALEXANDER, L. y SIMMONS, J. (1975). “The Determinants of School Achievement in Developing Countries: the educational production function”, *Cuadernos de Trabajo*, 201. Washington, Banco Mundial.

- ALKER, H. R. (1969). "A Typology of Ecological Fallacies". En M. Dogan y S. Rokkan (eds.), *Quantitative Ecological Analysis in the Social Sciences*. Cambridge, Mass. The MIT Press, 69 – 86.
- ASHENFELTER, O. y ROUSE (1997). "Schooling, Intelligence, and Income in America", en *Meritocracy and Economic Inequality*. Princeton University Press, 2000.
- BECKER, G. S. :
1964 "Human Capital, a Theoretical and Empirical Analysis With Special Reference to Education". cap. 2, pp 7-29.
1975 *El Capital Humano: Un análisis teórico y empírico referido fundamentalmente a la educación*. Alianza Editorial.
1993 *Human Capital*. The University of Chicago Press.
- BLAUG, M. (1968). *Economía de la Educación, Textos Escogidos*. Madrid, editorial Tecnos S.A.
- CASTELLAR, C. y URIBE, J. (2003). "Capital Humano y Señalización: Evidencia Para el Área Metropolitana de Cali 1988 – 2000". *Documentos de Trabajo* 65, CIDSE.
- CARD, D. y KRUEGER, A. (1992). "Does School Quality Matter? Returns to Education and the Characteristics of Public Schools in the United States", *Journal of Political Economy*.
- COLEMAN, J. S. et al (1966). *Equality of Educational Opportunity*. Washington, US Government Printing Office.
- CORREA, John Jairo (2004). "Determinantes del Rendimiento Educativo de los Estudiantes de Secundaria en Cali: un análisis multinivel", *Revista Sociedad y Economía* 6, pp. 81-105.
- DRAPER, D. (1995). "Inference and Hierarchical Modelling in Social Sciences". *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 20 (2), 115 – 149.
- GAVIRIA, A. y BARRIENTOS, J. (2001). "Determinantes de la calidad de la educación en Colombia", *Archivos de Economía* 159. Bogotá, Departamento Nacional de Planeación.
- GAVIRIA, J. y CASTRO, M. (2005). "Modelos Jerárquicos Lineales", *Cuadernos de Estadística* 29. Madrid, Editorial La Muralla S. A.
- GIRALDO, U., ABAD, D. y DÍAZ, E. (2001). "Bases para una política de calidad de la educación superior en Colombia". Mimeo.
- HANUSHEK, E. A. (1997). Assessing the effects of school resources on student performance: an update. *Educational Evaluation and Policy Analysis*. 19(2), 141-164.
- HARBISON, R. W. and HANUSHEK, E. A. (1992). *Educational Performance for the Poor: Lessons From Rural Northeast Brazil*. Oxford University Press. Published for the World Bank.
- HECKMAN, J. LOCHNER, L. y TODD, P. (2003). "Fifty Years of Mincer Earnings Regressions", *Nber Working Paper Series*, 9732, National Bureau of Economic Research, 1050, Massachusetts Avenue. Cambridge, MA 02138.
- HOX, J.J. (1995). *Applied Multilevel Analysis*, TT-Publikaties. Ámsterdam.
- JENCKS, C. S. (1972). *Inequality: a Reassessment of the Effect of Family and Schooling in America*. New York, Basic Books.

- KEEVES, J. y MCKENZIE, P. (1999). "Research in Education: Nature, Needs and Priorities", En Jhon Keeves y Gabrielle Lakomski (eds.). *Issues in Educational Research*. Amsterdam, Pergamon.
- LEVIN, H. and LOCKHEED, M. (1993). *Effective Schools in Developing Countries*. London, Falmer Press.
- LUCAS, R. (1988). "On the Mechanics of Economic Development", *Journal of Monetary Economics*. Vol. 22, p. 3 – 42.
- MALTHUS, T. (1806). *The Principle of Population*, London, vol. II.
- MARCELO, D. (2004). "Rentabilidad Social e Individual de la Educación: una interpretación a partir de los modelos jerárquicos". Mimeo.
- MARSHALL, A. (1890). *Principles of Economics, 8th edition*. London, Macmillan and Company.
- MCCONELL, BRUE y MACPHERSON (2003). "La Calidad del Trabajo: la inversión en capital humano", *Economía Laboral*, pp. 85 – 126, McGraw Hill.
- MINCER, J. (1958): "Investment in Human Capital and Personal Income Distribution," *Journal of Political Economy*, 66(4):281-302.
- MINCER, J. (1974): *Schooling, Experience, and Earnings*, New York, NBER Press.
- MORETTI, E. (2003). "Human Capital Externalities in the Cities", *National Bureau of Economic Research*.
- MUÑOZ, M. (1990). *Algunos Aspectos de la Distribución del Ingreso en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia, vol. 10, No. 14.
- ORTIZ, Carlos Humberto (2005). "Sobre los ECAES de Economía 2004", *Revista Sociedad y Economía* 8, pp. 197-203.
- PEDHAZUR, E. J. (1982). *Multiple Regresión in Behavioral Research*. 2nd edition. New York, Holt, Rinehart and Winston..
- PSACHAROPOULOS, G. y VELEZ, E. (1992). "Educación, Habilidad e Ingresos en Colombia", *Capital Humano y Política Social, Revista Planeación y Desarrollo*. Bogotá, Departamento de Planeación, volumen XXIII, No. 2.
- RABASH, W. et al (2002). *A User's Guide to MlwiN*, Centre for Multilevel Modelling, Institute of Education, University of London.
- ROBINSON, W. S. (1950). "Ecological Correlations and the Behavior of Individuals". *American Sociological Review*. 15, 351 – 357.
- ROMER, P. (1986). "Increasing Returns and Long Run Growth", *Journal of Political Economy*. vol. 94, No. 5, October, 1002-1037.
- SCHULTZ, T.
1961 "Investment in Human Capital", *American Economic Review*, vol. 51.
1981 "La Cuantificación Personal Como Motor Económico", *Invirtiendo en la Gente*. Barcelona, Editorial Ariel S.A.
- SMITH, A. (1776). *La Riqueza de las Naciones*, volumen 1, capítulo 3, Serie Biblioteca de Economía, Ediciones Folio, Barcelona 1966 (tomado del original de 1776).
- SNIJDERS, T. y BOSKER, R. (1999). *Multilevel Analysis. An Introduction to Basic and Advanced Multilevel Modelling*. London, Sage Publications.
- SOLOW, R. (1956). "A contribution to the Theory of Economic Growth", *Quarterly Journal of Economics*. 70, 1, pp.65-94.
- TENJO, J. (1993). "Evolución de los Retornos a la Inversión en Educación 1976-1989", *Planeación y Desarrollo*. Bogotá, volumen XXIV.

Calidad de la educación superior en Colombia: un análisis multinivel con base en el ECAES de economía

VALENS, M. (2007). “Calidad de la Educación Superior en Colombia: Un Análisis Multinivel con Base en el ECAES de Economía 2004”, *Documento de Trabajo No. 99*, CIDSE, Universidad del Valle.

CANALES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y DURACIÓN DEL DESEMPLEO EN EL MERCADO LABORAL COLOMBIANO 2003*

Yanira Marcela Oviedo Gil**

Resumen

Esta investigación analiza la intermediación laboral en Colombia en 2003, examinando qué factores incrementan la propensión de los agentes a emplear un canal de búsqueda de empleo particular e identificando el impacto de su uso en la duración del desempleo. Se encuentra que los canales más eficientes son aquellos que implican la participación activa del buscador.

Abstract

This investigation analyzes the labor intermediation in Colombia in 2003, examining what factors increases the propensity of the agents to use a particular job-search method and identifying the impact of its use in the duration of unemployment. The most efficient methods imply the active participation of who looks for.

Palabras clave: Búsqueda de Empleo, Duración del Desempleo, Emparejamiento Laboral, Canales de Búsqueda, Elección de Canales.

Key words: Employment Search, Unemployment Duration, Labor Matching, Job-Search Methods, Choose of Methods.

* Trabajo de grado presentado a la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle. El presente artículo es producto del proyecto “Canales de búsqueda de Empleo en el Área Metropolitana de Cali” financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle. La autora agradece de manera muy especial a mi director de trabajo, el Dr. José Ignacio Uribe por su ayuda. Agradecimiento que extiende a sus compañeros del Grupo de *Economía Laboral y Sociología del Trabajo*. Igualmente agradece a Luis Eduardo Arango, Munir Andrés Jalil, Carlos Esteban Posada, Daniel Mejía y Ximena Peña, investigadores del Banco de la República por sus valiosos comentarios.

Artículo recibido el 16 de octubre de 2007

Aprobado el 13 de noviembre de 2007

** Economista egresada de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle. Cualquier error u omisión es responsabilidad de la autora.

Introducción

En economía laboral el desempleo es protagonista, éste puede ser coyuntural o cíclico (de corto plazo), o estructural (de largo plazo). Un componente esencial de este último es el friccional, es decir, el que se debe al tiempo de ajuste que requiere la economía para reasignar su fuerza de trabajo. Se presenta por retiros voluntarios, cambios de empleo y el flujo de personas que ingresan por primera vez a la población económicamente activa o que retornan a ella, y que no logran engancharse por no saber donde se encuentran las vacantes. En consecuencia, el desempleo friccional disminuirá ante de mecanismos de búsqueda eficientes, que ayuden a un ágil emparejamiento entre los oferentes y demandantes de empleo. Así las cosas, los buscadores deben elegir un método a usar pero desconocen su efectividad en el proceso.

Las investigaciones clasifican los mecanismos de búsqueda, se habla de “canales formales” (respuesta a convocatorias, puesta de avisos clasificados, inscripción en oficinas de intermediación laboral, etc.), que se distinguen por la participación de instituciones creadas específicamente para la intermediación en la búsqueda laboral; en ellos, la información se centraliza y es de dominio público. También se consideran los “canales informales” (amigos, recomendaciones, etc.) que implican esencialmente el uso de redes sociales. En estos canales las asimetrías en la información permiten influenciar sobre los emparejamientos laborales. Y podría incluirse un tercer grupo, relacionado con llevar hojas de vida directamente a las empresas, pues en este método no hay una institución que centralice la información, ni puede ejercerse una influencia sobre el emparejamiento a partir de una información no difundida. Los individuos en este canal obtienen de manera informal conocimiento sobre vacantes en las firmas, razón por la que presentan sus hojas de vida y se someten a los mecanismos selección de la empresa, a este mecanismo se le denominará “canal informal moderado”.

Ahora bien, la teoría afirma que el proceso de emparejamiento es ágil y el llamado desempleo friccional, de corta duración, cuando el mercado de la búsqueda se encuentra institucionalizado, es decir, cuando los canales formales son de uso masivo. En caso contrario, la pobre institucionalización del mercado, conduciría a la existencia generalizada de largos tiempos de búsqueda, haciendo que la economía caiga en una situación ineficiente, pues a pesar de la existencia de vacantes y buscadores de empleo, éstos no se encuentran con prontitud. Por esa razón, se realiza un esfuerzo por comprender el problema del buscador y el impacto de la utilización de los diferentes canales de búsqueda en la duración del desempleo. Además, se examina cómo las características de los agentes los hacen más propensos a buscar ó a ser enganchados por medio de determinados mecanismos. La información empleada corresponde al segundo trimestre de 2003 de la Encuesta Continua de Hogares para el total a 13 áreas metropolitanas.

Este artículo está organizado de la siguiente manera: en primer lugar, la presente introducción; en segundo y tercer lugar, la revisión del estado del arte y el marco teórico concernientes a los canales de búsqueda y la duración del desempleo; en cuarto lugar, los modelos empíricos implementados y análisis descriptivos; finalmente, conclusiones y referencias bibliográficas complementan el informe.

Revisión del estado del arte: canales de búsqueda de empleo

Un pionero en esta línea de investigación es Rees (1966), quien analiza las redes de información en el mercado laboral clasificando los recursos para conseguir empleo como formales e informales y estudia el tipo de búsqueda que se puede llevar a cabo: intensiva o extensiva. Rees afirma que los intermediarios formales se valen de instituciones especializadas en el emparejamiento y de no ser utilizados, compradores y vendedores irían con los ojos vendados por la falta de información, irían a tientas hasta que uno chocara con el otro. Sin embargo, aclara que los canales informales tienen ventajas para empleadores y buscadores que les ha permitido conservarse dentro de la intermediación laboral (ver cuadro N° 1). Rees encuentra que los métodos formales son más eficientes cuando se especializan en un grupo particular de buscadores por ocupación, industria o localización.

Cuadro 1
Ventajas de los Canales Informales

| PARA EL EMPLEADOR | PARA EL BUSCADOR |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Las referencias que dan otros empleados son confiables porque está su reputación en juego. | <ul style="list-style-type: none"> • La información proporcionado por los amigos es mayor y más confiable |
| <ul style="list-style-type: none"> • Los aspirantes usualmente viven en los alrededores de la fábrica generando bajo ausentismo. | <ul style="list-style-type: none"> • Minimiza costos de transporte |
| <ul style="list-style-type: none"> • Es poco costoso | <ul style="list-style-type: none"> • Un amigo en el trabajo hace más atractivo el mismo |

Fuente: Elaboración propia con base en Rees(1966)

Otro académico que clasifica los canales de búsqueda como formales e informales es Reid (1972), quien en respuesta a las conferencias que organizó la OECD en los 60's para promover la "active manpower policy" (intento por formalizar las operaciones en el mercado laboral para mejorar la diseminación de la información), explica cuáles son los métodos de búsqueda de trabajo y estudia la hipótesis de que los canales informales son menos eficientes que los formales y en particular que el servicio público podría promover la asignación efectiva de la fuerza de trabajo. Reid concluye que es ingenuo pensar que los métodos informales son necesariamente ineficientes, pues la evidencia empírica parece reivindicarlos.

Por su parte, Warner (1980) concluye que una búsqueda eficiente es benéfica tanto privada como socialmente, porque permite emparejar a los buscadores con los puestos de trabajo en los cuales ellos son más productivos. Su argumento radica en que bajo imperfecciones en la información, ambas partes del mercado laboral podrían desperdiciar buenos emparejamientos esperando propuestas más atractivas.

Un trabajo muy interesante es realizado por Lindeboom, Van Ours y Renes (1994), quienes investigan el emparejamiento laboral y abordan empíricamente la efectividad de la búsqueda. Proponen que el número de emparejamientos (flujo en que se llenan las vacantes o en el que se encuentra trabajo) a través de un canal, depende del número de usuarios y la velocidad de contacto entre aspirantes y vacantes. Entonces, para calcular la eficiencia de los canales de búsqueda/reclutamiento se debe estimar en primer lugar, el número de ofertas de trabajo y de aspirantes que son generados por cada canal. Y en segundo lugar, el tiempo que toma encontrar un trabajo o un nuevo trabajador. Enfatizan que el análisis sobre la búsqueda de trabajadores y empleadores no debe realizarse separadamente, ni debe ignorarse el número total de aspirantes y empleadores bajo un mismo canal.

En 1995 Granovetter en “*Getting A Job*” realiza un estudio sobre la búsqueda de empleo desde el empleo, allí se consideran los métodos formales, contactos personales y aplicación directa. El centro del estudio es que los trabajadores buscan mejorar su situación laboral cambiando de empleo sólo cuando tienen información confiable sobre el nuevo puesto. En ese sentido, los contactos personales adquieren una condición predominante en la movilidad social de los trabajadores.

Profundizando en el estudio de la eficiencia de los métodos de búsqueda, Thomas (1997), trata de clarificar los resultados contrarios que presentan los diseños experimentales y los no experimentales sobre la eficiencia de las agencias públicas de empleo. Aclarando que los primeros son trabajos que implican el seguimiento detenido de un grupo escogido de personas que buscan empleo a lo largo del proceso, mientras los segundos son trabajos que parten de la información que brindan las encuestas tradicionales. El gran conflicto entre estos tipos de investigación radica en que la encuesta usualmente proporciona información sobre la duración del desempleo y el último canal que utilizó el entrevistado para obtener empleo, mientras que en el diseño experimental es posible identificar los diferentes métodos que utilizan los agentes a medida que transcurre el proceso de búsqueda. Thomas, se percató de que usualmente los individuos inician su búsqueda a través de métodos diferentes a las agencias públicas, pero al transcurrir el tiempo éstos se desesperan y terminan recurriendo a ellas. Debido a ello, en los trabajos que usan encuestas tradicionales relacionan largas duraciones del desempleo y haber usado las agencias públicas. En consecuencia, Thomas desarrolla un modelo que le permite identificar los canales usados en cada momento de la búsqueda y bajo su estimación afirma que si un agente al quedar desempleado empieza la búsqueda usando las agencias públicas, éste tendrá un periodo de desempleo más corto.

En el ámbito nacional, los avances realizados en el tema se reducen a dos trabajos: López (1997) en un estudio del SENA y Uribe y Gómez (2004) en un estudio para la Universidad del Valle. López (1997) con información de la Encuesta Nacional de Hogares en junio de 1996 analiza la magnitud del mercado de intermediación laboral urbano, estudia las tasas anuales de enganches y desenganches haciendo énfasis en la rotación de personal. En cuanto a los canales de búsqueda distingue tres categorías: *i*) búsqueda exclusivamente individual (realizar visitas y llevar hojas de vida a empresas); *ii*) canales formales (acudir a instituciones especializadas); *iii*) canales informales (apelar a familiares y amigos). En su análisis encuentra que la participación de los canales formales e informales a nivel nacional es similar., mientras en las cuatro principales ciudades predominan los canales formales. López trató de medir la eficiencia y la calidad de los canales. Para la eficiencia empleó dos indicadores, la tasa anual relativa de colocaciones y el tiempo medio de colocación, mientras que para la calidad construyó un indicador combinado de calidad del empleo ofrecido. Encontró que los canales informales ofrecen mayores tasas anuales de enganches a costa de una menor calidad de los empleos ya que en su mayoría son ofrecidos por microempresas. Ocurre lo contrario con los canales formales, con los cuales se obtienen bajas tasas de enganche pero empleos de buena calidad. Finalmente, López emprende la discusión teórica del proceso de búsqueda de empleo abordando el modelo de la regla de decisión secuencial y basado en la evidencia empírica, concluye que un subsidio sobre los costos directos de la búsqueda tendrían una influencia marginal sobre la eficiencia de la misma, pues los costos indirectos tienen más peso en la búsqueda.

Por su parte, Uribe y Gómez (2004) recopilan la teoría de la información y los modelos de búsqueda. Además, estudian los canales concretos de búsqueda que utilizan los trabajadores colombianos con información de la Encuesta de Calidad de Vida para 2003. El análisis es de tipo exploratorio y termina mostrando cuales son las características de los agentes que utilizan

los canales formales y los informales. Uribe y Gómez se aproximan al grado de institucionalización del mercado laboral colombiano analizando las preferencias de la población por canales de tipo formal o informal, encontrando predominio de estos últimos. A manera de conclusión, señalan que los canales informales son comúnmente empleados por individuos con bajo nivel educativo y generalmente jefes de hogar, mientras llevar hojas de vida a empresas, es preferido por jóvenes, no jefes de hogar y con nivel educativo secundaria. Este grupo contiene las características más cercanas a las que describen al individuo promedio. Afirman también, que quienes emplean canales formales tienen mayor nivel educativo promedio, excepto quienes ponen clasificados.

En general, existe una gran brecha entre el estado del arte nacional y el internacional. Por ello esta investigación hace un esfuerzo por caracterizar la intermediación laboral en Colombia y abordar el problema de la eficiencia de los canales de búsqueda desde la perspectiva de la duración del desempleo. Aquí, la eficiencia de un método será medida por la influencia que éste tenga sobre la duración del desempleo, por ello, se acude a una breve revisión de los estudios más destacados en este ámbito para Colombia y se plantea un modelo teórico de amplia aceptación que da cabida a la participación de los canales de búsqueda como determinantes de la duración del desempleo.

Estudios sobre la duración del desempleo en Colombia

En Colombia la primera mención al problema de la duración del desempleo la hizo la Misión Chenery, que señaló el preocupante aumento de la cesantía en el primer quinquenio de los 80, al pasar de 20 a 43 semanas en promedio, con lo cual el problema real de desocupación, en términos de subutilización de recursos humanos, se cuadruplicó durante esos años. Ante esta posición, Maddock en 1987 argumentó que la Misión Chenery malinterpretó el aumento de la duración del desempleo, pues la verdadera consecuencia había sido una concentración de los costos del fenómeno en un grupo reducido. En ese sentido, López (1988) con el fin de aclarar esta idea propone el cálculo de una tasa de incidencia del desempleo (porcentaje de personas distintas que soportarían el desempleo en un año calculado respecto a la fuerza laboral actual), derivando dos recomendaciones de política: *i*) si la tasa de desempleo es constante, una menor duración del mismo democratiza el problema, y *ii*) si el grupo de población que sufre desempleo es constante, al igual que la tasa de incidencia, una menor duración disminuye la tasa de desempleo.

Por su parte, Tenjo (1998) para analizar el desempleo acude a la teoría de la búsqueda de empleo y bajo sus supuestos estima tanto la probabilidad como la longitud del desempleo, construyendo un modelo probit para la probabilidad y uno Weibull para la duración del desempleo. Para este último modelo, toma el número de semanas que un trabajador lleva desempleado como variable dependiente e incluye como variables explicativas al ingreso familiar en su forma cuadrática, la edad, la educación, la condición de ser o no soltero, así como la de buscar trabajo temporal y por primera vez.

Núñez y Bernal (1998), presentan cifras de duración del desempleo en Colombia y estiman un modelo de supervivencia para establecer los determinantes de la probabilidad de salir del desempleo con la información de junio de 1988, 1992 y 1996 apoyándose en la relación teórica entre la duración del desempleo y las características personales del buscador, así como con el ciclo económico y la cantidad y duración de los beneficios del desempleo. Los autores afirman que la probabilidad de salir del desempleo cambia entre los individuos por tres

razones principales, las características personales de los buscadores, sus diferentes tiempos de búsqueda y sus diferentes salarios de reserva.

Uribe (1998), plantea un modelo para explicar causalmente la duración del desempleo, en él se proponen dos funciones: la función de salario de reserva y la función de salario virtual, esperado u ofrecido. La primera incluye elementos del lado de la oferta como las características personales del buscador que permiten insistir en la búsqueda de un empleo sosteniendo un salario de reserva (W_r), mientras la segunda involucra dispersión en las tasas salariales como elemento de la demanda, por lo que la búsqueda se justifica en la medida en que el incremento del “salario esperado” en el mercado laboral (W^*) sea mayor que el coste de búsqueda. De la intersección de estas dos funciones resulta el tiempo de búsqueda óptimo, que es calculado por mínimos cuadrados ordinarios.

Castellar y Uribe (2003), exponen de la teoría de la búsqueda con énfasis en los elementos macroeconómicos y econométricos y elaboran un modelo econométrico de duración tipo Weibull con información de ENH disponible para el A.M de Cali entre 1988 y 1998. Las políticas recomendadas son: invertir fundamentalmente en educación para reducir la duración del desempleo y fomentar instituciones de intermediación laboral que contribuyan a mejorar el flujo de información entre oferentes y demandantes para disminuir el desempleo friccional.

Marco teórico: el modelo de búsqueda secuencial

Debido a que el interés de la investigación no se aparta del tradicional análisis de la duración del desempleo para buscar una medida que se aproxime a la eficiencia de los canales de búsqueda de empleo, interesan las dos perspectivas desde las que se puede abordar el tema: la teoría de la búsqueda y los modelos de riesgo. La primera, intenta descifrar la racionalidad de los agentes que enfrentan el proceso de búsqueda de empleo. Mientras la segunda, es una herramienta estática para contestar cómo la probabilidad de empleo depende de las características del desempleado, su desarrollo y transcurso en la duración del desempleo. Problemas que hacen parte del análisis de los canales de búsqueda.

En cuanto a la teoría de la búsqueda, esta investigación se remite a uno de los modelos más aceptados dentro de la línea de investigación, el modelo de “*búsqueda secuencial*”, planteado por Mortensen (1991). La exposición del modelo se realiza a continuación, siguiendo la presentación de Martín (1995). Se supone que la distribución salarial adopta la forma de una distribución de probabilidad continua $f(W)$, conocida por el trabajador y que el salario de reserva, una vez establecido, se mantiene constante a lo largo de todo el proceso de búsqueda, así como también, que la búsqueda es completamente aleatoria, su costo es constante e independiente del tamaño de la misma. Entonces, el buscador observa una oferta salarial y compara los beneficios derivados de tomarla con los beneficios esperados de rechazarla, y continúa la búsqueda. Sólo toma la oferta, si los beneficios primeros exceden a los segundos. El modelo se convierte así en una regla de aceptación automática. El trabajador compara la oferta salarial (W_0) que recibe, con su salario de reserva (W_r), entonces, si $W_0 \geq W_r$ se acepta el empleo. De lo contrario la búsqueda continúa. Luego, la probabilidad de aceptar un empleo en cualquier instante del tiempo (a_t) es:

$$a_t = \Pr \{W_0 \geq W_r\} \quad (1)$$

La probabilidad de obtener un salario inferior a W_r está descrito en la distribución de frecuencias $F(W)$ y será $F(W_r)$. Mientras, el beneficio esperado de la búsqueda $V(W_r)$ tendrá tres componentes:

1) El valor esperado de aceptar el salario si $W_0 \geq W_r$:

$$\int_{W_r}^{\infty} WF(W)dW \quad (2)$$

2) El beneficio derivado de seguir buscando empleo, si no se acepta la oferta $W_0 < W_r$ que tiene una probabilidad de ocurrir $1 - P(W_0 \geq W_r)$, (es decir, $F(W_r)$). Si se sigue buscando, el beneficio neto esperado es $V(W_r)$. Por tanto, este segundo componente del beneficio esperado es:

$$V(W_r).F(W_r) \quad (3)$$

3) El coste de búsqueda:

$$C \quad (4)$$

Entonces, el beneficio neto de la búsqueda quedaría:

$$V(W_r) = \int_{W_r}^{\infty} WF(W).dW + V(W_r).F(W_r) - C \quad (5)$$

Que también puede expresarse como sigue:

$$V(W_r) = \frac{\left[\int_{W_r}^{\infty} WF(W)dW - C \right]}{1 - F(W_r)} \quad (6)$$

Los primeros términos de la ecuación (5) representan al beneficio total de la búsqueda en función del salario de reserva elegido, mientras que el último representa el costo total. Luego, el valor del salario óptimo es el que maximiza la diferencia $BT(W_r) - CT(W_r)$ y se puede obtener diferenciando (6) con respecto a W_r y calculando así los beneficios y costes marginales. De donde se deduce que:

$$C = \int_{W_r^*}^{\infty} (W - W_r^*) F(W)dW \quad (7)$$

Expresión de coste adicional de búsqueda (C) igual a la ganancia esperada de la búsqueda adicional. Si se sustituye (7) en (6) se obtiene:

$$V(W_r^*) = W_r^* \quad (8)$$

Esto significa que el salario de reserva óptimo W_r^* hace indiferente al buscador entre seguir buscando ofertas por las que espera obtener $V(W_r^*)$ o elegir precisamente W_r^* .

El modelo tiene algunas limitaciones, entre las cuales se critica que no se da relevancia a la pérdida de estimación social y de autoestima. Sin embargo, este modelo ha dominado de forma abrumadora la literatura. En primer lugar, porque implica una extensión a lo largo del tiempo y en segundo, porque *permite incluir otros elementos como determinantes del proceso de búsqueda*, dando cabida al análisis del impacto los canales de búsqueda.

Marco empírico: modelos de riesgo o supervivencia

Idealmente, una especificación empírica de una función de riesgo debería derivarse de un modelo de búsqueda, pero la mayoría de modelos no lo hace. No obstante Lancaster (1990) presenta un trascendente aporte teórico, pues partiendo de una de las teorías de la búsqueda, permite integrar los estudios de duración típicos de otras disciplinas y la duración del desempleo.

Cuadro 2
Funciones que intervienen en los modelos de riesgo

| FUNCIÓN | DESCRIPCIÓN |
|--|--|
| Función de distribución acumulada. $F(t) = \Pr(T < t) \quad t \geq 0$ | Indica la probabilidad de que la duración de la búsqueda no llegue a t días. F es monótona no decreciente y verifica que $\lim_{t \rightarrow \infty} F(t) = 1$ |
| Función de densidad $f(t) = \frac{dF(t)}{dt}$ | Es la probabilidad incondicional de que la duración sea exactamente T días |
| Función de supervivencia $S(t) = 1 - F(t) = \Pr(T \geq t)$ | Indica la probabilidad de que la búsqueda sea al menos de t periodos, es decir, asocia a cada valor t a la probabilidad de que un individuo permanezca en el desempleo en ese instante de tiempo. Esta función es monótona no decreciente y verifica que $S(0) = 1 \quad S(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} S(t) = 0$ |
| Función de riesgo o tasa de escape $\theta(t) = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{\Pr(t \leq T < t + dt T \geq t)}{dt}$ | Es la probabilidad de que el desempleo finalice en el próximo pequeño intervalo de tiempo dt, puede verse como el cociente entre la función de densidad y la función de supervivencia. Esto provee la intuición de que la tasa de escape representa a los que salen del desempleo en el instante t sobre los que aún continúan desempleados. |

Fuente: Elaboración propia basada en Castellar y Uribe (2003) y Abaurrea y Cebrián (2000).

Es aquí donde cobra relevancia la teoría de los modelos de riesgo o supervivencia y el análisis se centra entonces, en la variable T, que reporta la duración del desempleo experimentada por los desempleados o por los que ahora son ocupados. Esta variable se caracteriza por ser aleatoria, no negativa, con distribución asimétrica y tomar el valor de cero al inicio de la búsqueda. Sobre T aplica una serie de funciones que permiten el llamado análisis de supervivencia que se resumen en el cuadro N° 2. Según Castellar y Uribe (2003) al tener en cuenta la derivada respecto a t del logaritmo de la función de supervivencia se llega a que la tasa de escape es el negativo de esta derivada, permitiendo encontrar una conexión biunívoca entre supervivencia y tasa de escape. Afirman también que teóricamente, un individuo saldrá del estado de desempleo si recibe una oferta (con probabilidad λdt) y la acepta dado que excede el salario de reserva (con probabilidad $S(t)$), lo que induce a una expresión que no depende del tiempo e indica una tasa de escape constante con una función de densidad

exponencial, distribución que no tiene memoria. Por ello los estudios sobre la duración del desempleo han tenido que acudir a la distribución Weibull, cuya distribución toma la siguiente forma:

$$f(t) = p\lambda^p t^{p-1} e^{-(\lambda t)^p} \quad (9)$$

Donde p es una constante de proporcionalidad de manera que si $p > 1$ la función de riesgo se torna creciente, si $p < 1$ es decreciente y si $p = 1$, entonces la función de riesgo es constante y el modelo corresponde al exponencial. Para el caso del fenómeno en estudio, se espera encontrar un $p < 1$, lo que implicaría que una permanencia más larga en el desempleo hace cada vez menos probable el escape de este estado. Para mayores detalles con el rigor matemático consultar el artículo de Castellar y Uribe (2003)

La introducción de variables independientes se hace afectando a λ y los modelos resultantes se conocen como de falla acelerada. La presencia de estas variables da cabida a los modelos paramétricos como el empleado en esta investigación. Aunque en este trabajo, también se incorporan estimaciones Kaplan Meier de orden no paramétrico, este estimador (o producto límite), según Abaurrea y Cebrión (2000) es una función constante entre los tiempos de fallo consecutivos, que vale 1 antes del menor tiempo de fallo y cuyo valor decrece según un factor variable en cada instante de fallo. Se construye como el producto de las probabilidades condicionales de sobrevivir al tiempo de fallo, dado que se ha sobrevivido hasta ese instante. Para más información sobre éstos métodos en Greene (2000) y Cameron (2005) entre otros.

Ahora bien, los determinantes del resultado del proceso de la búsqueda según modelo secuencial de Mortensen (1991), resultan ser aquellos que afectan la probabilidad de recibir propuestas laborales y la formación de los salarios de referencia para tomar la decisión de aceptar o rechazar una oferta de trabajo. En esta investigación se propone abordar un modelo robusto sobre la duración del desempleo en Colombia, en este caso el realizado por Castellar y Uribe (2003). Para luego, agregar como determinantes el uso de canales de búsqueda específicos, que justifican su presencia en el modelo por su influencia sobre la probabilidad de recibir ofertas laborales.

Modelos de elección múltiple

Ahora se presenta el marco empírico de los modelos de elección múltiple para indagar la influencia de las características personales del buscador en su probabilidad de elegir el método de búsqueda y obtener empleo a través de un canal específico. Lastimosamente, no existe un modelo teórico que apoye la incorporación de las variables independientes aquí escogidas, la aplicación de estos modelos obedece a motivos descriptivos e intuitivos. Siguiendo a Cameron (2005) en el mundo de la elección múltiple existen m alternativas y la variable dependiente y toma el valor j si la alternativa j -ésima es tomada, $j=1, \dots, m$. Así, la probabilidad de que la alternativa j sea escogida está dada por $p_j = \Pr \{ y = j \}$, para $j = 1, \dots, m$. Se introducen m variables binarias para cada posible observación y ,

$$y_j = \begin{cases} 1 & \text{si } y = j \\ 0 & \text{si } y \neq j \end{cases} \quad (10)$$

La densidad multinomial para una observación puede entonces ser descrita por

$$f(y) = p_1^{y_1} * \dots * p_m^{y_m} = \prod_{j=1}^m p_j^{y_j} \quad (11)$$

Para el modelo de regresión se introducen los regresores X_i y un subíndice i para el i -ésimo individuo. Además, se especifica un modelo para la probabilidad de que el individuo i elija la alternativa j

$$P_{ij} = \Pr [y_i = j] = F_j(X_i, \beta_j) \quad j = 1, \dots, m \quad y \quad i = 1, \dots, n \quad (12)$$

Donde la forma funcional de F_j debe ser tal que las probabilidades caigan entre 0 y 1 y la suma sobre j sea 1. Las diferentes especificaciones funcionales para F_j corresponden a modelos específicos. Dentro de los modelos más usados existen dos clases de multinomiales, aquellos cuyos regresores cambian entre las distintas alternativas de la variable dependiente (logit condicional) y aquellos donde no existe tal cambio (logit multinomiales). Para esta investigación se decidió usar el modelo logit multinomial, propuesto por Luce (1959), porque no hay evidencia que indique que las variables explicativas cambie dependiendo de la opción de canal que se analice. Ahora bien, la probabilidad de que el individuo i elija j está mediada por una función F , que para el modelo multinomial toma la siguiente forma:

$$P_{ij} = \frac{e^{X_i \beta_j}}{\sum_{l=1}^m e^{X_i \beta_l}} \quad j = 1, \dots, m \quad (13)$$

Donde $\sum_{j=1}^m P_{ij} = 1$ porque se restringe para la completa identificación del modelo y la restricción $\beta_1 = 0$. El efecto marginal del cambio en la j -ésima probabilidad ante el cambio en una unidad de un regresor toma el mismo valor a través de las alternativas

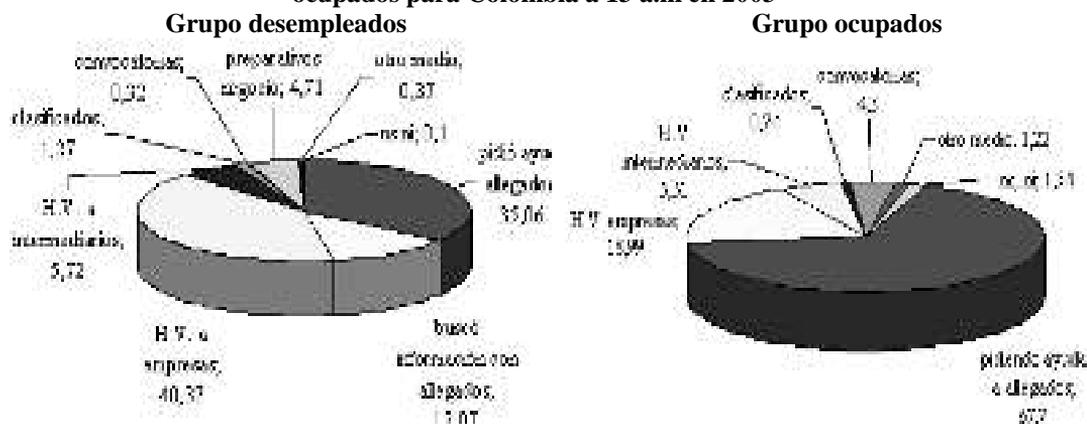
$$\frac{\partial P_{ij}}{\partial X_i} = P_{ij} (\beta_j - \bar{\beta}_i) \quad (14)$$

Donde $\bar{\beta}_i = \sum_l p_{il} \beta_l$ es la probabilidad promedio ponderada de los β_l .

Canales de búsqueda de empleo en Colombia: los resultados empíricos

A partir de la información de la Encuesta Continua de Hogares realizada en el segundo trimestre de 2003 para las 13 principales Áreas Metropolitanas (A.M.) se presenta la participación porcentual de los canales tanto en la búsqueda ejercida por los desempleados, como en el enganche efectivo de los ocupados para ese periodo en la figura N° 1. Es evidente que a la hora de buscar, los métodos predominantes son pedir información y ayuda a conocidos (canales informales), pues 47 de cada 100 colombianos acuden para buscar empleo, mientras menos de 13 de cada 100 emplean los canales formales. Llama la atención la participación del método llevar hojas de vida a las empresas, 40 de cada 100 personas acuden a él cuando buscan empleo. En cuanto a la participación de los canales de búsqueda sobre el enganche efectivo del oferente de fuerza de trabajo, el método predominante es la ayuda de conocidos. Resulta sorprendente que de cada 100 colombianos que se emplearon, 68 lo hicieran a través de este método, 19 más lo hicieran llevando hojas de vida a las empresas y sólo 13 se empleara usando canales formales.

Figura 1
Participación de los canales en la búsqueda y el enganche de desempleados y ocupados para Colombia a 13 a.m en 2003



Fuente: Encuesta Continua de Hogares 2003 (DANE) - elaboración propia

Debe tenerse cuidado al interpretar este resultado, no es posible tomarlo como un indicador de efectividad de los canales, pues hasta el momento no se conoce cuanto tiempo implica encontrar trabajo por un método en relación al tiempo que hubiese implicado al usar otro. No obstante, queda una inquietud, pues por un lado, la información de ocupados es una información ex -post que representa lo que sucedió en la búsqueda con los ahora ocupados y por otro lado, es sabido que en el mercado laboral existe un exceso de oferta, ¿será que hay una tendencia de la demanda laboral a contratar su fuerza de trabajo por canales no formales?

Canales de búsqueda de empleo: la elección

En esta sección se presentan los resultados de los modelos de elección que se estimaron para identificar qué conduce a los individuos a escoger un canal de búsqueda específico y qué hace más propenso a alguien a ser empleado por un método particular, punto que permitiría un vistazo sobre la demanda de trabajo. Recuérdese que los modelos de elección aplicados no están apoyados en una base teórica que permita justificar la presencia de las variables independientes empleadas y por lo tanto no existe una relación esperada a priori entre éstas y la variable dependiente. Lo que se pretende con este análisis es indagar empíricamente dos puntos. Primero, los posibles determinantes de la elección del método de búsqueda, que se realiza sobre el grupo de desempleados; y segundo, los posibles determinantes del enganche de los agentes por un canal específico, análisis que se lleva a cabo sobre los ocupados. En cuanto al primer punto, el trabajo plantea el siguiente modelo a contrastar:

$$canalbus = \Lambda(educacion, edad, cesante, oficina, genero, medio, alto, ciudad) \quad (15)$$

Donde Λ corresponde a la función logística y la descripción de las variables incluidas en el modelo se resume en el cuadro N° 3. Los principales resultados de la estimación del modelo de elección múltiple están en el cuadro N° 4. Inferencia como es costumbre se realiza sólo

donde la significancia estadística del estimador apoya la existencia de una fuerte relación entre la variable independiente y la dependiente.

Cuadro 3
VARIABLES EN EL MODELO DE ELECCIÓN PARA EL GRUPO DE DESEMPLEADOS

| Variable | Descripción | Variable | Descripción |
|------------------------|--|----------|---|
| canalesbus | 0 Pidió ayuda a familiares, colegas o amigos | oficina | 1 Si el individuo busca trabajo de oficina |
| | 1 Buscó información con amigos, colegas o familiares | | 0 en caso contrario |
| | 2 Llevó hojas de vida a las empresas | genero | 1 Si el individuo es hombre |
| | 3 Llevó hojas de vida a bolsas de empleo | | 0 en caso contrario |
| | 4 Puso avisos clasificados | medio | 1 Si el individuo pertenece a estrato socioeconómico es 3 ó 4 |
| | 5 Se presentó a convocatorias | | 0 en caso contrario |
| | 6 Hizo preparativos para iniciar un negocio | alto | 1 Si el individuo pertenece a estrato socioeconómico es 5 ó 6 |
| 7 Utilizó otros medios | 0 en caso contrario | | |
| educacion | Número de años de educación del individuo | ciudad | 1 Si el individuo reside en Bogotá, Cali o Medellín |
| edad | Número de años del individuo | | 0 en caso contrario |
| cesante | 1 Si el individuo se había empleado anteriormente | | |
| | 0 en caso contrario | | |

Fuente: Elaboración propia

Educación. Esta variable resulta ser muy significativa económica y estadísticamente para la elección de los diferentes canales de búsqueda. Su influencia sobre los métodos informales es negativa, en otras palabras, cada año adicional de educación reduce la probabilidad de utilizar estos métodos. Simultáneamente, la educación tiene una incidencia positiva sobre los demás canales, los cuales implican el uso de instituciones especializadas en el emparejamiento (formales) o un esfuerzo personal directo (informales moderados). Entonces, los individuos más educados son más propensos a emplear métodos que atienden a una búsqueda más institucionalizada o que requieren de su intervención directa. Probablemente, si se es más calificado se tiene incentivo para apropiarse de la búsqueda y promocionarse como candidato a ciertos empleos, mientras que contar con poca educación induce a los individuos a apelar a sus redes sociales.

Edad. Tener un año adicional de edad hace incrementa la probabilidad de buscar emplearse con actividades para iniciar un negocio. Intuitivamente, se podría pensar que a mayor edad, mayor es la posibilidad de contar con algún nivel de riqueza y de experiencia en alguna labor que le permita instalar un negocio. A esto se le suma la conocida preferencia de la demanda laboral por candidatos jóvenes, lo que puede desincentivar a la búsqueda de un empleo y motivar a los candidatos mayores a generarlo.

Cuadro 4
Resultados del modelo de elección entre canales de búsqueda en el grupo de
desempleados para Colombia a 13 a.m. en 2003

| 1 | Variables independientes | Coefficiente | P valor | Efecto marginal | 5 | Coefficiente | P valor | Efecto marginal |
|---|--------------------------|--------------|---------|-----------------|--|--------------|---------|-----------------|
| buscó información con amigos, colegas o familiares | educación | 0,06595 | 0,00000 | -0,00415 | se presentó a convocatorias | 0,33729 | 0,00000 | 0,00052 |
| | edad | 0,00320 | 0,29900 | 0,00162 | | -0,02716 | 0,14000 | -0,00004 |
| | cesante | 0,06003 | 0,55800 | -0,01020 | | -0,67450 | 0,07400 | -0,00230 |
| | trabajo oficina | 0,16006 | 0,06700 | -0,01406 | | -1,36201 | 0,00000 | -0,00402 |
| | genero | 0,01270 | 0,86000 | 0,00693 | | 1,06950 | 0,00500 | 0,00266 |
| | estrato medio | -0,19848 | 0,00900 | -0,04134 | | 0,68559 | 0,09700 | 0,00122 |
| | estrato alto | 0,28037 | 0,17600 | 0,03607 | | -0,36604 | 0,74000 | -0,00074 |
| | ciudad | -0,12434 | 0,16600 | -0,05142 | | -0,48257 | 0,32000 | -0,00139 |
| constante | -1,63263 | 0,00000 | | -7,29486 | 0,00000 | | | |
| 2 | | | | | 6 | | | |
| visitó, llevó o envió hojas de vida a empresas | educación | 0,15658 | 0,00000 | 0,02851 | hizo preparativos para iniciar un negocio | 0,09932 | 0,00000 | 0,00006 |
| | edad | -0,01765 | 0,00000 | -0,00427 | | 0,06129 | 0,00000 | 0,00130 |
| | cesante | 0,23660 | 0,00100 | 0,04742 | | 0,48304 | 0,07500 | 0,00584 |
| | trabajo oficina | 0,42624 | 0,00000 | 0,07633 | | 0,92619 | 0,00000 | 0,01225 |
| | genero | -0,03410 | 0,52800 | 0,00164 | | -0,79951 | 0,00000 | -0,01383 |
| | estrato medio | 0,24300 | 0,00000 | 0,06914 | | 0,10935 | 0,50300 | 0,00028 |
| | estrato alto | 0,00306 | 0,98600 | -0,01966 | | 0,76835 | 0,01200 | 0,01915 |
| | ciudad | 0,42301 | 0,00000 | 0,06317 | | 0,53334 | 0,00100 | 0,00472 |
| constante | -1,40605 | 0,00000 | | -6,50295 | 0,00000 | | | |
| 3 | | | | | 7 | | | |
| visitó, llevó o envió hojas de vida a bolsas de empleo o intermediarios | educación | 0,17909 | 0,00000 | 0,00445 | otro medio | 0,26338 | 0,00000 | 0,00024 |
| | edad | -0,03253 | 0,00000 | -0,00128 | | -0,03767 | 0,08800 | -0,00004 |
| | cesante | 0,18191 | 0,14900 | 0,00260 | | -0,27609 | 0,57800 | -0,00067 |
| | trabajo oficina | 0,53737 | 0,00000 | 0,01456 | | -1,30930 | 0,00800 | -0,00257 |
| | genero | -0,23706 | 0,02000 | -0,01056 | | 0,72285 | 0,10100 | 0,00116 |
| | estrato medio | 0,04888 | 0,64500 | -0,00242 | | 0,87798 | 0,09900 | 0,00107 |
| | estrato alto | -0,65337 | 0,04400 | -0,02761 | | 1,97236 | 0,01000 | 0,00784 |
| | ciudad | 1,17360 | 0,00000 | 0,06017 | | 1,63693 | 0,00000 | 0,00288 |
| constante | -3,34816 | 0,00000 | | -7,50887 | 0,00000 | | | |
| 4 | | | | | 0 | | | |
| Puso avisos clasificados | educación | 0,25663 | 0,00000 | 0,00042 | Pidió ayuda a familiares, colegas o amigos | | | -0,03005 |
| | edad | 0,00402 | 0,79800 | 0,00003 | | | | 0,00268 |
| | cesante | 0,35211 | 0,49900 | 0,00053 | | | | -0,04321 |
| | trabajo oficina | 0,19328 | 0,65800 | -0,00018 | | | | -0,08231 |
| | genero | 0,05546 | 0,87400 | 0,00024 | | | | 0,01175 |
| | estrato medio | 0,72934 | 0,10300 | 0,00158 | | | | -0,02954 |
| | estrato alto | -0,48913 | 0,66100 | -0,00110 | | | | -0,01396 |
| | ciudad | 1,78493 | 0,00000 | 0,00611 | | | | -0,08423 |
| constante | -8,96618 | 0,00000 | | | | | | |

Fuente: Encuesta Continua de Hogares 2003 (DANE) - elaboración propia

Cesante. Quienes tenían empleo y lo perdieron, se muestran más propensos a llevar hojas de vida a las empresas y hacer preparativos para negocio, parece que este grupo de personas hace un mayor esfuerzo personal en la búsqueda. Estos individuos también son propensos, aunque en menor medida, a emplear canales formales.

Trabajo de oficina Esta variable agrupa a los agentes que buscan un empleo de oficina. La variable resulta ser significativa estadísticamente para todos los métodos a excepción del uso de clasificados. La interpretación de los resultados lleva a la conclusión de que pertenecer a este grupo incrementa la probabilidad de hacer uso de los canales de búsqueda personal y llevar hojas de vida a las bolsas de empleo.

Género. Se encuentra que pertenecer al género masculino hace menos probable el uso de bolsas de empleo o preparativos para iniciar un negocio. Una hipótesis al respecto último

método, es que dado que la mayoría de los hombres son jefes de hogar, entonces es factible que su pareja busque un ingreso adicional por medio de la instalación de un negocio.

Estrato medio y alto. No son significativas estadísticamente para todas las alternativas de búsqueda de empleo, sin embargo, los agentes catalogados en los estratos 3 y 4 (estrato medio) son menos propensos a usar redes sociales para buscar trabajo y más propensos a llevar hojas de vida a las empresas. Mientras, que pertenecer a los estratos 5 y 6 incrementa la probabilidad de usar las ayudas e información de familiares, colegas o amigos y realizar preparativos para iniciar un negocio.

Ciudad. Residir en las 3 principales ciudades (Bogotá, Cali o Medellín) hace menos probable acudir a los canales informales en relación con las demás ciudades, posiblemente el tamaño de las ciudades hace más difícil la recolección de información y por ello surge una necesidad más fuerte de hacer uso de centros de información. Ahora, pasando al grupo de los ocupados, el modelo propuesto para contrastar empíricamente adquiere la forma:

$$diltra = \Lambda(\text{educacion}, \text{edad}, \text{genero}, \text{medio}, \text{alto}, \text{ciudad}) \quad (16)$$

Donde Λ corresponde a la función logística, las variables independientes tienen la misma descripción del modelo representado en la ecuación (15) y la variable dependiente representa los posibles métodos de enganche de los ocupados. Esta vale 0 cuando se acude a las redes sociales “ayuda e información con familiares, colegas o amigos”; 1 cuando se trata de “llevar hojas de vida a las empresas”; 2 para “llevé hojas de vida a bolsas de empleo”; 3 en el caso de “poner avisos clasificados”; 4 si “se presentó a convocatorias” y 5 si se utilizó “otros medios”. En el cuadro N° 5 se muestra la información más destacada del modelo de elección múltiple asociado al grupo de ocupados.

Educación Esta variable resulta significativa económica y estadísticamente para todas las alternativas de la variable dependiente. Cada año adicional de educación hace menos probable que el agente encuentre su empleo por redes sociales y más probable que lo encuentre a través de canales formales y de esfuerzo personal, en especial llevando hojas de vida a las empresas. Esto podría implicar que la demanda de empleo calificado en Colombia se realiza principalmente a través de hojas de vida que se diligencian directamente en las empresas y métodos formales.

Edad A mayor edad más probable que los agentes encuentren empleo mediante hojas de vida que han llevado a las empresas. La edad entonces, puede jugar el papel de la experiencia que al ser una característica deseable por los empleadores motiva a los buscadores a postularse como candidato para empleo personalmente. Un año adicional en edad, también reduce, la probabilidad de encontrar empleo a través de avisos clasificados y bolsas de intermediación aunque en ínfima magnitud

Género Pertenecer al género masculino implica una menor probabilidad de encontrar empleo a través de redes sociales y una mayor probabilidad de encontrar empleo por cualquiera de los otros métodos. Posiblemente, la cultura de que los hombres deben encontrar rápidamente un empleo los obliga a acudir en especial a métodos que se caractericen por un mayor esfuerzo personal.

Estrato medio y alto Que los agentes pertenezcan al estrato 3 y 4 hace menos probable que encuentren empleo por medio de ayudas e información de allegados. Lo cual, es

completamente coherente con el hecho de que están personas sean menos propensas a buscar por este método. Mientras en los demás canales, esta característica incide positivamente en la probabilidad de encontrar empleo por esos métodos. Pertenecer a los estratos 5 y 6 incrementa la probabilidad de buscar y encontrar empleo por medio de sus redes sociales. Además, este grupo tiene mayor probabilidad de ser contratados por convocatorias.

Cuadro 5
Modelo de elección múltiple asociado al grupo de ocupados

| 1 | Variables independientes | Coefficiente | P valor | Efecto marginal | 4 | Coefficiente | P valor | Efecto marginal |
|---|--------------------------|--------------|---------|-----------------|---------------------------------------|--------------|---------|-----------------|
| visitó, llevó o envió hojas de vida a empresas | educación | 0,12172 | 0,00000 | 0,01728 | se presentó a convocatorias | 0,26575 | 0,00000 | 0,00626 |
| | edad | 0,01097 | 0,00000 | 0,00174 | | 0,03712 | 0,00000 | 0,00095 |
| | genero | 0,06703 | 0,04900 | 0,00582 | | 0,41011 | 0,00000 | 0,01018 |
| | estrato medio | 0,02243 | 0,57300 | 0,00146 | | 0,19506 | 0,02600 | 0,00487 |
| | estrato alto | -0,38374 | 0,00000 | -0,05051 | | -0,69780 | 0,00000 | -0,01282 |
| | ciudad | -0,26183 | 0,00000 | -0,04123 | | -0,81221 | 0,00000 | -0,01852 |
| | constante | -2,95251 | 0,00000 | | | -7,63115 | 0,00000 | |
| 2 | | | | 5 | | | | |
| visitó, llevó o envió hojas de vida a bolsas de empleo o intermediarios | educación | 0,09322 | 0,00000 | 0,00261 | otro medio | 0,18489 | 0,00000 | 0,00109 |
| | edad | -0,01712 | 0,00000 | -0,00094 | | 0,02077 | 0,00000 | 0,00014 |
| | genero | 0,17029 | 0,00700 | 0,00625 | | 0,72402 | 0,00000 | 0,00510 |
| | estrato medio | 0,08237 | 0,24900 | 0,00318 | | 0,07682 | 0,66600 | 0,00045 |
| | estrato alto | -0,81065 | 0,00000 | -0,02544 | | 0,34308 | 0,13700 | 0,00412 |
| | ciudad | 0,17188 | 0,00800 | 0,01130 | | 0,37383 | 0,00500 | 0,00347 |
| | constante | -3,31782 | 0,00000 | | | -7,99574 | 0,00000 | |
| 3 | | | | 0 | | | | |
| puso avisos clasificados | educación | 0,10246 | 0,00000 | 0,00010 | ayuda de familiares, amigos o colegas | | | -0,02734 |
| | edad | -0,02116 | 0,08700 | -0,00004 | | | | -0,00185 |
| | genero | 0,19904 | 0,42800 | 0,00025 | | | | -0,02760 |
| | estrato medio | 0,63066 | 0,05800 | 0,00093 | | | | -0,01090 |
| | estrato alto | 0,64496 | 0,16600 | 0,00167 | | | | 0,08298 |
| | ciudad | 1,99359 | 0,00000 | 0,00556 | | | | 0,03943 |
| | constante | -7,73879 | 0,00000 | | | | | |

Fuente: Encuesta Continua de Hogares 2003 (DANE) - elaboración propia

Ciudad Los habitantes de Bogotá, Cali y Medellín tienen menos probabilidad de obtener trabajo llevando hojas de vida y presentándose a convocatorias que los habitantes de las restantes 10 A. M. más importantes del país. También se observa que paradójicamente, a pesar de que es menos probable que quienes viven en las 3 principales A. M. busquen empleo por canales informales, es más probable que lo encuentren por este método.

Duración del desempleo e incidencia de los canales de búsqueda

El análisis de supervivencia no paramétrico se desarrolla en este trabajo con fines descriptivos. En particular, se lleva a cabo la estimación Kaplan-Meier distinguiendo por tipo de canal: informal, formal e informal moderado. Los resultados ilustran como varía la probabilidad de salir del desempleo a medida que transcurre el tiempo en ese estado. Se encuentra que quienes escogieron canales de búsqueda informales son los individuos más propensos a sobrevivir en el desempleo. Mientras que aquellos que se acogieron a canales formales e informales moderados tienen una probabilidad sistemáticamente más pequeña de permanecer en el desempleo, destacando que la probabilidad de emplearse resulta mayor para los usuarios de los métodos de búsqueda personales (informales moderados).

Análisis de supervivencia paramétrico

En la estimación algunas de las observaciones corresponden a ocupados y otras a desempleados, entonces el tiempo de desempleo para los segundos es incompleto, no ha concluido, y por ello esas observaciones deben declararse como censuradas. Por ello el mejor método de estimación es máxima verosimilitud, incluyendo una variable dicotómica $\delta_i=0$ si hay censura y $\delta_i=1$ si no la hay. El modelo a contrastar, está basado en la propuesta de Castellar y Uribe (2003) busca recoger los elementos que afectan la probabilidad de recibir propuestas laborales y la formación de salarios de referencia para tomar la decisión de aceptar o rechazar una oferta de trabajo. A esta propuesta, la presente investigación agrega como determinantes de la duración del desempleo el uso de canales de búsqueda específicos, que justifican su presencia en el modelo por su influencia sobre la probabilidad de recibir ofertas laborales. El modelo a contrastar es:

$$T = Weibull \left(\begin{array}{l} jefe, genero, ingnolab, educa, educa2, exper, cvsal, \\ ayudas, empresas, bolsas, convoca, otromedio \end{array} \right) \quad (17)$$

La descripción y justificación de las variables independientes de la ecuación (17) se presentan en el cuadro n° 6. La independiente es el número de semanas de desempleo experimentadas por el buscador, recordando que la variable se encuentra censurada en el caso de los desempleados porque sus observaciones corresponden a periodos inconclusos.

Cuadro 6
Descripción de las variables independientes para el modelo de supervivencia paramétrico de la duración del desempleo

| Variable | Descripción | Justificación |
|-----------|---|--|
| Jefe | 1 si es jefe de hogar y 0 en otro caso | Afecta el salario de reserva |
| Genero | 1 si es hombre y 0 en otro caso | Afecta el salario de reserva |
| Ingnolab | Ingreso no laboral | Afecta el salario de reserva |
| Educa | Número de años de educación del individuo | Afecta el salario ofrecido |
| Educa2 | Educación al cuadrado | Afecta el salario ofrecido |
| Exper | Número de años de experiencia calculada como experiencia potencial | Afecta el salario ofrecido |
| Cvsal | Coefficiente de variación salarial según tipo de trabajo buscado | Afecta la probabilidad de recibir una oferta |
| Ayudas | 1 si usó "ayudas o información de allegados" y 0 en otro caso | Afecta la probabilidad de recibir una oferta |
| Empresas | 1 si usó "llevar hojas de vida a las empresas" y 0 en otro caso | Afecta la probabilidad de recibir una oferta |
| Bolsas | 1 si usó "llevar hojas de vida a las bolsas de empleo" y 0 en otro caso | Afecta la probabilidad de recibir una oferta |
| Convoca | 1 si usó "presentarse a convocatorias" y 0 en otro caso | Afecta la probabilidad de recibir una oferta |
| Otromedio | 1 si usó otros canales y 0 en otro caso | Afecta la probabilidad de recibir una oferta |

Fuente: elaboración propia

El modelo estimado se presenta en el cuadro N° 7. Se resalta que esta estimación incluye tanto a desocupados como a empleados. Para ello, las opciones de búsqueda para los desempleados se modificaron de la siguiente manera: tanto ayudas como información de conocidos se agrupó en "ayudas de allegados" y "realizó preparativos para iniciar un negocio" se incluyó en "otro medio". El primer conjunto de variables incluido en el modelo corresponde a aquel que afecta el salario de reserva establecido por el buscador. En este grupo se cuentan el ser jefe o no de hogar, el género del buscador y sus ingresos no laborales. La primera variable de este grupo en el modelo es ser jefe de hogar, que extrañamente, tiene una relación positiva con la variable dependiente. La rareza del hallazgo ha llevado a analizar más detenidamente la duración del desempleo que experimentan los jefes de hogar.

Entonces, se estimó la función Kaplan-Meier distinguiendo de manera conjunta por el tipo de canal empleado en el proceso de búsqueda y ser o no jefe de hogar. Los resultados indican que los individuos que utilizan los canales informales tienen una probabilidad mayor de permanecer en el desempleo en relación con el resto de canales; asimismo, de los jefes de hogar sólo quienes usan canales informales tienen una menor probabilidad de transición al empleo en relación con los demás miembros del hogar. Luego, que los jefes muestren tal relación con la duración del desempleo puede ser porque en el agregado este grupo maneja una menor probabilidad de hallar empleo dado que en su mayoría los individuos acuden al método menos eficiente.

Cuadro 7
Estimación del modelo de supervivencia paramétrico para la duración del desempleo en Colombia a 13 a.m. en 2003.

| Variables independientes | Coefficiente | P valor | Intervalo de confianza 95% | |
|--------------------------|--------------|---------|----------------------------|----------|
| jefe | 0,32415 | 0,000 | 0,19406 | 0,45425 |
| genero | -0,41550 | 0,000 | -0,52909 | -0,30190 |
| ingnolab | -9.51e-09 | 0,793 | -8,04e-08 | 6,14e-08 |
| educa | 0,12696 | 0,000 | 0,08413 | 0,16978 |
| educa2 | -0,00206 | 0,021 | -0,00381 | -0,00031 |
| exper | 0,05664 | 0,000 | 0,05175 | 0,06153 |
| cvsal | 0,00194 | 0,003 | 0,00064 | 0,00323 |
| ayudas | 1,06111 | 0,000 | 0,92831 | 1,19391 |
| empresas | -0,12003 | 0,105 | -0,28348 | 0,04342 |
| bolsas | 0,93967 | 0,000 | 0,55988 | 1319454 |
| convoca | 2,94123 | 0,000 | 1,40720 | 4,47527 |
| otromedi | -0,40874 | 0,042 | -0,80365 | -0,01384 |
| _cons | 3,43695 | 0,000 | 3,13101 | 3,74288 |
| /ln_p | -0,25559 | 0,000 | -0,27719 | -0,23399 |
| p | 0,77446 | | 0,75791 | 0,79137 |
| l/p | 1,29122 | | 1,26363 | 1,31942 |

Fuente: Encuesta Continua de Hogares 2003 (DANE) - elaboración propia

Retomando, el análisis de los resultados del modelo paramétrico, se encuentra que ser hombre, tal como lo dice la teoría, reduce la duración del desempleo. Reflejando el aspecto cultural de que no está bien visto que un hombre permanezca más tiempo en el desempleo que una mujer, lo que termina obligando a los primeros a fijar un salario de reserva inferior. En cuanto al ingreso no laboral, en teoría debería incrementar la duración del desempleo porque estos ingresos le permitirían hacer una búsqueda más larga que les permita encontrar mejores ofertas. Sin embargo, el estimador es negativo, lo que tampoco es descabellado, pues al tener ingresos no laborales las personas pueden realizar una búsqueda rápida, permitiendo un enganche en menor tiempo. Sin embargo, la carencia de significancia económica y estadística del estimador de la variable impide esta inferencia.

Por otro lado, el segundo grupo de variables incluidas en el modelo corresponde a aquel que afecta el salario ofrecido. Ese grupo está compuesto por la educación, la educación al cuadrado y la experiencia. Se encuentra que un año adicional en educación incrementa la duración del desempleo, mientras que la educación al cuadrado la disminuye. La explicación de estas relaciones se encuentra en el impacto de la educación sobre el salario que reconoce el mercado, pues en los primeros años se adquiere una educación básica general que el agente valora más que el mercado. Esta relación cambia ante altos niveles de educación, el agente se hace más apetecido, el salario que se le ofrece es mayor y esto facilita a que el buscador acepte la oferta. La experiencia, construida como la clásica experiencia potencial, es decir a partir de la edad del individuo, refleja un efecto positivo sobre la duración del desempleo. Lo cual es coherente con la teoría, pues indica que un año adicional en experiencia al incrementar

el capital humano del trabajador, permite un aumento del salario que reconoce el mercado haciendo menos factible un rápido emparejamiento.

El último grupo de variables a considerar es el compuesto por el coeficiente de variación salarial y el uso de los diferentes canales de búsqueda. Este grupo distingue por influir en la probabilidad de recibir una oferta salarial y por ello en la duración del desempleo. El coeficiente de variación salarial es una variable que indica que tan dispersos están los salarios según el tipo de empleo en que el individuo realiza o realizó la búsqueda. La idea detrás es que ante amplias dispersiones en los salarios, los agentes permanecerán más tiempo en el desempleo esperando encontrar una mejor oferta. Esto en teoría se debe a que las dispersiones en salarios indican puja por parte de la demanda sobre una fuerza de trabajo específica. El estimador apoya la hipótesis e indica una relación positiva con la duración del desempleo.

Ahora es el momento de analizar los resultados más importantes para esta investigación: la influencia de los diversos canales de búsqueda sobre la duración del desempleo. Para ello se incorpora en el modelo una variable indicadora por cada opción de canal de búsqueda, dejando en el intercepto el método “uso de clasificados”. Como se mencionó arriba, los canales de búsqueda pueden clasificarse en formales, informales e informales moderados. Se encuentra que tanto los canales formales como los informales, en relación con el “uso de clasificados” tienen un efecto positivo en la duración del desempleo. Llama la atención que el método más empleado por los ocupados para encontrar su trabajo aumente la duración del desempleo. Esto proporciona evidencia de que no necesariamente el mejor método de búsqueda de empleo es acudir a las redes sociales, tal como parecen indicar las preferencias sociales mostradas en el chequeo descriptivo. Esa creencia podría estar conduciendo a una alta tasa de desempleo friccional porque el proceso de emparejamiento en Colombia para 2003 no está dominado por canales que reduzcan la duración del desempleo.

A partir del modelo se encuentra que los canales que inciden negativamente sobre la duración del desempleo son “llevar hojas de vida a las empresas” y “otro medios”. Este último podría representar al método iniciar preparativos para instalar un negocio, pues más del 50% de las observaciones en esta categoría son de ese canal. Aunque, se reconoce que en esta categoría también están presentes el uso de otros instrumentos como el Internet. Curiosamente estos canales presentan la característica de requerir un alto esfuerzo del aspirante, podría decirse que requieren intensidad en la búsqueda. Lo que indica que el esfuerzo se ve recompensado con menores tiempos de duración en el desempleo. En otras palabras, *“el que busca con intensidad encuentra con prontitud”*.

Conclusiones

Para Colombia pueden distinguirse tres tipos de canales: formales, informales e informales moderados. Los primeros requieren la participación de instituciones especializadas en la intermediación laboral, los segundos, involucran el acceso a redes sociales y los terceros, son un término medio entre los dos anteriores, debido a que utilizan información de conocidos para realizar su búsqueda, pero además deben realizar un esfuerzo propio por contactarse con los empleadores y someterse a los mecanismos de selección de las empresas.

En la búsqueda de empleo, los agentes revelan preferencia por los métodos informales y de búsqueda personal (informales moderados). Aspecto que se aprecia en la participación de estos canales en la intermediación, 47% y 40% respectivamente. Entonces, la participación de canales formales se reduce al restante 13%. En contraste, el emparejamiento efectivo en

Colombia muestra que el 68% de los ocupados obtuvieron su empleo a través de canales informales, el 19% usando métodos de búsqueda personal y sólo el 13% a través de canales formales.

Las tres ciudades más grandes del país son más propensas a una búsqueda más formal y de orden personal en relación con las otras 10 ciudades principales. Paradójicamente, esta relación no se mantiene al examinar el emparejamiento, donde es notorio que en Colombia la asignación del recurso trabajo se lleva a cabo principalmente por métodos informales.

En cuanto a la elección de canales de búsqueda y a la probabilidad de emplearse por los diferentes canales, se destaca que la educación, de manera contundente, incide positivamente sobre la probabilidad tanto de elegir, como de ser empleado por métodos formales y de búsqueda personal. En contraste, residir en las tres principales ciudades a pesar de incrementar la probabilidad de buscar mediante canales formales e informales moderados, a la vez que incrementa la probabilidad de ser empleado por canales informales.

También puede afirmarse que pertenecer a los estratos medio (3 y 4) y alto (5 y 6), incrementan la probabilidad de buscar y encontrar empleo usando métodos informales moderados y redes sociales respectivamente. Mientras que años adicionales en edad parecen desmotivar al agente de buscar un empleo e incentivarlo a que este lo cree por sus propios medios, aunque estos individuos tienen mayor probabilidad de ser contratados llevando hojas de vida a las empresas.

En Colombia, se han realizado varios trabajos sobre la duración del desempleo. Uno de ellos es Castellar y Uribe (2003), que se destaca por una juiciosa exposición teórica y empírica. A partir de ese trabajo, esta investigación formula un modelo de duración que adiciona una variable indicadora por cada método de búsqueda encontrando que las relaciones teóricas esperadas para todas las variables excepto “ingresos no laborales”, que no resultó ser significativa estadística ni económicamente y “jefe de hogar” que exhibe un estimador negativo posiblemente como consecuencia de un cambio estructural en la participación de éstos dentro de la población desempleada y de su preferencia por canales informales que se encuentra asociados a grandes tiempos de desempleo.

Se encontró también que el grupo de canales que reduce la duración del desempleo es el relativo a la búsqueda personal o informales moderados. Lo cual, indica que el esfuerzo se ve recompensado con menores tiempos de duración en el desempleo. *En otras palabras, “el que busca con intensidad encuentra con prontitud”.*

A grandes rasgos, lo que se percibe es la existencia de 2 problemas en la intermediación laboral en Colombia. Primero, los canales formales no están ampliamente difundidos, razón por la cual, no han alcanzado sus principales ventajas derivadas de la centralización de la información. Y segundo, oferentes y demandantes de fuerza de trabajo revelan preferencias no coincidentes por el tipo de métodos de emparejamiento a utilizar dificultando su encuentro. Entonces, ante un incipiente desarrollo de los canales formales y la carencia de convenciones sociales sobre los canales de emparejamiento, la abundante oferta laboral se ha volcado sobre los métodos de búsqueda personal, los cuales obtienen su eficiencia a partir de la intensidad de la búsqueda.

Se percibe entonces, una importante ausencia por parte del Estado en el apoyo al proceso de intermediación laboral que permite la asignación de la fuerza de trabajo, pues su intervención

se reduce al Centro de Información para el Empleo del SENA que tiene una muy pequeña difusión. Debe hacerse entonces un esfuerzo por fortalecer los canales que faciliten la consecución de empleo para todos los segmentos de la población motivo por el que es indispensable fortalecer los canales de búsqueda formales.

Bibliográfica

- ABAURREA J. y CEBRIÁN, A. (2000). *Fiabilidad y Análisis de Supervivencia*. Universidad de Zaragoza. Dpto. Métodos Estadísticos.
- CAMERON A. C. y TRIVEDI P. K. (2005). *Microeconometrics: Methods and Applications*. Cambridge. United States of America. Capítulos 15 y 17.
- CASTELLAR C. y URIBE J. I. (2003). "Determinantes de la duración del desempleo en el área metropolitana de Cali, 1988-2000", *Archivo de Macroeconomía* 218. DNP.
- GRANOVETTER M. (1995). *Getting a Job: A Study of Contacts and Careers*. Estados Unidos, Segunda Edición. The University of Chicago Press.
- GREENE W. (2000). *Econometric Analysis*. Quinta Edición. Practice- Hall International.
- LANCASTER T. (1990). "The Econometric Analysis of Transition Data", Cambridge University Press, *Econometric Society Monographs* 17.
- LINDEBOOM M, VAN OURS J. y RENES G. (1994). "Matching Employers and Workers: An Empirical Analysis on the Effectiveness of Search" *Oxford Review*. N° 1, Vol. 46 . Pág. 45-67.
- LÓPEZ H:
- 1988 "La Duración del Desempleo y el Desempleo de Larga Duración en Colombia", *Coyuntura Económica*. Bogotá, Diciembre.
- 1997 "Magnitud, Canales y Racionalidad de la Intermediación Laboral en Colombia", *Cuadernos del CIDE*. 3. Junio
- LUCE, R (1959). *Individual choice behavior: a theoretical analysis*. New York,, Wiley and Sons.
- MCFADDEN, D., BECKERT W. y EYMANN A. (1994). "Efficient Estimation by Multinomial Approximation and Sequential Simulation", *Working Paper*. iversity of California (Julio)
- MADDOCK R. (1987). "A propósito de la Misión Chenery: La Importancia de las Medidas de Duración del Desempleo", *Lecturas de Economía* 22. Medellín.
- MARTÍN, J. L. (1995). *El Paro y la Búsqueda de Empleo, una aproximación a la teoría económica*. Universidad de Sevilla, serie: Ciencias económicas y empresariales 31. Capítulo 8.
- MORTENSEN, D. T.:
- 1970 "Job Search, Duration of Unemployment, and the Phillips Curve". *The American Economic Review* (December). Volume 60, N° 5. pp. 846-862.
- 1991 "Equilibrium Unemployment Cycles," Discussion Papers 939, *Northwestern University*, Center for Mathematical Studies in Economics and Management Science
- NÚÑEZ y BERNAL (1998). "El desempleo en Colombia: Tasa Natural, Desempleo cíclico y estructural y la duración del desempleo, 1976 - 1998". DNP, *Archivos de Macroeconomía*. Bogotá, Documento 97.
- REES, Albert (1966). "Information Network and Labor Market", *American Economic Review*, Supplement, 56, pp. 559-566.
- REID Graham (1972). "Job Search and the Effectiveness of Job-Finding Methods". *Industrial and Labor Relations Review*, Vol. 25, N°4, pp 479-495.

- STIGLER, G. J. (1961). "The Economics of Information". *Journal of Political Economy*, Vol. 69, pp 213-225
- TENJO, Jaime (1998). "La Duración y la Incidencia del desempleo en Colombia: Una nueva aproximación", *Indicadores de Mercado Laboral*. Bogotá, SENA.
- THOMAS, Jonathan (1997). "Public employment agencies and unemployment spells: reconciling the experimental and nonexperimental evidence". *Industrial and Labor Relations Review*. Vol. 50, N° 4, pp 667-683.
- URIBE, José Ignacio (1998). *Duración del Desempleo: Un Modelo de Determinantes y su Aplicación al Área Metropolitana de Cali*. Madrid, Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid.
- URIBE José Ignacio y GÓMEZ Lina (2004). "Canales de Búsqueda de Empleo en el Mercado Laboral Colombiano" *Documento de Trabajo número 77*. CIDSE
- WARNER John, Poindexter J.C., Fearn R.M (1980). "Employer-Employee Interaction and the Duration of Unemployment". *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 94, N°2, pp 211-233.